

Esperanza Hernández Delgado y Cécile Mouly
Coordinadoras

**Resistencias no violentas
en América Latina.**
Experiencias en Brasil,
Colombia y México

Editorial  FLACSO
Ecuador

 Ediciones
Unisalle

© 2019 FLACSO Ecuador
Impreso en Ecuador, noviembre de 2019
ISBN: 978-9978-67-516-8
Depósito legal: 057540

© 2019 Ediciones Unisalle
Impreso en Colombia, noviembre de 2019
ISBN impreso: 978-958-5486-71-3
ISBN digital: 978-958-5486-72-0

Cuidado de la edición: Editorial FLACSO Ecuador

FLACSO Ecuador

La Pradera E7-174 y Diego de Almagro, Quito-Ecuador
Telf.: (593-2) 294 6800 Fax: (593-2) 294 6803
www.flacso.edu.ec

Ediciones Unisalle

Carrera 5 n.º 59A - 44, Sede Chapinero, Edificio Administrativo, 3.º piso
Bogotá, Colombia
Telf.: (571) 3488000 ext.: 1224-1226
edicionesunisalle@lasalle.edu.co
<https://ediciones.lasalle.edu.co>

Ilustración de portada: “Minga por la vida” de Jafeth Gómez
jafethgomez@yahoo.es

Resistencias no violentas en América Latina. Experiencias en Brasil, Colombia y México / coordinado por Esperanza Hernández Delgado y Cécile Mouly. Quito-Ecuador ; Bogotá, Colombia : FLACSO Ecuador : Ediciones Unisalle, 2019

xviii, 229 páginas : ilustraciones, figuras, fotografías, mapas tablas.- (Serie Foro)
Incluye bibliografía

ISBN: 9789978675168 FLACSO Ecuador
ISBN: 9789585486713 Ediciones Unisalle (impreso)
ISBN:9789585486720 Ediciones Unisalle (digital)

CIENCIA POLITICA ; RESISTENCIA CIVIL ; CONFLICTOS SOCIALES ;
MOVIMIENTOS SOCIALES ; DICTADURA ; MEDIACIÓN ; SOLUCIÓN
DE CONFLICTOS ; RESISTENCIA PASIVA ; AMÉRICA LATINA. I.
HERNÁNDEZ DELGADO, ESPERANZA, COORDINADORA II. MOULY,
CÉCILE, COORDINADORA

321.4 - CDD

Índice de contenidos

Abreviaturas	IX
Presentación	XI
Prólogo	XIII
Agradecimientos	XVII
Introducción	1
<i>Esperanza Hernández Delgado y Cécile Mouly</i>	
Aprendizajes sobre la resistencia civil	3
La resistencia civil	5
La investigación realizada.	7
Referencias	8
Capítulo 1. Namakasia: resistencia civil de la tribu yaqui en Sonora, México	13
<i>Esperanza Hernández Delgado</i>	
El concepto de resistencia civil que aplica a la experiencia yaqui	15
Contexto	18
La resistencia histórica de los yaquis.	19
Conclusiones.	44
Referencias	45

Capítulo 2. De la resistencia pasiva a la resistencia civil: la experiencia de la tribu warijío	51
<i>Esperanza Hernández Delgado</i>	
Sobre el concepto de la resistencia civil	52
Contexto	54
Las resistencias de la tribu warijío	59
La resistencia con recurso a la violencia	60
Conclusiones	82
Referencias	83
Capítulo 3. Dos momentos de resistencia noviolenta en Brasil: acción de los movimientos sociales durante la dictadura militar y el golpe a Dilma Rousseff	85
<i>Mario Ramírez-Orozco</i>	
Antecedentes para la necesidad de resistencias	85
El contexto social	88
Las resistencias contra la dictadura militar 1964-1985	91
Las resistencias al golpe institucional contra la presidenta Dilma Rousseff	106
Conclusiones	117
Referencias	121
Capítulo 4. Resistencia civil al conflicto armado interno colombiano. El caso de la ATCC	125
<i>Esperanza Hernández Delgado y Claudia Patricia Roa Mendoza</i>	
Sobre la resistencia civil	127
Estudios previos	129
Contexto	130
La resistencia civil de la ATCC	133
Conclusiones	146
Referencias	149

Capítulo 5. ¿Cómo toma forma la paz localmente?	
La experiencia de resistencia civil en Samaniego, Colombia	153
<i>Cécile Mouly, María Belén Garrido y Annette Idler</i>	
El doble rol de la agencia y la estructura en la movilización contra la violencia en Samaniego.	160
Reduciendo la violencia en Samaniego: factores de éxito	168
Conclusiones.	186
Referencias	188
Capítulo 6. Las Mercedes: esfuerzos de una comunidad por construir un territorio de paz en medio del conflicto armado	195
<i>Cécile Mouly y María Belén Garrido</i>	
Rol de la estructura y la agencia en el surgimiento del territorio de paz	200
Resultados del territorio de paz	204
Resurgimiento de la iniciativa	209
Conclusiones.	215
Referencias	217
Principales hallazgos	221
<i>Esperanza Hernández Delgado y Cécile Mouly</i>	
Autoras y autores	227

Ilustraciones

Figuras

4.1. Zona de influencia ATCC	132
--	-----

Fotografías

<i>Marcha pacífica en Las Mercedes en noviembre de 2013</i>	211
---	-----

Mapas

5.1. Ubicación geográfica de Samaniego	156
6.1. Ubicación geográfica de Las Mercedes	197

Tablas

1.1. Resumen de métodos yaqui de resistencia noviolenta	40
5.1. Movilización contra la violencia de parte de la población de Samaniego desde 1997 a 2014	171
5.2. Instituciones representadas en la Mesa de Trabajo por la Paz establecida para apoyar al territorio de paz en Samaniego	173
5.3. Comparación de enfoques de resistencia civil entre tres periodos en Samaniego	177
6.1. Seis puntos de la declaración de convivencia pacífica de Las Mercedes	203

Abreviaturas

AB	Anonymous Brasil
ACNUR	Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
ALN	Ação Libertadora Nacional
ATCC	Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare
AUC	Autodefensas Unidas de Colombia
CEB	Comunidades Eclesiais de Base
CIPRI	Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
CNS	Conselho Nacional de Saúde
CONAQ	Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas
CONTAG	Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura
CRIC	Consejo Regional Indígena del Cauca
DEM	Demócratas
ELN	Ejército de Liberación Nacional
EPL	Ejército Popular de Liberación
FARC	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FBP	Frente Brasil Popular
FETRAF	Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar
FNL	Frente Nacional de Luta
FPS	Frente Povo Sem Medo

Abreviaturas

INI	Instituto Nacional Indigenista
MAB	Movimento dos Atingidos por Barragens
MBL	Movimiento de Liberación de Brasil
MAPP-OEA	Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos
MAS	Muerte a secuestradores
MCP	Movimento Camponês Popular
MLB	Movimento de Luta nos Bairros
MPA	Movimento dos Pequenos Agricultores
MPB	Música Popular Brasileira
MPL	Movimento Pasa Livre
MPSM	Frente Povo Sem Medo
MR-8	Movimento Revolucionário 8 de Outubro
MST	Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra
MTST	Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Teto
OEA	Organización de Estados Americanos
PAEG	Plan de Acción Económica del Gobierno
PMDB	Partido de Movimento Democrático Brasileiro
PSC-RJ	Partido Social Cristão do Rio de Janeiro
PSDB	Partido de la Social Democracia Brasileña
PSL	Partido Social Liberal
PT	Partidos de los Trabajadores
RELASEDOR	Red Latinoamericana de Análisis de Seguridad y Delincuencia Organizada
SD	Solidariedade
TEN	Teatro Experimental do Negro
TFP	Tradição, Família e Propriedade
UNMP	União Nacional por Moradia Popular
USP	Universidade de São Paulo
UFRN	Universidad Federal de Rio Grande do Norte
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Presentación

La Universidad de La Salle (Colombia), y FLACSO Ecuador trabajan articuladamente y unen sus esfuerzos para fortalecer el quehacer académico, hacer visibles realidades propositivas, apoyar la investigación de largo alcance y contribuir a la búsqueda de alternativas frente a problemáticas comunes más allá de las fronteras. Es por esto que las dos instituciones han apoyado la publicación de este libro, producto de un trabajo conjunto entre tres colectivos de investigación: por una parte, dos grupos de la Universidad de La Salle, “Educación y Sociedad” del Doctorado en Educación y Sociedad y “Trabajo social, equidad y justicia social” del Programa de Trabajo Social; por otra parte, el grupo “Paz y Conflicto” de FLACSO Ecuador.

Desde la teoría de la resistencia civil y los casos documentados en México, Colombia y Brasil, los autores del libro ofrecen hallazgos valiosos que contribuyen a comprender y caracterizar mejor esta resistencia, sus modalidades, métodos y alcances. Destacan, por ejemplo, el carácter perfectible de las experiencias de resistencia civil, dado que en algunos momentos estas cuentan con condiciones que permiten lograr mayores alcances de los previstos, o, en algunos otros casos, solo avanzan respecto a cumplir metas parciales. Señalan también que todos los casos analizados evidencian resistencias no violentas pragmáticas, asociadas en su origen y desarrollo con necesidades, oportunidades y conveniencias, más que con principios religiosos o éticos. En particular, quienes lideraron y dinamizaron estas experiencias no habían recibido una formación previa sobre los significados, modalidades y métodos de esta resistencia. Registran algunas experiencias

que transitaron hacia una resistencia no violenta, aunque previamente habían ejercido una oposición con recurso a la violencia. Cabe destacar que todos los casos combinaron métodos propios de la resistencia civil con otros del ámbito jurídico y de resolución pacífica de conflictos, logrando así mayores alcances. Las experiencias recogidas enseñan que es necesario contar con un conjunto de condiciones y estrategias adecuadas para avanzar con éxito frente a las metas propuestas. Otro hallazgo significativo es que la resistencia civil reduce las asimetrías de poder entre los resistentes y sus adversarios, facilitando así la transformación pacífica de los conflictos.

Esperamos que este libro contribuya a las reflexiones de la comunidad académica, de los investigadores que buscan en la paz su campo de acción, de quienes construyen y trabajan en paz, y especialmente de las personas que ejercen estas resistencias no violentas. De igual manera, será de mucha utilidad para los organismos intergubernamentales y las ONG interesadas en apoyar esta modalidad de resistencia, así como para los representantes de los gobiernos a fin de que puedan comprender estas experiencias y aprovechar la oportunidad que ellas brindan para resolver pacíficamente diversos conflictos.

Por todas estas razones, nos es grato presentar el libro *Resistencias no violentas en América Latina. Experiencias en Brasil, Colombia y México*.

Deseamos que su lectura sea provechosa.

Hermano Alberto Prada Sanmiguel
Rector
Universidad de La Salle

PhD. Juan Ponce Jarrín
Director
FLACSO Ecuador

Prólogo

¿Cómo defienden sus derechos en contextos de conflicto las ciudadanas y los ciudadanos con poder y recursos limitados? Este libro reúne estudios de caso escritos por un grupo de académicas y académicos internacionales que ayudarán a responder esta pregunta. En los capítulos se documentan diversas formas de resistencia contemporánea que se desarrollan en América Latina. Por haber interactuado durante años con algunas de las autoras, para mí es un placer y un honor presentarlo y enfatizar sus contribuciones. Estas incluyen nuevas teorías sobre estrategias de resistencia. Presentan un trabajo de campo original y conclusiones transversales en cada una de las experiencias, e identifican nuevos rompecabezas para futuras investigaciones.

Los diferentes capítulos teorizan sobre distintas relaciones de causa y efecto junto con ejemplos y puntos de vista empíricos. Aunque científicos sociales y activistas han analizado los movimientos sociales y de resistencia durante décadas, en la actualidad constatamos la existencia de nuevos conflictos sociales en América Latina: protestas contra megaproyectos como represas y acueductos en México; resistencias a injustos golpes “institucionales” en Brasil o estrategias para sobrevivir a los peligros de la guerra en Colombia. Al estudiar estos casos, las investigadoras y los investigadores que aportan a este libro se enfocaron en métodos no violentos contra una variedad de actores, incluidos gobiernos, grupos armados no estatales e, incluso, empresas.

Uno de los hallazgos importantes de este libro se presenta, por ejemplo, en el capítulo de Esperanza Hernández Delgado sobre la resistencia

del pueblo indígena yaqui en Sonora, México. Ella encontró que luego de episodios previos de lucha armada, algunos miembros de la comunidad guardaron armas. Después, en su ejercicio de resistencia civil, estas funcionaron como una señal de advertencia para los interlocutores o adversarios, en este caso el gobierno mexicano. El potencial armado en realidad respalda su estrategia noviolenta como signo de “poder y autoridad”. A su vez supone, implícitamente, el poder de causar daño si las negociaciones fracasan, mejorando la posición de negociación noviolenta.

El trabajo de campo, original e intrépido, que se realizó para escribir este volumen es invaluable. Investigadoras e investigadores fueron a algunos de los lugares más conflictivos de América Latina para tejer estas historias de resistencia ciudadana. Visitaron áreas de intensos problemas ambientales y comunidades disputadas por varios actores armados que las han devastado en su guerra. Como producto de esta investigación de campo, los capítulos contienen extensas citas tomadas de las entrevistas realizadas. Estos relatos nos ofrecen distintas perspectivas sobre la movilización social y nos permiten escuchar tanto las narrativas como la cadencia de las voces de un variado grupo de activistas.

Esperanza Hernández Delgado y Cécile Mouly escribieron en la conclusión un consejo clave: moderar nuestras expectativas sobre el potencial de la resistencia, sin renunciar a nuestro optimismo. Las autoras nos advierten que las experiencias estudiadas no son “perfectas”, sin que esto signifique desconocer los éxitos que alcanzan o que deban abandonarse por las metas plenas que no logran. Las experiencias objeto de estudio no tienen objetivos “maximalistas”, como derrocar a un dictador. Lograron resultados intermedios, que permitieron la protección contra la violencia, o victorias legales contra megaproyectos, aunque esto no necesariamente garantizó el cumplimiento de las sentencias. Si bien los diferentes movimientos no han alcanzado sus objetivos finales, obtener victorias parciales les ofreció esperanza para seguir adelante. En esta obra se recogen las lecciones de algunos casos de resistencia ampliamente conocidos y de otros menos visibles. Sin duda, todas estas experiencias servirán como modelos útiles para quienes enfrentan desafíos similares.

El carácter comparativo del libro apunta hacia una pregunta adicional: cómo y cuándo las lecciones de un tipo de resistencia pueden traducirse y

ser útiles para otras resistencias en otros contextos, en otros países, frente a otras áreas temáticas, o que den cuenta de conflictos con otros actores. Precisamente, la contribución principal del libro es que nos inspira a seguir indagando sobre estas similitudes y divergencias. De tal manera, aportará a una comprensión aún más amplia de cómo movilizarse para proteger los derechos en el siglo XXI.

Oliver Kaplan

Josef Korbel School of International Studies

Universidad de Denver

Autor de *Resisting War: How Communities Protect Themselves*

Agradecimientos

En cuanto a las experiencias de México, Esperanza Hernández Delgado agradece a la Universidad de La Salle por su compromiso con la paz y por financiar su investigación, también a la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia (VRIT), a la Facultad de Ciencias de la Educación y al Doctorado en Educación y Sociedad, todas instituciones que le apoyaron. En Sonora, agradece al académico Jesús Armando Haro y a Ramón Martínez-Coria por su acompañamiento durante el trabajo de campo; su ayuda representó el puente para contactar a los pueblos indígenas yaqui y warijío. Jesús Haro ha desarrollado, durante casi toda su vida, una valiosa labor académica y de acompañamiento al pueblo warijío. Igualmente lo ha hecho Ramón Martínez-Coria con indígenas en Chiapas, Sonora, y otros estados de México. Valientemente, ellos dos han persistido en su labor a pesar de ser amenazados y haber tenido que salir del país para protegerse. Un agradecimiento especial a los yaquis y warijíos, a sus autoridades, líderes, lideresas y a todas las personas que viven en sus comunidades por recibirla, autorizar la investigación y compartir aspectos de sus culturas y su resistencia indígena. También está agradecida con académicos y académicas en Hermosillo por compartir sus aprendizajes, reflexiones e investigaciones sobre estos pueblos indígenas. Muy especiales gracias a la profesora Bettina Mijares, por su acogida cálida y generosa.

Respecto de las experiencias de Brasil, Mario Ramírez-Orozco valora el apoyo que recibió del Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP). En especial agradece al doctor Geraldo Augusto Pinto del Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade de la Universidad Tecnológica

Federal do Paraná, por facilitarle los contactos que le permitieron acercarse a quienes practican formas de resistencia no violenta en Brasil –incluso sin tener plena conciencia de ello–, como una manera de dar dignidad y sentido histórico a sus vidas.

Con relación a la experiencia colombiana con campesinos del Carare, Esperanza Hernández Delgado y Claudia Patricia Roa Mendoza agradecen a la Universidad de La Salle por apostarle a una academia que piense, sienta y actúe en pro de la construcción y educación para la paz. De igual manera a la VRIT, a la Facultad de Ciencias de la Educación, a la Facultad de Ciencias Económicas, al Doctorado en Educación y Sociedad y al Programa de Trabajo Social, por apoyar esta investigación. Agradecen especialmente a la junta directiva, líderes, lideresas e integrantes de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC) por acogerlas en su territorio y compartir sus conocimientos y vivencias sobre su resistencia no violenta. Ellas y ellos, con su visión y prácticas, han demostrado que la resistencia civil es una apuesta para construir paz desde las comunidades. Para ambas investigadoras fue un orgullo visitar una experiencia ganadora del Nobel Alternativo de la Paz, como la ATCC.

Por la experiencia de Samaniego, igualmente en Colombia, Cécile Mouly, María Belén Garrido y Annette Idler agradecen el financiamiento de FLACSO Ecuador, el apoyo de la Pastoral Social para la realización del trabajo de campo y los valiosos aportes de todas las personas que aceptaron contribuir en esta investigación. De manera especial, reconocen los esfuerzos de quienes luchan día a día por construir la paz en Samaniego.

Por la experiencia de Las Mercedes, también en Colombia, Cécile Mouly y María Belén Garrido agradecen el apoyo financiero de FLACSO Ecuador, así como la ayuda de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA) y de Naciones Unidas para la realización del trabajo de campo. También reconocen a las personas que han compartido su lucha por construir un territorio de paz a pesar de los considerables riesgos.

Introducción

Esperanza Hernández Delgado y Cécile Mouly

Desobedecer las verdades establecidas, desafiar
a los poderosos, rebelarse frente a las injusticias,
resistirse a la dominación, protestar
las arbitrariedades, explorar más allá
de los límites fijados, transgredir el
orden social y muchas más acciones
similares no solo han sido parte importante
de nuestra historia, sino todo un arte,
sin el cual resulta difícil imaginar
el progreso humano.
Ekkehart Krippendorff

L'arte di non essere governati. Politica etica da Socrate a Mozart

La resistencia civil es un concepto relevante para diversas disciplinas académicas¹ y una práctica social recurrente a lo largo de la historia (Randle 1998; Powers y Vogele 1997; López 2001, 2016; Hernández 2017, 2004; Schock 2008; King 2007; Stephan y Chenoweth 2008; Dudouet 2012; Castañar 2013). Este libro se centra en esta modalidad de resistencia y, de manera específica, en experiencias que hacen uso de la misma en México, Brasil y Colombia. Es producto de un ejercicio de investigación para la paz que tenía el propósito de analizar estos casos desde la teoría de la resistencia civil. En este sentido representa una iniciativa pionera, dado

¹ La Historia, Antropología, Sociología, Ciencias Políticas, Literatura y los Estudios de Paz, entre otros, abordan la resistencia civil.

que generalmente estos casos de resistencia civil han sido abordados desde teorías económicas o de los movimientos sociales,² y esencialmente como experiencias nacionales.

Los procesos de resistencia civil estudiados comparten rasgos comunes y diferencias. En cuanto a las sintonías, todas materializaron sus luchas y oposiciones sin uso de la violencia. Fueron generadas y dinamizadas por sectores excluidos, invisibilizados, despojados o victimizados. En su ejercicio comprometieron significativos esfuerzos y niveles de organización y disciplina. Independientemente de sus condiciones, todas las experiencias alcanzaron algún logro en contextos latinoamericanos de alta conflictividad.

La resistencia siempre va más allá del marco político legal institucional o del orden impuesto, pues altera el orden público y amenaza el estatus quo (Bond 1994, 62). Cuando los grupos impugnados por los sectores resistentes rechazan cualquier alteración del estatus quo, se inicia una confrontación. En medio de este contexto, la resistencia civil puede abrir caminos para la negociación y llegar a acuerdos (Wanis-St. John y Rosen 2017; Powers y Voegelé 1997). Con mayores o menores desarrollos, alcances y posibilidades, todas las experiencias aquí recogidas aportan conocimiento sobre la praxis de la resistencia civil.

En cuanto a los rasgos que diferencian los casos de resistencia civil estudiados en este libro, uno de ellos es la multiplicidad de actores que generan y dinamizan estas resistencias, como pueblos indígenas, campesinos y algunos asentamientos humanos que integran a todos estos sectores en escenarios urbanos, semirurales o de frontera. Otro consiste en los actores, también plurales, a los que se dirigen estas campañas de resistencia no violenta: el Estado, las empresas privadas, grupos armados en contextos de conflicto armado interno, dictaduras y golpes políticos institucionales. Se agrega el factor de la organización y planeación, dado que algunos de los sectores involucrados en estas campañas se han preparado para esta resistencia y otros no han podido hacerlo. También se deben tomar en cuenta las condiciones que han favorecido el ejercicio de resistencia no violenta. Unas experiencias

2 Incluyen estudios sobre movimientos sociales relacionados con el abolicionismo, sufragismo y soberanismo, entre otros, en el siglo XIX, y el pacifismo antinuclear, ecologismo, indigenismo, feminismo y antiglobalización, entre otros, en el siglo XX.

han contado con condiciones más favorables para alcanzar mayores logros que otras. Finalmente, es importante considerar los métodos utilizados. Unas han aplicado métodos de resistencia civil combinados con otros de resolución y transformación pacífica de conflictos; y otras han acudido solo a algunos métodos propios de esta forma de resistencia.

Aprendizajes sobre la resistencia civil

Esta modalidad de resistencia ha dejado diversos aprendizajes. Dentro de ellos, la estrecha relación entre el concepto de resistencia civil y su práctica ha permitido un análisis aplicado de la misma. La resistencia noviolenta ha representado un mecanismo de lucha y de cambio al que han acudido, a lo largo del devenir de la humanidad, sectores identificados como mayorías despojadas de sus derechos, minorías reprimidas (Dudouet 2012), o los sin poder (Havel 1985). Este aspecto y sus alcances frente a diversos tipos de violencia han despertado el interés de la academia, la investigación para la paz y diversos sectores sociales en la resistencia civil.

Los aportes de los Estudios de Paz y los hallazgos de investigaciones para la paz han permitido contar con elementos teóricos y prácticos relevantes sobre diversos aspectos de la misma, por ejemplo, en lo relacionado con los significados, la historia, las modalidades y los métodos de la resistencia civil (Sharp 1973; Pontara 1983, 1996; Randle 1998; Dudouet 2012; Castañar 2013; Hernández 2014, 2017; López 2016). Como ya se mencionó, también se han documentado algunas experiencias, con mayor énfasis a partir de la década del 90 (Sharp 1973; Sémelin 1993; Havel, Keane y Lukes 1985; Hernández y Salazar 1999; Hernández 2004; Schock 2008; Chenoweth y Stephan 2011; Mouly y Garrido 2018; Hallward, Masullo y Mouly 2017). A su vez, algunos estudios registraron semejanzas y diferencias entre algunas de ellas, y se analizaron casos exitosos y frustrados de la misma (Sharp 1979; Carter, Clark y Randle 2006, 3; Schock 2008; Nepstad 2011).

Gracias a los estudios sobre la resistencia noviolenta se han identificado diversos ámbitos en los que esta ha actuado: luchas de liberación colonial, oposición contra regímenes autoritarios o totalitarios, campañas

por el reconocimiento de derechos y libertades ciudadanas, incluyendo luchas antiglobalización, identitarias y ecologistas (López 2016), contra la corrupción (Beyerle 2014) o la oposición a actores armados (Hernández y Salazar 1999; Hernández 2004; Kaplan 2013; Hallward, Masullo y Mouly 2017). Algunos estudios evidencian que, aunque las acciones violentas suelen ser más visibles, muchas veces se han combinado con periodos de resistencia pacífica (López 2016). De igual manera, existen casos en los que la lucha solo ha sido noviolenta. Durante el siglo XX, las campañas de resistencia noviolenta fueron más frecuentes de lo que pueda imaginarse (Schell y Campos 2005) y su éxito mayor que las luchas armadas (Chenoweth y Stephan 2011). Lo anterior no significa que la resistencia noviolenta siempre sea efectiva o que alcance la totalidad de los objetivos propuestos (Dudouet 2012). Algunas campañas fueron reprimidas o doblegadas de manera violenta (por ejemplo, Hungría en 1956, Checoslovaquia en 1968 y las campañas del Tibet). Otras alcanzaron pocos logros y la mayoría de ellas solo consiguieron objetivos parciales (Dudouet 2012).

En los Estudios de Paz, el “enfoque de paz imperfecta”³ considera que no existe paz ni procesos de paz perfectos (Muñoz 2001, 13, 42, 43; Muñoz y Bolaños 2011, 14). La misma apreciación se aplica a las campañas de resistencia civil, las cuales son inacabadas y perfectibles. En Colombia, se han registrado experiencias de pueblos indígenas, afrodescendientes, comunidades campesinas y organizaciones de mujeres, víctimas y jóvenes—algunas de ellas de larga duración—, que enseñan que la resistencia civil puede alcanzar logros significativos, pero no todos los propuestos en una sola campaña, requiriendo persistir y dar continuidad mediante otras campañas, buscar nuevas alternativas, avanzar mediante la combinación de métodos y procesos, todos ellos perfectibles e inacabados (Hernández y Salazar 1999; Hernández 2004, 2006, 2009, 2014, 2017). Es esencial

3 La paz imperfecta, propuesta por Francisco Muñoz a finales de los noventa, es un enfoque de paz académico, transmoderno, realista y propositivo. Rompe con la reiterada alusión a la paz como una condición ideal, lejana o imposible de alcanzar. En este sentido, reconoce la imposibilidad de paces perfectas, acabadas, bajo la consideración de seres humanos con relaciones y conflictos inmersos en la complejidad. Propone una paz procesual, perfectible e inacabada, más cercana a la condición humana. Esta paz se hace visible cada vez que se resuelven pacíficamente los conflictos, se contribuye al bienestar humano, se reconocen experiencias de paz y se contribuye a la articulación entre las mismas (Muñoz 2001).

seguir analizando experiencias de resistencia civil para entender factores estructurales y de agencia que expliquen sus distintos resultados. Podemos afirmar que, si bien se cuenta con un valioso acumulado de aprendizaje, quedan aún diversas interrogantes por resolver y lecciones por aprender.

La resistencia civil

Según diversos analistas, el concepto de resistencia civil ha registrado desarrollos significativos (Dudouet 2012; López 2016). Sin duda, la identificación de una tipología sobre sus modalidades: noviolencia por principios (Boserup y Mack 1974, 13), noviolencia específica (Pontara 2000) y resistencia civil estratégica (Sharp 1973) representa uno de estos desarrollos. Se incluyen dentro de los mismos valiosos elementos de análisis comparado entre noviolencia por principios y noviolencia estratégica, como los aportados por Pedro Valenzuela (2001, 1-10) y Véronique Dudouet (2012).

El concepto de noviolencia por principios vincula el ejercicio de resistencia civil con principios religiosos, éticos o filosóficos (Pontara 1983, 2004, 2006; López 2012, 2016; Boserup y Mack 1974, 13; Valenzuela 2001, 1-10). Va más allá del resultado esperado bajo una concepción positiva del conflicto y del adversario. Esta modalidad de noviolencia asume el conflicto como la oportunidad para transformar al adversario, a la sociedad y a uno mismo, y aborda al contradictor con propuestas creativas y constructivas que buscan su conversión, sin derrotarlo, y la reconciliación de los contrarios (Pontara 2000, 2006). Gandhi aplicó este tipo de resistencia y trazó sus elementos clave:

Gandhi creía en la unidad entre fines y medios, y una lucha noviolenta continuaba en sí misma, como la única forma de vivir con la verdad. Por lo tanto, el éxito de toda campaña de la Satyagraha no debe medirse solo en los criterios de los objetivos tales como el grado de libertad política y social conseguida por los activistas, sino centrarse en lo espiritual, incluso en los elementos existenciales como son la búsqueda de la verdad y la autorrealización (Naess 1958; Dudouet 2012, 8).

Para Gandhi, Satyagraha es resistencia civil con espiritualidad o fuerza del alma [...] tras Gandhi, no solo hay estrategia, sino una concepción humana, una visión de la historia y de cómo abordar la emancipación o liberación sociopolítica. Como nos señala Pontara (1983; 2004; 2006), no se puede entender la Satyagraha sin otros conceptos gandhianos: como Swaraj (autogobierno), Swadesh (autosuficiencia), Sarvodaya (bienestar de todos), Tapasya (sacrificio) o ahimsa (noviolencia) [...] no solo es lucha sin armas, sino proyecto alternativo a las formas sociales y de producción capitalista, desarrollo personal-espiritual y formas de convivencia con otros seres vivos (López 2012, 6-7).

La noviolencia de principios la define como: “el enfoque que aboga por el recurso a la resistencia noviolenta por razones religiosas, morales o filosóficas o, lo que es lo mismo, por convicción en lugar de conveniencia. Se condena la violencia porque causa sufrimiento innecesario, deshumaniza y brutaliza tanto a la víctima como al verdugo, y solo aporta soluciones a corto plazo” (Boserup y Mack 1974, 13).

En cuanto a la noviolencia estratégica, concepto introducido por Sharp (1973), hace alusión a la noviolencia como una ciencia y no una filosofía de vida. En tal condición, cuenta con metodologías y técnicas que la convierten en acción eficiente, que evidencian su fuerza y ofrecen soluciones prácticas e implican disciplina para quienes la ejercen (López 2016, 7). A juicio de Pontara (1983) y de Valenzuela (2001), surge de una elección de medios por conveniencia, necesidad u oportunidad. La acción política noviolenta es “un sistema complejo de principios, reglas y técnicas” que permite desarrollar potencialidades y manejar diversos factores y variables (López 2016, 8). También es “una respuesta al problema de cómo actuar de forma efectiva en asuntos de política, especialmente cómo manejar el poder de forma efectiva” (Sharp 1973, 64).

Según evidencia empírica de la escuela pragmática o estratégica, la mayoría de las campañas de resistencia noviolenta presentes en la historia moderna no se originan en principios, sino en otras razones: la necesidad de derrotar al adversario usando métodos más eficaces y menos costosos (Ackerman y Kruegler 1994, 17; Dudouet 2012), la falta de

otras alternativas o la consideración de que esta forma de resistencia era más conveniente (Sémelin 1993; Dudouet 2012). Consideramos que el enfoque que mejor refleja las experiencias de resistencia no violenta recogidas en este libro, independientemente de los matices, condiciones y alcances de las distintas campañas, es el de la no violencia estratégica.

La investigación realizada

La investigación realizada se identifica como “investigación para la paz”, dado que su objeto está vinculado con una perspectiva de construcción de paz. Su propósito es analizar y caracterizar experiencias de resistencia civil de México, Brasil y Colombia, para identificar en estas significados, condiciones, alcances, semejanzas y diferencias y, sobre todo, aprendizajes que permitan afrontar mejor los desafíos de las violencias del presente. De igual manera, esta investigación se ubica en el ámbito transdisciplinar de la paz dado que en su desarrollo se apoyó en los aportes de otras disciplinas de las ciencias sociales y, a su vez, esperamos que sus hallazgos las retroalimentarán también.

Desde el punto de vista metodológico, se destaca su carácter de investigación aplicada. Implicó un trabajo de campo en cada uno de los contextos donde surgieron estas experiencias de resistencia y el análisis de fuentes primarias de información. Se aplicaron entrevistas semiestructuradas y observación *in situ*. Se utilizaron fuentes secundarias para complementar los datos recogidos. Los hallazgos tienen una relevancia académica y social, pues en ellos se señalan factores clave que inciden en el surgimiento y desarrollo de los procesos de resistencia civil y pueden contribuir al fortalecimiento de estas y otras experiencias a futuro. La investigación duró dos años.

El libro está dividido en siete capítulos. En los dos primeros se abordan las experiencias de resistencia civil de los pueblos indígenas yaqui y warijío en Sonora, México. En el tercero se examinan experiencias de Brasil en dictaduras del pasado y en el golpe de Estado institucional durante el gobierno de Dilma Rousseff. En el cuarto se analiza la experiencia colombiana

de resistencia civil impulsada por la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC), reconocida con el Nobel Alternativo de Paz en 1991. En el quinto y sexto se recogen las experiencias de frontera de Samaniego, en Nariño, departamento límite entre Colombia y Ecuador, y de Las Mercedes, en el Norte de Santander, departamento colombiano fronterizo con Venezuela. El cierre del texto se centra en los aprendizajes que dejaron estas experiencias.

Esperamos que este libro contribuya a los Estudios de Paz y a los esfuerzos de construcción de la paz, particularmente a quienes generan y desarrollan estas experiencias de lucha y oposición desde métodos no violentos. También esperamos ofrecer insumos a la comunidad académica en su calidad de generadora y mediadora del conocimiento y educadora para la paz, a los Estados, a las organizaciones que apoyan estos procesos y a distintos sectores de la sociedad civil en Colombia, México y Brasil.

Referencias

- Ackerman, Peter, y Jack DuVall. 2001. *A Force More Powerful: A Century of Non-Violent Conflict*. Londres: Palgrave MacMillan.
- Ackerman, Peter, y Christopher Kruegler. 1994. *Strategic Nonviolent Conflict: The Dynamics of People Power in the Twentieth Century*. Westport: Praeger.
- Ali, Saleem. 2003. *Mining, the Environment and Indigenous Development Conflicts*. Tucson: University of Arizona Press.
- Beyerle, Shaazka. 2014. *Curtailing Corruption: People Power for Accountability and Justice*. Boulder: Lynne Rienner.
- Bond, Doug. 1994. "Nonviolent Direct Action and Diffusion of Power". En *Justice Without Violence*, editado por Paul Wehr, Heidi Burgess y Guy Burgess, 59-79. Boulder: Lynne Rienner.
- Bondurant, Joan. 1988. *Conquest of Violence: The Gandhian Philosophy of Conflict*. Princeton: Princeton University Press.
- Boserup, Anders, y Andrew Mack. 1974. *War without Weapons: Nonviolence in National Defence*. Londres: Frances Pinter.

- Carter, April, Howard Clark, y Michael Randle. 2006. *People Power and Protest Since 1945: A Bibliography of Nonviolent Action*. Londres: Housmans Bookshop.
- Castañar, Jesús. 2013. *Teoría e historia de la revolución noviolenta*. Barcelona: Virus Editorial.
- Chenoweth, Erica, y Maria Stephan. 2011. *Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict*. Nueva York: Columbia University Press.
- Drago, Antonino. 2008. “Defensa civil no violenta”. En *Ciudadanos en son de paz. Propuestas de acción noviolenta para Colombia*, editado por Mario López, Carlos Martínez y Óscar Useche, 111-119. Bogotá: Uniminuto.
- Dudouet, Veronique. 2012. “Resistencia noviolenta en las asimetrías de poder”. Traducción de David Barrero. En *Berghof Handbook for Conflict Transformation*, editado por Beatrix Austin, Martina Fischer y Hans J. Giessmann, 1-32. Berlín: Berghof Foundation.
- Gregg, Richard. 1960. *The Power of Nonviolence*. Exeter: Wheaton and Co.
- Hallward, Maia, Juan Masullo, y Cécile Mouly. 2017. “Civil Resistance in Armed Conflict: Leveraging Nonviolent Action to Navigate War, Oppose Violence and Confront Oppression”. *Journal of Peacebuilding & Development* 12 (3): 1-9. doi: 10.1080/15423166.2017.1376431
- Havel, Václav, John Keane, y Steven Lukes. 1985. *The Power of the Powerless: Citizens Against the State in Central-Eastern Europe*. Armonk: Sharpe.
- Hernández, Esperanza. 2004. *Resistencia civil artesana de paz: experiencias indígenas, afrodescendientes y campesinas*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
- 2006. “La resistencia civil de los indígenas del Cauca”. *Papel Político* 11 (1): 177-220. <https://www.scielo.org.co>
- 2009. “Resistencias para la paz en Colombia. Experiencias indígenas, afrodescendientes y campesinas”. *Revista paz y conflictos*, 2:117-135. <https://www.redalyc.org>
- 2012. *Intervenir antes de que anochezca: mediaciones, intermediaciones y diplomacias no violentas de base social en el conflicto armado*. Bogotá: La Bastilla.

- Hernández, Esperanza. 2014. “Empoderamiento pacifista de experiencias comunitarias locales en Colombia (1971 - 2014)”. Tesis doctoral, Universidad de Granada. <https://hera.ugr.es/tesisugr/24287106.pdf>
- 2017. “Resistencia civil y empoderamiento pacifista”. *PAZSOS: Revista Paz Sostenible* 1 (2): 5-19. <http://www.pazsostenible.org>
- Hernández, Esperanza, y María Salazar. 1999. *Con la esperanza intacta: experiencias comunitarias de resistencia civil noviolenta*. Bogotá: Arte y Folito.
- Kaplan, Oliver. 2013. “Protecting civilians in civil war: The institution of the ATCC in Colombia”. *Journal of Peace Research* 50 (3): 351-367. doi: 10.1177/0022343313477884
- King, Mary. 2007. *A Quiet Revolution. The First Palestinian Intifada and Nonviolent Resistance*. Nueva York: Nation Books.
- Krippendorff, Ekkehart. 2003. *L'arte di non essere governati. Politica etica da Socrate a Mozart*. Roma: Fazi Editore.
- Lederach, John Paul. 1997. *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. Washington D.C.: United States Institute of Peace Press.
- López, Mario. 2001. “La noviolencia como alternativa política”. En *La paz imperfecta*, editado por Francisco Muñoz, 181-251. Granada: Universidad de Granada.
- 2012. “Gandhi, Política y Satyagraha”. *Ra-Ximhai* 8 (2): 39-70. <https://www.redalyc.org>
- 2016. “La resistencia civil examinada: de Thoreau a Chenoweth”. *Polis*, 43: 1-17. doi: 10.4000/polis.11508
- Martin, Brian. 2001. *Nonviolence versus capitalism*. Londres: War Resisters' International.
- Mitchell, Christopher, y Catalina Rojas. 2012. “Against the Stream: Colombian Zones of Peace under Democratic Security”. En *Local Peacebuilding and National Peace: Interaction between Grassroots and Elite Processes*, editado por Christopher Mitchell y Landon Hancock, 39-67. Londres: Continuum.
- Mouly, Cécile, y María Belén Garrido. 2018. “No a la guerra: resistencia civil en dos comunidades periféricas de Colombia”. *Desafíos* 30 (1): 245-277. doi: 10.12804/revistas.urosario.edu.co/desafios/a.5282

- Muñoz, Francisco. 2001. *La paz imperfecta*. Granada: Universidad de Granada.
- Muñoz, Francisco, y Jorge Bolaños. 2011. *Los hábitos de la paz: teorías y prácticas de la paz imperfecta*. Granada: Universidad de Granada.
- Naess, Arne. 1958. "A Systematization of Gandhian Ethics of Conflict Resolution". *Journal of Conflict Resolution* 2 (2): 140-155.
doi: 10.1177/002200275800200202
- Nepstad, Sharon. 2011. *Nonviolent Revolutions: Civil Resistance in the Late 20th Century*. Nueva York: Oxford University Press.
- Pontara, Giuliano. 1983. *Il Satyagraha. Definizione di violenza e non-violenza nei conflitti sociali*. Perugia: Edizione del Movimento Non-violento.
- 1996. *La personalità nonviolenta*. Turín: Edizioni Gruppo Abele.
- 2000. "Nonviolencia". En *Diccionario de política*, editado por Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino, 1054-1058. Madrid: Siglo XXI.
- 2004. "Gandhismo". En *Enciclopedia de paz y conflictos*, editado por Mario López, 493-498. Granada: Universidad de Granada.
- 2006. *L'antibarbarie. La concezione etico-politica di Gandhi e il XXI secolo*. Turín: Edizioni Gruppo Abele.
- Powers, Roger, y William Voegelé. 1997. *Protest, Power, and Change: An Encyclopedia of Nonviolent Action from ACT-UP to Women's Suffrage*. Nueva York: Routledge.
- Randle, Michael. 1998. *Resistencia civil: la ciudadanía ante las arbitrariedades de los gobiernos*. Barcelona: Paidós Ibérica.
- Roberts, Adam. 1969. *Civilian Resistance as a National Defence: Nonviolent Action Against Aggression*. Harmondsworth: Penguin.
- Schell, Jonathan, y Vicente Campos. 2005. *El mundo inconquistable: Poder, no violencia y voluntad popular*. Barcelona: Círculo de lectores.
- Schock, Kurt. 2008. *Insurrecciones no armadas: movimientos de poder popular en regímenes autoritarios*. Bogotá: Universidad del Rosario.
- 2009. "Defending and reclaiming the commons through nonviolent struggle". En *Nonviolent Alternatives for Social Change*, editado por Ralph Summy, 183-201. Oxford: Eolls Publishers.

- Sémelin, Jacques. 1993. *Unarmed Against Hitler: Civil Resistance in Europe, 1939-1943*. Westport: Praeger.
- Sharp, Gene. 1973. *The Politics of Nonviolent Action*. Boston: Porter Sargent.
- 1979. *Gandhi as a Political Strategist: With Essays on Ethics and Politics*. Boston: Porter Sargent.
- Shaw, Martin. 2003. “El papel y el carácter de la guerra en la transición global”. En *América Latina: conflicto, violencia y paz en el siglo XXI*, editado por Eduardo Sandoval y Robinson Salazar, 9-24. Buenos Aires: Libros en Red.
- Useche, Óscar. 2008. *Los nuevos sentidos del desarrollo: ciudadanías emergentes, paz y reconstitución de lo común*. Bogotá: Uniminuto.
- 2016. *Ciudadanías en resistencia: el acontecimiento del poder ciudadano y la creación de formas no violentas de re-existencia social*. Bogotá: Uniminuto / Trillas.
- Valenzuela, Pedro. 2001. “La no violencia como método de lucha”. *Reflexión Política* 5 (1): 1-10. <http://www.redalyc.org>
- Wanis-St. John, Anthony, y Noah Rosen. 2017. *Negotiating Civil Resistance*. Washington D.C.: United States Institute of Peace.
- Wilson, Michael. 2017. “Frames in Conflict: Discursive Contestation and the Transformation of Resistance” (58.^a convención anual de la Asociación de Estudios Internacionales [ISA], Baltimore, EE.UU., febrero de 2017).

Capítulo 1

Namakasia: resistencia civil de la tribu yaqui en Sonora, México

Esperanza Hernández Delgado

Al analizar la resistencia de la tribu yaqui, en Sonora, es necesario tener presente su doble condición: por un lado, tratarse de una experiencia indígena, y por el otro, representar una resistencia no violenta frente a megaproyectos desarrollados por el Estado y la empresa privada. Dentro del universo de experiencias de resistencia civil se pueden identificar algunas generadas y dinamizadas por pueblos indígenas. Por lo general, estas luchas se abordaron a partir de la teoría de los movimientos sociales (Composta y Navarro 2014; Caldón et al. 2007; Flórez 2007). Pocos estudios lo han hecho a partir del marco teórico de la resistencia civil (Hernández 2004, 2006, 2009, 2017; Ballesteros 2016; Martínez 2016). Para la investigación que recoge este libro se propuso, mediante este último abordaje, aportar elementos teóricos y prácticos para el análisis de la resistencia civil e indígena, partiendo del caso de los yaquis.

El estudio de las resistencias indígenas no violentas es relevante por varias razones: son experiencias de larga duración, poseen reconocimiento social, muestran capacidad organizativa y sus logros son significativos, como en el caso de la resistencia civil de los indígenas del Cauca en Colombia y la de los yaquis en México. Con sus rasgos propios, algunas de estas experiencias han tenido éxito frente a violencias estructurales como el racismo y la exclusión, y respecto a violencias directas como conflictos armados internos (Hernández 2004, 2006, 2009, 2014, 2017; Ballesteros 2016; Martínez 2016).

Los estudios sobre la resistencia civil frente a las iniciativas económicas nacionales o internacionales, conocidas como megaproyectos, han privilegiado el análisis a partir de teorías económicas, ambientales, antropológicas y de los movimientos sociales (Shaw 2003; Caldón et al. 2007; Flórez 2007; Useche 2008, 2016; Composta y Navarro 2014; Hager y Haddad 2015). En este contexto, se han destacado algunos casos de resistencia civil a la minería y la privatización de recursos esenciales como el agua (Ali 2003; Schock 2009; Wilson 2017). El eje de estos análisis ha sido el impacto negativo de las megaobras en los pueblos indígenas y su oposición a los mismos. Es en este escenario de conflictividad generada por megaproyectos donde se ubica la resistencia noviolenta de la tribu yaqui contra el Estado y las empresas privadas de Sonora que financian los megaproyectos. Su fin es proteger los recursos hídricos que pertenecen al pueblo indígena, específicamente su río Yaqui, y al mismo tiempo su cultura, ya que el río tiene un rol central en su cosmovisión, identidad y en la pervivencia del grupo.

En este capítulo se analiza la experiencia de los yaquis contra los megaproyectos a partir del marco teórico de resistencia civil. Desde este marco teórico se caracteriza la resistencia en contra del Acueducto Independencia. Se identifican también las condiciones específicas de la tribu yaqui para asumir y superar la asimetría de poder imbricada en este conflicto, condiciones de las cuales depende el mayor alcance de su campaña.

El estudio de la *Namakasia* (resistencia) de los yaquis se justifica por la relevancia social de este pueblo indígena en Sonora, por su capacidad histórica de resistencia y porque los yaquis lograron una transición de una lucha con recurso a la violencia a una pacífica. En este capítulo se profundiza en las condiciones particulares de su ejercicio de resistencia civil y la combinación de métodos propios de la resistencia civil con métodos del ámbito de resolución pacífica de conflictos.

Esta experiencia enseña que el éxito de las campañas de resistencia civil no reside solo en una voluntad férrea por parte de quienes la ejercen, sino en la posibilidad de contar con condiciones favorables. Como resistencia noviolenta indígena, la experiencia yaqui muestra la incidencia de aspectos propios de estos pueblos, es decir, cómo sus cosmovisiones, identidades,

historias y experiencias, interactúan con la formulación y dinamización de la resistencia.

Este capítulo se soporta en fuentes primarias y secundarias. Las primeras fueron recogidas durante la estancia de trabajo de campo, realizada entre mayo y junio de 2016. Se realizaron entrevistas a autoridades tradicionales y líderes yaquis, e investigadores y acompañantes de esta tribu. Se recurrió también a libros, artículos e investigaciones relevantes en torno a los yaquis.

En este capítulo se responde a interrogantes clave: ¿qué características identifican la resistencia no violenta de la tribu yaqui? ¿Por qué transitaron de una resistencia con recurso a la violencia a una oposición no violenta? ¿Qué factores les permitieron asumir y transformar la asimetría de poder? ¿Qué condiciones permiten, en este caso, que la resistencia civil logre mayores alcances? ¿Cuáles son los principales aprendizajes que deja la resistencia civil yaqui?

El concepto de resistencia civil que aplica a la experiencia yaqui

Se ofrecen en este apartado algunos conceptos de resistencia civil que permiten interpretar la experiencia yaqui. Se destaca el concepto de “resistencia no violenta estratégica” planteado por Sharp luego del fin de la Segunda Guerra Mundial (Dudouet 2012) considerado por algunos analistas como revolucionario dentro del marco teórico de la resistencia civil (López 2016). Desde la posguerra ha proliferado una literatura significativa sobre esta modalidad de resistencia civil (López 2016).

La resistencia no violenta estratégica es un método práctico al que se acude por razones de conveniencia, necesidad u oportunidad (Pontara 2000; López 2016). Es decir, la elección no se hace por principios religiosos o éticos. Se apoya en técnicas, preparación y disciplina, con el fin de ofrecer soluciones y desarrollar potencialidades para el manejo eficaz de factores, variables y conocimientos al servicio de resistencia civil (López 2016). En términos de Sharp (1973, 64), la resistencia no violenta es “una respuesta al problema de cómo actuar de forma efectiva en asuntos de política, especialmente cómo manejar el poder de forma efectiva”.

Esta resistencia pragmática se ha definido también en términos de los estudios estratégicos (Dudouet 2012). En ellos se la concibe como “una guerra llevada a cabo por otros medios” o el “equivalente funcional de la guerra asimétrica”, aunque sin admitir el uso de violencia (Curle 1971, 184). Con este concepto se alude a dinámicas que se asemejan a “batallas” en las que se utilizan diversas “armas”; y se enfatiza en el requerimiento de tácticas y estrategias inteligentes.

Independientemente de las disciplinas o términos que definan la resistencia noviolenta estratégica, se destacan como aprendizajes centrales de este enfoque: 1) su origen, basado en conveniencia, necesidad u oportunidad; 2) la importancia del método, las técnicas y la planeación que dejan poco a la improvisación dentro de dicha forma de lucha social.

Definiciones de resistencia civil

La resistencia civil es un concepto polisémico. En términos generales, puede ser comprendida como oposición, presión y lucha sin el uso de la violencia (Randle 1998; Hernández 2004, 2017). En la perspectiva de los Estudios de Paz, se la considera como un mecanismo de gestión y transformación positiva de los conflictos, teniendo en cuenta su estrecha vinculación con el cambio y la transformación social a partir de métodos noviolentos (Dudouet 2012). En su modalidad de “resistencia noviolenta por principios”, se apropia y plantea una comprensión positiva del conflicto, entendido como oportunidad para transformar a la sociedad, a uno mismo, y al adversario sin derrotarlo, propiciando posibilidades para la reconciliación (Patfoort y Wehr 2001, 494; López 2016). Otros autores consideran que esta forma de resistencia otorga poder e influencia a quienes la ejercen, favoreciendo su posición en los casos en los que conduce a una negociación (Dudouet 2012). Un elemento a desatacar es su carácter catalizador de conflictos, ya que al generar crisis los hace más visibles, llevando a las partes a asumirlos (Dudouet 2012).

Algunos analistas consideran que la resistencia noviolenta representa un mecanismo de construcción de paz en la medida en que evidencia los

alcances de la lucha pacífica frente a diversas violencias (Hernández 2012, 2013; Dudouet 2012). Además, brinda la posibilidad de una “transición de violencias destructivas a acuerdos sociales por el cambio” (Lederach 2008, 11). Otro aspecto que se destaca en el uso de esta forma de resistencia, es que está abierta a otras intervenciones de resolución y transformación de conflictos como la mediación y la negociación (Hernández 2012; Dudouet 2012). La resistencia civil también ha sido identificada con el empoderamiento (Curle 1971, 76) y, de forma concreta, con el “empoderamiento pacifista”¹ entendido como la capacidad y potencialidad de quienes resisten para hacer las paces (Hernández 2014, 2017).

En este capítulo se recoge y apropia el concepto de Schock sobre resistencia civil que este autor denomina con la expresión “insurrecciones no armadas”; él las define en los siguientes términos:

Son desafíos organizados con bases civiles, que implican una amplia participación y retan a la autoridad gubernamental [...]; son no violentas en el sentido que el reto principal al poder y legitimidad estatales se hace mediante los métodos de la acción no violenta, en vez de recurrir a la violencia. Sin embargo, las autoridades casi siempre responden con violencia a estas insurrecciones. Esto es lo que se espera (Schock 2008, 57).

Los métodos empleados por estas insurrecciones deben ser no violentos y a su vez no convencionales (López 2016, 2). Es decir, métodos que van más allá de lo establecido institucionalmente.² Esta forma de resistencia “hace emerger un conflicto, en términos incompatibles, entre resistentes y autoridades, usando aquellos todos los medios a su alcance: políticos, sociales, económicos y culturales, éticos y psicológicos de manera activa o pasiva”.

1 El empoderamiento pacifista, concepto del académico e investigador para la paz Francisco Muñoz (2001, 56), se refiere a “la toma de conciencia de las capacidades que tenemos los seres humanos para la transformación pacífica de los conflictos; [y a] todos aquellos procesos en que la paz [...], la satisfacción de necesidades o el desarrollo de capacidades ocupan el mayor espacio personal, público. [También comprende] el ejercicio de capacidades, competencias y poderes que tenemos para hacer las paces”.

2 Sharp (2005) ha identificado 198 técnicas de acción no violenta.

Contexto

Los yaquis pertenecen al conjunto de pueblos cahita,³ que habitaron un territorio amplio entre el suroeste de Sonora y el norte de Sinaloa (Lerma 2011). Estos pueblos compartían rasgos comunes, aunque con variables: lengua, organización política, actividad económica, espiritualidad, aspectos culturales y vida cotidiana. Se considera que las tribus yaqui y mayo, son las únicas sobrevivientes de los cahita (Figueroa 1993).

En la historia reciente, los yaquis hacen parte de los ocho pueblos originarios de Sonora y habitan en la región centro-sur de dicho estado (Padilla 2015, 7). Su nombre proviene del río Yaqui o *Jaiki*, que constituye el eje vital de su territorio, cultura y ejercicio de resistencia histórica (Moctezuma y Guzmán 2007, 29). Cuentan con la mayor población indígena del estado, estimada entre 25 000 y 45 000 personas. Desde el arribo de los misioneros jesuitas en 1616, su población está organizada en ocho pueblos: Cócorit, Bácum, Tórim, Vícam, Pótam, Rahum, Huiribis y Belem (Padilla 2015; Haro 2015). Estos se ubican en tres áreas de Hermosillo: El Coloso, Sarmiento y La Matanza. Los yaquis que residen en Arizona se ubican en Pascuas y Guadalupe (Lerma 2014).

Históricamente nuestra población ha estado en, aproximadamente, 45 000 habitantes desde la llegada de los españoles. Formaron ocho pueblos jurisdiccionales. En la etapa más crítica del exterminio, la deportación de la tribu, éramos como 15 000, algunos dicen que éramos 10 000; porque en la deportación habían muerto más de 25 000. Algunos fueron deportados o vendidos como esclavos (Tomás Rojo, 2016, entrevista).

La palabra yaqui tiene dos acepciones en la lengua indígena, el *jiak*. Por un lado, *yoeme* significa “hombres o gente” y equivale a la manera como los yaquis se identifican entre sí. Por otro, quiere decir “los que hablan fuerte”, “los mejores”, “los que hacen bien las cosas”, y corresponde al modo en que se reconocen ante los otros, los que no son yaqui (Lerma 2011, 21).

³ Se identifican como pueblos cahita: zuaques, ahomes, tehuecos, tepehuanes, sinaloes, ocoronis, yaquis y mayos.

Los rasgos propios de esta tribu inciden en su ejercicio de resistencia. Se destacan: el alto concepto que tienen de sí mismos, su apego a las tradiciones, un sentido de pertenencia y el orgullo por su identidad (Dabdoub 1987). Este se refleja, por ejemplo, en la definición del yaqui frente a quienes no lo son. También se destaca su capacidad política para interpretar la realidad, dialogar y realizar acuerdos (Tomás Rojo; Alejandro Aguilar; José Moreno, 2016, entrevistas).

Otro rasgo sobresaliente lo constituye la capacidad de resistencia de la tribu yaqui desde que los españoles arribaron a su territorio en 1533. Como una constante, esta capacidad se ha desplegado a partir de su necesidad de proteger el *toosa*, que en su cosmovisión equivale a su “nido heredado”, “su espacio”. Este concepto tiene una significación más cultural y por ende más amplia, y se complementa con la defensa del territorio ancestral, expresión apropiada a fines del siglo XIX, cuando se consolidó el Estado en México (Lerma 2011).

Nosotros estamos ricos en cultura, tradición y lucha [...]. La resistencia es la que nos sostiene, es la que nos tiene aquí [...]. Esta es la resistencia que estamos llevando a cabo gracias a nuestros antepasados, a nosotros nunca nos han desarmado desde la llegada de los españoles (autoridad yaqui, 2016, entrevista).

La resistencia histórica de los yaquis

A lo largo de su historia la tribu yaqui ha desarrollado y evidenciado una gran capacidad de resistencia. Como se verá en este aparte, en algunos momentos esta resistencia ha admitido el uso de la violencia y desde 1937, su lucha y oposición ha sido noviolenta.

La resistencia yaqui con recurso a la violencia

Dentro del acumulado de aprendizajes sobre resistencia civil se identifican los que han dejado experiencias de esta modalidad de resistencia, que

previamente acudieron a la lucha con recurso a la violencia. Esto evidencia que existen transiciones de resistencias armadas a pacíficas (Hernández 2004, 2006; Dudouet 2012). Este es el caso de los yaquis quienes, hasta 1937, recurrieron a la violencia para resistir como necesidad extrema de defensa de su territorio y su cultura ante el despojo de estos por parte de la población no indígena.

Su resistencia en esta modalidad fue férrea, persistente y en muchos momentos exitosa, como se señala en las entrevistas hechas en 2016 a Tomás Rojo, Alejandro Aguilar, José Moreno y Jesús Haro. Algunos yaquis e investigadores consideran que esta práctica se originó por la necesidad extrema de defensa, asociada con *toosa*, su espacio y territorio (Tomás Rojo, 2016, entrevista; Taibo 2013). Otros investigadores analizan estas luchas por el espacio o el territorio, como “el resultado de su esfuerzo consciente por obtener y conservar el referente identitario más importante de esta etnia” (Olavarría 2003, 34).

Se destacan como expresiones de esta resistencia violenta: la registrada en el siglo XVI contra los invasores españoles al mando del expedicionario Diego Guzmán (Taibo 2013); la de Juan Ignacio Jusacomena, conocido como “Juan Banderas”, quien comandó a los yaquis en 1826 contra los españoles (Aguilar 2003); la que se dio durante el porfiriato,⁴ periodo en el que tanto José María Leyva “Cajeme”, entre 1855 y 1887, como Juan Maldonado “Tetaviate”, entre 1887 y 1901, lideraron a los yaquis en campañas de oposición al poder estatal (Taibo 2013).

Entre 1825 y 1927 se dio un continuum de luchas con uso de la violencia, conocido como “las guerras del yaqui” (Lerma 2011, 25). Esta oposición con violencia, sus logros y su prolongación en el tiempo, incidieron para que los yaquis fueran reconocidos como un pueblo guerrero, tanto por ellos mismos como por otros pueblos y sectores no indígenas (22). No obstante, también fueron notorias y sensibles las pérdidas que sufrieron al ejercer esta modalidad de resistencia. Dentro de las más graves: la

⁴ En dos periodos, el primero entre 1877 y 1880, y el segundo, entre 1884 y 1911, Porfirio Díaz fue presidente de México e influyó decisivamente en la política mexicana. Combatió, deportó y despojó al pueblo indígena yaqui. De acuerdo con estos hechos, algunos consideran que se produjo un genocidio contra este pueblo.

ejecución de aproximadamente 600 indígenas por parte del coronel Próspero Salazar en 1668, lo que generó el levantamiento de la tribu yaqui en resistencia; la persecución y represión del Estado durante el porfiriato, que trajo como consecuencia el asesinato de los líderes Cajeme y Tetaviate; la deportación al estado de Yucatán de muchos indígenas para ser vendidos como esclavos; y la pérdida de vidas en las confrontaciones armadas (Taibo 2013). Con relación a estas, se estima que en todo el periodo del porfiriato murieron unos 10 000 yaquis (Tomás Rojo, 2016, entrevista).

Esta resistencia llegó a su fin en el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, quien devolvió a los yaquis parte de sus territorios ancestrales y reconoció su titularidad sobre el 50 % del río Yaqui (José Moreno; Tomás Rojo, 2016, entrevistas). A partir de este momento, esta tribu empezó una transición hacia la resistencia noviolenta. El testimonio de Tomás Rojo, un líder indígena, resume el núcleo y la evolución de la resistencia yaqui:

El primer contacto de resistencia violenta por defender el territorio fue ante la invasión de los españoles. En los últimos 400 años la resistencia militar, que duró hasta 1936. Luego que la resistencia militar dejó de ser instrumento, pasó a ser resistencia estructural, que es noviolenta. A lo largo de 500 años hemos luchado por la defensa de la tierra y el agua.

La resistencia civil de los yaquis

Abordar la resistencia civil de los yaquis implica incorporar en el análisis rasgos étnicos propios con la praxis de resistencia civil. Diversas razones permiten identificar esta experiencia como noviolencia estratégica o pragmática. Esta resistencia surgió entre 1937 y 1941, de manera específica, de la decisión de esta tribu de transitar hacia una resistencia noviolenta. Esta renovada forma de lucha se ha nutrido de la cosmovisión, la historia particular y las condiciones especiales que caracterizan la vida del pueblo yaqui. Así mismo, ha gozado de reconocimiento significativo entre yaquis, otras tribus y por parte de algunos sectores externos (Lerma 2011).

Espacio y territorio en la cosmovisión yaqui y en su ejercicio de resistencia noviolenta

Estudios sobre las resistencias indígenas evidencian rasgos propios de las mismas, relacionados con aspectos inherentes a estos pueblos como sus cosmovisiones, culturas, procesos organizativos e historia (Hernández 2004, 2006, 2017). En el caso de los yaquis, existe una relación directa entre *toosa* –concepción del espacio–, el territorio –concepto apropiado tardíamente (Lerma 2011)– y su ejercicio de resistencia noviolenta. La cosmovisión yaqui creó imaginarios sociales sobre el espacio y el territorio. Es necesario distinguir entre *toosa* que equivale a espacio o “nido heredado” y el territorio. Como enseña Lerma, el *toosa* no puede reducirse al concepto de territorio, porque equivale a una comprensión compleja del universo. “Todo lo que era al principio el territorio” y “todo lo que comprendía el espacio”. *Toosa* es “herencia divina” y “nido heredado”. Esta última significación se refiere a “la porción de tierra que les fue dado habitar” y cuya traducción más aproximada es territorio (29, 47-48).

Toosa representó el fundamento de la lucha por la defensa de la nación yaqui, de su autonomía y autodeterminación como pueblo (Padilla 2010; Lerma 2011, 28). En este caso, nación alude a distinciones culturales, como tener una lengua propia, un territorio y una comunidad.

Debe considerarse que el agua, el espacio y el territorio ocupan un lugar destacado en la *Lutuúria yoówe* (verdad mayor), palabra que en lengua yaqui equivale a cosmovisión. Ella se relaciona con el pasado inmemorial y las prescripciones de la ritualidad, la organización social y el comportamiento con los otros (Lerma 2011, 34-35). Según los yaquis, en el origen del mundo todo era agua. Un importante mito se refiere a los límites de *toosa*: *Ania baáluútek* (el que pintó la raya). En este se hace alusión a la capacidad de resistencia de esta tribu para defender su mundo, pues de la tierra, que es la madre, y del río, que es el padre, obtenían la caza, la pesca, la siembra y la vida para todo el pueblo (Zabala 1985). Este mito sigue presente entre los yaquis. Lo transcribo a continuación en dos versiones: la de un investigador, que recogió mitos y leyendas de este pueblo, y la de un líder yaqui a quien entrevisté en junio de 2016.

El español pasa el río Mayo el martes 30 de septiembre en busca del yaqui y el 4 de octubre llega a su margen izquierda y el cinco lo cruza [...]; sigue el curso del río, aguas abajo y descubre un grupo de yaquis que le sale al encuentro arrojando al viento puñados de tierra, templando los arcos y haciendo señas para que se devuelvan. Son guerreros. En la vanguardia de los indios va su jefe ataviado con fastuoso penacho de plumas multicolores y concha perla [...]. Frente a frente los dos ejércitos, se adelanta el capitán indio en actitud arrogante y con su arco traza una línea larga en el suelo, hinca luego las rodillas y besa reverente la tierra de sus mayores, después se yergue en forma altiva y con el brazo derecho extendido invita a los castellanos a que se regresen por el camino que vinieron, porque de no hacerlo y si cruzan la raya, esto significa la invasión de su patria y la guerra, por lo que serían muertos sin piedad (Fabila 1978, 89-90).

Nuestra lucha no es de cuatro años es más de 500 años. En aquel tiempo nuestros guerreros peleaban a pura flecha y hacha de piedra y su valentía es la que nos ha traído hasta acá. Nosotros le pintamos la raya a los españoles, principalmente los de Cócorit, aunque en aquel tiempo no llevaba ese nombre, pero ahora sabemos que fue el pueblo asentado en Cócorit quien les pintó la raya a los españoles en nuestro río Yaqui. Les dijeron: “Si ustedes pasan o cruzan esta raya van a tener consecuencias”, los españoles cruzaron la raya y fue derrota tras derrota (autoridad yaqui, 2016, entrevista).

El territorio hace parte del *toosa* yaqui y por ende siempre ha estado presente en la resistencia de esta tribu. No obstante, fue hasta mediados del siglo XIX, cuando el concepto de territorio adquirió una gran relevancia y se convirtió en el eje articulador y dinamizador de su resistencia, especialmente en las últimas ocho décadas que marcan la estrategia no violenta (Lerma 2011, 25). Desde la perspectiva de algunos investigadores, los yaquis asumieron que el triunfo de México en la lucha independentista contra España estaba relacionado con símbolos como el territorio, adoptándolo de manera pragmática (29). Con la restitución de tierras a los yaquis por parte de Lázaro Cárdenas en 1937, el territorio se convirtió en el referente del espacio de esta tribu (32).

La transición a la resistencia no violenta

Las experiencias indígenas de resistencia civil generalmente se han nutrido de la resistencia que los pueblos indígenas de América Latina han ejercido desde el arribo de los españoles a sus territorios ancestrales en el siglo XV, en un contexto de colonialismo europeo que los indígenas han calificado como “invasión” (Hernández 2004, 2006). A partir de entonces, algunos indígenas combinaron el ejercicio de la resistencia violenta con métodos de defensa no violentos. En la historia reciente se han registrado experiencias indígenas de transición de la resistencia violenta a la no violenta, por ejemplo, la de los pueblos indígenas del Cauca en Colombia (Hernández 2004, 2006). Este también ha sido el caso de los yaquis.

¿Qué llevó a los yaquis a transitar a una resistencia no violenta? Un primer motivo fue la tranquilidad alcanzada al lograr que el gobierno de Lázaro Cárdenas les restituyera parte del territorio ancestral y reconociera su propiedad sobre el 50 % del río Yaqui. Este acontecimiento les llevó a considerar que, asegurado su espacio y su territorio, podrían proyectar otras formas de lucha. En 1937, el presidente Lázaro Cárdenas les ratificó la posesión de 485 235 hectáreas como territorio exclusivo y la propiedad sobre 100 000 hectáreas. No obstante, según diversas versiones, con “muchas mañas” les cedieron solamente 24 000. El 12 de junio de 1939, por decreto presidencial, se reconoció a los yaquis la mitad de las aguas del río. Igual que con la restitución de las tierras, este decreto no se hizo plenamente efectivo, dado que implicaría ampliar el distrito de riego en 15 000 hectáreas, demanda que esta tribu ha hecho desde entonces (Jesús Haro; Alejandro Aguilar; Tomás Rojo; autoridad yaqui, 2016, entrevistas).

Los que se salen de toda esta norma son los yaquis, por la lucha que hicieron y por las negociaciones que tuvieron con Cárdenas. Se dice en la historia antropológica, que discutían los yaquis con el gobierno *yori*. Decían: “Que se rinda el gobierno ante el pueblo yaqui, pero si quieren la seguimos, ustedes son los que están diciendo que quieren firmar o sea que ustedes son los que están pidiendo la paz” (Alejandro Aguilar, 2016, entrevista).

Los altos costos de la resistencia violenta incidieron en la decisión de cambiar a una resistencia pacífica. La tribu yaqui había perdido líderes históricos valiosos y un buen número de yaquis sufrió deportación, esclavización y los rigores de la represión del Estado. Su capacidad política, les llevo a comprender pragmáticamente la conveniencia de asumir formas de lucha no violentas. Para entonces contaban con condiciones especiales como la existencia de líderes y comunidades más preparados para luchar en términos de diálogo y negociación con el gobierno. También incidieron otros factores: la confianza de este pueblo en su capacidad de resistencia, la experiencia de lucha y una estructura organizativa preparada para resistir (Tomás Rojo; autoridad yaqui, 2016, entrevistas).

Todavía tenemos armamento y una nación por la cual luchar, nuestros antepasados nos dejaron la soberanía y la autonomía [...]. Sí hay armamento, pero no lo vamos a usar, no vamos a ponernos de tú a tú como lo hicieron nuestros antepasados, porque sabemos que con la tecnología que ellos tienen nos pueden exterminar en nuestro territorio. Además, acá tenemos licenciados, ingenieros y gente preparada para hablar con el gobierno (autoridad yaqui, 2016, entrevista).

Significados que otorgan los yaquis a la resistencia civil

Para los yaquis la resistencia civil es un mecanismo de lucha pacífica en defensa del territorio y del espacio sagrado que han heredado. En él están sus recursos hídricos y sus comunidades, la Sierra y las actividades económicas que les proveen la subsistencia (autoridad yaqui; Tomás Rojo, 2016, entrevistas).

Optar por la resistencia no violenta fue una decisión pragmática de los yaquis, tomada a partir de la conveniencia y oportunidad que en ese momento ofrecía esta forma de lucha. Para entonces consideraron que contaban con las condiciones necesarias para asumirla (autoridad yaqui; Tomás Rojo, 2016, entrevistas). Su propósito no fue persuadir al adversario de su equivocación y transformarlo, o resistir basados en principios religiosos o filosóficos. Los yaquis tienen claro por qué luchan, las fortalezas con las

que cuentan, los métodos y estrategias que emplean al ejercer la resistencia. Así se refleja en las entrevistas realizadas a autoridades y líderes de este pueblo indígena: “Nosotros tenemos nuestra lucha, y nuestra bandera que es nuestra pequeña nación, entonces nosotros estamos luchando por lo que tenemos” (autoridad yaqui, 2016, entrevista).

En su comprensión de la resistencia civil está muy presente el elemento de organización para la lucha, que se interpreta como planeación y preparación. Los yaquis reconocen como factores favorables a su resistencia noviolenta: la confianza en su capacidad de resistencia, probada a lo largo de su historia, y la consolidación alcanzada en su organización interna. Así se refleja en lo manifestado por autoridades y líderes de esta tribu:

La resistencia es la organización de la lucha, organizarse para luchar. No es establecer un modelo humano de impedimento. Es una forma organizada de luchar por nuestro pueblo, nosotros tenemos una organización estructural, y desde siempre ha luchado por la tierra y el agua (Tomás Rojo, 2016, entrevista).

El orgullo es saber que al yaqui nunca lo han doblegado y hasta la fecha el gobierno no nos ha conquistado. Los proyectos que dicen darnos, nos toca por derecho porque somos mexicanos (autoridad yaqui, 2016, entrevista).

Luchar siempre contra el gobierno, a nosotros no nos da miedo porque de eso estamos hechos, nosotros podemos quedarnos en el camino, pero atrás de nosotros viene mucha gente que puede terminar con el gobierno y es gente preparada de nuestro pueblo (autoridad yaqui, 2016, entrevista).

Lo que queremos nosotros es vivir en paz en nuestro territorio, tener para nuestros nietos, para nuestros hijos, un bien, dejarles algo, dejarles un buen trabajo, dejarles un buen porvenir. Porque como está actualmente la situación, nos quieren quitar nuestro territorio a base de concesiones, invadiéndolo. Es lo que anhelamos nosotros: vivir en paz, que nos respeten como autoridad. Dicen ellos respetarnos, pero las leyes no las están cumpliendo. Nosotros somos originarios de aquí, nosotros tenemos siglos, y nosotros estamos asignados aquí, a quedarnos en nuestro territorio (autoridad yaqui, 2016, entrevista).

Resistencia noviolenta estratégica

Diversas razones permiten afirmar que la resistencia civil de los yaquis representa una experiencia de resistencia noviolenta estratégica. Así se evidencia en los motivos que los condujeron a una resistencia pacífica. Para ellos, las condiciones estaban dadas: con la negociación realizada con el gobierno de Cárdenas, habían logrado la restitución parcial de su territorio ancestral y el reconocimiento de su derecho de propiedad sobre el 50 % de su río. Asumieron entonces que su territorio, eje generador y dinamizador de su resistencia, estaba asegurado y que, a partir de ello, podrían iniciar otras luchas con métodos menos costosos como la resistencia noviolenta. Además, consideraron que habían alcanzado un significativo nivel organizativo y que estaban preparados para esas formas de lucha (autoridad yaqui; Tomás Rojo, 2016, entrevistas). Parece evidente que la opción por la resistencia noviolenta fue producto de un análisis de costo beneficio y en perspectiva de conveniencia y oportunidad.

Para los yaquis, la lucha noviolenta es una decisión con la que se han comprometido a pesar de conservar sus armas, las cuales no utilizan. También preservan organizada una guardia indígena, que es la más antigua de México. Ambos elementos representan una advertencia al gobierno de que ante un caso extremo de necesidad de defensa, son capaces de recurrir a la violencia para protegerse (autoridad yaqui; líder yaqui, 2016, entrevistas).

La lucha de nosotros es pacífica, pero siempre damos a conocer nuestras armas para que el gobierno sepa que nosotros tenemos el poder y la autoridad. Lo que queremos nosotros es vivir en paz en nuestro territorio, tener un territorio para dejarles a nuestros hijos, nietos y dejarles un buen porvenir (autoridad yaqui, 2016, entrevista).

La importancia que los yaquis conceden a la preparación y planeación de la lucha también le otorga carácter de resistencia noviolenta estratégica a sus acciones. Otro factor importante para destacar es que acuden a la combinación de métodos de resistencia civil con métodos de resolución y transformación de conflictos como la negociación; evidenciando una postura

abierta y estratégica, que busca lograr mayores alcances para su campaña de resistencia (Tomás Rojo, 2016, entrevista).

Actualmente, la resistencia es organizarnos para las luchas, porque ya tenemos la estructura interna y ahora vamos por la lucha externa. Esta corresponde a las alianzas con los demás pueblos, con la sociedad civil y con los distintos sectores, pero siempre bajo una alianza de respeto y de solidaridad, y esto nos ha llevado a aliarnos con estructuras que no eran consideradas como posibles, debido a la liberación económica, la apertura comercial de los países capitalistas y el esquema de la globalización económica. Nosotros tenemos un tipo de resistencia legal (Tomás Rojo, 2016, entrevista).

Si bien la opción por la resistencia noviolenta estratégica es fundamental, no es suficiente para el éxito de una campaña de esta naturaleza; es necesario contar, además, con condiciones especiales (Sharp 2005, 193). A ellas se hace referencia al finalizar este capítulo.

La campaña de resistencia civil de los yaquis contra el Acueducto Independencia

El reconocimiento del gobierno de Lázaro Cárdenas a los yaquis no logró la consolidación esperada, y la tranquilidad que se había alcanzado con los acuerdos comenzó a debilitarse. A lo largo de 70 años, el decreto que reconoce su derecho sobre parte del río Yaqui ha sido violado y el estado de Sonora construyó tres represas que afectaron el cauce de este río. Desde 2010, se inició la construcción del Acueducto Independencia, sin la consulta previa exigida. Esta megaobra pretende transvasar el agua de la cuenca del río Yaqui para llevarla a la del río Sonora, en Hermosillo, afectando el cauce bajo del Yaqui y la sobrevivencia de la tribu (Padilla 2007).

Durante los últimos 70 años no se ha cumplido ese decreto. En este tiempo, se construyeron tres represas, creció la población, se fomentó el crecimiento de la agricultura privada, creció Ciudad Obregón y hay una gran cantidad de usuarios. Esa agua se ha ido a satisfacer las demandas de todo este grupo de

usuarios y al final han dejado a los yaquis. De hecho, yo creo que no les cumplen el 20 o 30 % de la cantidad de agua (José Moreno, 2016, entrevista).

Los megaproyectos representan el principal desafío de la resistencia civil de los yaquis. Constituyen nuevas formas de despojo del territorio y del río, que como se ha mencionado hace parte del mismo, colocando en riesgo la cultura y autonomía indígenas. Como destaca una autoridad yaqui de Vícam:

Actualmente, nos quieren quitar el territorio a base de concesiones y lo que anhelamos nosotros es vivir en paz y que nos respeten como autoridad. Nosotros somos originarios de aquí y estamos resueltos a quedarnos en nuestro territorio, ese es el más grande sueño que nosotros tenemos. Si se llegasen a cumplir esos derechos de la Constitución que por ley hemos ganado, ese sería un sueño anhelado y esperado. En la actualidad tenemos seis años y medio de estar luchando con el gobierno. Nosotros tenemos nuestro río y tenemos tres presas, la primera que se formó en 1940, pero antes nuestros antepasados habían firmado un decreto presidencial en donde el 50 % del agua era para el pueblo yaqui. Ese decreto todavía existe. Ellos pensaron que la presa solo iba a bajar el caudal del río, pero vieron que el río se iba a secar. Pasaron los años y pusieron otra presa, esa presa fue la que remató nuestro río porque ya no hubo corriente y después se formó entre las dos presas otra presa: El Novillo. Ahorita hay dos proyectos muy grandes: el Acueducto Independencia y la presa Los Pilares. Desde ese momento empezó la lucha y hubo demandas. En esos seis años que estuvo el gobernador Padrés, tuvimos amenazas a nuestros voceros y a la autoridad. Ese gobierno no respetó las leyes ni el estado de derecho. Ese es el más grande desafío (autoridad yaqui, 2016, entrevista).

Académicos e investigadores concedores del conflicto consideran que esta obra hidráulica representa un nuevo despojo para la tribu yaqui (Moreno 2014). Destacan que, a pesar de los acuerdos con Cárdenas, se ha ido arrebatando el territorio ancestral a los indígenas mediante decretos gubernamentales de posteriores gobiernos. Esta situación se agrava con la falta de acceso a créditos para desarrollar actividades agrícolas en sus territorios, lo que los ha llevado a arrendarlos a los *yori*, o no indígenas.

Realmente es el nuevo despojo, porque ha habido otros despojos. Su territorio y parte de sus tierras les han sido quitadas a raíz de varios decretos y ha sido una vida muy difícil para ellos. Ahorita la mayor parte de sus tierras las rentan, porque los yaquis no son sujetos de crédito. En general ellos rentan tierras, rentan a un privado y hay veces que ellos se contratan como mano de obra. Esa es la situación actual. Durante mucho tiempo ellos han pedido que les den más asignación de agua para poder sembrar las tierras, y la institución federal ha dicho que no hay agua, y esa misma institución es la que aprobó el acueducto (José Moreno, 2016, entrevista).

Este acueducto ha sido promovido por el gobierno de Sonora y por empresarios locales, algunos de ellos muy influyentes y con poder político, como Mario Fabio Beltrones (José Moreno, 2016, entrevista). A su vez, ha contado con el apoyo del Estado federal, el cual argumentó que la obra era necesaria para suplir la insuficiencia de agua en Hermosillo. No obstante, según criterios técnicos, había otras soluciones menos costosas, utilizando agua de cuencas más cercanas o desalinizando agua del mar. Tampoco se debe obviar que detrás de dicha obra hay intereses partidistas (José Moreno, 2016, entrevista).

Esta es una obra apoyada por un político, Mario Fabio Beltrones, presidente del PRI, él fue promotor de la obra desde el PRI en alianza con el PAN. De hecho, lo dijeron abiertamente: somos aliados en esta obra. Supuestamente esto iba a resolver el problema del agua en Hermosillo, pero esa agua no es para satisfacer a las colonias sino para el crecimiento industrial, comercial e inmobiliario, porque ese volumen de agua solamente se explica para los próximos 15 o 20 años. Detrás del acueducto hay grandes intereses políticos y económicos que están asentados aquí en Hermosillo, esta agua viene a desarrollar inmobiliarios, a la zona industrial y el comercio, estos empresarios lo han manifestado abiertamente (José Moreno, 2016, entrevista).

Yo creo que la ciudad de Hermosillo y esta cuenca tenían otras opciones, pudieron haber tenido un uso más eficiente del que se está ejecutando, pero optaron por irse a 150 kilómetros, para hacer un proyecto muy costoso y con 75 millones de metros cúbicos de agua al año (José Moreno, 2016, entrevista).

Antecedentes de movilizaciones en contra de megaproyectos hidráulicos en México

El Acueducto Independencia, objetivo de la campaña de resistencia no-violenta de los yaquis, no representa la primera obra hidráulica de esta naturaleza en México. Tampoco la primera que genera la movilización de las comunidades afectadas por dichas obras (Moreno 2014). A comienzos de la década del 70, se registró una movilización en Toluca por falta de agua en manantiales y pozos, como consecuencia de un acueducto construido para llevar agua a la Ciudad de México (Cirelli 1997). Luego, a mediados de los años 80, agricultores de la cuenca oriental se movilizaron en Puebla y lograron detener el proyecto de perforación de 54 pozos para transportar agua subterránea al Distrito Federal (González 2000). También, a mediados de los 90, agricultores de Tamaulipas se opusieron a la construcción de la represa El Cuchillo y su acueducto, que llevaría agua a Monterrey (Aguilar 1999).

Estudios recientes destacan el impacto negativo de estas megaobras. Señalan que no significaron un mejor uso del agua en las ciudades receptoras, ni disminuyeron el deterioro ambiental. Por el contrario, incrementaron la demanda urbana de agua, crearon conflictos sociales y afectaron tanto a las cuencas que suministran el agua como a las receptoras. La redistribución del agua en beneficio de las ciudades afecta áreas agrícolas, rurales e indígenas y genera conflictos al priorizar beneficios económicos sobre costos sociales y ambientales (Moreno 2014).

El Acueducto Independencia fue proyectado a mediados de la década de los 90 en el gobierno de Fabio Beltrones, aunque no logró concretarse por la crisis económica que atravesaba el país. Entre 1997 y 1998 se intentó aprobar esta obra, aunque sin resultado; el proyecto quedó archivado por diez años. No fue hasta el gobierno de Guillermo Padrés en 2009, cuando se inició la construcción, respaldada por los empresarios de Hermosillo. El pueblo yaqui no fue consultado (Moreno 2014, 35, 83).

Los métodos empleados por la campaña de resistencia civil yaqui

Los yaquis han empleado diversos métodos de resistencia no violenta. Muchos de ellos pueden ubicarse dentro de la clasificación ofrecida por Sharp sobre los métodos de resistencia civil. En el siguiente aparte ofrezco una descripción de varios métodos utilizados por los yaquis que se relacionan con el trabajo del autor mencionado.

Métodos de persuasión y protesta

Forman parte de esta categoría las declaraciones formales, los discursos públicos, las declaraciones públicas y las peticiones de grupo; las comunicaciones mediante foros, símbolos, medios de comunicación y redes sociales; y las procesiones, marchas y caravanas. Las actividades de incidencia ante autoridades, personalidades u organismos internacionales representan métodos de este tipo. Entre estas prácticas de resistencia no violenta se destacan:

La comunicación política. Los yaquis dan significativa importancia a este método. Acuden a los medios de comunicación y trabajan para lograr espacios dentro de los mismos. Sus intervenciones se han maximizado en momentos de represión o persecución del Estado. Por ejemplo, los medios han sido utilizados para anunciar y llamar la atención sobre la “Caravana nacional por la defensa del territorio, el agua, el trabajo y la vida”, realizada en 2015 (Jesús Haro, 2016, entrevista). Las comunicaciones remitidas a autoridades religiosas como el Papa, también destacan este método de lucha (José Moreno, 2016, entrevista).

Los foros en defensa por el agua. En 2010, los yaquis realizaron el primer foro por la defensa del agua, y lo repitieron en 2012. En estos eventos académicos buscaban visibilizar la problemática asociada a la construcción del Acueducto Independencia. A través de ellos, el pueblo yaqui sentó su postura con respecto al megaproyecto y estableció relaciones con organizaciones, personas de la academia y con líderes sociales (Lerma 2014).

La incidencia ante autoridades, personalidades y organismos internacionales. Se destaca al respecto una reunión en noviembre de 2017 con

la relatora especial para derechos y asuntos indígenas de la ONU y con el relator de asuntos indígenas de la OEA (autoridad indígena; Jesús Haro, 2016, entrevistas).

Esta incidencia ha estado a cargo de líderes especiales que se desempeñan como *gestores*, *interlocutores* y *luchadores*. Los primeros son los que conducen a la gente de las comunidades a las instancias formales; los segundos posibilitan abrirse al mundo, tomar conciencia de los derechos del pueblo yaqui y de su exigibilidad; y los terceros, los luchadores, sientan las bases del diálogo y la negociación. Estos últimos son los catalizadores o dinamizadores de los procesos de cambio cuando surgen las tensiones (Tomás Rojo, 2016, entrevista).

La Caravana nacional por la defensa del territorio, el agua, el trabajo y la vida. Fue un significativo método de protesta yaqui que reunió, en mayo de 2015, a más de 100 organizaciones, pueblos indígenas y movimientos sociales, que compartían una agenda común: su lucha por el agua y el territorio (Haro 2015). La Caravana no solo difundió la problemática asociada a la construcción del Acueducto Independencia, sino que facilitó el contacto con otros pueblos y comunidades también afectados por megaproyectos similares. Este encuentro cimentó la relación con distintos sectores de la sociedad civil, la academia y organizaciones no gubernamentales (autoridad yaqui, 2016, entrevista).

Aquí en Sonora, la unión hace la fuerza. Nosotros tuvimos una caravana nacional donde estuvieron nuestros hermanos, salimos de nuestro pueblo en Vícam y llegamos a Obregón. Salimos cinco caravanas para llegar a Xochimilco. En lo que visitamos cada etapa, nos enteramos que no éramos los únicos que estábamos luchando y que hay muchos indígenas que están resistiendo. Por ejemplo, en el pueblo de Cherán, donde nos reconocieron como hermanos mayores y uno se siente orgulloso de saber que saben de uno [...], organizamos una unión con todos los indígenas y no indígenas; fue una organización amplia, el nombre de la caravana era “Territorio, agua, vida y trabajo” (autoridad yaqui, 2016, entrevista).

Gracias a la Caravana hicimos un convenio de organizarnos a nivel nacional. A nosotros los de Córorit nos han invitado a reuniones a nivel nacional, en la última que asistimos se formó una organización llamada: “En

defensa de nuestra madre tierra”. Esa organización ya se formó y contamos con bastantes personas que se están uniendo en todo el estado de Sonora. Esa es la organización donde está el futuro de México, el futuro de todos y es la voz que nosotros tenemos (autoridad yaqui, 2016, entrevista).

Las marchas. Se destaca la marcha realizada en la ciudad de Obregón, en 2013, que alcanzó a congregar unas 30 000 personas. En esta marcha participó el presidente municipal de Cajeme, quien encabezó la custodia de la ciudad. Este acto consiste en cerrar las entradas de la ciudad por el norte y el sur. Así se inició la aplicación en serie de otro método: el bloqueo (Moreno 2014, 266).

La otra parte ha sido una lucha en los medios de comunicación dando a conocer su caso en la prensa, en conferencias, en caravanas, en bloqueos, marchas. Han mandado cartas al Papa y van a todos los foros indígenas posibles. Interpusieron dos demandas ante la Comisión de Derechos Humanos, demandas que ya establecieron varias medidas cautelares y tienen como tres resoluciones a su favor (José Moreno, 2016, entrevista).

Métodos de intervención noviolenta: los bloqueos

A partir de 2011, los yaquis bloquearon importantes vías de Sonora. El primer bloqueo se realizó en septiembre de 2011 y fue precedido por un comunicado que anunciaba una marcha en la carretera federal que partiría desde la escultura del indio Cajeme hasta encontrarse con yaquis procedentes de Vícam. La acción de protesta bloquearía los cuatro carriles de la carretera internacional. El objetivo era protestar contra el Acueducto Independencia. El Estado respondió con órdenes de captura, intentos de dividir a los ocho pueblos yaqui y represión a los oponentes mediante uso de la fuerza (Moreno 2014, 97-98).

Otro bloqueo significativo fue el realizado en junio de 2013 en Vícam, que se planteó con carácter permanente. Solo dejaron pasar ambulancias con enfermos, vehículos con residuos peligrosos y unidades que ofrecieron razones humanitarias. Habiendo transcurrido 14 horas del cierre, el

impacto económico ya era evidente, y los sectores empresarial, maquilador, agroexportador, minero y transportista se vieron afectados. La acción trajo consigo intervenciones a favor y en contra de diputados, servidores públicos y del sector privado (Moreno 2014, 269-270).

Estos bloqueos visibilizaron el conflicto desatado por la construcción del Acueducto Independencia, evidenciaron la fortaleza de la campaña de resistencia yaqui, captaron simpatizantes y aliados, y produjeron costos económicos al adversario que le dieron contundencia a la resistencia. A pesar de estos logros, los bloqueos no pudieron suspender las obras de construcción del acueducto.

La combinación de métodos de resistencia civil con métodos del ámbito de resolución y transformación pacífica de conflictos

En procura de que sus demandas logren mayores alcances, los yaquis han combinado los métodos descritos con otros pertenecientes al ámbito de la resolución y transformación de conflictos. Apelaron a vías legales, dialogaron y negociaron con el gobierno, y se aliaron con otros sectores sociales (autoridad; líder yaqui, 2016, entrevistas).

Han desarrollado también métodos propios cuyos centros son la cultura y la identidad como factores de cohesión. A partir de estos métodos, se ha construido una red de gestores, interlocutores, luchadores que fortalece el ejercicio de resistencia noviolenta y su articulación con métodos de resolución y transformación pacífica de conflictos, como la mediación y la negociación (Tomás Rojo, 2016, entrevista).

Combinación con el diálogo y la negociación

Algunos investigadores han analizado la relación entre la resistencia noviolenta y la negociación. Al reconocer que esta resistencia tiene métodos propios y que la negociación hace parte del ámbito de resolución y transformación de conflictos, plantean la posibilidad y las ventajas que

ofrece su articulación, especialmente en conflictos asimétricos (Finnegan y Hackley 2008; Dudouet 2012; Wanis-St. John y Rosen 2017). Dudouet (2012) considera que la resistencia civil cataliza la transformación de conflictos al obligar su resolución, empodera a quienes resisten y les permite participar e influir en un proceso de negociación efectiva. En sentido similar, Wanis-St. John y Rosen (2017) y Finnegan y Hackley (2008) afirman que la resistencia civil puede convertirse en una palanca para lograr una negociación.

En Colombia, algunas experiencias de resistencia civil, como los casos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC), han evidenciado que, muchas veces, esta práctica conduce al inicio de un ejercicio de mediación o negociación. De igual manera demostraron que, iniciada la negociación, la resistencia se convierte en un mecanismo de presión (Hernández 2004, 2006, 2012). En estos casos las resistencias no violentas se ejercieron frente a violencias estructurales expresadas en términos de exclusión, y a violencias directas como conflictos armados. En el marco de estas acciones, las resistencias dieron inicio o acompañaron mediaciones o negociaciones efectivas con el Estado y con actores del conflicto armado (Hernández 2004, 2009, 2012).

Los yaquis reconocen que cuentan con capacidad para la resistencia no violenta, pero también para la negociación política. De hecho, consideran que uno de sus más importantes logros, los reconocimientos en el gobierno de Lázaro Cárdenas, lo obtuvieron con la negociación (Tomás Rojo, 2016, entrevista). Académicos e investigadores también reconocen la capacidad de negociar por parte de este pueblo indígena. Al respecto se afirma: “Porque ha sido parte de la estrategia de la tribu yaqui, saber moverse en el terreno, negociar, dialogar y no enfrentarse directamente en algunos casos” (Alejandro Aguilar, 2016, entrevista). Otro ámbito en el que puede constatarse la capacidad de negociación es en los bloqueos ya que, en algunas oportunidades, se abrió la puerta a la negociación con el gobierno. No obstante, vale la pena señalar que, aunque estas negociaciones representaron un buen ejercicio, no alcanzaron avances significativos.

El que estemos organizados actualmente como estamos fue porque la tribu negoció, concertó con la Corona española, y si la tribu logró allanar el camino para el reconocimiento como pueblo fue por esa capacidad de negociación, por la fuerza política de la tribu. Si la tribu ya hizo convenio de concertación fue con los diferentes gobiernos estatales de 1992, también con el gobierno federal, es porque tiene esa capacidad, y no es pedir cosas a cambio de nada, no. La tribu tiene un territorio, genera recursos naturales, genera impuesto, tiene servidumbre de paso, pasa la carretera de cuatro carriles (que ya la vieron ustedes) pasa la vía del ferrocarril, pasa la fibra óptica, pasa al oleoducto y pasa un acueducto Yaqui-Guaymas, pasa el tendido eléctrico, el tendido eléctrico de alta tensión, entonces eso no es gratuito, tiene que haber algo a cambio (Tomás Rojo, 2016, entrevista).

Combinación con vías judiciales

Los yaquis han interpuesto acciones judiciales ante cortes y tribunales con competencia legal nacional e internacional. El resultado ha sido muy positivo, pues han obtenido fallos favorables. Tres de ellos fueron proferidos por la Corte Suprema de Justicia (Tomás Rojo; José Moreno, 2016, entrevistas). Estos pronunciamientos judiciales han dado la razón a los yaquis, señalando que la construcción del Acueducto Independencia carece de autorización de impacto ambiental. No obstante, hasta la fecha, han quedado solo como letra muerta, pues no se cumplen (José Moreno, 2016, entrevista).

Ellos siguieron cinco caminos, el primer camino fue la defensa legal y hay 11 resoluciones judiciales en la actualidad. De esas, seis o siete han sido a su favor, tres de ellas las emitió la Corte Suprema de Justicia, que es el órgano máximo, y ese órgano fue el que dijo que no hubo consulta previa informada y que hay que reponer el procedimiento. La tragedia es que la resolución de la Corte fue muy ambigua, porque a la vez que aprobó eso, aprueba que el acueducto puede seguir operando, entonces es ilógico consultar sobre un acueducto que está operando. [...] La Corte dio dos resoluciones más que les dan la razón a los yaquis y como debe ocurrir en

muchos países de América Latina, una cosa es lo que dicen las cortes y otra cosa es que se lleve a la práctica, entonces se ha ido violentado todo este derecho y ellos siguen su lucha (José Moreno, 2016, entrevista).

Combinación con alianzas estratégicas

Establecer alianzas estratégicas se ha convertido en un método valorado por los yaquis (autoridad; líder yaqui, 2016, entrevistas). Las relaciones con la academia, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, partidos políticos, pueblos indígenas y comunidades que también padecen el impacto de los megaproyectos hidráulicos han permitido que el pueblo yaqui avance en la difusión de su problemática y de la resistencia civil. Las alianzas posibilitaron apoyos en momentos clave y una construcción colectiva para lograr mayor incidencia (Tomás Rojo, 2016, entrevista)

Dentro de estas alianzas se destaca la que constituyeron con agricultores privados de la cuenca del río Yaqui, a quienes anteriormente consideraban sus adversarios (Moreno 2014, 64-65). En este acuerdo los yaquis desplegaron su capacidad política, intentando sacar provecho del perjuicio que para el sector agrícola también representa el Acueducto Independencia

Ellos tienen una habilidad para establecer alianzas. Tienen alianzas con sindicatos, universidades, con grupos de yaquis en Estados Unidos que ayudan con dinero. Pueden establecer una alianza con el PRI y con el PAN. Tienen una capacidad política muy grande, por ejemplo, organizaron dos caravanas a la Ciudad de México, una salió de la frontera norte y otra de la frontera sur. Esto fue lo que ayudó a que una resolución de la Corte fuera reconocida y ayudó a visibilizar [su caso] en términos nacionales (José Moreno, 2016, entrevista).

En el año 2010, el gobierno planeó traer el agua de la cuenca del río Yaqui al río Sonora [...], fui a la zona y encontré un rasgo característico, la alianza en defensa del agua es entre un grupo de agricultores privados, un grupo de ciudadanos de sectores productivos de un municipio y la tribu yaqui (José Moreno, 2016, entrevista).

Tenemos que organizarnos para la lucha externa, el vínculo hacia las luchas, las alianzas con los demás pueblos, las alianzas con la sociedad civil y la alianza con los distintos sectores de la sociedad mexicana, pero siempre con nuestra característica propia, distintiva y nuestra demanda propia también, para una alianza de respeto, de solidaridad, entonces es así, nos ha llevado hasta a aliarnos con estructuras que no eran consideradas como posibles aliados, como empresarios agrícolas, sociedad civil, clase media, pero eso siempre está dentro de la posibilidad (Tomás Rojo, 2016, entrevista).

Combinación con métodos propios

Los yaquis han combinado los métodos de resistencia civil con métodos propios. Ellos conocen bien los recursos que ofrece su cultura y tienen un gran sentido de pertenencia. Estos métodos han puesto a la identidad en el centro de su lucha, sin obviar la relación que tiene con las necesidades y aspiraciones de la tribu (Tomás Rojo, 2016, entrevista). De esta manera han podido mantener una experiencia de resistencia no violenta cohesionada y dinámica.

Nuestra mayor fortaleza es nuestra identidad, nuestra organización estructural y principalmente los instrumentos legales, como el decreto presidencial, que nos reconoce una parte de nuestro territorio. Estamos en proceso también de formar recursos humanos para que, en un futuro, de unos 10 o 15 años, la tribu pueda ser autosuficiente en recursos humanos y para eso tenemos que generar las oportunidades, para que ese recurso humano pueda ocupar los espacios institucionales y para que pueda la tribu desarrollarse en plenitud y autonomía. El orgullo que tenemos más grande es ser yaqui. Es el yaqui que nunca lo han doblegado. A la llegada de los españoles no nos conquistaron, ellos nunca lo hicieron y hasta la fecha el gobierno no nos va a conquistar con esos proyectos que dicen dar, porque nos tocan por derecho esos beneficios, por ser mexicanos. Y también pues la fortaleza es que también hay jóvenes preparados, hay jóvenes licenciados [...], es la fortaleza que tenemos, hay gente mayor también que están apoyadas en todo. Es la fortaleza (Tomás Rojo, 2016, entrevista).

Los yaquis han creado una estructura integrada por gestores, interlocutores y luchadores que cumple funciones precisas en términos de consolidación interna, fortalecimiento de la identidad y articulación con la negociación. En ese sentido, los gestores tienen cierto tipo de liderazgo, y son quienes conducen a la gente a las instancias del Estado para que puedan resolver alguna situación, prestar un servicio a la comunidad, gestionar un proyecto, etc. Los interlocutores se encargan de abrir puertas, canalizar potencialidades y propiciar procesos de aprendizaje que amplíen la visión del mundo, el conocimiento de los derechos y de mecanismos para hacerlos valer. Ellos y ellas sientan las bases del diálogo y la negociación. Los luchadores son quienes exigen lo que el Estado no ha cumplido (Tomás Rojo, 2016, entrevista).

Tabla 1.1. Resumen de métodos yaqui de resistencia no violenta

Métodos de resistencia civil	Combinación con métodos de transformación de conflictos	Métodos propios
<i>Métodos de persuasión:</i> comunicación política, foros de defensa del agua, incidencia ante autoridades, personalidades y organismos internacionales.	Combinación con <i>negociación política</i> .	<i>Mantener cohesionada la base social de su resistencia</i> , colocando en el centro de la identidad, las necesidades y las aspiraciones de la tribu yaqui.
<i>Métodos de protesta:</i> Caravana nacional por la defensa del territorio, el agua, el trabajo y la vida (2015), marchas como la realizada en Obregón (2013), que convocó a 30 000 personas.	Combinación con <i>acciones legales</i> ante instancias nacionales e internacionales.	<i>Prepararse</i> para el ejercicio de la resistencia.
<i>Métodos de intervención no violenta:</i> bloqueos, desde 2011, en Obregón y en Vicam.	Combinación con <i>establecimiento de alianzas estratégicas</i> con la academia, ONG, sindicatos, partidos políticos, intelectuales, pueblos indígenas y comunidades que padecen la misma problemática asociada a los impactos de los megaproyectos.	Contar con una <i>estructura para el ejercicio de la resistencia</i> y la articulación de métodos. Esta estructura la constituyen gestores, interlocutores y luchadores.

Condiciones de la resistencia noviolenta de los yaquis

Como señala Sharp (2005), no es suficiente optar por la resistencia noviolenta para lograr una experiencia exitosa, ni tener una voluntad férrea para resistir. Es necesario contar con una serie de condiciones que den alcances al ejercicio de resistencia. Estas condiciones tienen mucho que ver con el asunto en conflicto, los ejes temáticos que están al centro de la lucha, la estructura social de los resistentes, la naturaleza de los oponentes, la elección de la estrategia principal, el mecanismo para promover el cambio, los métodos que se emplean y la habilidad, disciplina y tenacidad de quienes resisten (Sharp 2005, 196-197).

Las experiencias de resistencia civil afrontan una asimetría de poder debido a los actores que enfrenta (Sharp 2005; Dudouet 2012). Es evidente el desequilibrio de poder entre las minorías reprimidas, las mayorías despojadas, los que no tienen voz, y el poder de los Estados, los empresarios y los actores armados. En consideración de algunos analistas, lo que hace la resistencia civil es equilibrar las relaciones de poder, empoderando a los sectores que resisten (Dudouet 2012). ¿Cómo les da poder?, preparándolos para la acción colectiva eficaz, eligiendo los métodos más adecuados y aprovechando los recursos sociales, políticos, económicos, culturales y psicológicos con los que cuentan (Dudouet 2012; López 2016). Esto se constata cuando la resistencia civil otorga poder e influencia a quienes van a iniciar una negociación efectiva (Dudouet 2012).

Los yaquis afrontan un desafío de grandes proporciones al ejercer su resistencia noviolenta contra el Acueducto Independencia. Están enfrentando al poder del Estado y de la empresa privada, a los intereses políticos y económicos involucrados en este megaproyecto. De igual manera, se oponen a estructuras políticas, sociales y económicas que han excluido a las poblaciones indígenas a lo largo de la historia, todas ellas articuladas al flagelo de la corrupción. ¿Cuáles son las condiciones de su resistencia noviolenta para enfrentar la asimetría de poder y dar mayores alcances a su campaña en este contexto desigual?

En los años 30, México fue ejemplo internacional por sus políticas indigenistas [...]. En un juicio rápido y severo, todos los programas indigenistas de hoy en día, estatales y federales, están atentando contra las culturas indígenas [...]. Por ejemplo, en los últimos años, se ha apostado mucho a la transferencia de recursos, donde los presupuestos que están orientados al desarrollo de los pueblos indígenas se utilizan para fortalecer la carretera e infraestructura. Los distintos programas orientados a los pueblos indígenas, en realidad, no están llegando con respeto a sus formas tradicionales. El sistema político mexicano está gravemente herido de corrupción, no hay credibilidad en el sistema ni en los nuevos partidos de alternancia. Algunos de estos partidos no han desarrollado realmente una reflexión de cómo incorporar los derechos de los pueblos indígenas (Alejandro Aguilar, 2016, entrevista).

Los yaquis cuentan con condiciones especiales que favorecen el ejercicio de resistencia civil. Ellas tienen un carácter cultural, histórico, demográfico y organizativo. Están relacionadas con los métodos que han empleado para su ejercicio de resistencia. Individualmente, estas condiciones no alcanzan por sí solas a equilibrar las relaciones de poder. Es necesario analizarlas en su conjunto.

- Los rasgos culturales del yaqui mencionados en este capítulo: el alto concepto de sí mismos, arraigo cultural, sentido de pertenencia y el orgullo de ser yaqui.
- La comprensión en su cosmovisión, del espacio como “nido heredado” y del territorio como parte integral de su ser, incide en el ejercicio de resistencia no violenta y lleva a los yaquis a luchar para protegerlos.
- Tener una población amplia, que oscila entre 25 000 y 45 000 personas.
- La trayectoria de resistencia: existe reconocimiento y confianza en este pueblo de que son capaces de resistir de forma no violenta. Como testimonio, uno de los líderes manifestó:

Luchar siempre contra el gobierno, a nosotros no nos da miedo, porque de eso estamos hechos. Nosotros podemos quedarnos en el camino, pero atrás de nosotros viene mucha gente que puede terminar con el gobierno y es gente preparada de nuestro pueblo (autoridad yaqui, 2016, entrevista).

- Los importantes logros históricos: la restitución de parte del territorio ancestral y el reconocimiento de la propiedad sobre el 50 % del río Yaqui en la presidencia de Lázaro Cárdenas. Aunque este reconocimiento no se haya consolidado, el hecho es que existe y se ha convertido en fundamento del ejercicio de resistencia noviolenta. Además, le ha demostrado al yaqui que resistir tiene efectos ante el Estado.
- La transición a una resistencia noviolenta permitió continuar la lucha con menos costos para el pueblo y, posiblemente, ganar otros apoyos.
- La resistencia pragmática o estratégica evidencia la capacidad que tienen los yaquis para asumir decisiones a partir de balance de costos, beneficios y oportunidades.
- Los logros significativos de la campaña de resistencia noviolenta frente al Acueducto Independencia, representados en fallos favorables a su causa emitidos por la Corte Suprema de Justicia y otros tribunales. Aunque hasta el momento no se cumplan estos pronunciamientos judiciales, el hecho de que existan otorga poder a quienes resisten y fortalece el proceso.
- La combinación de métodos utilizada por los yaquis al ejercer resistencia noviolenta representa una decisión estratégica que puede darle mayores alcances a su campaña, tal como se registra con los buenos resultados de las acciones legales.
- La capacidad política para comunicar, establecer alianzas, dialogar y construir acuerdos.
- Contar con una estructura organizativa consolidada y probada en el transcurso del tiempo. No obstante, se advierte que esta estructura sería más fuerte con la unidad de los ocho pueblos.
- Contar, como ellos lo reconocen, con comunidades y líderes más educados y formados.
- Las alianzas estratégicas que han logrado establecer.

Conclusiones

- El estudio de la experiencia de resistencia noviolenta de los yaquis confirma hallazgos previos, relacionados con la necesidad de incorporar al análisis de estas resistencias, aspectos propios de estas tribus como sus culturas, historia, su trayectoria de resistencia, y elementos de la praxis de la resistencia civil. Esta precisión dotará de un enfoque integral a la observación de las resistencias civiles indígenas.
- El caso de los yaquis corrobora también aprendizajes anteriores sobre la capacidad de los pueblos indígenas de transitar de resistencia con recurso a la violencia a resistencias noviolentas.
- La experiencia estudiada evidencia un caso de resistencia noviolenta estratégica. La tribu yaqui escogió esta forma de lucha por razones de beneficio, conveniencia u oportunidad. A partir de condiciones específicas y no por principios religiosos, filosóficos o éticos, fue capaz de construir un escenario favorable a su ejercicio de resistencia. Consideraron los yaqui que hechos como la restitución de una parte del territorio ancestral y el reconocimiento de su derecho sobre 50 % del río Yaqui, durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, les aseguraron el eje de su resistencia: un espacio o territorio que les pertenecía y que les permitía en adelante asumir una lucha con métodos menos costosos. Dentro del pueblo yaqui se calcularon los altos costos de la resistencia armada y viendo que ya contaban con comunidades y líderes preparados, le dieron paso a la resistencia noviolenta. También se considera que es una resistencia noviolenta estratégica, por la importancia que otorga esta tribu a la planeación y preparación de su resistencia.
- La experiencia yaqui utiliza métodos que encajan en la tipología ofrecida por Sharp (1973, 2005), que ellos combinan con otros métodos del ámbito de resolución y transformación pacífica de conflictos, y con métodos propios.
- Los yaquis cuentan con un conjunto de factores que les han permitido asumir y superar la asimetría del poder y dar mayores alcances a su resistencia, sin obviar los retos y desafíos que implican el megaproyecto del Acueducto Independencia.

- La campaña de resistencia civil de los yaquis confirma los alcances de los métodos noviolentos de lucha en términos de cambio, transformación de conflictos y construcción de paz.
- Esta experiencia enseña que no es suficiente con optar por la resistencia noviolenta para lograr el éxito de la misma, sino que es necesario contar con un conjunto de circunstancias que permitan superar la asimetría de poder y dar mayores alcances al ejercicio de resistencia.
- La resistencia civil de los yaquis ofrece elementos teóricos y prácticos que permiten comprender los problemas que los megaproyectos generan a los pueblos indígenas. Aporta también al análisis de los métodos y condiciones que tornan seria y fuerte esta resistencia, permitiendo dar una pelea noviolenta que ofrezca dificultad al adversario. Con su experiencia de resistencia noviolenta los yaquis anuncian que hay un camino a seguir, cuyo recorrido no es nada fácil.

Referencias

- Aguilar, Cristina. 2003. "El cuerpo y sus representaciones: imagen de la cultura yaqui". *Bricolage*, 1: 2-12. <https://revistabricolage.wordpress.com>
- Aguilar, Ismael. 1999. "Interregional Transfer of Water in Northeastern Mexico: The Dispute over El Cuchillo". *Natural Resources Journal* 39 (1): 65-98.
- Ali, Saleem. 2003. *Mining, the Environment and Indigenous Development Conflicts*. Tucson: University of Arizona Press.
- Ballesteros, Gilma. 2016. "Desobediencia civil indígena: el pueblo nasa y el incidente del Cerro Berlin". *Polis* 15 (43): 1-13. <https://www.redalyc.org>
- Caldón, José, Mauricio Caviedes, Agencia Española de Cooperación Internacional, y Centro de Cooperación al Indígena. 2007. *Paz y resistencia: experiencias indígenas desde la autonomía*. Bogotá: CENCOIN.
- Cirelli, Claudia. 1997. "La transferencia de agua: el impacto en las comunidades origen del recurso. El caso de San Felipe y Santiago, estado de México". Tesis de maestría, Universidad Iberoamericana.

- Composta, Claudia, y Mina Navarro. 2014. *Territorios en disputa. Despojo capitalista, luchas en defensa de los bienes comunes naturales y alternativas emancipatorias para América Latina*. México D.F.: Bajo tierra Ediciones.
- Curle, Adam. 1971. *Making peace*. Londres: Tavistok Publications.
- Dabdoub, Claudio. 1987. "Identidad de la tribu Yaqui". En *Memoria del XI Simposio de Historia y Antropología de Sonora*, 487. Sonora: Instituto de Investigaciones Históricas / UNISON.
- Dudouet, Verónique. 2012. "Resistencia no violenta en las asimetrías de poder". Traducción de David Barrero. En *Berghof Handbook for Conflict Transformation*, editado por Beatrix Austin, Martina Fischer y Hans J. Giessmann, 1-32. Berlín: Berghof Foundation.
- Fabila, Alfonso. 1978. *Las tribus Yaquis de Sonora: su cultura y anhelada autodeterminación*. México D.F.: Instituto Nacional Indigenista.
- Figueroa, Alejandro. 1993. "Reproducción cultural e identidad étnica entre los Yaquis y los Mayos". En *Memoria del XVI Simposio de Historia y Antropología de Sonora*, 257, vol.2. Sonora: Instituto de Investigaciones Históricas / UNISON.
- Finnegan, Amy, y Susan Hackley. 2008. "Negotiation and Nonviolent Action: Interacting in the World of Conflict". *Negotiation Journal* 24 (1): 7-24. doi.org/10.1111/j.1571-9979.2007.00164.x
- Flórez, Jesús. 2007. *Autonomía Indígena en Chocó*. Quibdó: Editorial Nuevo Milenio.
- González, Arsenio. 2000. *Cambios en la gestión del agua y del saneamiento en la ciudad de Puebla, 1988-1994*. México D.F.: Instituto Mora.
- Hager, Carol, y Mary Alice Haddad. 2015. *NIMBY is Beautiful: cases of local activism and environmental innovation around the world*. Nueva York: Berghahn Books.
- Haro, Jesús. 2015. "Caravana nacional en defensa del agua, el territorio, el trabajo y la vida. Objetivos y retos" (ponencia, Foro nacional por la soberanía hídrica y alimentaria, [Universidad Autónoma Chapingo], Texcoco, México, 17 de noviembre de 2015).
- Hernández, Esperanza. 2004. *Resistencia civil artesana de paz: experiencias indígenas, afrodescendientes y campesinas*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

- Hernández, Esperanza. 2006. “La resistencia civil de los indígenas del Cauca”. *Papel Político* 11 (1): 177-220. <https://www.redalyc.org>
- 2009. “Resistencias para la paz en Colombia. Experiencias indígenas, afrodescendientes y campesinas”. *Revista paz y conflictos*, 2:117-135. <https://www.redalyc.org>
- 2012. *Intervenir antes de que anochezca: mediaciones, intermediaciones y diplomacias no violentas de base social en el conflicto armado*. Bogotá: La Bastilla.
- 2014. “Empoderamiento pacifista de experiencias comunitarias locales en Colombia (1971 - 2014)”. Tesis doctoral, Universidad de Granada (Instituto de la Paz y los Conflictos). <https://hera.ugr.es/tesisugr/24287106.pdf>
- 2017. “Resistencia civil y empoderamiento pacifista”. *PAZSOS: Revista Paz Sostenible* 1 (2): 5-19. <http://www.pazsostenible.org>
- Lederach, John. 2008. *La imaginación moral: el arte y el arma de la construcción de la paz*. Bogotá: Grupo Editorial Norma.
- Lerma, Enriqueta. 2011. “El nido heredado. Estudio sobre cosmovisión, espacio y ciclo ritual de la Tribu Yaqui”. Tesis de doctorado, Universidad Nacional Autónoma de México.
- 2014. “Notas para el análisis de la resistencia yaqui en contra del Acueducto Independencia”. *Sociológica* 29 (82): 255-271. <https://www.redalyc.org>
- López, Mario. 2016. “La resistencia civil examinada: de Thoreau a Chenoweth”. *Polis*, 43: 1-17. doi: 10.4000/polis.11508
- Martínez, Daniel. 2016. “La noviolencia en los nasa del Norte del Cauca: relación entre la teoría y la experiencia específica”. *Polis*, 43. <http://journals.openedition.org/polis/11573>
- Moreno, José. 2014. *Despojo de agua en la cuenca del río Yaqui*. Hermosillo: El Colegio de Sonora.
- Moctezuma, José. 2015. “Lengua y cultura como factores de resistencia e identidad étnica yaquis”. *Diario de Campo*, 8: 24-31.
- Moctezuma, José, e Ignacio Guzmán. 2007. *Estructura, discurso e historia de algunas lenguas yutoaztecas*. México D.F.: Instituto Nacional de Antropología e Historia.

- Olavarría, María. 2003. *Cruces, flores y serpientes. Simbolismo y vida ritual Yaquis*. México D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana.
- Padilla, Raquel. 2007. “Uno de tantos yaquis en Valle Nacional”. *Señales de humo*, 5: 6-7.
- 2010. “Autonomía y ley de Dios en las significaciones, imaginarios sociales de los Yaquis durante la jefatura de Juan Banderas”. En *Religión, nación y territorio en los imaginarios sociales indígenas de Sonora*, compilado por Esperanza Donjuan, Dora Enriquez, Raquel Padilla, y Zulema Trejo, 173-215. Hermosillo: El Colegio de Sonora / Universidad de Sonora.
- 2015. “El río en la vida de los yaquis”. *Diario de Campo*, 8: 6-12.
- Patfoort, Pat, y Paul Wehr. 2001. *I Want, You Don't Want: Nonviolence Education*. Freeport: Cobblesmith.
- Pontara, Giuliano. 1983. *Il Satyagraha. Definizione di violenza e nonviolenza nei conflitti sociali*. Perugia: Edizione del Movimento Nonviolento.
- 1996. *La personalità nonviolenta*. Turín: Edizioni Gruppo Abele.
- 2000. “Nonviolenza”. En *Diccionario de política*, editado por Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino, 1054-1058. Madrid: Siglo XXI Editores.
- Randle, Michael. 1998. *Resistencia civil: la ciudadanía ante las arbitrariedades de los gobiernos*. Barcelona: Paidós Ibérica.
- Sharp, Gene. 1973. *The Politics of Nonviolent Action*. Boston: Porter Sargent.
- 1979. *Gandhi as a Political Strategist: With Essays on Ethics and Politics*. Boston: Porter Sargent.
- 2005. “Desarrollando una alternativa realista contra la guerra y otras expresiones de violencia.” En *Acción política no-violenta. Una opción para Colombia*, compilado por Freddy Cante, 183-210. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario.
- 2010. *From Dictatorship to Democracy: A Conceptual Framework for Liberation*, 4a ed. Boston: The Albert Einstein Institution.
- Shaw, Martin. 2003. “El papel y el carácter de la guerra en la transición global”. En *América Latina: conflicto, violencia y paz en el siglo XXI*, editado por Eduardo Sandoval y Robinson Salazar, 9-24. Buenos Aires: Libros en Red.

- Schock, Kurt. 2005. *Unarmed Insurrections: People Power Movements in Nondemocracies*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- 2008. *Insurrecciones no armadas: movimientos de poder popular en regímenes autoritarios*. Bogotá: Universidad del Rosario.
- 2009. “Defending and reclaiming the commons through nonviolent struggle”. En *Nonviolent Alternatives for Social Change*, editado por Ralph Summy, 183-201. Oxford: Eolls Publishers.
- Taibo, Paco. 2013. *Yaquis: historia de una guerra popular y un genocidio en México*. México D.F: Planeta.
- Useche, Óscar. 2008. *Los nuevos sentidos del desarrollo: ciudadanías emergentes, paz y reconstitución de lo común*. Bogotá: Uniminuto.
- 2016. *Ciudadanías en resistencia: el acontecimiento del poder ciudadano y la creación de formas no violentas de re-existencia social*. Bogotá: Uniminuto / Trillas.
- Wanis-St. John, Anthony, y Noah Rosen. 2017. *Negotiating Civil Resistance*. Washington D.C.: United States Institute of Peace.
- Zabala, Palemón. 1985. *El indio Cajeme y su nación de Río Yaqui*. Sonora: Gobierno del Estado de Sonora.

Capítulo 2

De la resistencia pasiva a la resistencia civil: la experiencia de la tribu warijío

Esperanza Hernández Delgado

En este capítulo se analiza la experiencia de resistencia civil de la tribu warijío en Sonora, México. Se enfoca de manera especial en su resistencia no violenta contra el megaproyecto Bicentenario-Represa Los Pilares, una obra que el Estado mexicano y la empresa privada construyen en la cuenca del río Mayo.

Al estudiar la resistencia civil de los warijíos (o makurawe) se constató la incidencia de factores propios de los pueblos indígenas –como su historia– en el ejercicio de esta modalidad de resistencia. A su vez, este caso remitió al análisis de las asimetrías de poder entre quienes resisten y sus adversarios; y las condiciones especiales que se necesitan para superar estas asimetrías estructurales, y lograr mayores alcances en su campaña de resistencia.

La historia de este pueblo aporta valiosos elementos teóricos y prácticos para el estudio de la resistencia civil, de las resistencias no violentas indígenas y de las luchas que se oponen a los megaproyectos en defensa de recursos naturales y culturales, dada la estrecha relación entre el territorio, la cultura y la supervivencia de los warijíos.

Este capítulo muestra los impactos que las “violencias estructurales”¹ y la construcción de megaobras tienen en la vida de los warijíos. Enseña también cómo generan resistencias no violentas y colocan a prueba capacidades y condiciones de este pueblo para dar alcances a su lucha.

1 La violencia estructural puede ser entendida como “aquella que impide a los seres humanos una vida mínimamente humana” (Galtung 1995, 314). Esta forma de violencia corresponde a estructuras que los seres humanos han creado y se expresa en pobreza, racismo, exclusión y autoritarismo.

En este capítulo se intenta responder a estos interrogantes: ¿cómo se caracteriza la resistencia no violenta de la tribu warijío? ¿Cómo evolucionó? ¿Cuentan los warijíos con condiciones que les permitan superar las asimetrías estructurales y dar alcances a su resistencia? ¿Qué aprendizajes arroja esta experiencia?

Sobre el concepto de la resistencia civil

La experiencia de resistencia no violenta warijía nos conduce a los conceptos de resistencia pasiva y resistencia civil. A continuación, se registran algunas nociones sobre estos conceptos.

La resistencia pasiva ha sido considerada como antecedente de la resistencia civil y ha sido entendida como un derecho y deber individual de desconocer la ley o los órdenes establecidos obedeciendo a la conciencia (Randle 1998). Existen evidencias de que esta forma de resistencia se presentó en las tradiciones grecorromanas y judeocristianas del pasado (Randle 1998, 37). Otros investigadores destacan que esta expresión se originó en el mundo anglosajón a principios del siglo XIX, donde se le comprendió como un obstinado rechazo a cooperar con –o a obedecer a– las personas o instituciones con poder (López 2009). Se utilizó después para expresar lo contrario a resistencia activa: “identificándosele con experimentos no violentos, asumiendo la idea de que la violencia estaba asociada a la acción y la no violencia a la inacción” (10).

En algún momento de su historia los warijíos huyeron y se ocultaron para protegerse (Alejandro Aguilar, 2016, entrevista). Luego volvieron a su lugar de origen y vivieron, como nómadas o seminómadas, a la intemperie o en cuevas, hasta que fueron reconocidos como tribu en la década del 70 (Jesús Haro, 2016, entrevista). Se define a estas formas de vida como resistencia pasiva, que solo tenían como fin proteger su vida y su supervivencia.

Ellos me dicen que antes de que los encontrarán no estaban registrados. Sí estaban ahí, pero los *yoris* no los tenían registrados.² Es lo que me han

2 En el idioma warijío *yori* es la palabra para designar a los no indígenas, blancos o mestizos.

dicho. ¿Por qué? Porque se mantenían como si no existieran para el Estado; vivían a veces en las cuevas o en unos lugares muy retirados (Jesús Haro, 2016, entrevista).

Anteriormente vivíamos en arroyos y otros aquí en las cuevas. En cuevas vivía la gente, y en casitas que ellos hacían, pero la mayor parte, como no tenía su casita grande, cuando llovía, se llenaba de bastante agua pues se volteaban todas las casas y se iban a una cueva y allí vivían (Fidencio Leyva, 2016, entrevista).

Con relación al concepto de resistencia civil que se coloca en diálogo con la experiencia warijía, se retoma la noción de Mario López (2016). Esta integra elementos de las acepciones sobre esta modalidad de resistencia de Chebiweth y Stephan (2000); Zunes (1999) y Schock (2005).

Las insurrecciones no armadas, o campañas de resistencia civil son desafíos populares abiertos y organizados frente a las autoridades gubernativas, realizados con métodos no violentos, es decir, que van más allá de los usos convencionales de la política institucional, y que se niegan a sí mismos el uso de las armas y la violencia. La finalidad está en hacer emerger un conflicto en términos incompatibles entre resistentes y autoridades, usando aquellos todos los medios a su alcance: políticos, sociales, económicos, culturales, éticos y psicológicos, de manera activa o pasiva, con excepción de las amenazas y la violencia (López 2016, 2).

Los warijíos realizaron una campaña de resistencia civil que en un primer momento, caracterizado por la lucha por el reconocimiento de su derecho sobre su territorio ancestral, les generó alcances significativos. En un segundo momento, representado por el desafío que les impuso el proyecto Bicentenario-Represa Los Pilares, se analizará si cuentan con las condiciones necesarias para superar la asimetría de poder inmersa en este conflicto y dar alcances a su resistencia no violenta.

Se destaca que la resistencia no violenta warijía ha tenido una *dimensión de defensa*. Esta tribu ha resistido al estado de Sonora y a las empresas privadas que construyen la represa Los Pilares, en defensa de sus recursos

hídricos, territorio, cultura, identidad y de su pervivencia como pueblo. Es necesario clarificar que la resistencia civil en la dimensión de defensa no puede comprenderse como una resistencia pasiva o no propositiva. Por el contrario, su ejercicio hace visible el conflicto, en este caso generado por el megaproyecto Represa Los Pilares, e implica el desarrollo de capacidades para la construcción de la paz como: el despliegue de acciones creativas, la búsqueda de alternativas de cambio y transformación, la elaboración de propuestas para dinamizar la resistencia civil y para abordar la posible negociación (Hernández y Salazar 1999; Hernández 2004, 2009, 2017; Dudouet 2012).

Contexto

Los warijíos, conocidos también como “los hijos de la sierra y los arroyos” (Aguilar 1993, 313), son una tribu originaria del noroeste de Sonora, aunque parte de su población reside en Chihuahua (Aguilera 1993; Haro y Valdivia 1996). Cuenta con una población de unas 2000 personas ubicadas en la depresión suroeste de la Sierra Madre Occidental en Sonora, un territorio con una extensión de 19 293 hectáreas (Haro y Valdivia 1996, 15). Sus principales asentamientos son Burapaco, Los Conejos, Mesa Colorada y Baviácora (Alejandro Aguilar; Jesús Haro; Elizabeth Pettit, 2016, entrevistas).

Hay una gran diversidad cultural en Sonora. Son al menos ocho pueblos originarios. La población se calcula en unas 100 000 personas. De estas, 60 000 más o menos, [corresponden a] la población yoreme-mayo del sur de Sonora, más otros tantos en Sinaloa. Entonces se calcula que los mayos son más de 120 000 gentes entre los dos estados; los yaquis por el lado de 35 000 gentes, y el resto de los grupos 1000, 2000, 800, 1500, son grupos muy pequeños, como los warijíos (Alejandro Aguilar, 2016, entrevista).

En la zona baja de la Sierra, son como un poquito menos de 2000. Al otro lado de la zona, que se comparte con los rarámuris, con los tarahumaras,

son otros 1000. Pero dentro de 100 años, si las cosas [continúan así], vamos a perder un pueblo étnico que fue el último en ser reconocido en México (Elizabeth Pettit, 2016, entrevista).

El territorio warijío está constituido por una extensa Sierra semiárida que conjuga elementos de los ecosistemas tropical y desértico. Presenta un clima extremo que oscila entre 4 y 45 °C y en el que solo llueve dos veces al año (Haro y Valdivia 1996, 15). Algunos académicos y acompañantes de esta tribu destacan que es un área de transición y que su cultura integra ritos de otros pueblos indígenas:

La región donde viven es un área de transición entre la vegetación de la Costa, el ecosistema costero y la Sierra Madre, entonces lo de ellos es una cosa que está en medio y tiene elementos de los dos [...]. Los warijíos, curiosamente, como cultura, juntan ritos tarahumaras, palabras de los tarahumaras con gaitas, que son yaquis y mayos (Jesús Haro, 2016, entrevista).

Los warijíos son una tribu poco documentada (Haro y Valdivia 1996). En parte porque existe un vacío en torno a sus orígenes y su devenir; y porque fueron reconocidos por el Estado de forma tardía en 1976 (Valdivia 1979).

Con relación a su origen, algunos investigadores consideran que los warijíos son una tribu extinta o asimilada a los tarahumaras; otras opiniones aseguran que migraron de Chihuahua a Sonora (Haro y Valdivia 1996, 14). Una versión diferente afirma que siempre han ocupado el territorio donde fueron descubiertos y viven en la actualidad (Haro y Valdivia 1996, 14). Esta consideración se fundamenta en informes de los españoles colonizadores que llegaron a ese territorio en 1588. En estos se contabilizaron 700 warijíos y se anotaron datos sobre la organización económica, sociopolítica y religiosa de la tribu (Haro y Valdivia 1996, 24). También relatos recientes de algunos *yoris* aseguran que cuando colonizaron el territorio había indígenas desnudos o con taparrabos (Jesús Haro, 2016, entrevista).

Ignorados, inventados o descubiertos, ellos han estado ahí desde hace mucho; vieron llegar a los misioneros y sus soldados, a los gambusinos, a los ganaderos, a los que traían semillas, vieron llegar cientos y cientos de

familias por toda la región, tuvieron guerras y huyeron de sus terrenos; hermanos distanciados siguieron dos caminos que paulatinamente los dividieron, los de Chihuahua se entienden más con los tarahumaras, los de Sonora muchas veces han sido confundidos con los mayos (Aguilar 1993, 315)

Cuando hablamos de los warijíos tenemos que entender la historia. Es el caso de un grupo que en el siglo XVII van los españoles a su región y los masacran, entonces a partir de ahí el grupo pierde sus terrenos originales y se traen a una parte de ellos a Sinaloa a dos pueblos que hoy están muy cerca de una presa que ya se ha construido [...], se los traen aquí cerca justamente al río Mayo [...]. Los warijíos lo volvieron a reconstruir y se llamó Macarawi, el mismo nombre de la presa [...]; es pues un pueblo partido en dos. Algunos lograron escapar en el siglo XVII, o sea, no fueron agarrados todos, ni todos masacrados, las mismas crónicas de los jesuitas cuentan que algunos se escaparon [...]. Esa es una hipótesis, pues, digamos que la hipótesis se fortalece, que los warijíos llegan después a ocupar estas tierras que están en Sonora, pero al parecer, en las partes más lejanas de lo que actualmente es la región warijía de Sonora, que están pegadas a Chihuahua ya había warijíos anteriormente (Jesús Haro, 2016, entrevista).

Cuando había llegado el primer *yori*, don Bartolomé Salido de Exodar y otros que llegaron después, ya había indígenas que andaban con taparrabos. Algunos andaban desnudos, es decir, este dato está en la historia oral de los *yoris*, o sea, los *yoris* no llegaron a una tierra deshabitada llegaron y ya era gente warijía [la que estaba allí], o sea, no eran de otra etnia, sino que eran warijíos (Jesús Haro, 2016, entrevista).

Algunos académicos consideran que el territorio warijío representó una zona indígena muy importante por su diversidad biocultural. Sin embargo, con la llegada de los españoles, se convirtió en una zona de tráfico por la minería y de tránsito obligado. A partir de ese momento y hasta su descubrimiento tardío, los warijíos fueron invisibilizados (Alejandro Aguilar, 2016, entrevista).

En 1797 se inició el proceso de colonización del territorio warijío, facilitado por las autoridades de la Colonia (Haro y Valdivia 1996). A partir de ese momento, se explotó a esta tribu y muchos warijíos fueron obligados a trabajar como “peones encasillados” para los *yori* (Valdivia 1979; Haro y Valdivia 1996, 31). Diversos relatos indígenas dan cuenta de la instauración de un sistema que les explotaba y pauperizaba.

Primero no teníamos dónde sembrar porque todo era del *yori*. Cercaban todo y nosotros no teníamos cerco dónde sembrar. Ganábamos tres pesos trabajando y si no trabajábamos no comíamos [...]. Hasta que después luchamos contra los *yoris* y peleamos contra ellos (Julián Sazueta, 2016, entrevista).

Aquí en el monte sufriendo todo eso andábamos. Era poco lo que ganábamos, andábamos mal vestidos, mal comidos. Me acuerdo bien que así estábamos viviendo. Sembrábamos a medias y toda la cosecha se la llevaban los otros, a los que les debíamos, a los patrones, les pagábamos con maíz. Por eso nos hacían sembrar, porque nos quitaban el maíz los *yoris* (Buitimea y Valdivia 2007, 170).

Antes nosotros trabajábamos temprano, en esos tiempos los ricos nos daban cinco litros de maíz para que trabajáramos en los cercos de ellos. Había papás que tenían hijos grandecitos y también los llevaban a trabajar con ese rico. Entonces desde chamaquito ya nos empezaban a sacar la gota gorda para trabajar con el rico, porque no nos dejaban agarrar un pedacito de tierra y por eso solicitábamos. Pero hubo mucho problema porque los dueños del terreno no querían que tuviéramos hectáreas, pues ellos eran dueños de todo y a puro dedo decían: esto es mío (Manuel Valenzuela, 2016, entrevista).

En el caso warijío, todo este periodo de la siembra media y del porfirismo extendido, no dejaban hacer casas, sino que estabas trabajando con el dueño de ese rancho, que era dueño porque te lo había quitado a ti o a tu familia, la gente decía: andábamos semidesnudos, vivíamos en cuevas y si no trabajábamos con nadie no teníamos derecho a nada (Alejandro Aguilar, 2016, entrevista).

En 1975 llegó al territorio de los warijíos el canadiense Edmund Faubert y denunció ante el gobierno las condiciones paupérrimas en que vivían estos indígenas. Él incidió en el reconocimiento de esta tribu por parte del Estado mexicano (Jesús Haro, 2016, entrevista). No obstante, Haro destaca en una entrevista de 2016 que, en 1932, este pueblo ya había sido identificado por el biólogo norteamericano Howard Scott Gendry, en una de sus expediciones para estudiar los agaves.

En 1932 hubo un investigador norteamericano que ya había descubierto a los warijíos y había escrito sobre el río Mayo, llamado Howard Scott Gendry. Es un tipo famosísimo en el mundo de la botánica, se le considera el padre de los agaves. Él es la persona que estudió los agaves, y su estudio sobre el río Mayo hace que algunos personajes del campo de la biología lo consideren también como el padre de la selva baja caducifolia, que es el ecosistema más biodiverso del mundo entero, entonces él con su estudio constituyó un precedente muy importante del conocimiento de esta selva a nivel mundial (Jesús Haro, 2016, entrevista)

Llegó un personaje canadiense Edmund Faubert [...], en 1976, cuando estaba de presidente Luis Echeverría. En un momento dado de ese año él viene a la Isla del Tiburón a hacerle entrega a la tribu de los seris como un patrimonio de la tribu, y entonces, Faubert cuando se entera que viene el presidente de México aquí, se trae un grupo de warijíos y los echa a bailar ahí, es el momento en el que el mundo mexicano conoce a los warijíos [...]. Echeverría decreta ahí que se construya un centro coordinador indigenista y que comience el gobierno a trabajar con ellos, lo que él empieza a construir en San Fernando, al año siguiente es cuando llega Teresa Valdivia (Jesús Haro, 2016, entrevista).

Dentro de los rasgos de la tribu warijío destaca su carácter itinerante, presente hasta que se les reconoció como tribu a mediados de la década de los 70. Su nomadismo se explica, en parte, por la necesidad de protegerse en tiempos de la Colonia. Posteriormente, se agudizó por las condiciones de pobreza extrema y explotación a las que fueron sometidos por los *yoris*, factor al que se aunaron las características del territorio, que los obligaron a moverse de un lugar a otro en procura de alimento (Valdivia 2007).

Ese territorio semiárido, de altas temperaturas que pueden alcanzar hasta 55 °C y escasas lluvias, representaba su único espacio para sobrevivir. A pesar de estas condiciones extremas, los warijíos están estrechamente relacionados con su territorio, especialmente con el río Mayo que en su cosmovisión hace parte del mismo (Jerónimo Rodríguez, 2016, entrevista).

La flexibilidad y alegría forman parte del carácter warijío, así como una capacidad de resistencia que les permitió pervivir en las condiciones adversas del territorio y de la explotación, la pobreza extrema y exclusión impuesta por el *yori* (Alejandro Aguilar; Jesús Haro; Elizabeth Pettit; Ramón Martínez-Coria, 2016, entrevistas).

Como rasgos distintivos de la cultura warijío, yo diría que la flexibilidad y la alegría. Y es increíble, te vas a encontrar muchos escritos sobre los warijíos que dicen que son sobrios, taciturnos y tristes [...]; yo no he conocido un pueblo [como este] que esté todo el día jocoso, sacando risa de todo, te ponen motes, se ríen de todo. Quiero decir que todo lo hacen motivo de risa, o sea, es todo lo contrario lo que escribe la gente (Jesús Haro, 2016, entrevista).

Conocí a Cornelia Tejada Rodríguez, es la curandera de la zona de la Mesa Colorada, fue una de las primeras personas que conocí. Le pregunté a Cornelia: “¿Oye no te enojas?”, y me respondió: “No, esta emoción no sirve”. Los warijíos son los makurague, en su lengua; [para ellos] su felicidad o la conciencia de alegría de su existencia es lo que impacta su salud (Elizabeth Pettit, 2016, entrevista).

Los aspectos señalados en este acápite de muchas maneras, están presentes en el ejercicio de resistencia civil de los warijíos, como se evidenciará en el resto del capítulo.

Las resistencias de la tribu warijío

Desde el arribo de los españoles a su territorio, los warijíos han desplegado un ejercicio de resistencia indígena en distintas modalidades y con

diferentes alcances que les permitió sobreponerse a todas las violencias que se les impusieron (Alejandro Aguilar; Jesús Haro, 2016, entrevistas). Con este objetivo esta tribu empleó tres formas de lucha: resistencia con recurso a la violencia, resistencia pasiva y resistencia civil.

La resistencia con recurso a la violencia

Se registró a comienzos del siglo XVII, aunque sus características no están clarificadas del todo. Indígenas y algunos académicos explican que se debió a una necesidad extrema de defender la cultura warijía (Alejandro Aguilar, 2016, entrevista). Se dio durante un periodo de corta duración y sus acciones fueron esporádicas.

La resistencia violenta se hizo visible con la llegada de los misioneros jesuitas en 1613 y marcó el devenir de esta tribu. Tuvo un carácter de respuesta coyuntural, puntual y meramente defensiva a las amenazas de la evangelización (Alejandro Aguilar; Jesús Haro, 2016, entrevistas). El momento histórico se precisa en 1626, cuando arribó a Chínipas el sacerdote Giulio Pascuale S. J., quien fundó la misión de Nuestra Señora de los Varohíos; y en 1632, cuando indígenas guazapares y varohíos (warijíos), comandados por Cobamei, se rebelaron, quemaron la iglesia y asesinaron al padre Guilio y al sacerdote Manuel Martins, quien había llegado ese día al territorio (Haro y Valdivia 1996, 27; Alejandro Aguilar, 2016, entrevista).

En represalia, el gobierno envió una expedición que asesinó a 800 indígenas, entre guazapares y varohíos (Haro y Valdivia 1996, 27). Los que quedaron vivos se concentraron en Sinaloa y otros pocos se internaron en el monte (Haro y Valdivia 1996, 27). Esto generó la salida momentánea de los warijíos de su territorio hasta que, en 1652, volvieron a la Sierra. No obstante, existe un vacío sobre qué ocurrió con esta tribu entre 1767 y 1934 (Haro y Valdivia 1996, 30).

El caso warijío es muy peculiar porque son considerados como los más bárbaros por defender sus derechos culturales y territoriales. Son estigmatizados fuertemente, se resisten al dominio de los misioneros, matan a unos

misioneros en 1623 y eso les cuesta una terrible represión por parte de los españoles, quienes, según las crónicas, tomaron represalias, lo que generó un desplazamiento de la población warijía [...]. Algunos de ellos se quedan más del lado de lo que ahora es Chihuahua, mientras que otros, con el paso del tiempo, regresan al territorio Sonora (Alejandro Aguilar, 2016, entrevista).

Salvo este episodio de oposición con recurso a la violencia, no se encontró ninguno de la misma naturaleza en los pocos datos que se tienen de la tribu warijío. De igual manera, desde que este pueblo fue reconocido de forma tardía, a mediados de los 70, no se han registrado hechos de resistencia violenta (Alejandro Aguilar; Jesús Haro, 2016, entrevistas).

Resistencia pasiva

En la historia de la tribu warijía se identifican dos momentos en los que se expresó la resistencia pasiva. Como se ha afirmado anteriormente, esta oposición constituyó un modo generalizado de lucha por la supervivencia.

El primer momento de resistencia pasiva aconteció en la primera mitad del siglo XVII, cuando un grupo de warijíos huyó y se internó en la Sierra para protegerse de la represión del gobierno colonial. Los que se desplazaron regresaron a su territorio ancestral y se ocultaron allí. Recurrieron a internarse en la Sierra, ocultarse en cuevas y mantenerse itinerantes (Alejandro Aguilar; Jerónimo Rodríguez; Cristina Troyan; indígenas warijíos, 2016, entrevistas).

El caso del pueblo warijío yo lo veo muy distinto de otros porque más que resistir se escondió, ha estado escondido durante décadas o centurias, porque inclusive el gobierno y los mexicanos no sabían de ellos hasta hace muy poquito (Cristina Troyan, 2016, entrevista).

El segundo momento se registró a partir de la década de 1930, cuando los warijíos resistieron a la violencia estructural, al racismo y a la exclusión, viviendo como nómadas en los arroyos, las cuevas o a la intemperie. Las condiciones de explotación así lo impusieron, pues los *yoris* colonizaron y se

apropiaron de sus territorios ancestrales. En este contexto, los warijíos no se desplazaron, por el contrario, sobrevivieron en condiciones extremas hasta que fueron reconocidos por el Estado (Alejandro Aguilar, 2016, entrevista).

Algunos investigadores destacan el caso de grupos indígenas que han adoptado el “modelo de región de refugios” como mecanismo de supervivencia (Haro y Valdivia 1996, 14). Este modelo está definido por el aislamiento con respecto a la cultura nacional; la presencia de un territorio ecológicamente hostil y la existencia de una sociedad dual integrada por mestizos dominantes e indígenas subordinados (Aguirre 1967). La historia de la tribu warijío se encuadra en este modelo de refugio.

En algún momento y en cierta medida, el estar en regiones de refugio posibilitó la permanencia de los pueblos, pero a costa de debilitar sus formas de organización, de autoridad, de sistema de gobierno. Cuando entra la acción indigenista empiezan otros procesos (Alejandro Aguilar, 2016, entrevista).

La resistencia civil de los warijíos

A partir de la década de los 70, los warijíos ejercen una resistencia noviolenta que se mantiene hasta hoy. En este proceso identifiqué dos momentos: uno de lucha contra el Estado y los *yoris* por el reconocimiento de sus derechos sobre el territorio ancestral; y el otro de oposición al Estado y a los empresarios por la construcción de la represa Los Pilares.

La resistencia civil por el reconocimiento del territorio

Durante un largo periodo, que se inició a finales del siglo XVIII, los warijíos soportaron la exclusión, la explotación y el racismo (indígenas warijíos, 2016, entrevista), como parte de la violencia estructural impuesta con la colonización de su territorio (Valdivia 1979; Haro y Valdivia 1996). Un ejemplo de este momento histórico fue que, en 1797, la provincia de Sinaloa

le otorgó los predios Burapaco, Guajaray, Los Conejos y El Palmar a Bartolomé Salido de Exodar (Haro y Valdivia 1996, 31). Así refiere un líder warijío este episodio:

El terreno donde vivían [los warijíos] no estaba ocupado todavía. No habían yoris, no había rancherías, no medían la tierra tampoco, estaba libre. Cuando llegaron yoris empezaron a medir tierras y cada quien se hizo a su potrero. Y los primeros warijíos de más antes se fueron quedando en medio y no fueron capaces de decir: “yo también necesito un pedazo de terreno [...]” se fueron quedando atrás. Los que se posesionaron venían de Navojoa. Eso fue lo que me platicó mi abuelo (Haro y Valdivia 1996, 31-32).

Como producto de la colonización apoyada por el Estado, los *yoris* se apropiaron del territorio y mantuvieron a los warijíos en condiciones de extrema pobreza. Los indígenas vivían en cuevas y trabajaban para el mestizo en condiciones de explotación, dada la injusta remuneración que recibían por sus servicios. Algunos de ellos refieren que les pagaban su trabajo con botellas de maíz o con muy pocos pesos (indígenas warijíos, 2016, entrevista). La falta de reconocimiento estatal y su marginalidad favorecieron su explotación y agravaron sus condiciones de vida. Los miembros de esta tribu no tenían acceso a la educación, la salud o la justicia, ya que imperaba la ley del *yori* (Buitimea y Valdivia 2007). La cultura warijía se vio afectada:

Vivíamos como animales, creciendo los chamacos sin escuela, sin médico, sin nada. Bueno todo eso hacía falta, pero a nadie se le ocurría decir: “pues voy a poner en la escuela a mis hijos en el municipio de Quiriego o de Alamos”. Los yoris eran los que tenían juez, escuela y todo, pero tampoco decían: “vamos a traer la escuela aquí” (Buitimea y Valdivia 2007, 171).

Los yoris habían confinado a los warijíos entre medieros y siervos, lo cual había afectado su unidad [...], los terratenientes de algún modo constituían todo su mundo, todo su trabajo, toda su necesidad, vivían un proceso de desintegración cultural, al carecer de lo que Stefano Varese llamó un proyecto étnico (Aguilar 1993, 315).

Algunas autoridades indígenas, académicos y acompañantes de este pueblo se refieren a las condiciones que imponían los *yoris* y destacan aspectos de la resistencia de los warijíos a la violencia. Estos testimonios coinciden con la observación de Haro sobre un germen de resistencia presente en las luchas de los warijíos por dejar de ser peones encasillados.

Pues les pagaban con maíz, yo me acuerdo cuando mi papá traía cinco litros de maíz por trabajar todo el día. Nosotros éramos como unos cinco o seis chicos y no le alcanzaba, y teníamos que trabajar decía el *yori* pues estos cinco litros de maíz van a durar la semana. Así lo trataban los *yoris* primero (Fidencio Leyva, 2016, entrevista).

Hace más de 30 años que se fundó Mesa Colorada, la comunidad dice que: “Antes había muchas personas muy malas, antes no era pueblo, ellos sembraban y trabajaban”, pero Teresa Valdivia y Armando fueron los que ayudaron a convertirlo en un pueblo. Eran malos porque nos obligaban a trabajar pagándonos muy poco, por ejemplo, pagándonos a unos diez o cinco pesos (Jerónimo Rodríguez, 2016, entrevista).

José Zazueta fue el que empezó a organizarlos a ellos. El líder histórico que empezó a organizarlos. A partir de esa lucha empezaron a hacer presión, a empezar a escribir, a pedir [...], entonces pues había un germen de organización en el intento de los warijíos por dejar de ser peones encasillados de los *yoris* (Jesús Haro, 2016, entrevista).

La mayor expresión de resistencia civil en los warijíos se encuentra en el proceso de lucha para que el Estado reconociera su derecho al territorio. Investigadores como Alejandro Aguilar (2016, entrevista) identifican el inicio de esa resistencia con la toma de conciencia por parte de este pueblo. Dicha concientización fue producto de la extrema pobreza en que se encontraba esta tribu y de la influencia de las guerrillas que llegaron a sus territorios de manera intempestiva y fugaz.

A finales de los años 60, el malestar social era generalizado en varias partes del país por los movimientos estudiantiles y guerrilleros en todo el mundo,

esto despierta la conciencia de la juventud mexicana. Hay un movimiento guerrillero en Chihuahua (Liga Comunista 23 de Septiembre), tienen algunos operativos en Chihuahua y ellos tienen que huir a la región de los warijíos [...]. Los warijíos no tenían contacto con el resto del país, entonces lo que decían los guerrilleros les llamó la atención en cuanto a la lucha social. La guerrilla fue reprimida y mueren la mayoría de los guerrilleros. Fue un momento corto pero muy fructífero, porque a los warijíos les despierta la conciencia de defender los derechos (Alejandro Aguilar, 2016, entrevista).

Antes de que suceda todo esto, llegan a la región miembros de la guerrilla Liga Comunista 23 de Septiembre. Ellos contactan a los warijíos y les empiezan hablar de que tienen que luchar, de que no es justo que estén en esas condiciones de esclavos, ellos introducen el germen de la rebelión en los warijíos (Jesús Haro, 2016, entrevista).

Quienes lideraron esta campaña de resistencia civil y sus acompañantes destacan que fue un proceso propio de los warijíos (Valdivia 1992; Buitimea y Valdivia 2007). Orientaron y dinamizaron este ejercicio de resistencia: Cipriano Buitimea y José Zazueta. No obstante, José Ruelas, de Baviácora, había comenzado algunas acciones en procura de organizarse para la resistencia, motivado por el consejo de Edmund Faubert. Sin embargo, como era cantador de tuburi,³ se ausentaba con frecuencia hasta que terminó abandonando el proceso (Buitimea y Valdivia 2007). Buitimea, preocupado por dejar una memoria de este proceso, elaboró un relato que recogió la antropóloga Teresa Valdivia, acompañante fundamental de los warijíos en este primer momento de resistencia civil (Buitimea y Valdivia 2007).

La designación de estos líderes surgió de la comunidad y tomó en cuenta su experiencia. Cipriano Buitimea había participado años atrás en un proceso de reclamación de tierras junto a yaquis y campesinos, y su conocimiento se consideró importante para el proceso. Tanto Cipriano como José Zazueta orientaron a la tribu de manera consultiva y participativa,

3 El tuburi representa una tradición importante de la tribu warijío. Es la música que acompaña a la fiesta conocida como *tuburada*, relacionada con provocar la lluvia y la fertilidad. En ella se canta y se baila al compás de melodías interpretadas en arpa y violín (Valdivia 2007, 175, 176).

visitando casa por casa. Algunas veces dialogaron con warijíos que tenían miedo, con aquellos que no creían en la campaña de resistencia y con quienes habían integrado otro grupo para reclamar territorio (Buitimea y Valdivia 2007, 179).

Yo estaba un poquito más despierto porque me crié en el Valle, y allá miraba. Una vez también estuve luchando allá abajo. Éramos muchos, como ochenta, un grupo de campesinos pidiendo tierra. No más de los puros yaquis y mayos había 56 personas en un grupo, y como cien en otro (Buitimea y Valdivia 2007, 179).

Ellos no conocían como era eso, entonces me dijeron: “pues tú conoces, entonces a ti te vamos a poner adelante, nosotros te vamos a seguir y te vamos a apoyar, a ver en qué forma, pero tú vas a andar delante de nosotros”. Así me dijeron los compañeros y entonces acepté (Buitimea y Valdivia 2007, 180).

Yo con 16 gentes lo hicimos, nos pusimos de acuerdo. Está bien, estará mejor así porque en primer lugar vamos a hacer la lucha para conseguir escuelas, porque es cierto, dije yo, aquí es por falta de estudios, por eso estamos todos humildes (Buitimeta y Valdivia 2007, 181).

Esta resistencia respondió a la dureza de las condiciones de vida generadas por los *yoris*, las cuales representan una forma de violencia estructural que se expresa en exclusión y racismo. En 1978, cuando María Teresa Valdivia Dounce, con el apoyo de los maestros bilingües mayos realizó el censo, se encontró que 610 warijíos –para ese momento representaban el total de esta tribu– eran peones encasillados que servían a 14 familias *yoris*. Esto refleja la situación de explotación a la que eran sometidos los indígenas (Valdivia 1992, 241). Entonces, los warijíos decidieron organizarse para transformar esta realidad. Así lo relatan líderes e integrantes de esta tribu:

Los ricos no querían entregar las tierras, se ponían bravos. “Que no les damos” decían, cuando la tribu warijío los hizo ricos, porque nosotros éramos los únicos que trabajábamos. Ellos de donde, ni un solo poste no

son capaces de cortar, ni de poner un alambre tampoco, ni siquiera con su propia mano, más que puro mandar saben. Ellos decían: “este año vamos a sembrar”. Mentira, ellos nunca siembran, los que siembran son las gentes pobres [...] por eso cuando nosotros anduvimos en la lucha toda la gente caminó, todos se pusieron de acuerdo que sí, que si se hiciera, y todos estuvimos organizando la gente (Buitimea y Valdivia 2007, 173).

Las personas mayores cuentan que pelearon días y noches para obtener esas tierras ejidales. [La lucha] era pacífica, pero las personas mestizas la hacían violenta porque los amenazaban de diferentes formas (Jerónimo Rodríguez, 2016, entrevista).

Empieza un proceso de lucha por la tierra donde líderes como Cipriano Buitimea, están sacrificándose. Cipriano nos dijo: “Yo caminaba de noche porque si me encontraban de día ahí quedaba”. A finales de los 70, llegó Teresa Valdivia, que hizo los estudios antropológicos y su labor de acompañamiento para fortalecer las demandas del pueblo warijío. A principios de los años 80, se obtienen las tierras donde quedan los ejidos warijíos, no como comuneros sino como ejidatarios y en este periodo José Zazueta, que era gobernador dijo: “Ya tenemos tierras, vamos a pelear por la escuela, por créditos, por apoyo a nuestra comunidad”, porque lo que otros pueblos ya tenían reconocido desde la Revolución aquí no había sucedido hasta ese momento (Alejandro Aguilar, 2016, entrevista).

Esta resistencia tuvo un carácter noviolento aunque para los warijíos implicara soportar amenazas, persecuciones, agresiones y represión por parte de los *yoris* que ocupaban su territorio ancestral. Los *yoris* contaban con el poder económico, el social y con la justicia de entonces, que siempre se ponía de su parte (Buitimea y Valdivia 2007).

Cuando empezaron a hacer asambleas nos golpeaban a los dirigentes, a los que estaban al frente de toda la gente. Nos mandaban a los judiciales, [miembros de la Policía Judicial de Sonora] porque los que tienen dinero no quieren que la gente se engrunpara, [agrupara] ellos querían tenernos todo el tiempo trabajando porque ellos no trabajaban (Buitimea y Valdivia 2007, 174).

En ese tiempo los yoris nos trataban duro, nos echaban a los judiciales que compraban, lo golpeaban a uno. Nos amarraban y nos llevaban a la cárcel, pero como dice el dicho, que los que tienen hambre no tienen por qué rajarse (Buitimea y Valdivia 2007, 182).

Los ricos no querían que hiciéramos el grupo porque sabían que nosotros les íbamos a quitar sus tierras. Pero no por la fuerza [...]. Nosotros nunca luchamos por hacer el mal a nadie. Nosotros lo estábamos haciendo para nuestros hijos, porque éramos varios de la tribu que estábamos aquí (Buitimea y Valdivia 2007, 183).

Quienes lideraron el proceso manifestaron que no fue fácil unir a los warijíos en torno de la resistencia. Algunos tenían miedo y otros consideraron que podían hacerlo ellos mismos, dividiendo a la población. Buitimea y Zazueta persistieron en su ejercicio, caminando de día y noche, visitando casa por casa. Luego, cuando lograron el apoyo del Instituto Nacional Indigenista (INI), se incrementó la base social de su resistencia (Buitimea y Valdivia 2007).

Los métodos utilizados por los warijíos

Esta tribu utilizó métodos no violentos en el ejercicio de su resistencia. Algunos de ellos pueden ubicarse dentro de la tipología de los métodos de resistencia civil ofrecida por Sharp (2005). Otros pueden ser caracterizados como intervenciones en el ámbito de la resolución y transformación de conflictos.

Las *asambleas comunitarias* son métodos de resistencia civil utilizados por los warijíos en el marco de sus protestas y reclamos. Les permitieron decidir e iniciar el proceso de resistencia civil, designar a sus líderes u orientadores, crear el primer grupo de base para esta lucha y buscar alternativas y estrategias que la fortalecieran. Otra forma de resistencia a los yoris, fue *la desobediencia*, un método de no cooperación mediante el cual los warijíos no acataron las prohibiciones de reunirse y organizarse para reclamar su territorio.

En el ámbito de la resolución y transformación de conflictos, esta tribu utilizó la *incidencia ante funcionarios del Estado*, como el Instituto Nacional Indigenista (INI). Por ejemplo, María Teresa Valdivia –que era miembro de esta institución–, se convirtió en una de las principales colaboradoras de la resistencia warijío. Establecieron *alianzas estratégicas* con otras tribus, especialmente con yaquis y mayos. Los yaquis les ofrecieron territorio e incluso pusieron a su disposición un licenciado que les colaboraba (Buitimea y Valdivia 2007). Acudieron al *diálogo y la negociación* con organismos del Estado, por intermedio de *yoris* como Juan Feliz y warijíos como Pancho Flórez, este último había integrado otro grupo de reclamantes de un predio particular (Buitimea y Valdivia 2007).

Nos apoyó el gobierno y también recibimos ayudas de otras tribus, de las que ya estaban más estudiadas. Fuimos allí con los yaquis a dar parte. Tuvíamos ayuda también con la tribu mayo [...]. Cuando se ponían a platicar con nosotros, los yaquis nos decían que no nos dejáramos, que si acaso no querían entregar los terrenos, que ellos iban a ayudar en todo lo que nosotros fuéramos a necesitar aquí en la Sierra. Ellos nos apoyaron mucho, nos ayudaron (Buitimea y Valdivia 2007, 197).

Se destaca la relevancia de la intervención del Instituto Nacional Indigenista (INI) en la identificación de alternativas para resolver y transformar las causas que generaron la resistencia civil de los warijíos. Esta institución del Estado fungió como mediadora entre indígenas y *yoris*, procurando que las partes no recurrieran a la violencia física y buscando alternativas para llegar a acuerdos. El INI realizó una investigación con el objetivo de identificar la propiedad del territorio en disputa y si los warijíos eran originarios del mismo. De esta manera, este instituto fue veedor del proceso agrario (Valdivia 1992).

El principal logro alcanzado en este proceso de resistencia –que tuvo una duración de cuatro años–, fue la entrega a los warijíos de su territorio en calidad de ejido por parte del Estado (Alejandro Aguilar; Jesús Haro; indígenas warijíos, 2016, entrevistas). Aunque esos predios eran de propiedad estatal, las autoridades resolvieron comprárselos a los *yoris* que

accedieran a la venta y entregarlos a los warijíos, reconociendo que los habían trabajado por muchos años (Valdivia 1972). Con la entrega del territorio, comenzaron a registrarse cambios importantes para esta tribu: puesto de salud con un médico, escuelas, maestros y tierras para trabajar como propietarios (Buitimea y Valdivia 2007). Desde la mirada externa y a partir de un análisis en perspectiva de paz puede considerarse que esta experiencia mostró a los warijíos su poder para transformar la realidad y desarrollar capacidades para construir la paz. En este sentido, les enseñó la eficacia de los métodos pacíficos para dar fin a la prolongada explotación, negación y pauperización a que fueron sometidos por los *yoris*.

Cuando llegó la antropóloga Teresa Valdivia, que es la que le toca hacer los estudios antropológicos y la labor de acompañamiento para fortalecer las demandas que tenía el pueblo warijío por sus derechos territoriales, a principios de los años 80, obtienen las tierras y se crean los ejidos warijíos. [Los obtuvieron] ya no como comuneros sino como ejidatarios; a este periodo don José Zazueta, que era gobernador del pueblo en aquel tiempo, le llama “la cuenta nueva”. “A partir de aquí vamos para arriba otra vez” decía él, “ya tenemos tierras, vamos a pelear por la escuela, por créditos, por apoyo”, era un momento fundacional de lo que todos los pueblos ya tenían reconocidos desde la Revolución o la Independencia, aquí no había sucedido hasta ese momento (Alejandro Aguilar, 2016, entrevista).

Tres décadas después vendrían nuevos y serios desafíos para los warijíos. De un lado, la presencia del narcotráfico; y del otro, la construcción de la represa Los Pilares que adelanta el gobierno junto a empresarios del estado de Sonora (información suministrada durante el trabajo de campo, Sonora, mayo y junio de 2016).

Cuando son dueños de la tierra su relación con el fenómeno del narcotráfico cambia, porque esto ya se estaba generando también de todas maneras, entonces los narcos en concreto les dicen: “Ahora voy a sembrar en tus tierras y tú me vas ayudar quieras o no”, esto tiene que ver con dónde hay condiciones, dónde hay agua, dónde hay posibilidades. Y, por otro lado, los warijíos tienen que reaprender a cómo organizarse, cómo trabajar en

ejidos, cómo atender problemas de crédito, cuándo tienen problemas de sequía y de dificultad para sembrar, cosechar, vender, etc., Es un problema estructural en todo el país por lo demás, entonces la esperanza que ellos tenían de desarrollo al tener la tierra no se logró como lo esperaban (Alejandro Aguilar, 2016, entrevista).

Según información obtenida durante el trabajo de campo realizado en Sonora en 2016, el narcotráfico ha generado un impacto directo sobre la autonomía y la cultura de esta tribu. Ha afectado a los jóvenes por la drogadicción y por la generación de violencia.

La resistencia civil contra el proyecto Bicentenario-Represa Los Pilares

En la historia reciente, los warijíos han practicado la resistencia civil contra el Estado y las iniciativas económicas privadas, como un ejercicio de defensa de sus derechos sobre el territorio, los recursos naturales y muy especialmente del río Mayo, que es parte de su cultura y cosmovisión. Además, para proteger su pervivencia y fortalecer su autonomía. Toda su resistencia se ha desarrollado en estrecha relación con su cultura warijía y en respuesta a sus necesidades esenciales, ya comentadas (Jesús Haro; indígenas warijíos, 2016, entrevistas).

Esta resistencia se ha hecho visible en su oposición al megaproyecto Bicentenario-Represa Los Pilares, aprobado en 2009 y puesto en movimiento con su construcción en 2011. En la puesta en marcha de esta megaobra no se tomaron en cuenta los requisitos exigidos por la ley para el desarrollo de este tipo de obras y, de hecho, no se realizó la consulta previa a los warijíos, directamente afectados por el megaproyecto (Eugenio Loquivo; Fidencio Leyva, 2016, entrevistas).

El gobierno no nos consultó nada, no más llegaron ahí, ni permiso pidieron cuando entraron a trabajar en el territorio de nosotros, no pidieron nada. Por eso no los queremos tampoco, porque muchos compañeros dicen que no están a gusto por la presa. Primero estaban muy a gusto porque no oían decir nada de eso (Eugenio Loquivo, 2016, entrevista).

El gobierno actual del estado [de Sonora] o el gobierno que estaba no nos han escuchado. Hemos estado platicando ancestralmente. Al gobierno que pasó nosotros le decíamos: “Necesitamos conocer el proyecto, de qué tamaño es, cómo nos va a beneficiar; pero necesitamos que vengan aquí a La Ramada para conocerlo”. Nos decían: “bueno, lo traemos”, y nunca venían, nunca vinieron y nunca nos consultaron, nunca nos tomaron en cuenta a nosotros siendo que nosotros somos los afectados (Fidencio Leyva, 2016, entrevista).

El megaproyecto Bicentenario-Represa Los Pilares surgió en la década del 90 por la iniciativa de usuarios del Distrito de Riego 038 del río Mayo. Se estima que este distrito integra 11 000 productores agrícolas, quienes no son propietarios del territorio sino arrendatarios. Según información obtenida de la Red Kaweruma en 2017,⁴ diversas razones se esgrimieron para la construcción de esta obra: ampliar la superficie de riego con la finalidad de implantar segundos cultivos, generar energía hidroeléctrica y la prevención de inundaciones en las poblaciones aledañas. En algunos pronunciamientos públicos, la Red Kaweruma mencionó que intereses mineros pueden estar presentes en la decisión de construir la represa, dado que algunos proyectos de esta naturaleza no fueron aprobados en esta zona por carecer de agua.

Según datos suministrados por la Red Kaweruma en 2017, se estima que esta represa tiene capacidad para almacenar 450 millones de metros cúbicos, y que su valor es de 1553 millones de pesos. En el río Mayo se asienta otra obra hidráulica: El Mocúzari. La Represa Los Pilares constituiría la segunda construcción de este tipo en ese curso fluvial (Jesús Haro, 2016, entrevista).

En las tierras bajas de la cuenca del río Mayo ya existe la presa Mocúzari que es de los años 50. Fue construida para la administración de las aguas en las tierras bajas, que son tierras del pueblo mayo en la desembocadura

⁴ La Red Kaweruma es un grupo de apoyo a las comunidades del río Mayo, especialmente a la tribu warijía y su campaña de resistencia contra la Represa Los Pilares. Está integrado por el Colegio de Sonora, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, el Foro para el Desarrollo Sustentable, el Centro de Investigaciones Antropológicas, la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica y la Red Mexicana de Estudios sobre Poblaciones Indígenas.

del río en el Pacífico; estas son tierras importantes para el riego [...]. Esta segunda presa incrementa la vulnerabilidad en la cuenca del río. Todos sabemos que las presas son una tecnología que no es, digamos, la más adecuada de ninguna manera; las presas matan a los ríos, contaminan; y el aprovechamiento de las aguas en esta cuenca no tendría que pasar por una cosa así, hay otras formas en las que se puede resolver lo que se pretende (Ramón Martínez-Coria, 2016, entrevista).

Los warijíos y sus acompañantes han denunciado el impacto negativo que tendrá la represa Los Pilares. La cortina de la presa se elevará a una altura de 78 metros y su puesta en funcionamiento inundará una parte del territorio warijío. Las construcciones de este megaproyecto se levantarán sobre 832 petrograbados y otros sitios sagrados de la tribu. La cultura warijía será afectada dado que en los territorios que se inundarán están sus muertos, su historia, sus caminos y sus plantas. Por lo tanto, el riesgo de desplazamiento de su población se incrementará (Jesús Haro; Elizabeth Pettit, 2016, entrevistas). Para algunos estas situaciones provocadas por la represa representan un ecocidio de la zona y el etnocidio de los pueblos y comunidades asentadas sobre la cuenca del río Mayo. Los warijíos consideran esta megaobra como una amenaza, una problemática que requiere una urgente solución; y así su capacidad de resistencia se dinamizó nuevamente.

Desde que nos entregaron el territorio no habíamos tenido ningún problema tan fuerte hasta hoy. De 2010 y 2011 para acá hemos estado con un problema –conflicto– en el territorio del ejido Burapaco, con una presa que está cerca de San Bernardo, que es la presa Pilares Bicentenario que le dicen. Esa presa que están haciendo, tiene aproximadamente una altura de 1,65 metros que abarca al pueblo de nosotros, pueblos y terrenos de nosotros (Fidencio Leyva, 2016, entrevista).

Entonces la presa es una gran amenaza, y es estar desplazados, no solo desplazados físicamente. Es estar desplazados culturalmente, de identidad, de economía, de salud, es una gran amenaza que pueden hacer hasta extinguir una población [...]; los están desplazando y van a inundar sus tierras donde tienen sus cementerios, donde tienen el cultivo de sus hierbas medicinales,

las historias de sus caminos y sus vínculos entre las comunidades, todo va a cambiar, todo el aspecto de fauna y flora, todo el aspecto que es la raíz misma de su existencia y la identidad de su tribu (Elizabeth Pettit, 2016, entrevista).

La población warijía tiene un alto grado de vulnerabilidad, no nada más en términos de condiciones de pobreza y de aislamiento en la que viven, sino que tienen una demografía demasiado reducida, de tal forma que un desplazamiento forzado y el despojo de las tierras que tienen apenas desde 1982, como posesión de propiedad, técnicamente, los borraría del mapa y estaríamos ante un etnocidio (Ramón Martínez-Coria, 2016, entrevista).

En la actualidad, como ha asegurado la Red Kaweruma en pronunciamientos públicos hechos en 2017 esta “presa Pilares ha alcanzado un 68 % de desarrollo, aunque ha suspendido labores en varias oportunidades, al parecer por insuficiencia de recursos económicos”. Según información obtenida en el trabajo de campo realizado en Sonora en 2016, otra situación que ha sido destacada en la construcción de esta obra es que a la empresa encargada se le asocia con casos de corrupción.

Es una empresa que se llama Canoras, eso lo sabemos hace año, tiene antecedentes de otros megaproyectos, antecedentes de no hacer las cosas legalmente, antecedentes, podríamos decir, de mafia; [la empresa] está controlada por dos familias en el fondo mafiosas mexicanas. Y bueno ellos, los políticos y los empresarios, pues andan a una, porque los gobernadores sacan una buena tajada también de cada proyecto que aprueban (información suministrada durante el trabajo de campo, Sonora, mayo y junio de 2016).

La empresa se llama constructora Canoras es una empresa que ya ha sido conocida por sus fraudes, es una empresa que anteriormente le han retirado contratos justamente por demostrarle actos de corruptela, es una empresa que todo el mundo sabe que el verdadero dueño es un hombre poderosísimo de México que ya fue gobernador de Sonora y que dirige prácticamente los destinos del partido [...],⁵ Mario Fabio Beltrones. Es

5 Partido Revolucionario Institucional (PRI).

una empresa que de manera totalmente ilegal obtuvo la licitación antes de hacer cualquier tipo de consulta con los warijíos, es decir, la licitación la hacen primero, la otorgan y después andan averiguando permisos de la gente para hacer la obra, todo al revés. Es la principal, pero no es la única, son varias empresas (información suministrada en trabajo de campo, Sonora, mayo y junio de 2016).

Para una mayor comprensión del contexto de esta megaobra, es necesario destacar que los *yori* afectados por la represa Los Pilares han vendido en su totalidad sus predios. Por el contrario, según información obtenida de la Red Kaweruma en 2017, los warijíos, que representan el 80 % de los afectados, han mantenido su oposición y se han negado a vender el territorio.

Los métodos de resistencia noviolenta

En su ejercicio de resistencia contra la represa Los Pilares, los warijíos emplean diversos métodos noviolentos. Como hicieron en el pasado, cuando reclamaron el reconocimiento de su territorio, utilizan los métodos propios de la resistencia civil y los combinan con otros del ámbito de resolución y transformación de conflictos. En este proceso otro elemento a destacar es que también se apoyan en métodos propios de su cultura para resistir sin violencia.

Dentro de los métodos propios de la resistencia civil se registran: *los de protesta y persuasión*, como las asambleas comunitarias y las comunicaciones en medios y foros. En estos escenarios visibilizaron el conflicto, sus efectos negativos y su postura de resistencia frente al mismo. Se agrega a los anteriores los métodos de *incidencia ante organismos internacionales*. Al respecto, en 2017, viajaron a Chihuahua para reunirse con la relatora especial para asuntos indígenas de la ONU (Jesús Haro, 2017, entrevista). También, el método de *no colaboración económica*, que ha consistido en negarse a vender sus predios a quienes apoyan y financian la Represa Los Pilares (información suministrada por la Red Kaweruma en 2017).

En cuanto a *los métodos de resolución y transformación de conflictos*, los warijíos han acudido al diálogo y la negociación con autoridades del Estado. Por ejemplo, lograron un acuerdo para que el Estado indemnizara a los afectados con la entrega de 500 hectáreas. Hasta ahora solo se han resarcido 114 hectáreas, lo que demuestra el incumplimiento de lo pactado. De igual manera, se acordó con las autoridades la creación de un fideicomiso por 11 millones de pesos, destinados al apoyo de proyectos productivos de los warijíos y tampoco se cumplió.

Los warijíos han acudido también a *métodos jurídicos* y cuentan con un asesor legal con el que han acudido a las *vías legales*, aunque sin ningún resultado favorable. Otro método utilizado ha sido *establecer alianzas estratégicas* con la academia, organizaciones de la sociedad civil de Europa y América, y con otras tribus como los yaquis y los mayos. Los alcances de estas alianzas se reflejan en la conformación de la Red Kaweruma, la participación en diversos foros regionales e internacionales y el apoyo financiero para algunos proyectos (información suministrada por la Red Kaweruma en 2017).

La semana pasada fuimos ahí y estuvimos platicando. El primer escrito que le puse yo, solicitando platicar con la gobernadora para que nos entienda. Explicando, platicando, claramente la situación de lo que estamos viviendo, porque es que mire, aquí vino el secretario de gobierno del Palacio, cómo va a ser posible que todavía sigan pues con ese acuerdo falso, que la gente de la comunidad afectada directamente ni siquiera sabía y nosotros estamos todavía con ese sentido de que la gente no está convencida de negociar su terreno (Fidencio Leyva, 2016, entrevista).

Muchísima gente que se ha enterado del problema, tenemos una gran red no solamente nacional. Esto es básicamente latinoamericano, pero también hay en Europa, y pues son apoyos que tenemos para no sentirnos tan solos, es gente que en un momento dado hasta nos ha dado dinero, hemos hecho colectas, por ejemplo, para pagar abogados, cosas de esas, y sí hemos conseguido apoyo de ese tipo (Jesús Haro, 2016, entrevista).

En cuanto a los métodos propios de la cultura, han realizado *presentaciones culturales* en diversos escenarios, afirmando la identidad warijía frente a

otras culturas, comunidades o colectivos sociales. La tribu también participó en el “Concurso Saberes del Monte”, organizado por Jesús Armado Haro del Colegio de Sonora y la Red Kaweruma. Este concurso pretendió establecer un diálogo entre ciencias biológicas y saberes ancestrales. Tuvo como propósito la protección y el desarrollo del patrimonio biocultural de la tribu warijío. A través de estas actividades se identificaron 250 plantas sobre el río Mayo y se propiciaron diversos espacios de diálogo de saberes (Jesús Haro, 2017, entrevista). La *peregrinación por el río Mayo*, realizada en 2017, posibilitó durante tres días la visita a sitios históricos y arqueológicos. Además, se compartieron leyendas, tradiciones y se presentaron danzas con cantos de tuburi.

Ahorita estamos diciendo lo que nosotros somos, el territorio es de nosotros, porque ancestralmente ahí están nuestros padres, nuestras madres (que en paz descansen) en nuestro terreno, nuestros abuelos ahí están viviendo, por eso nuestro panteón es importante, nosotros cuidamos que nadie pueda venir a invadir ese terreno, que nadie lo pueda venir a dejarlo debajo del agua porque nosotros año con año estamos, estamos velándoles a ellos [...]. Lo importante que tiene el pueblo warijío es su territorio, cuidar el territorio y los derechos ambientales, los recursos naturales y árboles silvestres, frutales, plantas medicinales que siempre las hemos tratado ancestralmente con nuestros padres, nuestros abuelos (Fidencio Leyva, 2016, entrevista).

En su ejercicio de resistencia civil los warijíos han padecido hechos violentos perpetrados contra sus autoridades y la división de algunas comunidades promovida desde sectores no indígenas (Jerónimo Rodríguez, 2016, entrevista).

A mí me tocó defender a don José Romero de San Bernardo, ya que estaban utilizado a la seguridad pública para atacarlo, fui y dije: “Buenos días, a qué se debe esta visita por qué llegan tan violentos”. Las mujeres, como son más organizadas, se opusieron. A mí me regañaron [las autoridades] y me dijeron: “Tú quién eres”, y yo le dije: “Ustedes son los que están haciendo mal aquí y ni siquiera tienen vergüenza, yo creo que ustedes son importantes y no deberían andar amenazando o atacando a personas inocentes [...]”. [Todo]

porque don José no quería firmar ningún contrato con Guillermo Padrés y [para ellos] don José tenía que firmar un acuerdo o un convenio relacionado con la presa (Jerónimo Rodríguez, 2016, entrevista).

Esas personas que andan haciendo eso no son personas indígenas, son personas mestizas, por eso ellos se aprovechan, porque saben un poco de la política y saben moverse de aquí para allá. Por ahí se escucha que hay como 12 millones de pesos y el presidente Omar Salas, dijo que era para las personas que ustedes decidan, pero las autoridades de la comunidad dicen que eso es a cambio de que autoricemos la presa. La autoridad anda diciendo que son personas pegadas al gobierno y que solo buscan la manera de amenazar al pueblo (Jerónimo Rodríguez, 2016, entrevista).

Resistencia civil y asimetría de poder

La asimetría de poder entre los warijíos, el Estado y los empresarios es abismal. Este contexto asimétrico ha puesto a prueba la capacidad de resistencia de la tribu y ha visibilizado su ejercicio de resistencia noviolenta. Los warijíos, desconocidos en México durante tanto tiempo, sometidos a formas feudales de explotación hasta la década del 70, afectados por violencias estructurales extremas como la pobreza y todas las carencias que ella trae consigo, han resistido de manera férrea y persistente a la represa Los Pilares, a sus auspiciadores empresariales y estatales, contando con pocos recursos y condiciones desfavorables.

Es pertinente preguntarse en este aparte: ¿cuáles son las condiciones actuales de esta experiencia de resistencia? ¿Hay condiciones para superar las asimetrías estructurales de poder?

Sin desconocer lo valioso de esta resistencia, es necesario destacar los factores que inciden de forma negativa en su ejercicio: los poderes políticos y económicos que enfrenta la lucha de los warijíos; la fragilidad de sus condiciones de vida, generadas por su tardío reconocimiento; la explotación histórica a la que se les sometió y la pobreza que les negó oportunidades básicas y esenciales. Estos factores han afectado sus estructuras

organizativas, al impedirles un ejercicio de autonomía real, contar con comunidades y líderes más preparados y la fragmentación de su base social. Se agregan a los anteriores, el fallecimiento reciente de sus principales líderes: Cipriano Buitimea y José Zazueta; y su reducida población, estimada en 2000 indígenas. De igual manera, el narcotráfico presente en su territorio y la migración de la población indígena, que pueden generar los factores mencionados y la misma represa. Otro factor que impide un mayor alcance de esta resistencia noviolenta son las estructuras políticas y sociales racistas contra los indígenas.

La debilidad principal de ellos pues es esta falta de estructura, pero también la miseria. Esa sería la principal, es una miseria realmente fuertísima, es decir, si al menos tuvieran para comer todo el año, pero no, hay meses en que no hay qué comer. Hemos tenido que llevarles alimentos, eso sucedió el año pasado porque no llovió (Cristina Troyan, 2016, entrevista).

En 2012, efectivamente, se organizaron, hubo una organización, porque si no se hubieran organizado nosotros no estaríamos aquí. Había dos o tres personajes que lideraban pues todo el proceso, pero lastimosamente uno de ellos se murió, luego el magnate, dijéramos que es como el curandero o rezandero también murió en el mismo momento. Así que eso pues supuso un punto flaco para ellos porque perdieron a las principales personas que aglutinaban y que dialogaban también con nosotros en ese momento. Eso fue un bajón (Cristina Troyan, 2016, entrevista).

La cultura warijío está en una situación de vulnerabilidad extrema, por las condiciones de pobreza y de aislamiento, y a partir de factores importantes como la fuerte migración, cuando la gente busca trabajo y oportunidades de vida fuera de su región o porque existen también poderes fácticos en el entorno, sobre todo hacia el norte de la zona donde operan los carteles de las drogas, entonces una de las opciones de algunos de los jóvenes o gente de edad económicamente activa es subirse a la Sierra a meterse en esa vaina, entonces, esta situación de los warijíos también es desconocida en general por la sociedad mexicana, casi nadie conoce de su existencia (Ramón Martínez-Coria, 2016, entrevista).

En los años 80 los warijíos tuvieron la fortaleza de aguantar golpes y encarcelamientos. Una resistencia pasiva por la lucha por la tierra, porque precisamente las autoridades municipales de Álamos son las mismas familias que se han ido apoderando de estos territorios. En general, son familias blancas, de abolengo; la aristocracia de Álamos se establece con el dominio de los warijíos y de los mayos; más de los warijíos que los mayos, porque los mayos son una población más grande. En el caso warijío, con el problema de la presa, muchos de los jóvenes, de los posibles líderes, no fueron conscientes de la lucha por la tierra, no tienen esa conciencia, no tienen la conciencia de la escasez que vivieron sus padres y abuelos y eso los ha desmovilizado de alguna manera (Alejandro Aguilar, 2016, entrevista).

Desde los años 30, México fue ejemplo por sus políticas indigenistas, muy paternalistas pero era más o menos lo que se podía plantear en esa época, pero empieza el desplazamiento de los antropólogos, de los académicos que estaban detrás de este proyecto y, por supuesto, nunca se le dio mayor peso a las decisiones o a las propuestas de las propias autoridades indígenas, se les utiliza como cobertura de alguna forma pero realmente no se sigue la línea que ellos marcan (Alejandro Aguilar, 2016, entrevista).

En un juicio rápido y severo, todos los programas indigenistas de hoy en día, estatales y federales, atentan en contra de las culturas indígenas. El programa de vivienda está en contra de toda lógica regional, de toda historia arquitectónica; el programa de salud menosprecia los recursos propios de cada localidad y no les da realmente una alternativa. En Sonora, el servicio educativo ha estado controlado por maestros de la lengua y cultura mayo (que están presentes en el resto de los pueblos), lo cual implica un desplazamiento lingüístico y cultural, ni siquiera en la cultura y lengua mayo, sino en el español. Por ejemplo, en los últimos años, se ha apostado mucho a la transferencia de recursos, presupuestos que están orientados al desarrollo de los pueblos indígenas se utilizan para fortalecer la red de carreteras, la infraestructura de carreteras, que en realidad es un agente más de invasión, de contaminación y de alteración de las vidas en las comunidades. Los distintos programas orientados a los pueblos indígenas en realidad están llevando a los pueblos a su integración como sociedades occidentales, sin respeto a sus formas tradicionales (Alejandro Aguilar, 2016, entrevista).

La situación de su resistencia está diluida con las tareas y la violencia estructural. El racismo estructural y los prejuicios amenaza toda forma [que tienen los warijíos] de integrarse en el resto de la sociedad (Elizabeth Pettit, 2016, entrevista).

A pesar de este panorama adverso, existen factores que inciden de forma positiva en el ejercicio de resistencia civil warijía contra la represa Los Pilares: la capacidad y voluntad que se sobrepone a la fragilidad y dificultad que vive el pueblo; las alianzas estratégicas con la académica y otras organizaciones no gubernamentales como la Red Kaweruma, las tribus yaqui y mayo; y la combinación de métodos y la utilización de métodos propios, que reflejan la búsqueda de alternativas para dar más alcances a su campaña de resistencia.

De los warijíos lo que me atrapó fue realmente saber que van quedando muy pocos, que es un pueblo que ha resistido muchos años, pero que, a partir de ahora con la agresión de afuera de las empresas, de las multinacionales, de todo lo que está sucediendo con la presa, pienso que no tienen suficiente organización interna como para resistir a diferencia de otros [grupos] como el yaqui [...]. A diferencia de otros indígenas de México, los warijíos son muy poquitos, llegan a 2000 (Cristina Troyan, 2016, entrevista).

Es evidente que, en el segundo momento de resistencia civil de los warijíos, el de oposición a la represa Los Pilares, parecen ser más los factores de impacto negativo, que los positivos. Ello ha incidido para que no existan en la actualidad condiciones que permitan a los warijíos superar la asimetría estructural de poder y dar más proyección a su resistencia. No obstante, dado el carácter inacabado y perfectible de la resistencia civil, en el futuro podrían darse condiciones más favorables a su lucha. Así ocurrió en la década del 80, cuando con la resistencia no violenta se logró el reconocimiento del territorio ancestral. Por ende, no puede descartarse que la situación se remonte a favor de los warijíos.

Conclusiones

- La historia de los warijíos enseña que las dinámicas y los alcances de la resistencia noviolenta no son lineales. En un momento histórico puede ocurrir que quienes resisten cuenten con mejores condiciones para alcanzar mayores logros y en otros momentos las condiciones no sean tan favorables.
- El primer momento de la resistencia noviolenta warijía confirma que esta modalidad de resistencia puede superar asimetrías de poder. Muchas veces conduce a la resolución y transformación de los conflictos desde el diálogo y la negociación.
- La resistencia warijía evidencia lo importante que es la combinación de métodos de resistencia civil, especialmente para tribus con poblaciones pequeñas.
- Se destaca también la importancia del método de establecer alianzas estratégicas, dado que posibilita un mayor impacto de las campañas de resistencia civil generadas y dinamizadas por minorías marginadas y con frágiles estructuras organizativas. Las alianzas ayudan a difundir el objetivo de lucha, a conectarse con posibles y nuevos aliados y a ejercer presión sobre el adversario.
- Los warijíos hacen visible la capacidad de resistencia de los pueblos indígenas, independientemente de las condiciones con que cuenten. En el caso de esta tribu se constató la incidencia dentro de la misma, de factores propios como sus culturas, especialmente sus cosmovisiones e identidad dentro de la misma, y de su historia.
- Esta experiencia evidenció el peso de la violencia cultural del racismo en las condiciones de las tribus y en su ejercicio de resistencia. Más aún cuando se articula con las violencias que representan los megaproyectos generados desde los Estado y en alianza con empresarios.
- Los warijíos confirman que la resistencia civil es el mecanismo de lucha más asequible para minorías excluidas, ya que hace visible el conflicto, desarrolla las capacidades de resistencia en las personas, fortalece la construcción de la paz y cuenta con la potencialidad para superar asimetrías estructurales.

Referencias

- Aguirre, Gonzalo. 1967. *Regiones de refugio: el desarrollo de la comunidad y el proceso dominical en Mestizo América*. México D.F.: Instituto Nacional Indigenista.
- Aguilar, Alejandro. 1993. “Los guarijíos: un mundo distante”. En *Memoria del XVI Simposio de Historia y Antropología de Sonora*, vol. 2. Sonora: Instituto de Investigaciones Históricas / UNISON.
- Buitimea, Cipriano, y María Valdivia. 2007. “Como una huella pintada”. En *Entre Yoris y Guarijíos. Crónicas sobre el quehacer antropológico* editado por María Valdivia, 161-216. México D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Dudouet, Veronique. 2012. “Resistencia noviolenta en las asimetrías de poder”. Traducción de David Barrero. En *Berghof Handbook for Conflict Transformation*, editado por Beatrix Austin, Martina Fischer y Hans J. Giessmann, 1-32. Berlin: Berghof Foundation.
- Haro, Jesús, y Teresa Valdivia. 1996. “Notas para la reconstrucción histórica de la región guarijía en Sonora”. *Revista de Estudios Sociales* 7 (12): 11-35. <https://www.researchgate.net>
- Hernández, Esperanza. 2004. *Resistencia civil artesana de paz: experiencias indígenas, afrodescendientes y campesinas*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
- 2009. “Resistencias para la paz en Colombia. Experiencias indígenas, afrodescendientes y campesinas”. *Revista paz y conflictos*, 2:117-135. <https://www.redalyc.org>
- 2017. “Resistencia civil y empoderamiento pacifista”. *PAZSOS: Revista Paz Sostenible* 1 (2): 5-19. <http://www.pazsostenible.org>
- Hernández, Esperanza, y Marcela Salazar. 1999. *Con la Esperanza Intacta: experiencias comunitarias de resistencia civil noviolenta*. Bogotá: Arte y Folito.
- López, Mario. 2009. *Política sin violencia. La noviolencia como humanización de la política*. Bogotá: Corporación Universitaria Minuto de Dios. <https://www.ugr.es>
- 2016. “La resistencia civil examinada: de Thoreau a Chenoweth”. *Polis*, 43: 1-17. doi: 10.4000/polis.11508.

- Randle, Michael. 1998. *Resistencia civil: la ciudadanía ante las arbitrariedades de los gobiernos*. Barcelona: Paidós Ibérica.
- Sharp, Gene. 2005. “Desarrollando una alternativa realista contra la guerra y otras violencias”. En *Acción política no-violenta, una opción para Colombia*, compilado por Freddy Cante y Luisa Ortiz, 183-210. Bogotá: Centro Editorial Universidad del Rosario.
- Valdivia, María. 1979. “Resumen etnográfico. Los guarijíos de Sonora”. *México Indígena* 30.
- 1992. “Importancia de ser originario en la ley federal de la Reforma Agraria: El caso Guarijío”. *Crítica Jurídica*, 11: 125-132.
- 2007. *Entre Yoris y Guarijíos. Crónicas sobre el quehacer antropológico*. México D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.

Capítulo 3

Dos momentos de resistencia noviolenta en Brasil: acción de los movimientos sociales durante la dictadura militar y el golpe a Dilma Rousseff

Mario Ramírez-Orozco

Esta parte de la investigación se realizó en Brasil con la intención de compilar experiencias de movimientos de resistencia con características de no-violencia; pero dada la gran variedad de movimientos sociales que actuaron y actúan, junto a la magnitud del país, se concentró en lugares de tres estados diferentes, reconocidos por la importancia de sus luchas sociales a través de movimientos sociales pacíficos: São Paulo (SP), Curitiba (PR) y Joinville (SC), Brasil. Para alcanzar una visión general y documentada se realizaron entrevistas semiestructuradas individuales y colectivas, en los meses de noviembre y diciembre de 2016, con militantes de base, líderes sociales e investigadores sociales, en las que el eje transversal fue la búsqueda de los vínculos de los entrevistados como actores, testigos o estudiosos de causas o movimientos sociales propulsores de resistencias que se podrían enmarcar dentro de los principios de la noviolencia. Además, se tuvieron en cuenta documentos referentes a los temas tratados facilitados por las organizaciones visitadas. También se delimitó su alcance a dos periodos históricos concretos: 1964-1985 contra la dictadura militar y 2013-2016 contra el “golpe institucional” a la presidenta Dilma Rousseff.

Antecedentes para la necesidad de resistencias

La historia social de Brasil se caracteriza por la persistencia de confrontaciones con matices raciales, étnicos, económicos, políticos y religiosos; las que

en su mayoría fueron y son reprimidas de manera violenta con el uso de la fuerza legal o ilegal. En particular y por un largo periodo, inclusive bajo gobiernos llamados democráticos, por la imposición de la doctrina del “enemigo interno”, se persiguió a ciudadanos “invisibles” o militantes “clandestinos” quienes se pudieron caracterizar como anti sistémicos o de izquierda cercanos a grupos o movimientos con posibilidades reales de transformación radical de las estructuras de dominación social y política imperantes en el país por su accionar político o de trabajo por las comunidades. Además, la ola represiva se extendió a miles de familiares o a simpatizantes con vínculos accidentales con estos movimientos a lo que se adiciona el grado extremo de desigualdad social, manifiesta en la hiperconcentración de la propiedad sobre los medios de producción y el nepotismo a ultranza, con el que las élites nacionales, regionales y locales administran el país, como un feudo privado, desde salida de la monarquía portuguesa (Vergara 2004, 42).

En gran parte del siglo XX y lo que va del XXI los conflictos sociales del Brasil se agudizaron por el choque abierto entre dos sectores: por un lado, la minoritaria clase alta dueña de casi todos los medios de producción industriales, aliada a los terratenientes propietarios de la producción agropecuaria intensiva. Y, por el otro, una parte considerable de población empobrecida, ocupante de tierras ociosas, tanto en el sector rural como en el sector urbano. Pero, también, por la pugna entre grandes capitales dedicados a la especulación financiera en contra de sectores medios, profesionales prósperos, empleados públicos, cada día en condiciones de pauperización, y la casi totalidad de pequeños productores e industriales medios y artesanos a los que el gran capital quebró a través de la implantación de un modelo económico de apertura ilimitada, la competencia desleal o la importación improductiva.

En este ambiente general de disputa predomina el uso de dos tipos de violencia: una física que desplaza por la fuerza a los colonos y pequeños propietarios y otra jurídica que les quita legalidad sobre las tierras y pequeños negocios y empresas quebradas y en las que han trabajado por largo tiempo e invertido su limitado patrimonio. Con la particularidad de que estos enfrentamientos se dan entre diversas capas sociales y, por eso, no pueden considerarse como “conflictos puros”, de una clase contra otra (Ribeiro 2015, 167). En ellos se entremezclan varias reivindicaciones, ya que los afectados

son de forma simultánea parte integral de otros diversos conflictos causantes de confrontaciones que se reúnen por la emergencia de sectores de clase que se oponen a las pretensiones de sus propias bases sociales.

Esta situación empeoró en el sector agrario desde mediados del siglo XX, por la generación de violencia terrateniente contra los campesinos y colonos que con sus asentamientos ilegales traspasaron las fronteras agrícolas del país (Waiselfuiz 2015, 40). La consecuencia directa fue la migración forzada y constante del campo hacia las grandes ciudades de una gran masa de población, fenómeno que se acrecentó por los fallidos procesos de reforma agraria y de una consecuente reforma urbana. Por esta razón las periferias urbanas se fueron ocupando de manera ilegal bajo la esperanza de mejorar sus condiciones de vida.¹

En Brasil, existe el derecho constitucional de una vivienda digna, que a pesar del gran impulso social promovido por los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) (2003-2015), sigue siendo insuficiente. En el inmediato futuro, es de prever, se limitarán al máximo estos logros con la controvertida llegada en 2016, por *impeachment*, de Michel Temer a la presidencia del país, figura conservadora quien promovió una política de reducción del gasto público a través de una enmienda constitucional denominada PEC 241, aprobada por el Senado apenas una semana después de su ascensión al cargo. Con dicha enmienda, Temer congeló por veinte años los gastos públicos, con especial énfasis con lo establecido por la constitución de 1988 en las áreas de salud, vivienda y educación.² Esta situación empeoró las expectativas de transformación social con el triunfo electoral de Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal (PSL) a la Presidencia. Bolsonaro asumió el cargo el 1 de enero de 2019 y, de acuerdo con sus promesas electorales, impone de manera gradual la “mano dura” a los sectores más progresistas, entre los que incluye a la mayoría de movimientos populares que reivindican los derechos sociales.

1 En 2011 el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, órgano del gobierno federal declaró que en ese momento 11,4 millones de personas, vivía en favelas (tugurios), sin servicios públicos básicos, en su mayoría en lugares de geografía de alto riesgo y proclive a derrumbes e inundaciones (IBGE 2011).

2 El 31 de agosto de 2016, la presidenta Dilma Rousseff del PT fue destituida por *impeachment* en una coalición de fuerzas conservadoras, movimientos políticos seguidores de grupos evangélicos y medios de comunicación aliados a los grupos económicos que controlan gran parte de la economía del país. La primera medida política de Temer fue congelar y reducir el gasto público por veinte años, sobre todo en los subsidios de salud, educación y vivienda, los que favorecerían de manera mayoritaria a la base social del PT y sus aliados.

El contexto social

En el ámbito nacional brasileño son varios los factores que influyen en la reafirmación de un modelo extremo de marginación social. Entre ellos, hay que señalar el factor racial que fue y sigue siendo predominante al concentrar la totalidad del poder económico y político en una élite blanca y urbana. También se ha dado un tipo de “autoexclusión” generada por la naturalización de formas de sumisión laboral bajo condiciones de esclavitud moderna y la informalidad en los empleos, con la sobrevivencia del día y alejados de cualquier regulación estatal. En grado significativo, está el efecto de la migración forzada de campesinos y colonos que quedaron sin tierra, por la violencia de los terratenientes o por su forzamiento a “desocupar” terrenos para la implementación de grandes obras de infraestructura y de carreteras en el sector rural (Waiselfuiz 2015, 40).

En el caso racial, con predominio en ciudades como Río o São Paulo, la distancia económica generó la pauperización de amplios sectores blancos y mulatos que no pudieron sostener la competencia económica de un grupo muy pequeño de poderosos. Esta población se mantuvo en un limbo que les permitió presumir de un elitismo social de clase media, aunque sin un respaldo económico suficiente, además, en convivencia poco conflictiva con las élites económicas locales y regionales en donde el factor racial disminuye sus exigencias de pureza.

Por ello, se ha dado el equívoco de presentar la independencia de Brasil del imperio portugués en el siglo XIX como parte de un hecho no violento y que durante el siglo XX la población brasileña convivía siempre en “armonía étnica” (Catalina Zambrano, 2016, entrevista),³ o en “democracia racial”, con la que se ilusionaron algunas élites intelectuales como Gilberto Freyre. Por el contrario, como lo recuerda el ex ministro de Educación Darcy Ribeiro, más bien los antecedentes sociales y los hechos políticos demuestran que la historia de Brasil desde la llegada portuguesa en el año 1500 hasta nuestros días, en el siglo XXI, está marcada por todo tipo de violencias (Ribeiro 2015, 225).

3 Doctoranda de la USP y del CEBRAP; fue entrevistada por el autor el 23 de noviembre de 2016.

Unas veces, se trató de violencias coyunturales y visibles como la represión de los levantamientos comuneros y de la rebelión de los esclavos, de los Palmares, la lucha de los Cabanos y de los Canudos, y, entre otras, violencias estructurales y no visibilizadas como la segregación racial y la desigualdad extrema. Consecuencia de esa situación, Darcy Ribeiro indica que la confrontación entre los grupos sociales es una constante que se manifiesta de manera violenta:

El pueblo brasileño pagó históricamente un precio terriblemente alto en las luchas más cruentas que ha registrado la historia, sin conseguir salir, a través de ellas, de la situación de dependencia y opresión en la que viven y pelean [...]. Contrario a las afirmaciones de la historiografía oficial, nunca faltó aquí, hasta se excedió, el llamado a la violencia por parte de la clase dominante como arma fundamental para la construcción de la historia. Lo que faltó siempre fue espacio para los movimientos sociales capaces de promover su reversión (Ribeiro 2015, 25).

Es más, un marco de conflicto poblacional se repite durante todo el siglo XX, en el que el desplazamiento forzado para buscar el sustento y alejar los peligros con el rompimiento de las fronteras agrícolas, distantes del largo litoral del país, es una constante. Además de las consecuencias de los esfuerzos por cambiar un Estado opresor, representante de élites locales y regionales, que tuvo el alto costo de la desaparición física de millones personas indígenas, negros y emigrantes pobres. Y donde, por desgracia, los insistentes esfuerzos revolucionarios o de democratización fueron apaciguados con represión y guerras cruentas, lejos de cualquier consideración humana.

Todo esto, bajo un contexto de mito modernizador que propiciaría el ingreso de Brasil a la red del mercado mundial, el que sirvió de fondo para justificar la salida del atraso socioeconómico a través de un proceso sistemático de “purificación” social. Por ello, las matanzas de quienes se levantaban contra los abusos sociales y económicos fueron tan frecuentes y asumidas por gran parte del país de manera casi insensible. Esto ocurrió pues se convenció a gran parte de la población, en particular a la urbana, incluidos grandes sectores migrantes de mulatos y blancos pobres y campesinos del nordeste que llegaban por millones a las ciudades del sur del país,

de que todo se hacía para cumplir una demanda civilizatoria que ayudaría al progreso de un Brasil moderno y desarrollado.

Se produjo entonces, en las primeras décadas del siglo XX, un clima de tensión constaste en el que el factor racial pasó a un plano, sino secundario, por lo menos no predominante, en el que la condición de clase empezó a ser problemática en la medida en la que aparecen grupos políticos de carácter anarquista y socialista, dirigidos en su mayoría por emigrantes italianos, españoles y alemanes de primera generación, que trataron de formar cuadros políticos con la intención de asumir una comprensión política de la explotación y producir una respuesta organizada que confrontara el poder de caciques civiles llamados “tenientes” y “coroneles” (Samis 2012). Sin embargo, la mayoría de estos intentos fueron silenciados de manera violenta y, por desgracia, en no pocas ocasiones por la propia delación de militantes y simpatizantes que confiaban con ello en ingresar al pequeño núcleo de poderosos.

En el caso particular de la población negra, desde principios de la década de los años sesenta, en palabras de Darcy Ribeiro, ocurre un factor de empoderamiento, en parte producto del efecto emancipatorio de la población negra de los Estados Unidos de América, que favorece la presencia de algunos afrobrasileños en cargos administrativo y político en la esfera nacional, gracias a sus méritos educativos (Ribeiro 2015, 224).⁴ A estos logros se suma la ascensión social y prestigio generados por el éxito deportivo y artístico de un número importante de mulatos y negros.

Sin embargo, las implicaciones se limitaron a la práctica de una “ideología de asimilación” cuya principal característica fue el logro de la “blanquización” al negro por dentro, de manera que asumiera una actitud conciliatoria en la que reconociera que su precaria situación se debía a su propia incapacidad y no como producto de las agudas diferencias sociales o a la segregación racial imperante (Ribeiro 2015, 226).

Otro factor a tener en cuenta, por el volumen de la población implicada, es el producido por la migración campo-ciudad dominante en las

⁴ Según el censo poblacional de 2010 (IBGE sf), la mayoría de la población brasileña, 50,7% de un total de 190 732 694 personas, es de raza negra o mestiza. Donde la mayoría de la población negra se concentra en el norte y noreste del país, y es la que tiene la mayor tasa de analfabetismo entre el grupo de mayores de 15 años (entre el 24,7% y el 27,1%).

décadas de los años cincuenta y sesenta, en el que la segregación espacial llevó a cientos de familias a “integrarse” en las ciudades desde sus periferias, en condiciones precarias de vivienda y servicios públicos. Con el tiempo, esta situación generó una identidad de autoexclusión que se alejó de las posibilidades de ascensión social y se quedó en el letargo de una confrontación marginal y poco eficaz contra los centros de poder establecidos.

De manera simultánea, en un transcurso de altibajos, los grupos sociales obreros y campesinos tomaron conciencia de la necesidad de acabar con la atomización de sus luchas, motivo por el que se agrupan sin tener como fundamento una determinada ideología sino, más bien, por la reivindicación puntual de derechos económicos y por la protesta atomizada contra la represión imperante. En el sector rural la organización de las luchas se aglutina en torno a ligas de campesinos o sindicatos agrarios y en los nacientes polos de desarrollo urbano con la conformación de alianzas obreras y de empleados de la rama pública (Ribeiro 2015, 361).

En ambos casos, sobre todo desde finales de los años cincuenta, los movimientos se expresan desde una convergencia social opositora que se manifiesta de manera abierta con la vinculación de sectores de la Iglesia popular y la influencia de organizaciones políticas de izquierda, socialistas, comunistas y anarcosindicalistas, quienes influyeron en su rápido y creciente desarrollo. Por esta razón, el orden estatal y administrativo, a través de las fuerzas armadas legales, los servicios secretos y las fuerzas armadas ilegales manifiestan su temor a un levantamiento insurgente mayor, primero, a través de la represión masiva, pero ante el desgaste por su imagen negativa, se da un giro hacia la represión selectiva de líderes y la criminalización legal de las luchas sociales.

Las resistencias contra la dictadura militar 1964-1985

El golpe cívico-militar en contra del presidente constitucional João Goulart sucedió el día 31 de marzo de 1964, pero su génesis parte de una serie de sucesos que crisparon el ambiente político y social desde que asumió el cargo presidencial en agosto de 1961. Por un lado, la presión internacional

debilitó la economía del Brasil al punto de generar un consenso entre las élites económicas y, por el otro, el temor, infundado por los medios de comunicación, de que Jango⁵ quería llevar el país a ser una nueva Cuba en Suramérica, algo que sus principales detractores atribuían a sus recientes visitas a países de la órbita comunista, incluyendo a China. Pero, además, por el intento de disminuir el poder presidencial y establecer un sistema parlamentarista, aunque bajo el control de un congreso de amplia mayoría conservadora y terrateniente.

Así, el golpe de Estado de 1964 tuvo como principal excusa evitar la casi segura reelección de Jango para las elecciones programadas para mediados del año 1965 (Gorender 2014, 17).⁶ El gobierno golpista cívico-militar fue encomendado por las élites económicas y políticas al Comando Militar Supremo, conformado por el Ejército, la Marina y la Aeronáutica, quien designó al general Humberto de Alencar Castelo Branco como presidente, que ejerció el cargo hasta 1967 cuando luego de rencillas internas y acomodamientos económicos de la cúpula militar, con el beneplácito de la élite económica y, por precaución, para evitar la concentración de poder

5 El presidente João Goulart fue llamado por la mayoría de los brasileños con el apelativo cariñoso de *Jango* [ˈɐ̃ɐ̃ŋ ɡo], debido a su gran carisma e ideas renovadoras muy cercanas a los pobres y distante del discurso de la élite tradicional que mantenía el poder hegemónico del país.

6 Es importante decir que previa la llegada a la presidencia de João Goulart, según el profesor Geraldo Augusto Pinto, hay: “Un periodo en el que la alianza de la burguesía industrial nacional con los trabajadores, dentro de aquello que se podría llamar, entre comillas, muchas comillas, como populismo. Aunque es un término que se utiliza para un periodo bastante largo para poder cobijar políticas nacionales que no serían comparables, por ejemplo, con el populismo mexicano o argentino. Es decir, que hasta el golpe militar (1964) Brasil tuvo una alianza entre la burguesía nacional capitalista y urbana, no solo industrial sino también comercial, con el trabajador urbano. Yo diría que el campesino quedó fuera, porque el propio sector exportador primario no entraba a gusto en ese acuerdo. Y la SLT consolidó las leyes de trabajo que rigen el trabajo formalmente contratado con “carteira” de trabajo firmada desde la década de los cuarenta, las que nunca cobijaron a los trabajadores del campo. Por eso, una de las cosas que Goulart pretendió fue la extensión de esas garantías a los trabajadores rurales, lo que se evitó con el golpe de Estado. Solo hasta 1973 se tendrá una legislación del trabajo, más o menos coincidente, con la consolidación de las leyes del trabajo para el campo, a través del llamado “estatuto del trabajador rural”. El proletariado del campo, extremadamente explotado, que como anota Francisco de Oliveira, sociólogo de la Universidade de São Paulo (USP), quien demuestra que el nacimiento del capital industrial brasileño dependió de una alta tasa de explotación del trabajo en el campo. O sea, una remuneración debajo del valor de la fuerza del trabajo de los trabajadores campesinos para subsidiar la acumulación de una base industrial y de servicios en las ciudades. En realidad Oliveira, haciendo un paréntesis, acabó copiando esa tesis de Rui Mauro Marini quien hizo un análisis mucho más amplio sobre América Latina” (Geraldo Pinto, 2016, entrevista).

en el dictador, impuso como nuevo presidente al general Artur da Costa e Silva (1967-1969).

La mencionada situación se repitió por tres periodos quinquenales con la alternancia como jefes de gobierno del general Emílio Garrastazu Médici (1969-1974), luego el general Ernesto Geisel (1974-1979) y que concluye con el general João Figueiredo (1979-1985). Este periodo significó el desenlace formal del régimen dictatorial, en parte por el agotamiento de su modelo represivo –insostenible en el plano internacional por la relevancia de los derechos humanos– y su inviabilidad como emergente económico para el mercado capitalista. Este cambio se ratificó con la elección democrática en 1985 de Tancredo Neves, ex primer ministro de Jango, pero quien murió en extrañas circunstancias el mismo día de su posesión y quien tuvo que ser reemplazado por su vicepresidente, el poeta José Sarney (1985-1990).

Una particularidad del régimen dictatorial es que promocionó la idea de un “milagro económico”, con la implementación del Plan de Acción Económica del Gobierno (PAEG) por el que el país alcanzó un alto crecimiento de la economía hasta un 6,7 %. Lo que no divulgó fueron las razones para lograrlo: “La disminución salarial, la dependencia de inversiones de capital internacional, y la brutal concentración de la renta per cápita del país, rigurosa hasta para los mercados capitalistas” (Valverde Da Silva 2016, 99). Así se explica, en cierto modo, que la reiterada publicidad positiva de estas medidas, sustentadas en indicadores de organismos internacionales, sirvieran para que amplios sectores, reacios en sus comienzos a la dictadura militar, terminaran dando un apoyo tácito al régimen. Así mismo, en el plano internacional la no personificación de un solo dictador, como en el caso de Chile, y los positivos resultados económicos hicieron que el rechazo a la precaria situación política de los brasileños fuera minimizado.

A pesar de ello, desde diversos sectores sociales, el malestar se manifestó de manera prudente. Unas veces a través de precarios grupos sociales anti dictadura, organizados en los barrios populares y centros secundarios y universitarios de ciudades como São Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre y el Distrito Federal de Brasilia; mientras en el campo fueron importantes los levantamientos de comunidades en el nordeste y en el centro del país. Aunque su resistencia fue intermitente y

reprimida con rapidez (Tadeú Nasser, 2016, entrevista), a largo plazo cumplieron su cometido de generar conciencia a través de pequeñas organizaciones bajo el paraguas de sectores progresistas dentro de la muy dividida Iglesia católica y los nacientes partidos que trataban de agruparse en torno a la restauración democrática.

Pese a que fueron diversos los grupos que enfrentaron a la dictadura, es de crucial importancia el papel que cumplieron los movimientos campesinos, los que a pesar de las violencias que los afectaron de manera severa se aglutinaron en torno a la *Via Camponesa*, una organización que, como lo cuenta el profesor Geraldo Augusto Pinto, al igual que: “la mayor parte de los movimientos sociales en la historia del Brasil coincidieron en la cuestión de no utilizar armas, de no configurar guerrillas” (Geraldo Pinto, 2016, entrevista).⁷ En un marco en el que la represión de grupos armados por los terratenientes sobre el campo aumentaba en la medida en la que crecían las ocupaciones de tierras y la ampliación de la frontera agrícola hacia las zonas más alejadas de las zonas costeras y, cada vez, más adentro de la selva amazónica, los pantanales y las extensas sábanas a lo largo de todo el oriente del país.

Al respecto, ya existía el antecedente en los años sesentas: bajo el acoso de la dictadura militar y los grupos paramilitares creados por los terratenientes, las llamadas ligas campesinas, asentadas en su mayoría en el nordeste del país, fueron parte integral del desarrollo del luego poderoso Movimiento Rural de Trabajadores Sin Tierra (MST):⁸

Un movimiento que lucha desde los años ochenta, por ser un periodo muy importante en el contexto político brasileño, en el momento en el que la dictadura entró en colapso, y se luchaba por una libertad democrática, por el derecho al voto. Pero, sobre todo, para salir de ese periodo de persecución política impuesto por los gobiernos militares. Y, además, porque fue un periodo de crisis económica, con prácticamente crecimiento cero (Geraldo Pinto, 2016, entrevista).

7 Investigador de los movimientos sociales contra el golpe del Programa de Posgrado en Tecnología y Sociedad de la Universidad Tecnológica Federal de Paraná; fue entrevistado por el autor el 26 de noviembre de 2016.

8 En portugués, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

La crisis económica se relaciona con la decisión del gremio rural agroexportador de aprovechar la violencia para llevar a la masa campesina a una situación de constante acoso y pérdida de derechos; pero también, porque de forma paulatina reducía la utilización de mano de obra del trabajador rural por el aumento sustancial de técnicas modernas para la producción extensiva.

Además, como se ha dicho, los campesinos y colonos se mantuvieron bajo precarias condiciones de trabajo no reglamentadas y su movilización estuvo relativamente muy al margen de las luchas urbanas. Pero en los años ochenta, sin finalizar todavía la dictadura, eso se replantea y el MST asume junto con el llamado “Novo sindicalismo”, no cooptado directamente por el gobierno, un sindicalismo libre que en abierta oposición al gobierno. Es un sindicalismo de base, clasista. Inclusive también con una tendencia que asume la lucha entre capital y trabajo desde la conciencia crítica de clase. Es así como de forma gradual:

El MST adquiere una fuerza muy grande, una visibilidad dentro de los movimientos sociales. Y, por eso, se estructuran internamente. Para ello, construyen escuelas para la formación política de sus cuadros, en la que participan intelectuales no sólo brasileños, sino que también de otros países. Inclusive crea su propio centro de educación superior, la Universidad Florestán Fernandes (Geraldo Pinto, 2016, entrevista).

Un logro que hay que destacar porque se apartó de las experiencias campesinas armadas que se agruparon en movimientos guerrilleros como la Guerrilla de Araguaia, organizada en el nordeste del país por el Partido Comunista del Brasil, o las experiencias urbanas del Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8) y el de la Ação Libertadora Nacional (ALN), que en el contexto brasileño tuvieron un significado distante del trabajo de masas, pues según lo explica la líder estudiantil Gabriela Caramuru (2016, entrevista): “La guerrilla era una organización de vanguardia y nunca hubo una participación popular con fuerza suficiente para hacer algo más contundente”.⁹ Más aún, salvo en las grandes ciudades, por la

⁹ Militante de OS, representante en los Consejos Superiores de Universidad Federal de Paraná; fue entrevistada por el autor el 26 de noviembre de 2016.

precariedad de las comunicaciones de la época en gran parte de las zonas campesinas no se tuvo conocimiento del levantamiento en armas de estas organizaciones en lugares relativamente cercanos a ellas.

Así mismo, bajo la dictadura aparecen numerosos sindicatos, en principio limitados a las reivindicaciones salariales, formados en tornos a los grandes polos de producción industrial de São Paulo, Río de Janeiro o Belo Horizonte, quienes a pesar de la violencia instaurada desde los organismos secretos de la dictadura siempre se alienaron, incluso sin conciencia de ello, desde los principios de los movimientos de resistencia no violenta. Invitaban a sus asociados a evitar las acciones violentas y participar en marchas de manera organizada y evitando las frecuentes provocaciones de agentes de organismos estatales (Luiz Texeira, 2016, entrevista).¹⁰

Los estudiosos interpretan este lapso como una época paradójica en la medida en que, mientras la dictadura más los agredía, el trabajador ganaba en combatividad y organización. Fue justamente bajo la represión cuando se desarrolló un verdadero movimiento sindical de carácter clasista y combativo que se puso al frente de reivindicaciones salariales, pero además desde lo político exigió libertades democráticas para el país (María Bridi, 2016, entrevista).¹¹ En este momento fue posible elegir a nuevos líderes, en particular cuando se retiró la cláusula de los gobiernos militares que impedía la organización legal de los sindicatos, la que mantenía bajo la figura de interventores del Estado. En definitiva:

Así surgen futuros líderes sindicales que venían del PT, muchos del ABC de São Paulo, entre ellos del sindicato metalúrgico como Lula,¹² como uno de los grandes protagonistas. Algo que ayudó a debilitar al régimen militar con la presión por elecciones *Diréticas já*, que se complementaban con la exigencia de las libertades políticas y de expresión. Ahí el MST vino

10 Miembro del Movimiento de moradias periferia Curitiba; fue entrevistado por el autor el 23 de noviembre de 2016.

11 Investigadora del sindicato de la Universidade Federal do Paraná (UFPR); fue entrevistada el 27 de noviembre de 2016.

12 Presidente constitucional del Brasil, elegido en elecciones directas, durante dos periodos entre el 2003-2010.

en ese paquete, dentro de ese proceso, representando la insatisfacción de los campesinos, paralelo a la existencia de la Vía campesina, por lo que se incrementó su poder de acción (Geraldo Pinto, 2016, entrevista).

También hay que reconocer que el MST sirvió de inspiración para otros movimientos sociales como el Movimento de los Trabalhadores Sem Teto (Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, MTST), el Movimento de los Atingidos por Barragens (Movimiento de los Afectados por las Represas, MAB) que, aunque es anterior, toma fuerza gracias al MST. Pero también hay que subrayar su influencia entre los movimientos indígenas quienes, durante toda la dictadura, y luego durante los gobiernos elegidos democráticamente, según el profesor Pinto:

Realizan ocupaciones y marchas pues han sido muy acosados y asediados en su territorio por las grandes empresas mineras o madereras, por los dueños de las grandes haciendas exportadoras de granos y de caña de azúcar. Inclusive, han sido asediados por la construcción de obras públicas, como la construcción de centrales hidroeléctricas, vea el caso de la hidroeléctrica de Belo Monte en el río Xingú (Geraldo Pinto, entrevista, 2016).

Por lo que conviene subrayar que el movimiento indígena por no recurrir a la violencia ha tenido un protagonismo que no fue ni es visualizado por los medios de comunicación masivos ni por las redes sociales. Es más, se les asume como pueblos que habitan en la premodernidad y que su aspiración por una vida mejor se debe satisfacer desde la caridad o la benevolencia de las ONG internacionales. Sin embargo, asegura el profesor Pinto:

Es necesario entender sus particularidades culturales pues el movimiento indígena está organizado, y es fuerte. Se puede decir que es un movimiento de resistencia no violenta, a pesar de que ellos porten armas. Porque obviamente es parte de la cultura de ellos y resuelven sus asuntos de esa forma. Más nunca he sabido de alguien que haya recibido un flechazo o haber sido herido por o atacado por indígenas. Claro que ellos se pintan y se arman para la guerra, y yo los caracterizaría como un movimiento no violento,

pues ellos saben los que están haciendo. Tienen rituales guerreros, pero más relacionados con la caza. Algo más, como una fuerza simbólica (Geraldo Pinto, 2016, entrevista).

Otra forma de resistencia no violenta que enfrentó la dictadura, actuando como un régimen de apartheid, es la de los afrodescendientes brasileños. Aunque en su mayoría se rebelaron contra los militares de manera pacífica, su dirigencia en sus comienzos planteó las posibilidades de la lucha armada, pero al poco tiempo fue consciente de las consecuencias negativas de impulsar una resistencia armada para sectores débiles, dispersos y mal organizados. Por ello, sobre todo sus líderes femeninas, prefieren el exilio al identificar su lucha desde una perspectiva racial. Su accionar, como lo resalta la investigadora Catalina Zambrano (2016, entrevista): “Ha sido pacífico, lo que yo estudio no tenía ese componente violento y no podemos decir que haya sido un compromiso que no fuera de alto riesgo”. Esto se puede explicar por la adopción de un activismo político, sobre todo por parte de las mujeres negras brasileñas, que reivindicaba la necesidad de enfrentar la violencia desde las ideas no violentas de Martín Luther King y del reggae que se transformaban al llegar al Brasil por vías distintas, como la puesta en escena de algunas obras teatrales y de la música popular *brasileira* (MPB).

De ahí, que algunos partieran a unirse como asesores políticos y culturales en las luchas de independencia de algunos países africanos y, en palabras de la investigadora Catalina Zambrano:

Como había tanta represión muchos se fueron para Angola. Por ejemplo, Teresa Santos y Abdías do Nascimento son unos que transitan internacionalmente y Lélia Gonzales es otra que va. En la tercera conferencia mundial sobre las mujeres de la ONU en Nairobi, en Kenia, en la delegación de Brasil estaba Lélia y lo que hizo fue entrevistarse con las líderes negras de la lucha en África. Y también estuvo Benedita da Silva que después ocupó un alto cargo político en Río de Janeiro (Catalina Zambrano, 2016, entrevista).

Mientras que, en el plano nacional, en las luchas contra la discriminación y la marginación, los afrodescendientes en Brasil evitaron la confrontación violenta o simplemente, por las características culturales de

sumisión, nunca planearon asumir las formas violentas. Catalina Zambrano (2016, entrevista) es clara en su opinión: “No. Ellos, los movimientos negros, parten de que no son violentos”. Sobre todo, al observar el contexto, hay que reconocer que durante la dictadura no se podía separar una represión que fuera exclusiva o dirigida hacia los negros; por supuesto que ellos por ser la mayoría de población en zonas de alta conflictividad sufrieron mucho, pero su baja politización los mantenía al margen de la represión selectiva que la dictadura dirigió contra la oposición organizada.

Es por esto que casi la totalidad de los afrodescendientes que murieron, desaparecieron o fueron detenidos durante la dictadura, lo fueron por razones de su militancia y no por su condición racial. Como cuenta la investigadora Zambrano (2016, entrevista): “La dictadura tuvo un discurso de democracia racial, que manifestaba que aquí en Brasil no había discriminación, no había racismo. Entonces si no había discriminación, los negros no podían reivindicar nada. Luego sí hubo una clandestinidad, digamos del activismo”. Esta clandestinidad se manifestó en el protagonismo de muchos de sus líderes, en particular de las mujeres negras y su valiente oposición a través de los valores beligerantes de la cultura negra y su acceso a la academia.

A manera de evidencia, hay que destacar el aporte del movimiento afrobrasileño a la causa negra mundial, tal y como lo señaló Ángela Davis, profesora emérita de la Universidad de California y activista del movimiento feminista negro de EE.UU., en su sexta visita a Brasil, cuando reconoció la importancia del trabajo de Léila Gonzales al decir que la brasileña:

Fue pionera al encontrar las conexiones entre raza, clase y género cuando aún se hablaba muy poco de eso. Ella hablaba de esto entre los negros e indígenas en la lucha por sus derechos. Esa es una de las lecciones que los Estados Unidos de América pueden aprender del feminismo negro de aquí (Alves 2017, en línea).

Así mismo, advierte la profesora Zambrano el papel relevante que cumplió el Teatro Experimental do Negro (TEN), al perfilarse por varias décadas

como el principal vocero de las luchas contra el racismo, desde actividades no violentas en escenarios sociales que van más allá del teatro, como lo ratifica su director por muchos años, Abdias Nascimento (2004, 221):

Era urgente una acción simultánea, dentro y fuera del teatro, con vistas al cambio de mentalidad y del comportamiento de los artistas, autores, directores y empresarios; pero también entre líderes y responsables de la formación de conciencias y de opinión pública. Sobre todo, porque se necesitaba la articulación de acciones en favor de la colectividad afro-brasileña discriminada en el mercado de trabajo, vivienda, acceso a la educación y la salud, remuneración, en fin, en todos los aspectos de la vida en la sociedad.

Esta labor se mantuvo de manera persistente desde las tablas en giras por todo Brasil y muchas partes del mundo, con la divulgación de obras de teatro en cine y televisión, con la participación protagónica negra en grandes obras del teatro universal, en donde se resalta el valor de la resistencia del arte y la concientización política de los afrodescendientes, alejada de cualquier actitud vengativa y enfocada en la convivencia pacífica interracial.

Otro de los movimientos de resistencia en el Brasil que durante la dictadura o en la transición democrática fue de gran apoyo para millones de personas fueron las llamadas Comunidades Eclesiais de Base (CEB), trascendentales por su relevancia histórica y política para un país que, como Brasil, tiene el mayor número de católicos en todo el mundo. Una feligresía, en su mayoría muy pobre, decidió apoyar de manera directa la lucha pacífica que promulgaron obispos como Dom Hélder Câmara y Dom Evaristo Arns en contra de los abusos que la dictadura hiciera de los valores católicos para justificarse y por la defensa de los sectores más perseguidos. En ese orden, la teóloga Maria Clara Lucchetti Bingermer (sf, 1) afirma que:

Hubo un tiempo en el que no había necesidad de explicar el significado de la sigla CEB. Pues era parte del imaginario y del vocabulario de muchos cristianos católicos, sobre todo en Brasil. Suscitaba entusiasmos y esperanzas, movilizaba deseos y energías, así como perplejidades e interrogantes.

Por esta razón, las CEB fueron, durante su desarrollo, siempre abiertas al debate siguiendo el principio de respeto a la diversidad de opinión, tanto que se prefirió trabajar sin una dirección formal que las aglutinara, y se prefirió la opción de coordinarse a través de un “comité ampliado” que se notaba de acuerdo a las circunstancias. Entre sus características principales, la profesora Maria Clara Lucchetti Bingemer (sf, 2) señala las siguientes: una territorialidad que no dependía del lugar de culto sino de que “la iglesia fuera a la gente”; la gestión de unos círculos bíblicos encargados de evangelizar con lecturas que incluían la visión de un Cristo obrero, más cercano a los pobres; la implementación de consejos o asambleas comunitarias que luego se complementaban con el trabajo de las asociaciones de vecinos, los sindicatos, las luchas por la tierra y el fortalecimiento del movimiento obrero. Y, además, como parte del trabajo constitutivo de un pensamiento crítico, por el fomento de grupos de alfabetización de adultos, creación y uso de bibliotecas, guarderías, clubes de madres y jardines comunitarios.

A partir del trabajo de las CEB se impulsó en el campo una “Comissão pastoral da terra” (Comisión pastoral de la tierra), amparada en los avances divulgados por el Concilio Vaticano II, complementados por los documentos de Medellín y Puebla; y como bien se señala en este último, por el particular apoyo de varios obispos. Sin embargo, con el tiempo, está situación se invirtió en la participación conflictiva de una parte considerable de la Iglesia rural en contra de lo que mandaban las jerarquías urbanas, guiadas desde Roma por la Congregación de la Fe, y de un episcopado dividido entre quienes apoyaban o criticaban a los sacerdotes seguidores de la Teología de la Liberación.

Uno de los mayores impulsores de las CEB, el sacerdote dominico Frei Betto (1979, 8), señaló que “en los años del régimen militar en Brasil, los miembros de las comunidades de base participaron activamente en la oposición popular. Muchos fueron asesinados por las fuerzas represivas del poder político y/o económico”, pero además puso énfasis en la particularidad de una institución en la que a diferencia de, por ejemplo, las instituciones políticas o educativas, la dictadura no podía poner como reemplazo a uno de ellos. Por eso, afirma que los militares no “podían

nominar un general de reserva para presidir la Conferencia Nacional de los Obispos del Brasil”, sobre todo por su fuerza moral contra una dictadura que se presentaba como una cruzada cristiana en contra el ateísmo de quienes la criticaban.

La lucha social de las CEB fue un testimonio incuestionable de prácticas no violentas que enfrentó con dignidad las violencias implementadas por la dictadura hasta convertirse en un faro moral para toda la oposición política. De ahí que hay es necesario señalar que, por ejemplo:

La Teología de la Liberación y su influencia en las comunidades eclesiales de base en el campo, fue fuerte hasta la época de los ochenta, cuando logra consolidarse en las ciudades, y de alguna forma apoyaron la creación de órganos importantes como la Central Unitaria de Trabajadores o partidos como el PT, el propio MST, y donde su criterio era no proponer la lucha armada. Entonces se puede decir que todos ellos, gracias a su ejemplo, tienen en común no proponer la lucha armada, lo que nos permite afirmar que el 99 % de los nuevos movimientos sociales en Brasil son movimientos de paz, de *noviolencia*, si usted quiere (Ricardo Pazello, 2016, entrevista).¹³

Por eso, llegado el momento las CEB se plantaron de manera no violenta contra todos los abusos de la dictadura, no solo por victimizar sus feligreses sino por los atropellos en contra de quienes profesaban otra fe o ninguna. Es así como en las CEB y sus organizaciones de apoyo:

Entran católicos, protestantes, espíritas, ateos, etc., todos los que se ponen al lado de los oprimidos. La división no es más entre quien tiene o no tiene fe, es entre quien está al lado de los intereses de los pobres y quien está a favor de los privilegios de los opresores (Betto 1979, 8).

Mantuvieron firme esta actitud con la coherencia suficiente para ganar respeto frente a todos los grupos políticos, fueran estos de izquierda o de derecha, por la defensa de sus ideales, sin nunca dejarse tentar por el vanguardismo o las acciones de respuesta violenta.

¹³ Analista político, investigador de la Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares (Red Nacional de Abogados y Abogadas Populares); fue entrevistado por el investigador el 30 de noviembre de 2016.

Por consiguiente, se puede inferir que la convergencia de las actividades anti dictatoriales de los diversos grupos sociales como los campesinos, los sindicatos, las mujeres, los estudiantes, la Iglesia popular, los afrodescendientes, los indígenas, etc., empiezan a dar resultados al aprovechar el agotamiento de la dictadura a finales de los 70. En parte, por los alcances positivos de la Ley de Amnistía de 1979 que permitió el retorno al país y la salida de las cárceles de un gran número de acusados de delitos políticos. A esto se sumó que, a comienzos de los 80, después de 20 años de dictadura entre 1983 y 1984, se recogieran en todo el país millones de firmas para exigir una enmienda constitucional pidiendo la elección directa para presidente de Brasil.

Es así como en el transcurso de esa campaña se van sumando numerosos movimientos sociales y partidos políticos de oposición al régimen dictatorial, lo mismo que líderes sindicales, líderes religiosos, periodistas, organizaciones estudiantiles, junto a varios escritores y artistas. Dicho movimiento se denominó Movimento Diretas Já (Movimiento Directas Ya) y puso como punto central la recuperación de la democracia por la vía pacífica electoral. Por esta razón mezclan varias tácticas, por un lado, la presión parlamentaria en donde el diputado Dante de Oliveira presentó la enmienda por elecciones directas y, por el otro, las bases sociales exigen a sus líderes que se agrupen e impulsen la campaña sin intereses individuales, pues el objetivo es claro: elecciones directas ya, es decir, para 1985 (Débora Goulart, 2016, entrevista).¹⁴ Todo esto ocurre dentro de un contexto económico propicio, en la medida en que se acentuaba la caída del “milagro económico” de la dictadura, la inflación llegaba al 211 % y, al ceder el miedo, se propagaba la visibilización de miles de casos de represión violenta.

Además, a medida que transcurría la campaña, más gente llenaba de manera multitudinaria las plazas, lo que se reflejó en el acto en la Praça da Sé, en pleno centro de São Paulo, donde se reunieron el 25 de enero de 1984 más de 200 mil personas gritando *diretas já* (Tadeú Nasser, 2016, entrevista). Después de esto, siempre con la proclama de evitar las provocaciones y realizar los actos de manera pacífica, se promueve una marcha hacia la capital, Brasilia. El 10 de abril, los periódicos de la época calculan que más de un

14 Asesora del MTST; fue entrevistada por el autor el 22 de noviembre de 2016.

millón de personas, durante seis horas se reunieron en Río de Janeiro, en la avenida que conduce a la Igreja de Nossa Senhora da Candelária (O Globo 2013).¹⁵ No obstante, a pesar de la fuerza de las manifestaciones y la autoridad de la ciudadanía que enfrentó a la dictadura de manera noviolenta, las fuerzas conservadoras en el parlamento, en un acto de soberbia, derrotaron la voluntad popular y decidieron en contra de la enmienda.

Es así como a finales de 1984, los parlamentarios convocaron a una elección indirecta, aunque por la presión social no presentan candidatos militares y por ese camino eligen a Tancredo Neves, propuesto por una alianza partidaria opositora que lo consideró moderado para la transición. Sin embargo, el mismo día de su posesión muere y es reemplazado por su vicepresidente.¹⁶ Con todo, hay que señalar que el periodo dictatorial finalizó no porque hubiese sido derrotado de forma contundente, a pesar de las grandes luchas anti dictatoriales y a las miles de vidas perdidas, sino por el agotamiento del modelo económico militar y por la necesidad de acomodarse políticamente a un orden internacional que ya había cumplido su función estabilizadora dentro de un modelo de posguerra fría, neoliberal y de ideología conservadora para la periferia política y económica del mundo (Catholic Church. Archdiocese of São Paulo 1985).

Después llegaría una transición en la que se acomodaron las fuerzas políticas que dominarán la política brasileña en los próximos años. Por un lado, la derecha se alineó con el primer gobierno electo de manera directa, el de Fernando Collor de Mello, del Partido de Reconstrucción Nacional, conservador, y quien apenas dura dos años en el gobierno al ser destituido por corrupción probada. Collor de Mello es reemplazado por Itamar Franco que cumple su periodo hasta 1995. Luego por dos periodos consecutivos, entre 1995-2003 y con elecciones directas, resulta electo el presidente fue Fernando Henrique Cardoso, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), un reconocido intelectual de la corriente Cepalina de

15 Los medios de comunicación reseñaron estos acontecimientos. Algunos de los medios que se ocuparon del tema fueron *O Globo*, *Primeira página* y *O País*. En su edición del 11 de abril de 1984, se refirieron a aquel acontecimiento como la mayor concentración política en la historia de la ciudad.

16 Sobre la muerte del presidente Tancredo Neves hay muchas dudas hasta el día de hoy, por eso son frecuentes las especulaciones sobre la necesidad de reabrir investigaciones sobre lo sucedido.

la Teoría de la dependencia quien mudó sin escrúpulos su pensamiento y actuar político y económico desde el progresismo de izquierda hasta el radicalismo neoliberal.¹⁷

En 2003, la llegada al gobierno del PT con Luiz Inácio Lula da Silva generó la esperanza de cambios estructurales en relación con la tenencia y distribución de la tierra; sin embargo, después de tres periodos el balance es agríndice. Por un lado, César Sansón, profesor de la Universidad Federal de Rio Grande do Norte (UFRN) afirma que:

El PT no tuvo el coraje, ni el valor suficiente para interferir y cambiar la estructura agraria brasileña. A pesar de tener en las manos instrumentos que le permitían radicalizar la distribución de tierras el tema lo trató de manera conservadora y burocrática. El retroceso fue precisamente ese, la falta de osadía en realizar una grande, profunda y corajosa reforma agraria en el país (Sales de Lima 2013, en línea).

Por el otro, la coordinación del MST señaló como positiva la descriminalización de la protesta social campesina y la lenta legalización de miles de asentamientos en zonas de gran conflictividad social. Aunque lamenta que el poder judicial de mayoría conservadora siguiera con la persecución jurídica contra las dirigencias de movimientos como el MST, el MTST y otros que abogaban por derechos fundamentales relacionados con la propiedad (Ricardo Pazello, 2016, entrevista). Ello se explica por la necesidad de mantener alianzas con sectores de terratenientes representados por partidos como el Partido de Movimento Democrático Brasileño (PMDB).

Natalia Szermeta (2016, entrevista), dirigente del Frente Povo Sem Medo (FPS), quien apoyó a las políticas gubernamentales de los gobiernos del PT, señaló de forma autocrítica:

Existe también la culpa por parte de aquellos que gobernaron al país durante los últimos años. Eso la izquierda brasileña no lo puede negar, pues

17 El investigador Ricardo Pazello reportó en una entrevista realizada en 2016 que “Fernando Henrique Cardozo pidió olvidar lo que él había escrito cuando era progresista. En una época marcada por lo que la gente llamó ‘descenso’ económico. Es decir, en contraste con la década del 80 al 89 que se conoció como el ‘ascenso’”.

estamos frente al agotamiento de un ciclo en el país, que tuvo como característica principal la conciliación. Un pacto que fue posible con el crecimiento económico a fuerza de realizar manejos presupuestarios con las élites, lo que permitió en algún grado que sectores sociales satisficieran sus necesidades básicas. Algo insuficiente, pues no enfrentó las reformas estructurales, pero que les permitió enfrentar por un tiempo la crisis económica que se veía venir. La que ya llegó.¹⁸

Así mismo, durante la hegemonía política del PT hasta el 2016, el problema agrario y el conflicto de las tierras urbanas se mantuvo bajo tensión, con el agravante de que a la llegada de Michel Temer como presidente, bajo un panorama económico de crisis y la creciente inestabilidad política previa a las elecciones de 2018, se evidenció la acomodación radical de los presupuestos, en donde la situación de la tierra perdió su prioridad y, por ello, aumentó la posibilidad del recrudescimiento de ocupaciones y levantamientos en los campos y ciudades del Brasil.

Las resistencias al golpe institucional contra la presidenta Dilma Rousseff

El 31 de agosto de 2016 se consuma de manera definitiva una situación que puede definirse como un golpe de Estado tipo institucional contra la presidenta constitucional de Brasil, Dilma Rousseff 2015-2019.¹⁹ La presidenta fue elegida por 54 millones de votos ciudadanos, pero fue destituida por el voto de 61 senadores, la mayoría de ellos juzgados por corrupción y abusos de poder. Michel Temer, su vicepresidente, ocupó la presidencia de manera provisional hasta que fue ratificado por la cámara y permaneció en la jefatura de gobierno hasta finales de 2018. Tras concretarse la

18 Natalia Szermeta es miembro de Advogados Populares (Abogados Populares); fue entrevistada por el autor el 30 de noviembre de 2016.

19 En el contexto de América Latina y en el caso particular de Brasil se puede definir como golpe institucional a la usurpación de sus funciones de un poder del Estado por parte de otro poder, en este caso el Parlamentario en contra del Ejecutivo, para tergiversar o manipular mecanismos constitucionales de manera que se pudiera destituir del cargo al jefe del Ejecutivo, desconociendo el voto ciudadano y en favor de la corrupción organizada y/o de unas élites del poder económico-político.

destitución, varios gobiernos latinoamericanos expresaron su repudio y llamaron a consulta a sus embajadores en Brasil.

Al igual que diversos líderes y analistas mundiales han calificado este “juicio político” como un golpe de Estado parlamentario. Además, Temer fue calificado como un político neoliberal aliado a grandes capitales locales y transnacionales que realizaron operaciones ilegales en Brasil, debido a ello está envuelto con frecuencia en varios escándalos de corrupción de los que se ha librado gracias al apoyo de las mayorías en el parlamento (Benites 2017; Hermida 2017).

Detrás de las protestas “espontáneas” contra el gobierno de Dilma, la coalición opositora a su gobierno reunió a organizaciones, casi todas empresas electorales con muy poca identidad ideológica, a pesar de sus nombres, como el Movimiento de Liberación de Brasil (MBL), financiado por los Demócratas (DEM), el PSDB y PMDB y el Solidariedade SD. También fue apoyada por Aécio Neves, candidato a la presidencia derrotado por Dilma y, entre otros, por las empresas mediáticas de Marcello Reis, que no ocultó su simpatía por la idea de la intervención militar propuesta de manera abierta por el diputado ultraconservador Jair Bolsonaro del Partido Social Cristão do Rio de Janeiro (PSC-RJ), quien a la postre resultó elegido presidente para el periodo 2019-2023 (Moreira Leite 2017).

Una circunstancia a destacar es que durante casi todo el 2013, en particular en las grandes capitales, se presentaron una serie de marchas que respondían a una dinámica sistemática de:

Levantamiento de movimientos espontáneos sin referentes organizados. A excepción de São Paulo con el Movimento Passe Livre (MPL), para el resto del país fue un momento catártico lleno de manifestaciones espontáneas, inclusive en los sitios más pequeños hubo manifestaciones de hasta mil personas (Ricardo Pazello, 2016, entrevista).

Como era de esperarse, en la medida que presentaron sus banderas ideológicas, y estas eran radicalmente opuestas, las posiciones chocaron por lo que “en 2014 se polarizan electoralmente, en 2015 se crean movimientos

de derecha e izquierda, pero de calle y, en 2016, se da un golpe institucional”. Pero lo que en realidad llamó la atención fue el fenómeno de que en esta fase inicial las “manifestaciones fueron unificadas, con la derecha e izquierda juntas” (Ricardo Pazello, 2016, entrevista).

Además del apoyo parlamentario de la derecha a estas manifestaciones, otro actor preponderante fueron los grupos evangélicos cristianos, con 92 diputados y dos senadores, muchos de ellos pastores de las iglesias de la Asamblea de Deus y de la Igreja Universal do Reino de Deus, que juntas suman más 20 millones de feligreses solo en Brasil, reunidos en el Frente Parlamentario Evangélico, quienes votaron en su totalidad por el retiro de la presidenta. También fue importante el apoyo de los principales periódicos de alcance nacional y de las redes más importantes de televisión y radio de Brasil (Nogueira 2016) y (Azenha 2016). Otro hecho a tener en cuenta es que del total de los parlamentarios que juzgó a Rousseff, el 60 % eran sospechosos o acusados de delitos que iban desde la falsificación de documentos públicos, la corrupción en el erario público y abusos de poder económico. Más de un tercio de los parlamentarios respondieron de forma paralela al *impeachment* y a varias investigaciones en los procesos penales en el Tribunal Supremo.²⁰

Así mismo, los opositores supieron aprovechar las ambigüedades de manifestantes coyunturales como los del MPL, quienes se definieron como apartidarios, horizontales e independientes, y durante casi todo el 2013 lograron reunir a miles de manifestantes en las principales ciudades de Brasil en contra del aumento de las tarifas del transporte público, para luego impulsar una campaña a favor no solo de la reducción de las tarifas sino de la bandera de gratuidad del transporte público para todos. Al decir de uno de sus protagonistas:

A partir de 2013, los estudiantes comenzamos a tener conciencia de la lucha política de una manera diferente. Se empieza a polarizar la lucha política en el Brasil entre partidos de la derecha y partidos de centro derecha que se enfrentan al PT, como el gran monstruo de la corrupción que destruyó a

20 Un ejemplo de ello sucedió con Eduardo Cunha, expresidente del parlamento de Brasil determinante en el proceso contra la presidenta Dilma Rousseff quien fue condenado a 15 años de prisión por corrupto el 20 de marzo de 2017.

Brasil. Lo que llevó a que no se hablara cualitativamente de la política. Más bien se planteó el problema de la movilidad con el Movimento Passe Livre al que se le mezcló el discurso anticorrupción. Lo que es válido desde el sentido común por la tradición de corrupción política (Henrique Valerio, 2016, entrevista).²¹

Esta exigencia fue necesaria dado el alto valor del transporte en relación con los ingresos y a los gastos básicos de la mayoría de brasileños, incluidos la base social del PT; sin embargo, como bien lo indica Henrique Valerio, en poco tiempo esta reivindicación fue aprovechada por la oposición como una bandera en contra de la insensibilidad social del PT y en la campaña anticorrupción contra Dilma y el expresidente Lula da Silva.

De todas maneras, una situación que ayudó al apoyo masivo de los ciudadanos al MPL en São Paulo fue la indignación por la violencia utilizada por la fuerza policial. De ahí que aumentara la confrontación en las calles de todo el país:

Al principio contra el incremento absurdo de los pasajes en contra del bolsillo de los trabajadores y de los estudiantes, pero también contra una serie de cosas que ya venían ocurriendo en la política. Es decir, que el Movimento Passe Livre junto con el movimiento de los estudiantes de secundaria promovió durante todo el 2013 una serie de marchas que tuvieron una connotación política más amplia (Geraldo Pinto, 2016, entrevista).

Por esta razón, muchos sectores que en principio tomaron distancia con este movimiento, al final se acercaron de manera solidaria en contra de la gravedad de los atropellos policiales y la torpeza política de parte de las autoridades.

Otro frente a favor de la campaña de destitución de la presidenta fue Anonymous Brasil (AB), que con su clásica máscara blanca como símbolo participó en la mayoría de manifestaciones de 2013 y difundió información muy discutible. Al final de cuentas no se supo si eran independientes o era un

²¹ Henrique Valerio es líder del movimiento Frente Povo Sem Medo (Frente Pueblo Sin Miedo, FPS); fue entrevistado por el autor el 27 de noviembre de 2016.

grupo de apoyo a las tácticas utilizadas por la derecha. Al paso de poco tiempo su consigna principal: “Los honestos nos apoyan, los corruptos nos temen y los heroicos se nos unen” fue perdiendo fuerza hasta ser absorbida como consigna por grupos pro *impeachment* (Tadeú Nasser, 2016, entrevista).

De forma simultánea en 2013, como año preelectoral, fue bien aprovechado por la derecha brasileña para impulsar movilizaciones que mezclaron sus propuestas programáticas electorales en contra de las exigencias sociales de la población desfavorecida con las luchas de sectores coyunturales que se movilaron por el transporte gratuito o contra los gastos en el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos. Algo que a mediano y largo plazo generó un efecto de confusión. En ese marco aparece el Movimento Brasil Livre (MBL) que se caracterizó desde sus comienzos por recibir el apoyo de grupos empresariales y de las fundaciones que trabajaron a favor de la caída de la presidenta, mientras su base social: “Representa una clase despolitizada. Una clase media que contradictoriamente está en contra de las políticas sociales. Yo digo contradictoriamente porque ellos también se beneficiaron de las políticas sociales que el gobierno de Lula y de Dilma desarrollaron” (Ricardo Pinto, 2016, entrevista).

Además, el MBL se presentó como un movimiento anti izquierda que utilizó la violencia de manera frecuente en contra de quienes se manifestaron a favor de la campaña de reelección de la presidenta Dilma o de la ocupación de las escuelas secundarias. Prueba de ello es el testimonio del profesor Pinto quien recuerda que:

Ellos son violentos, aunque no usen armas de fuego, mas llegan con cuchillos y bombas de São João con las que hieren a las personas. Suman a la violencia física las agresiones verbales. Provocan violencia al empujar a la gente y hacerla caer. Llegan con celulares y cámaras, provocan agresiones y después se ponen como víctimas. Y realizan agresiones también en algunas escuelas ocupadas en el Paraná, ellos botaron basuras adentro de las escuelas. Ellos se organizan por la internet usando las redes sociales, se convocan para agredir (Ricardo Pinto, 2016, entrevista).

Al paso de poco tiempo se supo que gran parte de los líderes en la sombra del MBL, quienes giraron una gran cantidad de dinero para sus acciones

violentas, eran los mismos diputados implicados en actos de corrupción y quienes votaron por la destitución de la presidenta (Soares 2016).

Por otra parte, desde una perspectiva más general, la mayoría de los entrevistados hablaron sobre los medios masivos de comunicación del Brasil, privados y públicos, quienes cumplieron un papel central en la legitimación de la violencia sistémica y el exaltamiento de la supuesta o cierta corrupción de los líderes del PT y del ocultamiento de la corrupción de los líderes del poder político de la derecha. Unos medios que según los informantes ejercen un tipo de violencia no armada, pero sí de violencia mediática de carácter político y, sobre todo, estructural (María Bridi; Tadeu Nasser; Ricardo Pazello; Geraldo Pinto, 2016, entrevistas). Utilizan esta violencia para neutralizar la expresión de inconformidad de todo tipo de sectores sociales y la ponen al servicio de los intereses económicos de sus líderes, quienes logran así representación política en el parlamento y, por ende, capacidad burocrática y clientelista.

Las bases del PT y partidos aliados lo criticaron por no organizarlo, por lo menos, impulsar un sistema de comunicaciones fuerte que pudiera contrarrestar en alguna medida la guerra psicológica y mediática que ejercieron y ejercen los poderosos grupos mediáticos, entre otros, la Red O Globo, la revista *Veja* y el diario *A Folha do São Paulo* quienes implementaron de manera abierta un “periodismo de guerra” contra los gobiernos de Lula y, más tarde, el de Dilma, como lo señaló uno de los directores generales de O Globo (Cano 2013). Sobre todo, por la manera como presentaron y crearon opinión durante los escándalos de corrupción de Petrobras y el *impeachment* contra Dilma. Es decir, no hubo ningún medio de comunicación del PT o cercano a ellos con alcance nacional que, de manera, por lo menos mínima, pudiera contrarrestar las informaciones del *pool* de comunicaciones a favor del presidente Temer.

En el lado opuesto, como resistencias de carácter no violento se destacan una serie de movimientos sociales que se opusieron de manera abierta a lo que denominaron el “golpe institucional” en contra de la presidenta constitucional Dilma Rousseff. Esta situación no constitucional fue criticada por la comunidad internacional por antijurídica y por los intereses espurios que movió a quienes la impulsaron y finalmente lograron

la destitución de la presidenta.²² Otros movimientos de resistencia social que no recurrieron a la violencia durante este periodo (2013-2016) y que trataron, por diferentes medios, de deslindarse de aquellos movimientos que de manera espontánea y de forma desorganizada pretendieron manifestarse de manera violenta, se encuentran más de quinientos grupos de todos los matices dada la compleja diversidad de Brasil, los que de manera reiterada durante los tres años de su gobierno realizaron miles de actos violentos.

Sin ser exhaustivos se puede reconocer, entre los grupos reunidos en torno a la “Defesa da democracia” y “Contra o golpe”, a aquellos que estuvieron presentes en manifestaciones y marchas masivas en casi todas las capitales del país. En la convergencia de organizaciones en contra del golpe se destacan: el Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), el Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Teto (MTST), el Frente Povo Sem Medo (MPSM), la União Nacional por Moradia Popular (UNMP), el Frente Brasil Popular (FBP), la Marcha das Mulheres, el programa Minha Casa Minha Vida, el Movimento de Luta nos Bairros (MLB), el movimiento de Vilas e Favelas, el Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), la Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), el Frente Nacional de Luta (FNL), la Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar (FETRAF), la Via Campesina, el Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), el Movimento Camponês Popular (MCP), la Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ) y el Conselho Nacional de Saúde (CNS).

22 Es elocuente el pronunciamiento de Luis Almagro, secretario general de la OEA quien afirmó en una carta a la comunidad internacional, firmada el 15 de abril de 2016, que: “Nuestra Organización ha hecho un detallado análisis sobre el juicio político iniciado contra Dilma, y ha concluido que no se encuadra dentro de las normas que sustentan dicho procedimiento. No existe una acusación de carácter penal contra la Presidenta, sino que se la acusa de mala gestión de las cuentas públicas en 2014. Esta es en todo caso una acusación de carácter político, que no amerita un proceso de destitución. Este análisis nos genera unas dudas que hemos visto reflejadas, por otra parte, también en la sociedad brasileña e incluso dentro del propio sistema de acusación pública [...]. Además, es necesario resaltar que un régimen presidencial como el brasileño –y la gran mayoría de los de nuestro hemisferio, salvo el Caribe anglófono–, no puede operar de buenas a primeras como si fuese un régimen parlamentario, intentando la destitución, en este caso de la primera mandataria, por un cambio en la correlación de fuerzas políticas en la coalición gubernamental” (OEA 2016).

Entre estos sobresalen, tanto por su representatividad como por su capacidad de movilización, movimientos como el FPSM que se conformó en el mes de octubre de 2015, como una coalición de partidos de izquierda, movimientos populares y sindicatos para luchar contra el renacimiento de las ideas ultraconservadoras y la paramilitarización de Brasil. Aunque independiente en su organización, el FPSM realizó alianzas con grupos cercanos al PT y al Movimento Brasil Frente Popular (MBFP), aliado del gobierno, siendo muy activo en las manifestaciones en contra del “golpe”.

En ese marco, una de las representantes del FPSM en la conferencia nacional de la Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, realizada en Curitiba en noviembre de 2016, señaló de manera enérgica que:

El golpe tiene características de un golpe paramilitar, jurídico y mediático... [uno de sus objetivos centrales fue] la aplicación de “un proyecto neoliberal para atacar los programas sociales, los avances de los derechos de los trabajadores, de las libertades individuales. Lo que en verdad significa un programa de contrarreformas estructurales y de autoritarismo como no habíamos visto en el Brasil (Natalia Szermeta, 2016, entrevista).

Esto significó en poco tiempo la implementación de un tipo de violencia institucional, jurídica y burocrática, en contra de una sociedad que en su casi generalidad respondía de manera pacífica a los atropellos cotidianos, pero que, por su precaria organización, sus incoherencias ideológicas y su gran dispersión no logró la fuerza suficiente para elegir representantes afines a sus verdaderos intereses (María Bridi, 2016, entrevistas).

El tono de confrontación evidenció que, detrás de la supuesta corrupción de la presidenta Rousseff, lo que se gestó fue un plan estratégico para desmontar uno a uno los programas que favorecían a amplios sectores sociales, como lo confirmó los actos ejecutivos de la primera semana de gobierno del presidente Michel Temer. Y, en particular, porque como lo resalta Szermeta se dio una situación que para muchos puede pasar desapercibida, pero que es central en el debate sobre lo sucedido el 31 de agosto de 2016:

No hay que olvidar que el gobierno Temer es un gobierno sin voto, que al principio parece un gobierno frágil por no tener legitimidad y

aceptación popular, mas que, precisamente por esa circunstancia, se vuelve más fuerte. Pues es un gobierno que no está preocupado por los ciudadanos, al no estar obligado por el voto de ellos. Por el contrario, lo que necesita es dar cuentas a aquellos que lo apoyaron: los grupos económicos, los partidos políticos de derecha y a algunos más (Natalia Szermeta, 2016, entrevista).

En un contexto paralelo, en los que la organización social jugó un papel importante, el FPSM consolidó su trabajo gracias al MTST, por lo que promovió junto a ellos acciones directas pacíficas como las ocupaciones de terrenos urbanos y la participación en manifestaciones para presionar créditos blandos o viviendas sociales. En sus principios fundacionales establecieron que no se adhieren a ningún partido político, aunque en sus orígenes estuvieron vinculados al PT. Un debate frecuente entre sus miles de miembros fue si la manera de conquistas se podría realizar sin mayor confrontación con las autoridades que defienden la propiedad privada a ultranza, sobre todo de aquella que no cumple el mandato constitucional de Brasil que obliga que la propiedad privada tiene que cumplir una función social.²³

Otro tema que se convirtió en perentorio para esta organización, como lo recuerda una de las principales asesoras del MTST, fue cómo responder ante el recrudecimiento de las constantes agresiones de la fuerza pública en el caso de las ocupaciones, pero sobre todo por la necesidad de diferenciar su respuesta noviolenta frente a la de otros movimientos sociales que padecen formas de represión más violentas:

Si la represión aumenta la vía noviolenta es cada vez más limitada, pues cada acción pacífica es vista desde la criminalización. Así la ocupación de predios públicos va a ser más difícil, igual que el bloqueo de vías. Hay dos tendencias, una por la continuación de ese tipo de acciones y otra,

23 Respecto a la función social de la propiedad: “En la Constitución Federal de 1988 el derecho a la propiedad fue garantizado como derecho fundamental (artículo 5, XXII), siendo un derecho inviolable y esencial al ser humano, puesto al lado de otros derechos, como la vida, la libertad, la seguridad, etc. Pero también a la propiedad se le atribuye interés social, pues el art. 5º, XXIII predica que ‘la propiedad atenderá su función social’, por lo tanto, queda condicionada a la efectividad de su función social” (Holz y Villela 2008, en línea).

sobre todo la impulsada por sectores más jóvenes, pues con ellos siempre está en riesgo que asuman una posición defensiva pero violenta. Porque ellos no reconocen la vía partidaria ni la posibilidad de acción efectiva desde otra instancia que no sea la violencia, pues ellos han sufrido la represión violenta y brutal que, por ejemplo, el MTST no siente [...]. Es posible que ellos se transformen en un pequeño núcleo de acción violenta (Débora Goulart, 2016, entrevista).

Por eso mismo, lo reitera Débora Goulart entrevistada en 2016, es claro para los dirigentes del MTST que la “no violencia tiene sentido, pero también tiene muchos límites”, en particular en contextos en los que la solución a sus problemas por la vía electoral o institucional todavía es muy precaria. Y más en el caso de Brasil, pero también extensivo a todo el continente, en donde no hay confianza en que se mantengan las conquistas democráticas alcanzadas bajo gobiernos progresistas. Muy por el contrario, la preocupación es:

Cómo consigue la gente avanzar sin que lleguen nuevos golpes de Estado, sean ellos institucionales o militares. Entonces la gente avanza hasta donde no se rompen las instituciones. Lo difícil es que ellas se vuelven nuevamente en contra de nosotros con el avance de un proceso dictatorial (Débora Goulart, 2016, entrevista).

Algo que deja latente la idea de que en países como Brasil el fantasma del golpe de Estado está vigente, entre el tradicional que recurre a las Fuerzas Armadas y el modelo neogolpista institucional que apela, en contra del sistema presidencial, a unos grupos parlamentarios aliados de grandes capitales para que ellos desconozcan el voto ciudadano.²⁴

Otra de las organizaciones que se hicieron notar en la resistencia social contra el “golpe institucional” de 2016 fue el Movimiento Popular por Moradia (MPM), conformado por un gran número de trabajadores sin habitación que luchaban por la reforma urbana y en busca de una solución

²⁴ Son referencia, entre los más llamativos, los “golpes” institucionales implementados en Haití (2004), Honduras (2009), en Paraguay (2012) y los fallidos intentos en Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela.

al grave problema de la vivienda en las zonas periféricas de varios estados brasileños. Entre ellas, se consideró para esta investigación la de Curitiba y su región metropolitana, por ser muy representativa en la medida que trabajó en el marco de miles de familias que esperaban y esperan, con ayuda de programas gubernamentales, la adquisición de una vivienda decente dentro de una oferta de más de 90 000 propiedades vacías (MPM 2017). Escenario que requirió el apoyo a lo realizado por los gobiernos del PT y la presencia activa de las bases sociales del MPM para que, a través de su intervención política, presionaran al poder político regional de manera que evitaran el apoyo golpista a favor de los intereses de grandes propietarios, constructores e inmobiliarias que saboteaban de alguna manera esta reappropriación de bienes urbanos (Luiz Texeira, 2016, entrevista).

Se debe agregar que este movimiento, al igual que el MTST, tuvo y tiene como fundamento principal la búsqueda de vivienda popular de forma no violenta en condiciones favorables, solo que en la mayoría de sus casos se limitan a presionar a la burocracia estatal, la que a pesar de tener proyectos en marcha no los desarrolló o si lo hizo, no fue en las calidades y tiempos programados (Luiz Texeira, 2016, entrevista). No obstante, la validez de su reivindicación, los grandes medios de comunicación opositores al PT dieron suficiente visibilidad a sus demandas para utilizarlas en las campañas en contra del gobierno del PT. Lo característico de este tipo de organizaciones es que raras veces caen en actos de violencia, pues en principio lo que buscan es una mejor funcionalidad burocrática sin pretender nunca la combatividad (Ricardo Pazello, 2016, entrevista).

Dentro de la complejidad de las luchas en defensa de la institucionalidad que representaba la presidenta Dila Rousseff, tienen también protagonismo las distintas organizaciones que representan a los afrobrasileños, las feministas, los grupos LGTB, las comunidades católicas de base, solo que las dirigencias, en su mayoría, pidieron a sus militancias que se integraran al colectivo las marchas y manifestaciones “em defesa da democracia e do estado democrático de Direito” (FENAJ 2018), con sus pancartas, pero sin reclamar una voz individual.

En resumen, se puede decir que las organizaciones visitadas se alinearon, sin excepción, en la coyuntura de defender de forma no violenta y

dentro de los canales permitidos por la legalidad imperante, dentro de la fuerza social que trató de defender la democracia de su país por medios democráticos: actos públicos, sentadas, manifestaciones y marchas hasta entidades gubernamentales, presentación de peticiones a través de pancartas y cartas abiertas y, por supuesto, en la dinámica de estos tiempos, con la utilización de las redes sociales y de medios de comunicación alternativos y comunitarios. Sin embargo, en no pocas ocasiones, la actitud de las autoridades fue violenta e inclusive permitió la actuación ilegal de grupos promovidos desde la derecha (Gabriela Caramuru; Ricardo Pazello; Geraldo Pinto; Henrique Valerio, 2016, entrevistas). Así mismo fue notoria la necesidad de diferenciar entre la violencia física y la violencia sistémica que se ampara en la juridicidad y en los aparatos represivos del Estado como forma de criminalizar la protesta social.

Conclusiones

Además de la percepción *in situ* por parte del investigador y la documentación revisada, gran parte de los entrevistados coinciden en señalar como relevantes los siguientes aspectos:

- Se evidencia que los informantes, si no todos, dejaron latente que la opción no violenta en Brasil no es producto del seguimiento explícito de los principios básicos de la *no violencia*, sino que más bien responde a un acto de realismo. Así la mayoría de movimientos y grupos no desarrollaron de manera consciente o explícita la *no violencia*, pero es evidente que utilizaron tácticas sociales de confrontación que coinciden con sus principios generales, donde se entiende que:

La no violencia no es lo mismo que el pacifismo, para el que existen numerosos términos. El pacifismo se considera casi un estado psicológico. Es un estado mental. El pacifismo es pasivo, pero la no violencia es activa. El pacifismo es inocuo, y por tanto es más fácil aceptar que la no violencia, que es peligrosa (Kurlansky 2015, 18).

- Es decir, las maneras como se manifestaron los grupos de resistencia contra el golpe institucional, se convirtieron en una fuerza “peligrosa” importante para deslegitimar las acciones de los grupos parlamentarios que dieron el golpe. Sobre todo, porque a su manera cumplieron con la máxima de que: “La no violencia, exactamente, igual que la violencia, es una forma de persuadir, una técnica para el activismo pacífico, un sistema para prevalecer” (Kurlansky 2015, 19), lo que se confirma con la continuidad de las denuncias en contra de los actos de corrupción del presidente Temer y su entorno. Y, en particular, a través de la resistencia popular en contra de la llegada en enero de 2019 a la presidencia de Jair Bolsonaro, un ultraderechista ligado a varios sectores acusados de corrupción, por lo que se busca ganar mayor representatividad desde una coalición de fuerzas progresistas no corruptas para las parlamentarias de 2020.
- Existe la percepción de que en otras circunstancias está abierta la posibilidad del uso de la violencia. Las personas entrevistadas consideran que hay factores que influyen en ello; por un lado, que la fuerza represiva del Estado que se estableció durante el periodo dictatorial 1964-1985, a pesar de los trece años del poder del PT, sigue si no intacta, por lo menos con la fuerza suficiente para promover su modelo sistémico de dominación. En específico, sus organismos secretos actúan de forma casi ilegal en contra de cualquier oposición política anti sistémica que pase cierto grado de organización, bajo la excusa de la persecución a las bandas criminales organizadas y a las mafias del narcotráfico. Y, por otro, a pesar de la hegemonía del PT en la presidencia y sus grandes aciertos en materia social, la violencia estructural disminuyó, pero no al grado de tocar las estructuras sociales que mantienen a Brasil como uno de los países más desiguales del mundo (Tadeú Nasser; Ricardo Pazello, 2016, entrevistas). Por eso, hay grupos que sostienen que la violencia jurídica de la propiedad es evidente y las “acciones directas” contra las grandes propiedades deben implementarse y, si es el caso, aunque no lo manifiesten de manera abierta, recurrir a algún tipo de no violencia más efectiva (Débora Goulart, 2016, entrevista).
- Los movimientos sociales que sufren la situación de casi *apartheid* racial y económico reconocen su incapacidad de congregarse bajo un ideario

común de *noviolencia*, porque lo desconocen o porque las circunstancias nos son propicias debido a la radicalización doctrinal de algunos sectores (Ricardo Pazello; Geraldo Pinto; Catalina Zambrano, 2016, entrevistas).

- Se evidencia la división generada al interior del PT en el poder entre una base pacifista, no de *noviolencia*, y otra que promovía cambios más radicales, incluso de fuerza, pues criticaba al PT por no distanciarse de los grandes grupos económicos, al gobernar en alianzas asimétricas con ellos. Y, además, por no haber transformado las estructuras económicas del poder capitalista y, también, por no sacarlos de su hegemonía económica y política por la fuerza. Algo que, por supuesto nunca se hizo y, en el momento de las entrevistas, se utilizó como un argumento sobre la debilidad política de los presidentes del PT. Por ello, la discusión en torno a la pérdida del poder presidencial se acentuó entre reforma y revolución (Ricardo Pazello, Natalia Szermeta, 2016, entrevistas).
- Así mismo, en términos de *noviolencia* se reconoce la agudización de una militancia política religiosa agresiva, liderada en su mayoría por líderes y pastores de grupos evangélicos cristianos y católicos tradicionalistas, quienes pasaron de un simple apoyo legitimador del poder a convertirse en poder político activo y beligerante con amplia representación parlamentaria. En el sector católico, la Iglesia de base o la tercermundista, pacifista, cercana a la Teología de la liberación muy debilitada, continuó siendo perseguida por su vínculo con la recuperación de tierras y por las luchas por los derechos agrarios.
- También se constató que hay dos grupos que de distinta manera fueron importantes a favor, tanto del golpe institucional como del *impeachment* en contra la presidenta Dilma. Uno, el de la jerarquía de la Iglesia católica oficial que se apartó de la Iglesia popular o de base y optó apoyar a la de una expresión católica tradicional, la Tradição, Família e Propriedade (TFP), fundada por el político y periodista católico Plínio Corrêa de Oliveira, y al creciente movimiento evangélico que en su mayoría apoyó el golpe militar y su cruzada antisocialista, anticomunista y antimasonía. Fenómeno que comenzó con la llegada al poder del PT, sobre todo por la radicalidad de los grupos cristianos y evangélicos que consolidaron su

poder parlamentario y por la jerarquía de la Iglesia que chocó en varias ocasiones con la dirigencia del PT. Y otro, el de los movimientos evangélicos y cristianos que apoyaron la cruzada contra la presidenta Dilma Rousseff al declararla “enviada de Satanás” o “agente del demonio” e impusieron como su presidente a Michel Temer y su grupo político, casi todos cuestionados por graves denuncias de corrupción de los bienes públicos (Ricardo Pazello; Geraldo Pinto, 2016, entrevistas).

- Una característica predominante entre los diversos protagonistas en contra del golpe institucional a la presidenta Dilma es que ninguno, sin excepción, recurrió a las acciones violentas y, más bien, todos abogaron por que se reencausara la forma democrática y la apertura de un debate en torno a los valores éticos en la administración del poder. Por eso, es de advertir que quienes auguraban una salida violenta, como muchos políticos y medios de comunicación a favor del *impeachment*, ven ahora con preocupación las elecciones de 2020, pues el debate de la corrupción y mal gobierno en torno a la figura de Jair Bolsonaro y de quienes lo apoyaron serán con seguridad los temas centrales en esa campaña (María Bridi; Gabriela Caramuru; Tadeú Nasser; Gerado Pinto; Débora Goulart; Ricardo Pazello, 2016, entrevistas).
- Un punto importante para la consolidación de las experiencias de resistencia no violenta en un país como Brasil es la urgencia de fomentar una pedagogía de la *noviolencia*, pues se comprobó que no es una noción de trabajo dentro de los movimientos sociales. Es más, se registra una confusión entre *noviolencia*, pacifismo y pasividad, salvo en los grupos que promueven la “acción directa”. Algunos informantes asumen la *noviolencia* para contextos diferentes al latinoamericano, en donde la violencia no armada está arraigada de formas muy sutiles. Por eso, al plantear el investigador una opción conceptual se sugirió la de “resistencia negativa” o, aunque pareciera contradictorio, de “violencia pasiva”, en la medida que no pretende la agresión sino la defensa de las víctimas. Para muchos no es suficiente la “fuerza moral” de la *noviolencia*. Todos estos elementos abren el debate sobre la necesidad de atribuir nuevos sentidos dentro del contexto de *noviolencia* en América Latina (Goulart, 2016, entrevista).

Referencias

- Alves, Alê. 2017. “Angela Davis: quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela”. *El País*, 28 de julio. <https://brasil.elpais.com>
- Azenha, Luiz. 2016. “A terra treme: leituras do Brasil de 2013 a 2016”. En *A terra treme: Leituras do Brasil de 2013 a 2016*, de Renato Rovai, 126-136. São Paulo: Annablume.
- Benites, Afonso. 2017. “Temer é denunciado por corrupção e se torna primeiro presidente a responder por crime durante mandato”. *El País*, 27 de junio. <https://brasil.elpais.com>
- Betto, Frei. 1979. *O que é Cominade Eclesial de Base*. Sao Paulo: Centro de Educacao Popular.
- Bingemer, Maria. s.f. “Comunidades eclesiais de base: vida e Esperança”. http://agape.usuarios.rdc.puc-rio.br/amai/comunidades_eclesiacas_base.PDF
- Cano, Arturo. 2013. “En los grandes diarios de Brasil no hay espacio neutral para Lula”. *La Jornada*, 13 de octubre, 1. <https://www.jornada.com.mx>
- Catholic Church. Archdiocese of São Paulo (Brazil). 1985. “Prefácio de Paulo Evaristo Arns”. En *Projeto Brasil, nunca mais*. Petrópolis: Editora VOZES.
- FENAJ (Federação Nacional dos Jornalistas) 2018. “Manifesto de A Federação Nacional dos Jornalistas, Brasília”, comunicado de prensa, 22 de enero de 2018, <https://www.alainet.org/pt/articulo/190503>
- Gorender, Jacob. 2014. “A sociedade cindida”. *Estudos Avançados* 28 (80): 17-26. <http://www.scielo.br>
- Hermida, Xosé. 2017. “Agonia de Temer alonga a crise no Brasil”. *El País*, 3 de julio. <https://brasil.elpais.com>
- Holz, Sheila, y Tatiana de Andrade Monteiro Villela. 2008. “Política de habitação social e o direito a moradia no Brasil” (ponencia, X Coloquio Internacional de Geocrítica. Diez años de cambios en el mundo en la Geografía y en las Ciencias Sociales, 1999-2008, [Universidad de Barcelona], Barcelona, España, 26-30 de mayo de 2008).

- IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). s.f. “Censo Demográfico 2010: Resultados Gerais da Amostra por áreas de ponderação”, <http://www.ibge.gov.br>
- 2011. “Censo 2010: Aglomerados Subnormais. Informações Territoriais. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística”. Rio de Janeiro: IBGE. www.ibge.gov.br
- Kurlansky, Mark. 2015. *No violencia: 25 lecciones sobre una idea peligrosa*. Bogotá: Debate.
- Moreira, Paulo. 2017. “Safatle: Bolsonaro é un exemplo clásico de fascista”. *Brasil 247*, 3 de marzo. www.brasil247.com
- MPM (Movimento Popular por Moradia). 2017. “Quem somos”. <https://mpmcuritiba.wordpress.com/>
- Nascimento, Abdias do. 2004. “Teatro experimental do negro: trajetória e reflexões”. *Estudos Avançados* 18 (50): 209-224. doi.org/10.1590/S0103-40142004000100019
- Nogueira, Paulo. 2016. “O jornalismo de guerra contra a democracia”. En *A terra treme: leituras do Brasil de 2013 a 2016*, editado por Renato Rovai, 159-162. São Paulo: Annablume.
- OEA (Organización de Estados Americanos). 2016. “Declaración del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, tras reunión con la Presidenta Constitucional del Brasil, Dilma Rousseff”, comunicado C-044/16 del 15 de abril de 2016. <http://www.oas.org>
- O Globo. 2013. “Comício das Diretas levou milhões de pessoas às ruas no Rio e em São Paulo em 1984”, *O Globo*, 11 de abril de 1984, <http://acervo.oglobo.globo.com/rio-de-historias/comicio-das-diretas-ja-levou-um-milhao-de-pessoas-candelaria-em-1984-8883947#ixzz4umeWQRnH>
- Ribeiro, Darcy. 2015. *O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil*. Rio de Janeiro: Global Editora.
- Sales de Lima, Eduardo. 2013. “Brasil de Fato. Decepção com a política agrária”. *Brasil de Fato*, 15 de enero. www.brasildefato.com.br
- Samis, Alexandre. 2012. “Sindicalismo e anarquismo no Brasil”. Documento inédito, <https://www.cabn.libertar.org>
- Soares, Guilherme de Almeida. “O que se esconde por trás do Movimento Brasil Livre (MBL)”. 25 Marzo 2016, <http://www.esquerdadiario.com.br>

- Valverde Da Silva, Ana. 2016. “El golpe militar brasileño y su herencia en los problemas sociales del país”. *Revista F@ro* 2 (24): 85-110.
<http://www.revistafaro.cl>
- Vergara, Patricio. 2004. “¿Es posible el desarrollo endógeno en territorios pobres y socialmente desiguales?”. *Ciencias Sociales Online* 3 (1) (septiembre): 37-52. <https://periferiaactiva.files.wordpress.com>
- Waiselfuiz, Julio Jacobo. 2015. *Mapa da violência 2016. Homicídios por armas de fogo no Brasil*. Brasília: FLACSO Brasil.

Capítulo 4

Resistencia civil al conflicto armado interno colombiano. El caso de la ATCC

Esperanza Hernández Delgado
y Claudia Patricia Roa Mendoza

La organización no pretende armarse para crear más violencia [...] nos hemos determinado a enfrentar a todos los armados con las manos en alto, con las banderas de la paz y sin disparar ni un solo tiro contra nuestros semejantes. A nosotros, todos los seres humanos nos merecen respeto, la vida de nuestros semejantes es sagrada. Les decimos a todos los que nos quieren matar que nosotros los campesinos también nos merecemos respeto, que tenemos sentimientos y que somos la base de Colombia.
Josué Vargas¹

La investigación para la paz y la historia de la paz ofrecen valiosas evidencias sobre los alcances de la resistencia civil en términos de construcción de paz (Hernández 2004, 2017; Sharp 1959, 2005; Randle 1998; Castañar 2013; Idler, Garrido y Mouly 2015; Ruiz 2006; López 2016; Hallward, Masullo y Mouly 2017).

La resistencia civil construye paz porque, sin recurso a la violencia, se oponen a regímenes políticos autoritarios, a ocupaciones extranjeras y a diversas formas de injusticia social (Sharp 2005; Randle 1998; Castañar

¹ Fragmento de la intervención pública de Josué Vargas ante el comandante Jerónimo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el 19 de mayo de 1987. A partir de dicha acción, se establecieron los acuerdos históricos de esta iniciativa de paz desde la base con las FARC (García 1996, 204). Vargas fue uno de los fundadores de la ATCC y su primer presidente. Lo asesinaron en febrero de 1990 junto a Miguel Ángel Barajas, Saúl Castañeda y la periodista Silvia Duzán, en una masacre perpetrada por los paramilitares.

2013). Se enfoca en transformar estas expresiones de violencias para proteger mínimos vitales: la vida, los territorios, las culturas, la autonomía y la dignidad humana (Hernández 2004, 2014). Posibilita, además, la transición de violencias destructivas a acuerdos sociales constructivos (Lederach 2000) y empoderan a quienes resisten, desarrollando en ellos capacidades para hacer las paces (Muñoz 2001; Martínez 2002; Hernández 2004, 2017). Permiten a su vez, superar las asimetrías de poder entre quienes resisten y sus oponentes (Dudouet 2012) y, en muchos casos, conducen a la negociación entre ellos (Hernández 2012; Dudouet 2012).

Un ámbito de estudio novedoso es el que analiza los alcances de la resistencia civil en los conflictos armados internos. A partir de la década de los 90, se cuenta con investigaciones sobre esta modalidad de resistencia, como: Randle 1998; Hernández y Salazar 1999; Hernández 2004, 2012, 2014; Cante 2007; Lederach 2000; Drago 2008; Mitchel 2012; Castañar 2013; Kaplan 2013; Idler, Garrido y Mouly 2015; Hallward, Masullo y Mouly 2017. Aunque estos trabajos contienen valiosos aprendizajes, queda mucho por explorar.

Es en el contexto mencionado donde se ubica este capítulo de libro. Abordar la experiencia de construcción de paz de la ATCC permite reencontrarse con realidades propositivas y esperanzadoras de Colombia, muchas veces desconocidas o insuficientemente conocidas (Hernández 2004, 2012). Esta experiencia campesina evidencia que Colombia, azotada por diversas y recurrentes violencias a lo largo de su historia, también es escenario de múltiples iniciativas de paz lideradas por quienes han recibido el mayor impacto de este fenómeno social (Hernández 2004, 2009a, 2014; Lederach 2008). El país cuenta con una historia de paz que es necesario reconocer, reconstruir y recoger.

La ATCC articula dos conceptos relevantes para las ciencias políticas y los Estudios de Paz: la resistencia civil y la construcción de paz. Esta experiencia evidencia los alcances de esta modalidad de resistencia en escenarios de alta conflictividad y en la modalidad de violencia que representan los conflictos armados internos (Hernández 2004; Valenzuela 2008; Kaplan 2013). Aporta valiosos aprendizajes sobre métodos, mecanismos,

competencias y características de la construcción de la paz desde las regiones, y en una dimensión de abajo hacia arriba o desde la base social (Hernández 2004, 2009, 2014; Valenzuela 2008).

En este capítulo se analiza, a partir de la teoría de resistencia civil, las condiciones que le permitieron a la ATCC asumir la asimetría de poder y dar alcances a su ejercicio de resistencia civil frente al conflicto armado interno colombiano.

Sobre la resistencia civil

Estudiar los significados de la resistencia civil implica entender el carácter indisoluble de su teoría y su práctica, así como su existencia a lo largo de la historia bajo modalidades que han evolucionado a través del tiempo (Randle 1998; Castañar 2013; López 2016).

A partir de la década de los 90, varios investigadores se encargaron de estudiar la resistencia civil (Hernández y Salazar 1999; Hernández 2004; Lederach 2008; Mitchel 2012; Castañar 2013; Idler, Garrido y Mouly 2015; Useche 2016). Este interés se explica por la estrecha vinculación de la resistencia civil con el cambio, con la transformación de la realidad y por ser un mecanismo de construcción de paz (Hernández y Salazar 1999; Hernández 2004, 2017; Lederach 1997, 2008; Dudouet 2012; Idler, Garrido y Mouly 2015).

La resistencia civil es un concepto polisémico. Puede ser comprendida como oposición, presión o lucha sin el uso de la violencia (Randle 1998; Hernández 2004, 2017). En los Estudios de Paz, esta resistencia es concebida como un mecanismo de gestión y transformación positiva de los conflictos (Galtung 1989), como empoderamiento pacifista y como mecanismo de construcción de paz (Hernández 2004, 2006, 2009a, 2017; Lederach 1995, 2008; Dudouet 2012; Idler, Garrido y Mouly 2015). Esta modalidad de resistencia enfatiza en la oposición activa y consciente frente a la violencia, aunque muchas veces se convierte en la antesala de mecanismos propios del ámbito de transformación de conflicto, como es el caso de la negociación (Dudouet 2012).

En forma generalizada, la resistencia civil ha sido comprendida como un mecanismo de lucha política y en esta modalidad se la denominó: “acción política no violenta” o “insurgencia no armada”, entre otras (Randle 1998; Schock 2008). En la historia reciente, con mayor énfasis a partir de la Segunda Guerra Mundial, también se la concibió como mecanismo de defensa (Sharp 1959; Randle 1998; Hernández 2004, 2017; Schock 2008; Drago 2008). En este contexto, los investigadores acuñaron diversas expresiones para nombrarla: “defensa civil”, “defensa con base cívica”, “defensa social” o “defensa popular no violenta” entre otras.

Para analizar el ejercicio de resistencia civil de la ATCC, consideramos el concepto de “defensa civil” con el que Drago (2008) definió esta modalidad de resistencia:

Este problema de superar las guerras es el máximo problema político del actual momento histórico de la humanidad [...] una defensa civil deseable para salir de la guerra moderna [...]. En la época contemporánea y, especialmente en el siglo XX la guerra perdió su separación entre civiles y combatientes, las fronteras son poco nítidas [...]. Por impulso popular, en la historia reciente, han ocurrido importantes episodios de defensa civil, entendida como respuesta no violenta a agresiones, invasiones, dictaduras [...]. Tantos episodios de lucha popular están en sintonía histórica con la decadencia de la guerra como instrumento de resolución de conflictos [...]. Defensa civil como cambio de paradigma [...] el nuevo paradigma es, por ejemplo, reconocible en la propuesta de Gandhi; se trata de cambiar toda una mentalidad, hasta el punto que la realidad sea percibida por las comunidades según un nuevo punto de vista: la no violencia, incompatible con el precedente: destrucción del adversario (Drago 2008, 111-119).

Desde comienzos de la década de los 90, en Colombia se registraron y documentaron diversos procesos de resistencia civil (García 1996; Hernández y Salazar 1999; Jaramillo 2002; Hernández 2004, 2012; Villarreal y Ríos 2006; Cante 2007; Flórez 2007; Idler, Garrido y Mouly 2015). Algunos se consolidaron, alcanzaron logros significativos y perduraron en el tiempo. Otros tuvieron un carácter incipiente. Estas experiencias han

sido identificadas por académicos e investigadores como iniciativas de paz de base social, escenarios de construcción de paz y empoderamientos pacifistas (Hernández y Salazar 1999; Hernández 2004, 2008, 2014; Lederach 2008; Idler, Garrido y Mouly 2015).

Las resistencias civiles evidenciaron en Colombia otras realidades más propositivas y por fuera de la violencia. Mostraron que los colombianos no estaban irremediabilmente atados a la violencia y que este país registraba diversos escenarios de construcción de paz: una paz perfectible y construida en una dimensión de abajo hacia arriba y desde las regiones (Hernández 2004, 2014). Las experiencias de resistencia civil en el país permitieron identificar poderes pacíficos transformadores, presentes en las poblaciones que aplicaban mecanismos no violentos para gestionar la conflictividad. La mirada de este país que solo se centraba en la violencia se amplió y las realidades de resolución pacífica de los conflictos pudieron evidenciarse ante distintos sectores sociales y de opinión pública a nivel nacional e internacional (Hernández 2004, 2012, 2017).

En este contexto se ubica la experiencia de resistencia civil de la ATCC, pionera entre las organizaciones campesinas que han ejercido esta modalidad de resistencia. Hasta el presente, es la única que recibió el premio Nobel Alternativo de Paz.

Estudios previos

Desde la década de los 80, la ATCC ha sido abordada por diversos acompañantes, investigadores y académicos (Sanz de Santamaría 1990; Jaramillo 1991; García 1996; Hernández 2004, 2012, 2014; Lederach 2008; Valenzuela 2008; CNRR y Grupo de Memoria Histórica 2011; Kaplan 2013). Los estudios iniciales se ocuparon de documentar el surgimiento y desarrollo del proceso organizativo (Jaramillo 1991; García 1996) y alguno de ellos lo definió como un proceso de paz (Sanz de Santamaría 1990). A partir de 2000, unos investigadores se ocuparon del “plan de desarrollo” de la ATCC y de sus formas de producción campesina. Desde el 2004, se analizó a la ATCC por un ejercicio que algunos académicos

identificaron como investigación para la paz (Hernández 2004, 2012; Kaplan 2013). Dentro de estos, unos documentaron el proceso de resistencia civil (Hernández 2004) y otros analizaron los alcances de esta resistencia frente al conflicto armado (Hernández 2004; Valenzuela 2008; Kaplan 2013). Algunos académicos analizaron la neutralidad de esta experiencia campesina (Valenzuela 2008) y otros su experiencia de mediación en el conflicto armado interno (Hernández 2012, 2013). Estudios recientes se han ocupado de su significación en la recuperación de memoria histórica (CNRR y Grupo de Memoria Histórica 2011); del papel de la ATCC en los procesos de reintegración de excombatientes (Mouly, Hernández y Giménez de próxima aparición) y, en el caso de la investigación que sustenta nuestro capítulo, de su significación como experiencia de resistencia civil en contextos de alta conflictividad.

La ATCC ha sido caracterizada de diversas maneras que se complementan entre sí. Algunos estudios la han identificado como iniciativa de paz de base social (Hernández 2004); resistencia civil (Hernández 2004, 2009, 2014; Sánchez 2011; Kaplan 2013); mediación comunitaria en el conflicto armado (Hernández 2012, 2013); recuperación de memoria (Sánchez 2011) y como experiencia de construcción de paz (Hernández 2004, 2012; Valenzuela 2008; Lederach 2008).

Contexto

Integran este contexto, la región del Magdalena Medio, el Carare y el área de influencia de la ATCC. Los dos primeros representan el escenario geográfico donde encuentra su origen esta experiencia de resistencia civil; y el último, el espacio natural del ámbito de acción de esta experiencia de resistencia civil.

El Magdalena Medio santandereano es una región exuberante y contradictoria. Allí se asientan la riqueza, la pobreza, la diversidad, las violencias y varios ejercicios campesinos que fueron pioneros de la resistencia civil (Hernández 2004). Allí se ubica El Carare, el escenario geográfico específico donde emerge la ATCC. Las características geográficas y sociales específicas de

esta zona inciden de muchas formas en el ejercicio de resistencia civil. Así ha sido descrito en otras investigaciones:

Se configuró desde la Colonia como un territorio periférico estratégico y de resistencias. Diferentes grupos sociales encontraron allí un refugio en el que construyeron la vida en medio del abandono estatal y de múltiples bonanzas dadas por los inmensos potenciales naturales de la región (Grupo de Memoria Histórica 2011, 25).

En cuanto al área de influencia de la ATCC, surgió con su ejercicio de resistencia noviolenta y se ha consolidado a lo largo de sus 30 años de existencia. Comprende 33 veredas de seis² municipios del Magdalena Medio santandereano, aledañas al río Carare o Minero.³ Alberga comunidades campesinas y afrodescendientes, y cuatro Iglesias: católica, evangélica, adventista y pentecostal. En esta zona, los conflictos y su resolución violenta no han sido causados por condiciones étnicas, ni creencias religiosas (Hernández 2004, 2012). Ha sido escenario de colonización y de expresión intensa del conflicto armado interno. En tiempos recientes, las iniciativas económicas privadas para la explotación del subsuelo también han constituido fuente de conflictos.

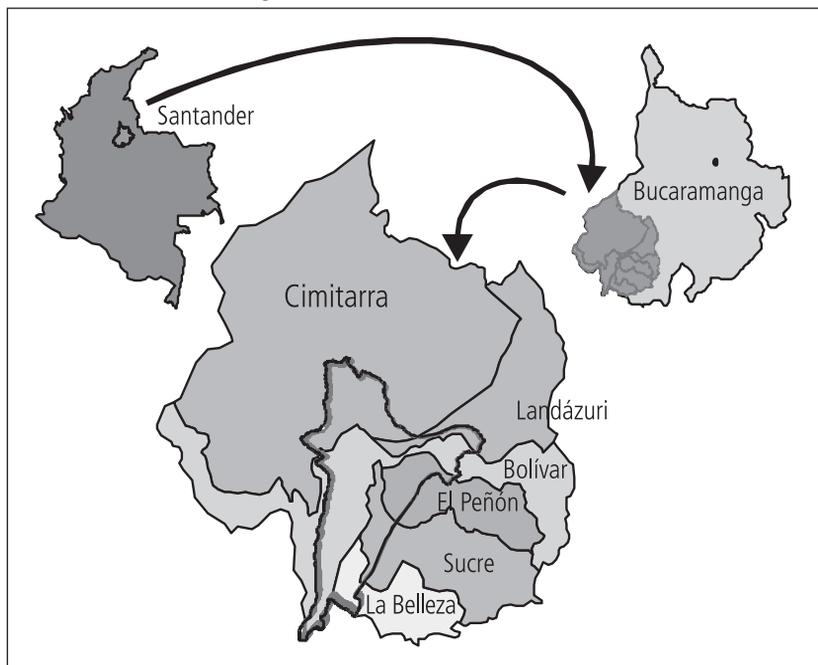
El espacio geográfico mencionado tiene una extensión de 94 126 hectáreas distribuidas en seis municipios del sur occidente santandereano: Cimitarra, Landázuri, Bolívar, El Peñón, Sucre y La Belleza. La ATCC concentra su influencia en la cuenca media del río Carare. En Bolívar se estima que es de 41,07 %, en Cimitarra de 24,26 %, en Sucre de 11,43 % y en el corregimiento de La India, que pertenece a Landázuri, de 5,56 % (ATCC 2017).

En el corregimiento de La India y las veredas que lo integran a lo largo del río Carare, se fundó la ATCC. Este proceso representa una auténtica experiencia campesina de resistencia civil que desafió la amenaza

2 Cimitarra, Bolívar, Sucre, Landázuri, el Peñón y La Belleza.

3 El río Carare es un afluente del Magdalena y representa la vía fluvial que comunica al corregimiento de La India con las veredas que integran el ámbito de acción de la ATCC. Según su curso, se denomina Carare o Minero (Hernández 2004, 309).

Figura 4.1. Zona de influencia ATCC



Fuente: documento inédito de ATCC.

de un conflicto armado generalizado y degradado. Sin duda, se convirtió en un ejemplo para Colombia y el mundo, al hacer ruptura en las lógicas de la guerra y defender, como lo indica su eslogan: “El derecho a la vida, la paz y el trabajo” de las comunidades que se asientan en este territorio (Hernández 2012).

Las violencias que hicieron presencia en el contexto geográfico y social del Carare representaron un factor determinante en el origen del ejercicio de resistencia civil de la ATCC. Se destacan dentro de las mismas: la *estructural*, expresada como pobreza y exclusión, y principalmente la *directa*, del conflicto armado interno, que surgió en el territorio a mediados de la década de los 70 y generó esta resistencia (Hernández 2004, 2012).

La resistencia civil de la ATCC

Esta experiencia campesina puede caracterizarse como una *resistencia no-violenta estratégica o pragmática*, dado que se originó a partir de necesidades, conveniencias y oportunidades. Como se verá en otro acápite, el ultimátum que un capitán del Ejército dio a los campesinos para que en 10 días decidieran si se integraban a la guerrilla o a las autodefensas, si se desplazaban o se quedaban en el territorio para morir; los llevó a considerar diversas alternativas, incluyendo la de armarse. Concluyeron que el mecanismo más conveniente era resistir a todos los actores del conflicto armado sin recurrir a la violencia (Hernández 2004, 2012). Sin desconocer el carácter pragmático de esta resistencia, se debe destacar que la ATCC ha desarrollado una comprensión del adversario muy cercana a *la perspectiva de la resistencia noviolenta por principios*. Para esta asociación, el opositor no es un enemigo que hay que destruir, sino un ser humano que asumió unas opciones y formas de lucha diferentes a las propias, y que es susceptible de cambio. Independientemente del daño que hayan podido causarles, dialogan y acuerdan con ellos, reconociéndoles la dignidad de su condición humana. A partir de esta comprensión, desarrollaron estrategias que buscaron “tocar su corazón”, aprovechando que los actores armados algunas veces nacieron, crecieron y tuvieron familia en la región (Hernández 2004, 2012; Isabel Serna; Braulio Mosquera, 2016, entrevistas).

La ATCC nació hace 30 años, en su momento fueron un grupo de campesinos líderes, lideresas que estuvieron frenteando el proceso. Han sido 30 años de permanecer en el territorio luchando por el derecho a vivir, siempre propendiendo porque vivamos, porque avancemos, porque trabajemos por vivir en este territorio. Josué, Saúl, Miguel, Simón Palacios, Ramón Córdoba son hombres muy aguerridos, ellos decidieron decir: “no vamos a jugar más el juego de los grupos al margen de la ley”. Nosotros como proceso decimos: “no queremos seguir en la guerra, no queremos poner más muertos”. Todo el campesinado se unió; en el año 87 fueron 2000 campesinos los que estaban presentes en la última reunión que se hizo con los frentes 11 y 23 de las FARC. Fue muy difícil en su momento porque eran hombres y mujeres diciéndoles a las FARC: “Bueno, aquí nos

tocó sentarnos y ver, porque no vamos a seguir poniendo más muertos”. Teníamos claro que no queríamos pertenecer a ningún grupo, eso era lo más claro que se tenía (Isabel Serna, 2016, entrevista).

Porque una persona es un actor armado. Vamos a conocer que también tiene un sentimiento. Eso influyó muchísimo. Y si se puede nombrar con nombres propios, se dice: “Don Álvaro, él es de acá”. Y muchos milicianos que había en ese tiempo en la guerrilla de las FARC eran de acá. Incluso, para recordar un poquito, nosotros como ATCC le hicimos el trabajo bajo la voluntad de Dios, de que se les respetara la vida. Porque, recordando los tres lemas fundamentales de la asociación que son: derecho a la vida, a la paz y al trabajo, nosotros –como ATCC– lo llevamos (a don Álvaro) ante el hoy excombatiente de las autodefensas –si se puede llamar así–, el señor alias Botalón y lo presentamos a él [don Álvaro] y llevamos a varios ese día. Y de allá sacamos el compromiso, que por orden de las autodefensas se les respetaría la vida a esas personas que habíamos llevado, mientras ellos cumplieran los pactos que había y no siguieran delinquiendo como fuerzas armadas al margen de la ley. Fue muy positivo el hecho de que hubiera miembros de la guerrilla de acá, de la región. Eso permitió tocar su corazón, saber cómo se mueve el alma, el espíritu. Y eso fue fundamental para nosotros porque iniciamos con pie derecho y esa es una fortaleza muy positiva (Braulio Mosquera, 2016, entrevista).

Esta resistencia también ha tenido un carácter esencialmente defensivo, se ha ejercido contra la violencia del conflicto armado interno y todos sus actores, y ha representado un valioso mecanismo de construcción de paz. Además, ha significado una puerta de entrada a procesos de mediación desde diálogos comunitarios con todos los actores armados. Esta modalidad permitió a la ATCC proteger la vida, en su comprensión más amplia, es decir, no solo la de los seres humanos, sino la de todas las especies y, también, defender su territorio, culturas, autonomía, organización comunitaria y desarrollar el empoderamiento pacifista de las comunidades que se asientan en el área de influencia de esta organización (Hernández 2004, 2012). Este ejercicio de resistencia permitió a los campesinos del Carare reparar la asimetría de poder frente a los actores armados, y fue determinante para que se les reconociera con el Nobel Alternativo de Paz en 1990.

La violencia que generó la resistencia civil

El conflicto armado constituyó la causa generadora de la experiencia de resistencia civil de la ATCC; de forma específica, las dinámicas de escalamiento del mismo, que convirtieron a la población civil en objetivo militar de todos los actores armados y en víctimas de esta modalidad de violencia.

Entre 1975 y 1987, el conflicto escaló y la población campesina, que más tarde integraría el área de influencia de la ATCC, fue objeto indiscriminado del accionar degradado de todos los actores armados (Hernández 2004, 323-326). En un primer momento, comprendido entre 1975 y 1982, este conflicto enfrentó al Ejército nacional y la insurgencia de las FARC. En una segunda fase que se extiende desde 1982 hasta 1987, el Ejército y las autodefensas combatieron a esta guerrilla (Hernández 2004). Durante este largo periodo, el conflicto cobró aproximadamente 500 víctimas directas, sin contar a las familias y comunidades de las que estas personas hacían parte.

La confrontación evidenció dimensiones de barbarie y terror sin límites (Hernández 2004, 325). En este contexto, la desaparición forzada, la tortura, el tiro de gracia, el asesinato selectivo, el bombardeo, el desplazamiento forzado y la mutilación de los cuerpos hasta segar la vida representaron las violaciones de derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario perpetradas contra los campesinos (Hernández 2004, 323-326). Estos hechos quedaron por siempre registrados en la memoria y generaron heridas que aún no han podido sanar:

Dada la voracidad de los grupos armados en la región, sus estrategias, el abandono del Estado, los múltiples problemas de una y otra índole, transporte, mejoramiento de vías, de tantas cosas, hubo momentos en que el pueblo se cansó. Con el tránsito libre, algunas veces intentamos tomarnos a Cimitarra para ir al batallón y tirar sobre la mesa ese tránsito libre y decir: “¡no más!, ¡no más!” [...]. El acoso de la guerrilla y posteriormente el acoso de las autodefensas que nacieron en el Magdalena Medio, pues como que gota a gota llegó el momento de revelarnos, porque esa ha sido como una de las características del ser humano, que soporta, soporta, soporta, pero llega

el momento en que no soporta más, se revela. [Como] ya no podíamos con tanta carga, y entre un comentario y otro de cada uno de los colonos, se fue creando –sin querer y sin pensar en ser protagonistas de la historia de la región– un sentimiento colectivo de que teníamos que oponernos a la barbarie que estaba ocurriendo (Jorge Suárez, 2010, entrevista).

En esa época, el río Carare fue testigo mudo de la barbarie al convertirse en depositario de cuerpos mutilados o sin vida. Así, dejó de transportar embarcaciones, productos agrícolas y madera, para arrastrar cadáveres. En algunos momentos se contaron hasta 15 muertos que bajaban por el río, endurecían el miedo y daban cuenta del horror (Hernández 2004, 2012).

Yo fui motorista como 14 años, y no eran vigas las que bajaban, eran seres humanos los que bajaban todos los días. Eran 10, 12, 15 muertos, río abajo; entonces, doctora, eso a uno le queda, lo tiene marcado en la cabeza (Alonso Ariza, 2010, entrevista).

La chispa que exacerbó la mayor conflictividad o la gota que desbordó la copa, al final de la segunda fase de violencia y escalamiento del conflicto armado, fue el ultimátum que el capitán del Ejército, Mauricio Betancur, junto con comandantes de las autodefensas, como “El Mojado”, les dio a los campesinos que se habían congregado en el corregimiento de La India. Según el mismo, la población contaría con un plazo perentorio de 10 días para optar por cuatro alternativas, todas inmersas en la violencia: vincularse a la insurgencia o a las autodefensas, desplazarse o morir (Hernández 2004, 328).

Llegó el capitán Betancur y nos dijo: “A ustedes los necesito allí en la escuela” y nos echó por delante. Ya después de que estábamos allí encerrados, pues ahí había más gente, yo no me acuerdo ni cuántos, pero siempre nos cogieron a nosotros como cabeza, entonces ya llegaron los señores paramilitares, el comandante “El Mojado”. Nos dijeron que nosotros teníamos tres caminos para escoger uno: nos íbamos con ellos, o nos íbamos con la guerrilla, nos íbamos o nos moríamos (Excelino Ariza, 2010, entrevista).

Dado el ultimátum, los campesinos no quisieron adoptar ninguna de las opciones propuestas en el mismo, porque, como dice Isabel Serna entrevistada en 2016: “Nosotros teníamos claro que tampoco queríamos pertenecer a ningún grupo. Eso era lo más claro que se tenía, ni para allá ni para acá”.

El surgimiento de la ATCC

De forma creativa y valiente, casi clandestina, pues por entonces estaban restringidos los derechos de reunión, expresión y locomoción, líderes comunitarios como Josué Vargas⁴ –quien gozaba de respetabilidad y credibilidad en la zona–, y líderes de la Iglesia adventista como Simón Palacios, entre otros,⁵ comenzaron a propiciar reuniones privadas y públicas para analizar el ultimátum y tomar una decisión comunitaria que resolviera esta situación (Hernández 2004, 327-329, 2012). Se exploraron diversas soluciones: desde armarse para la confrontación violenta, hasta oponerse pacíficamente. Se decidió rechazar las alternativas del ultimátum y buscar a cada uno de los actores armados para manifestarles de manera pacífica, pero firme, que debían poner punto final a la violencia ejercida contra ellos; que ellos recuperarían su autonomía como campesinos y protegerían sus derechos a la vida, la paz y el trabajo (Hernández 2004, 329-331). Así nos lo narró Mauricio Hernández:

Los campesinos optaron por comenzar a hacer estrategias, prácticamente casi que secretas porque en esa época, donde vieran más de tres o cuatro

4 Josué Vargas fue un líder que se destacó por su carácter directo, inteligencia, carisma, capacidad de oratoria, honestidad y valentía.

5 Simón Palacios es también un líder emblemático de la ATCC. Llegó a La India procedente del Chocó y desde entonces se ha distinguido como líder social y espiritual de la organización campesina. Fue fundador de la Iglesia adventista. Contribuyó con la importante apertura de la carretera de La India hasta Cimitarra. Como fundador de la ATCC, acompañó el primer ejercicio de resistencia civil y, desde ese momento, ha sido un líder incansable del proceso, en algunos momentos directivo de la organización y muchas veces mediador en el conflicto armado. Otras personas involucradas fueron: Héctor Piñeros (†), Salomón Blandón (†), Ramón Córdoba, Excelino Ariza, Manuel Serna, Jorge Suárez, Fernando Chávez (†) y Saúl Castañeda (†).

personas hablando, ya eran vistos como si estuvieran *craneando* algo para hacer en contra del Ejército. Entonces fueron estrategias donde se hablaban muy cortos tiempos y en diferentes lugares, y en sitios oscuros donde el Ejército de pronto no pudiera ver fácilmente. Y así mismo comenzaron a hablarse y a buscar cómo defenderse de esa violencia que había (Mauricio Hernández, 2016, entrevista).

En este contexto de alta violencia, un puñado de 22 campesinos humildes, valientes e inteligentes, materializaron por primera vez un ejercicio de resistencia civil frente al conflicto armado. Lo hicieron en nombre de una comunidad victimizada durante 12 años, que en ese momento desplegó su poder pacífico transformador mediante la resistencia civil (Hernández 2004, 330-331, 2012). Para lograrlo, primero contactaron a las FARC, tres o cuatro meses después al Ejército y, en 1991, a las autodefensas. En el discurso de Josué Vargas a la insurgencia de las FARC, del 21 de mayo de 1987,⁶ se refleja la propuesta de resistencia de la ATCC:

En adelante, ningún campesino más será muerto por la guerrilla, no nos exijan más favores, ni de comida, ni de transporte, ni de nada de eso [...] no vamos a asistir a las convocatorias que ustedes hagan para reuniones políticas [...] ustedes si es su voluntad, peleen contra el Ejército o el MAS,⁷ pero déjenos tranquilos [...] preferimos morir antes que aceptar más condiciones. Y si lo que ustedes quieren es matarnos, mátennos de una vez [...]. La Organización de Trabajadores Campesinos del Carare ha nacido para hacer frente a los asesinatos, a las violaciones a los derechos humanos, a las masacres y al caos. Hemos tomado una gran decisión: empuñar el arma de la razón y de la unión para hacer frente a nuestro gran problema. La organización no pretende armarse para crear más violencia [...] nos hemos determinado a enfrentar a todos los armados con

6 Intervención de Josué Vargas ante los comandantes Vidal, Gaitán y Chaparro de las FARC, el 21 de mayo de 1987 (García 1996, 193-195; Hernández 2004, 331).

7 En 1982 surgió en el Magdalena Medio santandereano, el grupo de autodefensa o paramilitar: Muerte a Secuestradores (MAS), producto de una alianza entre militares, ganaderos, políticos locales y representantes de empresas petroleras. Su propósito fue combatir a la insurgencia de las FARC y detener el avance de la izquierda política, mediante el uso de su estrategia de terror (García 1996, 132-135).

las manos en alto, con las banderas de la paz y sin disparar ni un solo tiro contra nuestros semejantes. A nosotros todos los seres humanos nos merecen respeto, la vida de nuestros semejantes es sagrada. Les decimos a todos los que nos quieren matar que nosotros los campesinos también nos merecemos respeto, que tenemos sentimientos y que somos la base de Colombia (Hernández 2004, 331).

Desde su surgimiento la ATCC ha dialogado con todos los actores armados. A través de esta práctica se lograron acuerdos significativos sobre el respeto a la vida y la asociación manifestó a cada grupo que si agredían a un campesino los agredían a todos. Se manejaron dos premisas clave: la vida era innegociable y no se prohibía la circulación por el territorio de ningún actor armado. Lo que sí se reprobó fue que vincularan a los campesinos al conflicto armado y ejercieran violencia contra ellos. De esta manera, la resistencia civil posibilitó el empoderamiento pacifista de los campesinos y de la ATCC; la delimitación de su área de influencia; la apertura del ejercicio de diálogo, mediación y negociación, y un modelo de interlocución y diálogo para que la propia comunidad resolviera sus conflictos sin mediación de los actores armados, como ocurría en el pasado.

Nosotros cuando hicimos los acuerdos con la guerrilla, nunca les dijimos que tenían que desocupar la región, les dijimos: “Ustedes se quedan aquí porque ustedes son colombianos y tienen derecho a andar por Colombia porque no se le pide pasaporte a nadie y las rutas son libres; pero no van a entrar a la casa de los campesinos, ni van a utilizar a los campesinos para que les hagan mercado. Si aceptan se quedan aquí todo el tiempo, nosotros no los vamos a sapear, no vamos a decir dónde están ustedes pero no se metan con el campesino”. Así ellos mismos se fueron saliendo, cada uno cogió donde su mamá, donde su papá, algunos se metieron donde los paramilitares, otros se quedaron aquí con nosotros y pocos se quedaron ahí. A los que se quedaron nunca les volvimos a repetir que habían sido guerrilleros. En su momento nosotros decíamos que éramos neutrales y ahora entendemos que la neutralidad es algo que no se mueve, nosotros nos queríamos mover en son de construcción de paz, de configurar una región estable tanto en el tema de derechos humanos como en el tema económico y ¿qué empezamos a hacer? A solucionar nosotros nuestros problemas, porque los grupos

armados al margen de la ley eran los que solucionan los problemas antes, incluso hasta de pareja, los problemas entre linderos, los problemas de: “Se robaron la gallina”, los problemas de: “El otro se avanzó tres metros de tierra”, o cuando alguien se iba y dejaba la tierra la guerrilla decía: “Que fulano la coja”. A partir de que nace la ATCC, nosotros dijimos: “No, aquí ustedes ya no toman más esas decisiones, aquí como campesinos nosotros nos reunimos y nosotros tomamos nuestras decisiones; si el vecino se avanzó el lindero, somos nosotros quienes decidimos y concertamos con ellos, en dado caso que no se solucione nada, que lo solucione el Estado, pero no más guerrilla y no más paramilitares aquí”. Las mujeres también hacían parte de eso, de ir a dialogar, había que caminar mucho (Isabel Serna, 2016, entrevista).

Hasta hoy tenemos que decir la verdad, la guerrilla de las FARC se comprometió a cumplir los pactos de cierto modo, en algunos momentos trataban de incumplir, pero como ATCC había algún espacio de concertación que nos permitía muchas veces a nosotros llegar y decir: “Aquí hay unos acuerdos” (Braulio Mosquera, 2016, entrevista).

Después del asesinato de sus líderes fundadores, como producto del ejercicio de resistencia de la ATCC, durante la década del 90, no se registraron pérdidas humanas ni hechos violentos asociados al conflicto armado (Hernández 2004, 2012). A inicios del siglo XXI surgió el narcotráfico como nuevo factor de violencia en la región; esto implicó asumir nuevos retos y desarrollar nuevas estrategias. Se reorganizó la estructura de la asociación buscando blindarla (Hernández 2012). En este territorio, durante los últimos 30 años, el reto ha consistido en: proteger los acuerdos y procurar su cumplimiento; mantener el proceso; asumir el conflicto desde sus posibilidades de resolución y transformación pacífica; fortalecer la cultura de paz de la cual se han apropiado las nuevas generaciones (Isabel Serna; Mauricio Hernández; Braulio Mosquera, 2016, entrevistas).

Cuando bajaban tres, cuatro, cinco muertos en el día por el río Carare, por el Minero, la cosa estaba en calma. Cuando hablábamos de más de 500 viudas en la región ya era eso exagerado. Y a causa de la disputa territorial porque había unos intereses que todos conocemos lo que acá hay. La realidad es que

esta es una comunidad que conquistó el territorio y la paz se quedó. Eso hace que ellos, los actores armados, perdieran esa fuerza, porque no es posible que Julio me mate a mi mamá y yo voy a seguir siendo amigo de Julio (Braulio Mosquera, 2016, entrevista).

En la actualidad, la ATCC tiene nuevos retos para su resistencia civil: defender el territorio frente a las iniciativas económicas privadas de carácter extractivo; buscar alternativas de desarrollo; luchar contra el olvido del Estado; fortalecer a los sujetos políticos como constructores de paz; garantizar los derechos a la vida, la paz y el trabajo. Como manifestó Isabel Serna (2016, entrevista): “Hoy la lucha de la ATCC está en la superación de la pobreza, la equidad, la educación”. De forma similar Braulio Mosquera (2016, entrevista) expresó:

Para mi pensar, mi visionar como Braulio, la ATCC después de 30 años resiste. Espera que esos acuerdos se sigan cumpliendo; espera que a través de un posconflicto venga el desarrollo, mejore la calidad de vida de sus pobladores y pobladoras, la educación en todo el sentido de la palabra, que se acabe el hambre, la necesidad [...]; porque la ATCC es la madre de todos estos procesos y lo que nosotros aportamos siempre, como directivos de otras organizaciones, va primero a la ATCC [...]; porque cuando nosotros llegamos, decimos: “Yo soy uno”. Desde ese Premio Nobel de Paz que se le otorgó a la ATCC en 1990, la cosa es muy diferente, cuando nosotros hablamos de Premio Nobel de Paz, los ojos van hacia nosotros. Ese premio Nobel es el que nosotros queremos que siga prevaleciendo y a través de él llegue el desarrollo, no solo para nosotros como carareños, sino para el país.

Métodos de la resistencia civil de la ATCC

Cuando surgió la experiencia de la ATCC, los campesinos que la generaron no habían estudiado ni a Gandhi ni a Mandela; no conocían la teoría de la no violencia, la resistencia civil, la resolución y transformación pacífica de conflictos, ni los enfoques de la paz. No obstante, en medio de las apremiantes necesidades que les impuso el conflicto armado, se organizaron como experiencia de resistencia civil y aplicaron diversos métodos

de lucha, basados en su inteligencia y sabiduría natural, su creatividad, su experiencia y sus apremiantes necesidades impuestas por el conflicto armado. Al colocarlos en diálogo con los ofrecidos por Sharp (1973, 2005), se encuentra que algunos de estos métodos se enmarcan en la tipología generada por este académico. También, que otros métodos pertenecen al ámbito de resolución y transformación de conflictos, como es el caso de la facilitación, la mediación y la negociación. A continuación, se reseña estos métodos:

La *no colaboración* con los actores armados representó el principal método empleado por la ATCC. Su aplicación hizo posible la ruptura de las lógicas del conflicto armado en la región y el fortalecimiento de la autonomía campesina (Hernández 2004, 2012). Se evidenció en manifestaciones directas y públicas a cada uno de los actores armados y en prácticas adoptadas por los campesinos. Un ejemplo de la primera acción fue lo que Josué Vargas les dijo a las FARC es su discurso durante el primer encuentro con esta guerrilla: “Hasta aquí mandaron ustedes. De ahora en adelante ningún campesino perderá la vida por cuenta de ustedes”. En cuanto a la segunda, los campesinos pactaron entre ellos el compromiso con su unidad y la no colaboración mencionada, reconociendo que en el pasado todos habían colaborado de alguna manera con los actores armados, así solo fuera dándoles un vaso de agua. El pacto era fundamental para recuperar confianza entre ellos y respecto de su proceso como ATCC. De ahí en adelante se comprometieron a no recibir en sus fincas a los actores armados, a no hacerles ningún mandado, y a no involucrarse de ninguna manera con ellos. De igual manera, acabaron con la ley del silencio: lo que le hicieran a uno sería como si se le hicieran a todos (Isabel Serna; Mauricio Hernández; Braulio Mosquera; Isaura Gamboa; Ramón Córdoba; Simón Palacios, 2016, entrevistas). El cumplimiento de estos compromisos fortaleció el ejercicio de resistencia civil y potenció sus alcances.

Yo pienso que dos factores fueron definitivos. Uno, la voluntad de Dios. Y el otro fue el poder que da la unión del pueblo [...]. Siempre he creído que lo que definió que ellos accedieran a las propuestas de la población,

de la comunidad campesina, fue ver a tantos campesinos reunidos exigiendo no más asesinatos selectivos, ni masacres, ni la utilización de la población y sus bienes para la guerra. Porque muchos antes habían hablado con ellos, pero los amenazaban, los mataban. Yo creo que la fuerza de la unión de la comunidad, del pueblo, siempre ha tenido mucho poder [...]. Yo pienso que esos fueron los factores determinantes que hubo ahí: la voluntad de Dios y el poder que genera el pueblo frente a las presiones, bien sea del gobierno o de los grupos armados al margen de la ley (Luis Serna, 2016, entrevista).

El aporte de toda la comunidad que se ha sacrificado porque la ATCC, la región del Carare y Colombia estén viendo un horizonte diferente, una forma de vida diferente en la que se respira, no digamos la paz que tanto hemos deseado, pero sí esa tranquilidad. Yo creo que es la voluntad y las ganas de hacer las cosas. Primero, se dejó ver a los actores armados; hablémos de la guerrilla las FARC, los frentes 11 y 23, se dieron cuenta de que la base fundamental de un ejército es la comunidad y esa era o fue la que nosotros como ATCC desde ese tiempo les quitamos. Ese es un factor muy importante porque, vuelvo y repito, un ejército no lo conforman los comandantes solamente, el ejército está conformado por toda su patrulla. Y esa patrulla es la que nosotros siempre hemos tenido, primero la patrulla, la voluntad; luego esa gente se ha creído que la paz es posible desde la unidad (Braulio Mosquera, 2017, entrevista).

Entre los *métodos de protesta y persuasión* aplicados se cuentan las declaraciones públicas de la ATCC ante los medios de comunicación, los foros académicos y las diversas asambleas comunitarias. De igual manera, las movilizaciones masivas de los campesinos por el río respaldando a los líderes del proceso en sus reuniones con los actores armados y los actos simbólicos en los que las comunidades enseñaban a dichos actores las fotos de sus seres queridos victimizados por su accionar (Hernández 2012).

En cuanto a los métodos del ámbito de resolución y transformación de conflictos, la experiencia de la ATCC aplicó el *método de la facilitación* al dialogar con todos los actores armados en procura de la protección de la vida, la paz y el trabajo. Acudió al *método de la mediación* en la conflictividad

generada entre las comunidades y los actores armados, y en gestiones más puntuales como resolver problemas familiares y comunitarios. La mediación de la ATCC está estrechamente ligada a la resistencia civil de los campesinos que integraron esta experiencia, porque fue resultado de la misma, dado que sentó las bases de la mediación. Es decir, esta resistencia sentó la postura de los campesinos ante los actores armados y a partir de la misma, abrió la puerta del diálogo y la mediación. Además, para quienes integran la ATCC, ambos mecanismos de construcción de paz son interdependientes.

La resistencia no violenta siempre se acompaña de una disposición para la mediación en el conflicto o la provoca. De igual manera, en algunos casos,⁸ la mediación se ha apoyado en la capacidad de resistencia campesina, anunciando que puede activarse de ser necesario, como mecanismo de persuasión (Hernández 2012). La ATCC aplicó también el *método de la negociación* con todos los actores armados, llegando a importantes acuerdos. La asociación dejó memoria de algunos de estos acuerdos en documentos suscritos por las partes y en grabaciones que se socializaban a las comunidades a través de parlantes situados en sitios públicos o de reunión (Hernández 2012).

La resistencia civil de la ATCC frente a la asimetría de poder

En este caso de resistencia civil la asimetría de poder entre quienes resistían y sus oponentes se expresó con claridad: los campesinos de la ATCC –altamente victimizados y desarmados– enfrentaron el poder militar de guerrilla, autodefensas y Ejército.

Los primeros ejercicios de resistencia no violenta de los campesinos de la ATCC les permitieron exponer su postura frente a los actores armados y dieron paso a sus posteriores prácticas de interlocución, mediación y negociación en el conflicto (Quiroga citado en Hernández 2012). Además,

8 En 2002 se registraron combates entre las FARC y las autodefensas, en las veredas La Auyamera y La Yumbila. Aunque los actores armados respetaron la vida de la población civil cumpliendo los acuerdos, afectaron bienes civiles y sembraron minas antipersona. Eso hizo que los campesinos abandonaran las veredas como mecanismo de resistencia y que los diálogos se realizaran con la presión del desplazamiento.

generaron un método para establecer contacto con los mismos y –algo fundamental– crearon condiciones para hablar de poder a poder con cada uno de ellos, del poder de la civilidad al poder de las armas. Esta resistencia permitió cambios fundamentales en la conciencia y en las relaciones de la población, sin los cuales no habría sido posible su práctica, ni el ejercicio de mediación, ni el de negociación con alcances. Por ejemplo, les permitió superar el miedo, les devolvió la confianza en su poder como colectivo; recuperó el uso de la palabra y la posicionó sobre el silencio y las balas; permitió su unidad; les permitió reconocer equivocaciones del pasado y asumir compromisos para superarlas en el presente y de cara al futuro (Hernández 2012).

El origen viene de primero, de esa resistencia que se hace y esa oposición. Ahí se colocaron unas condiciones a los actores. Uno: nos respetan la vida, un campesino no puede ser torturado, ni amenazado, ni nada; segundo: es que ni los actores tienen porque meterse en ninguno de los problemas; tercero: es decir no somos enemigos de ustedes pero nos respetan, que de ahora en adelante vamos a ser independientes, nos respeten esa manera de pensar y les respetamos a ustedes; cuarto: que nosotros éramos libres de buscar el desarrollo que quisiéramos, que nosotros buscamos la manera cómo íbamos a subsistir; quinto: [...] a nadie se le prohibía que se fuera para el actor que quisiera, y tampoco se obligaba a nadie que fuera de la asociación (Hernández 2012, 222).

Los grupos armados, cuando uno va, siempre tienen personas de la comunidad vinculadas por ideología, por necesidad, por afecto, por vínculos familiares, por intereses económicos, por supervivencia. Eso hace que el grupo tenga existencia en un territorio. Pero cuando todo un territorio toma una decisión, no pueden matar a 3000, 4000 campesinos. Ellos pueden hacer masacres selectivas. Pero ya 3000, 4000 personas en una masacre, digamos que eso tiene un impacto en su imagen, en sus planes políticos. Porque, aunque maten personas, el grupo no quiere exterminarlos a todos, el grupo lo que quiere es sometimiento. Es decir, yo te mato a ti esperando que el de allá entienda que tiene que hacer lo que yo diga. Con los acuerdos, ellos nunca estuvieron de acuerdo. Luego ¿por qué los

respetan? Porque ya se genera una imagen, unos imaginarios de una comunidad que se organiza en contra nuestra, y no queremos que esté en contra nuestra cien por ciento. Entonces, nos toca llevar la relación de poder. El pueblo organizado tiene un poder muy fuerte, ante cualquiera, incluso los Estados. Cuando el pueblo toma una decisión es un poder muy grande que puede transformar cosas (Luis Serna, 2016, entrevista).

Conclusiones

- La ATCC evidencia los alcances de la resistencia civil frente a los conflictos armados. Muestra la posibilidad de estas experiencias de superar la asimetría de poder entre quienes resisten y sus oponentes. En este caso, quienes resisten son campesinos marginados y victimizados, y quienes se les oponen son actores armados con poder militar. Esta resistencia otorgó poder a los campesinos y los empoderó para asumir la lucha inicial de resistencia noviolenta, y posteriormente la mediación y la negociación frente a los grupos armados.
- La resistencia de la ATCC puede caracterizarse como una resistencia noviolenta estratégica o pragmática. Los motivos que dieron lugar a su emergencia están ligados a necesidades, oportunidades y conveniencias, en un contexto de alta conflictividad causado por el conflicto armado. No obstante, los campesinos de la ATCC también han evidenciado elementos de la resistencia civil por principios, reflejados esencialmente, en su comprensión del adversario. A partir esta forma de resistencia, el actor armado no es percibido como un enemigo que hay que derrotar, sino un ser humano con dignidad, aunque haya optado por formas de lucha diferentes o no compartidas por la ATCC. Sin desconocer el daño que estos actores les causaron, los campesinos hablaron, mediaron y negociaron con aquellos que ponían en peligro sus vidas. En algunos casos llegaron a suscribir acuerdos con ellos para defender los mínimos vitales ya mencionados; e incluso en algunos casos, intervinieron pacíficamente para defender el derecho a la vida de los combatientes frente a sus enemigos, y siempre en perspectiva de construcción de paz.

- La ATCC ha utilizado métodos propios de la resistencia civil que se enmarcan en la tipología de Sharp (1973, 2005) y en algunos casos los han combinado con métodos de resolución y transformación de conflictos. Dentro de los primeros se pueden mencionar los métodos de persuasión y protesta, especialmente el método de no cooperación que fortaleció el ejercicio de resistencia civil de la asociación y le dio alcances. También combinó estos métodos con los de transformación de conflictos, como la interlocución, la mediación y la negociación. Los alcances de la ATCC frente al conflicto armado evidenciaron el acierto en la selección y combinación de estos métodos.

Sabemos qué es mediación, intermediación. Antes nosotros no entendíamos, la academia nos enseñó eso. Pero la experiencia, las ganas de sobrevivir, de estar tranquilos, de permanecer en el territorio nos hace florecer todas esas cosas. Hemos aprendido a entender cómo se llama cada cosa que hacemos con la academia, con el programa de desarrollo y sus talleres. Las que hemos llegado más lejos estudiando sí hemos aprendido sobre derechos humanos, la OIT, esas cositas, conocer las leyes, tener mecanismos para defendernos del Estado, sobre derecho internacional humanitario, violaciones al derecho internacional humanitario. Eso hemos aprendido a manejar con la academia (Isabel Serna, 2016, entrevista).

- El ejercicio de resistencia civil de la ATCC sentó las bases para su interlocución, mediación y negociación con todos los actores del conflicto armado. Así lo evidenciaron los alcances de esta resistencia como mecanismo generador de paz y la complementariedad entre resistencia civil y la construcción de paz.
- La resistencia civil de la ATCC evidencia la relación entre esta modalidad de resistencia y el empoderamiento pacifista. Su carácter exitoso evidenció que el ejercicio de resistencia desplegó la capacidad de los campesinos organizados para construir la paz. Sus logros significativos son prueba de ello: romper con las lógicas del conflicto armado, proteger la vida, la paz y el trabajo de las comunidades asentadas en su área de influencia, constituir la vía de acceso a mecanismos de resolución

y transformación pacífica de conflictos como la facilitación, la mediación y la negociación. Así lo menciona Simón Palacios:

La paz con arma produce más guerra; en cambio por el diálogo, podemos dialogar. Dialogamos con la guerrilla que no le íbamos a colaborar más y ellos dijeron que no iban a matar más y se selló la muerte (Simón Palacios, 2016, entrevista).

- La ATCC logró al interior de sus comunidades: superar el miedo y el silencio, reconocer equivocaciones, perdonarse y perdonar, organizarse, comprometerse con la propuesta de la resistencia no violenta y los compromisos que generaron los acuerdos suscritos con los actores armados.
- Desde el 2010 no es el conflicto armado el centro de atención de esta experiencia de resistencia civil, dado que han surgido nuevos retos que imponen otras violencias. Su exitoso ejercicio de resistencia al conflicto armado contribuyó para que en la actualidad esta modalidad de violencia no se exprese en su territorio. No obstante, han surgido otras modalidades de violencia que afectan o colocan en riesgo la región del Carare y sus comunidades, como es el caso de las iniciativas económicas extractivas de empresas privadas.
- Por medio de esta experiencia se observa la relación entre la resistencia civil de la ATCC, la construcción de la paz y la paz imperfecta. Todos los líderes e integrantes de la asociación reconocen su ejercicio de resistencia no violenta asociada a la construcción de la paz, que entienden en una perspectiva de paz imperfecta,⁹ es decir, inacabada y perfectible, denotando que:

Paz para nosotros es permanecer en nuestro territorio, con nuestra autonomía y con el respeto que nos merecemos, como colombianos, de tener una vida digna; el derecho a decidir cuándo nos morimos, el derecho a fortalecernos económicamente. Vivir en paz es que nos respeten nuestra

⁹ El enfoque de la paz imperfecta fue generado por Francisco Muñoz (2001). Plantea la imposibilidad de paces perfectas y propone una paz procesual, es decir, construida en el día a día, y a su vez, perfectible o susceptible de ser mejor o avanzar más. Reconoce que la paz coexiste muchas veces con la violencia y que se hace visible cada vez que se resuelven pacíficamente los conflictos, se contribuye al bienestar del ser humano, se reconocen experiencias y vivencias de paz y se contribuye a la articulación de estas.

autonomía y construir paz es hacer valer día a día ese derecho que tenemos de permanecer en el territorio, de hacerles entender al Estado que la paz no es ausencia de guerra, la paz es el derecho que tenemos todos a tener una vida digna. Nosotros como carareños entendemos que las guerras y la violencia son innatas en el ser humano, a diario vamos a vivir encontrándonos y chocándonos, pero, así como tenemos la capacidad de chocar podemos aceptar que nos equivocamos y empezar a construir de nuevo (Isabel Cristina Serna, 2016, entrevista).

Referencias

- ATCC (Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare). 2017. Vida y Paz. <http://atccvidaypaz.org/>
- Cante, Freddy. 2007. *Poder social. Algunas posibilidades en Colombia*. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario.
- CNRR (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación) y Grupo de Memoria Histórica. 2011. *El orden desarmado. La resistencia de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Carare (ATCC)*. Bogotá: CNRR / Grupo de Memoria Histórica.
- Castañar, Jesús. 2013. *Teoría e historia de la revolución noviolenta*. Barcelona: Virus Editorial.
- Drago, Antonino. 2008. “Defensa civil no violenta”. En *Ciudadanos en son de paz. Propuestas de acción noviolenta para Colombia*, editado por Mario López, Carlos Martínez y Óscar Useche, 111-119. Bogotá: Uniminuto.
- Dudouet, Veronique. 2012. “Resistencia noviolenta en las asimetrías de poder”. Traducción de David Barrero. En *Berghof Handbook for Conflict Transformation*, editado por Beatrix Austin, Martina Fischer y Hans J. Giessmann, 1-32. Berlin: Berghof Foundation.
- Flórez, Jesús. 2007. *Autonomía Indígena en Chocó*. Quibdó: Editorial Nuevo Milenio.
- Galtung, Johan. 1989. *Nonviolence and Israel/Palestine*. Honolulu: University of Hawai / Institute for Peace.
- García, Alejandro. 1996. *Hijos de la violencia: campesinos de Colombia sobreviven a “golpes de paz”*. Madrid: Libros de la Caratata.

- Hallward, Maia, Juan Masullo, y Cécile Mouly. 2017. "Civil Resistance in Armed Conflict: Leveraging Nonviolent Action to Navigate War, Oppose Violence and Confront Oppression". *Journal of Peacebuilding & Development* 12 (3):1-9.
doi: 10.1080/15423166.2017.1376431
- Hernández, Esperanza. 2004. *Resistencia civil artesana de paz. Experiencias indígenas, afrodescendientes y campesinas*. Bogotá: Editorial Universidad Javeriana.
- 2009a. "Paces desde abajo en Colombia". *Reflexión política*, 22: 176-186.
- 2009b. "Resistencias para la paz en Colombia. Experiencias indígenas, afrodescendientes y campesinas". *Revista paz y conflictos*, 2: 117-135.
- 2009c. "Resistencias para la paz en Colombia: Significados, expresiones y alcances". *Reflexión política*, 21: 140-151.
- 2012. *Intervenir antes de que anochezca: mediaciones, intermediaciones y diplomacias no violentas de base social en el conflicto armado*. Bogotá: La Bastilla.
- 2014. "Memoria, resistencia y poder pacífico transformador de pueblos indígenas de las Amazonas colombiana y peruana". *Papel Político* 19 (2): 497-525. doi.org/10.11144/Javeriana.PAPO19-2.mrpp
- 2017. "Resistencia civil y empoderamiento pacifista". *PAZSOS: Revista Paz Sostenible* 1 (2): 5-19.
<http://www.pazsostenible.org>
- Hernández, Esperanza, y María Salazar. 1999. *Con la esperanza intacta: experiencias comunitarias de resistencia civil no violenta*. Bogotá: Arte y Folito.
- Idler, Annette, María Garrido, y Cécile Mouly. 2015. "Peace Territories in Colombia: Comparing Civil Resistance in Two War - Torn Communities". *Journal of Peacebuilding & Development* 10 (3): 1-15.
doi.org/10.1080/15423166.2015.1082437
- Jaramillo, Carlos. 1991. *Y Dios se hizo paz en la vida de su pueblo: una reflexión desde la fe del proceso de paz de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare*. Bogotá: Programa para la Paz.
- Kaplan, Oliver. 2013. "Protecting Civilians in Civil War: The Institution of the ATCC in Colombia". *Journal of Peace Research* 50 (3): 351-367.
doi: 10.1177/0022343313477884

- Lederach, John. 1995. *Preparing for Peace: Conflict Transformation Across Cultures*. Syracuse: Syracuse University Press.
- 1997. *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. Washington D.C.: United States Institute of Peace Press.
- 2000. *El abecé de la paz y los conflictos: educar para la paz*. Madrid: Los libros de la Catarata.
- 2008. *La imaginación moral: el arte y el arma de la construcción de la paz*. Bogotá: Grupo Editorial Norma.
- López, Mario. 2016. “La resistencia civil examinada: de Thoreau a Chénoueth”. *Polis*, 43: 1-17. doi: 10.4000/polis.11508
- Martínez, Vancet. 2002. *Filosofía para hacer las paces*. Barcelona: Icaria.
- Mitchell, Christopher, y Catalina Rojas. 2012. “Against the Stream: Colombian Zones of Peace under Democratic Security”. En *Local Peacebuilding and National Peace: Interaction between Grassroots and Elite Processes*, editado por Christopher Mitchell y Landon Hancock, 39-67. Londres: Continuum.
- Mouly, Cécile, Esperanza Hernández, y Jaime Giménez. De próxima aparición. “Reintegración social de excombatientes en comunidades de paz de Colombia”. *Revista Análisis Político*.
- Muñoz, Francisco, ed. 2001. *La paz imperfecta*. Granada: Editorial Universidad de Granada
- Randle, Michael. 1998. *Resistencia civil: la ciudadanía ante las arbitrariedades de los gobiernos*. Barcelona: Paidós Ibérica.
- Ruiz, José. 2006. *El Desarme Nuclear Europeo (END). Movimiento social y diplomacia civil*. Granada: Editorial Universidad de Granada.
- Schock, Kurt. 2008. *Insurrecciones no armadas: movimientos de poder popular en regímenes autoritarios*. Bogotá: Universidad del Rosario.
- Sanz de Santamaría, Alejandro. 1990. *Reflexiones sobre la violencia política y la paz en Colombia*. Bogotá: Uniandes.
- Sharp, Gene. 1959. “The Meanings of Non-Violence: A Typology (revised)”. *Journal of Conflict Resolution* 3 (1): 41-64. doi.org/10.1177/002200275900300104
- Sharp, Gene. 1973. *The Politics of Nonviolent Action*. Boston: Porter Sargent.
- 2005. “Desarrollando una alternativa realista contra la guerra y otras expresiones de violencia.” En *Acción política no-violenta. Una opción*

- para Colombia*, compilado por Freddy Cante, 183-210. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario.
- Useche, Óscar. 2016. *Ciudadanías en resistencia: el acontecimiento del poder ciudadano y la creación de formas no violentas de re-existencia social*. Bogotá: Uniminuto / Trillas.
- Valenzuela, Pedro. 2008. "Construcción de paz desde la base: la experiencia de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, ATCC". En *Las prácticas de la resolución de conflictos en América Latina*, editado por Manuel Salamanca, 119-136. Bilbao: Universidad de Deusto.
- Villarreal, Norma, y María Ríos. 2006. *Cartografía de la Esperanza. Iniciativas de resistencia pacífica desde las mujeres*. Bogotá: IPIS / Corporación EcoMujer.

Capítulo 5

¿Cómo toma forma la paz localmente? La experiencia de resistencia civil en Samaniego, Colombia*

Cécile Mouly, María Belén Garrido y Annette Idler

¿Cómo pueden los civiles resistir a las lógicas del conflicto armado? A pesar de que existe evidencia empírica de iniciativas de resistencia civil que se producen en situaciones de conflicto armado interno, pocas obras académicas estudiaron las circunstancias bajo las cuales la resistencia civil tiene lugar en estos contextos, las formas que toma y los resultados que da disponer de diferentes estrategias frente a grupos armados (Arjona 2014). Con este capítulo contribuimos a llenar este vacío. Exploramos el caso del municipio de Samaniego en Nariño, departamento de Colombia, en un marco temporal que va desde 1997 –año de la primera movilización noviolenta significativa– hasta 2014. El conflicto armado colombiano ha afectado fuertemente a Samaniego, sobre todo desde finales de la década del 80. En 1948 el conflicto inició como un periodo de violencia, hasta derivar en una guerra civil entre guerrillas de izquierda y el Estado durante la década del 70. Cuando se redactó este capítulo, las dos guerrillas más importantes, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), continuaban combatiendo. Sin embargo, el gobierno y la insurgencia mantenían negociaciones formales de paz que estaban a punto de poner fin a la confrontación con las FARC, mientras que con el ELN se sostenían

* Este capítulo es una traducción del artículo original: Mouly, Cécile, María Belén Garrido y Annette Idler. 2016. "How Peace Takes Shape Locally: The Experience of Civil Resistance in Samaniego, Colombia". *Peace & Change. A Journal of Peace Research* 41 (2): 129-166.

conversaciones exploratorias.¹ Cuando Colombia se convirtió en uno de los principales productores mundiales de cocaína en los años 70, varios grupos armados se involucraron en el narcotráfico, lo que les sirvió para financiarse. Durante la década del 80, se crearon grupos paramilitares que más tarde formaron parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que también se beneficiaron del negocio de la droga. Aunque esta organización se desmovilizó entre 2003 y 2006, muchos grupos paramilitares más pequeños que le sucedieron se financiaron de esta forma.

Samaniego es una importante zona de tránsito para las rutas de narcotráfico y tráfico de armas debido a su ubicación estratégica en el departamento de Nariño, por ser limítrofe con Ecuador. Una de estas rutas va hacia el oeste, en dirección a la ciudad portuaria de Tumaco en el Pacífico, que es un punto para las salidas internacionales de la droga (Idler 2015, 98-99). Otra ruta se dirige al norte, hacia el estratégico departamento del Valle del Cauca y una adicional va al sur, en dirección a la frontera con Ecuador (Lázaro 2010; académicos; autoridades departamentales; miembros de organizaciones internacionales, 2014, entrevistas). En 1988, el ELN fue el primer grupo guerrillero que se estableció en Samaniego (Vásquez, Vargas y Restrepo 2011, 283-284; CNAI 2009). Los guerrilleros fueron acogidos por la población, pues intentaron llenar el vacío dejado por el Estado y prometieron más justicia social. En particular, utilizaron un sistema de trabajo comunitario llamado minga, en el que los miembros de la comunidad trabajaban juntos para contribuir al desarrollo socioeconómico de la localidad.² El ELN obtuvo un poder significativo y ejerció su autoridad sobre el municipio de forma encubierta. Solo aquellos alcaldes que eran avalados por la guerrilla podían gobernar y permanecer en el poder. A cambio de apoyar a un candidato, la guerrilla esperaba una parte de los fondos municipales para financiar su lucha armada. Los puestos clave en la alcaldía y en el hospital –dos de las principales fuentes de empleo local– eran ocupados por quienes tenían el visto bueno de la guerrilla

1 Al momento de finalizar la traducción del artículo, en julio de 2017, las negociaciones con las FARC concluyeron en la adopción de un acuerdo final de paz a fines de 2016 y se estaban desarrollando negociaciones formales entre el gobierno y el ELN.

2 Minga es una palabra cuyo origen proviene del idioma indígena quechua. Se refiere a un sistema de trabajo colectivo que ha sido implementado desde los incas en beneficio de toda la comunidad.

(Lázaro 2010, 245-246; pobladores locales; miembro de organización internacional, 2014, entrevistas). Aquellos que no estaban de acuerdo con estas reglas se enfrentaron a las consecuencias, como lo hizo el exalcalde Alejandro Bastidas, quien fue asesinado en 1994 (*El Tiempo* 1994; Cadena y Quiñónez 2002). Esto no era inusual en aquel momento, ya que varios alcaldes perdieron la vida a manos de insurgentes en la década del 90 (García Durán 2006, 234; *El Tiempo* 1994). Además, la débil presencia estatal le permitió al ELN establecer su propio sistema judicial que se basó en juicios sumarios (Larrota 2007, 113; Mitchell y Rojas 2012, 55).

Al momento de escribir este capítulo, Samaniego seguía siendo un bastión del ELN y la organización ejercía control sobre el centro urbano, áreas cercanas y gran parte del sector de la montaña (figura 5.1).³ Por su parte, las FARC operaban en la zona desde 1989 (Vásquez, Vargas y Restrepo 2011; Montúfar 2007).⁴ Este grupo se estableció, principalmente, en la parte sur-central del municipio, donde controlaba el cultivo de coca y, en menor medida, el de la amapola. Así como lo hizo el ELN, las FARC presionaron a las autoridades locales, aunque con menos intensidad (Lázaro 2010). Iniciando la década de 2000, dos unidades de las AUC entraron al municipio de Samaniego para combatir a las guerrillas (Vásquez, Vargas y Restrepo 2011; Montúfar 2007, 58). Después de su desmovilización en Nariño (2005), las AUC fueron reemplazadas por grupos posdesmovilizados criminales de derecha que manifestaron su presencia a través de amenazas y asesinatos selectivos (Garzón 2008, 7; Larrota 2007, 106; Restrepo 2006; Defensoría del Pueblo de Colombia 2007a). Después de casi tres años de enfrentamientos en la zona de Samaniego, a finales de 2009 las FARC y el ELN establecieron una alianza en varias regiones de Colombia, incluyendo Nariño. Acordaron respetar los territorios que controlaban, a la población y a la infraestructura civil, poner fin a las

3 El sector de la montaña se refiere al área rural al oeste del centro urbano de la municipalidad. Se lo conoce como “sector de la montaña” debido a que está localizado entre las montañas y está situado a una altura superior que el centro urbano (mapa 5.1). Alberga a gran parte de la población indígena de la municipalidad, que incluye a los pastos y awas. De acuerdo con el censo de 2005, la población indígena representaba menos del 1 % de la población en total de Samaniego, mientras que las personas afrodescendientes representaban menos del 2 % del total de la población (DANE 2005).

4 Al momento de finalizar la traducción del artículo en el que está basado este capítulo, julio de 2017, las FARC se habían desmovilizado y estaban concentradas en las zonas veredales de transición y normalización.

Mapa 5.1. Ubicación geográfica de Samaniego



hostilidades entre guerrillas y, en ocasiones, operar de forma conjunta (ELN y FARC-EP 2009; Mejía 2010; excomandante del ELN, 2014, entrevista). En este capítulo examinamos las experiencias de resistencia civil en Samaniego desde 1997 a 2014. Para ello distinguimos tres periodos clave: el primero, de 1997 al 2000, cuando la población se movilizó para poder

ejercer el derecho al voto sin interferencia de los grupos rebeldes y el alcalde Manuel Cuéllar declaró al municipio territorio de paz; el segundo, de 2004 al 2007, cuando el alcalde Harold Montúfar implementó el pacto local de paz y negoció con el ELN para remover las minas antipersona en el municipio; y el tercero, desde 2008 hasta el 2014, cuando la población del sector de la montaña se organizó para resistir al confinamiento causado por las minas sembradas por la guerrilla y decidió conformar un resguardo indígena con el fin de afirmar su neutralidad en el conflicto armado. Entendemos la resistencia civil como la aplicación del poder civil no armado mediante el uso de métodos no violentos como protestas, paros, boicots y manifestaciones, sin infligir o amenazar con infligir daños físicos al oponente (Chenoweth y Gallagher 2013, 271; Chenoweth y Stephan 2011, 12). En contextos de conflicto armado, la resistencia civil se utiliza a menudo para reducir la violencia directa, pero también para afrontar la violencia estructural y cultural. De esta manera, puede constituir una forma de construcción de paz a nivel local, es decir, un proceso de construcción de paz que se basa en agentes, normas e instituciones locales (Richmond 2011, 2012, 2013). Según Oliver Richmond, este proceso, por lo general, implica resistencia y agencia crítica. Además, es “por definición no violento y existe en un marco en el que la paz y la justicia son objetivos explícitos, más que la preservación de algún orden inicial existente (o nuevo)” (Richmond 2012, 26).

Para explicar nuestro caso, nos basamos en la literatura relacionada con la resistencia civil, la gobernanza rebelde y la construcción de paz. Aunque gran parte de la literatura sobre la resistencia civil está centrada en el uso de métodos no violentos contra gobiernos centrales autoritarios (Sharp 2010; Chenoweth y Stephan 2011; Ackerman y DuVall 2001), Erica Chenoweth y Maria Stephan reconocen que “la resistencia civil también puede enfrentar con eficacia a los actores no estatales violentos” (Chenoweth y Stephan 2011, 227). Entre los académicos que han estudiado cómo estos métodos se pueden usar contra actores no estatales violentos se encuentran Christopher Mitchell y Landon Hancock (2007), Ana Arjona (2014), Oliver Kaplan (2013a), Juan Masullo (2015) y Zachariah Mampilly (2011). Hancock y Mitchell, en particular, estudiaron el caso de

Samaniego bajo la perspectiva de las “zonas de paz”, un concepto que se refiere a un territorio en el cual los actores armados están llamados a “respetar ciertas reglas para limitar los efectos del conflicto armado” (Mouly, Idler y Garrido 2015, 53; Mitchell y Allen Nan 1996, 2; Hancock y Mitchell 2007, 1; Mitchell y Hancock 2012). En este capítulo complementamos esos estudios al explorar no solamente el establecimiento de una zona de paz sino también su implementación en Samaniego, centrándonos en la influencia que tienen los factores estructurales y la agencia, así como el resultado de varias iniciativas para reducir los costos del conflicto armado.⁵ Manejamos el término “territorio de paz”, el cual se usa comúnmente en el contexto colombiano para referirse a las zonas de paz. Con el fin de analizar los resultados de las diferentes estrategias utilizadas frente a los actores no estatales violentos, nos basamos en los hallazgos investigativos de Arjona, Kaplan y Mampilly, quienes examinaron las formas en que los civiles interactúan con estos actores en situaciones de conflicto armado interno (Arjona 2014; Kaplan 2013b; Mampilly 2011). Los estudios de caso de Arjona y Kaplan son similares al nuestro, pero difieren en un aspecto importante: se refieren a las formas en que los civiles interactuaron con las FARC y las AUC. En nuestro caso, sin embargo, resaltamos las interacciones entre los civiles y el ELN, el grupo armado dominante en Samaniego durante gran parte del periodo de estudio. Aunque estas cambiaron con el tiempo, dependiendo de los eventos y los comandantes locales, se caracterizaron por algún nivel de comunicación. Este capítulo complementa los trabajos de Arjona y Kaplan y evalúa la relevancia de sus hallazgos para tales interacciones. El trabajo de Arjona se centra en situaciones en las que un actor no estatal violento no tiene competidores, en lugar de situaciones en las que varios actores no estatales violentos compiten entre sí o se alían dentro de un determinado territorio, como ocurrió en Samaniego en diferentes momentos (Idler 2015, 106). Por ejemplo, la lucha entre las FARC y el ELN afectó significativamente al

5 En este capítulo no se busca probar ninguna relación causal entre estos factores y el resultado de las iniciativas de resistencia civil. Sin embargo, se ofrecen insumos útiles en cuanto a la importancia de considerar tanto a la agencia como a la estructura, y posibles factores que pueden afectar los resultados de resistencia civil en contextos como el de Samaniego. Idler, Garrido y Mouly (2015) discuten de manera más profunda dichos factores con base en un estudio comparativo de dos casos colombianos.

sector de la montaña antes del acuerdo de 2009 y fue una de las condiciones que generó la movilización de la comunidad contra la violencia. La presencia de varios grupos armados en el territorio, incluyendo las fuerzas de seguridad del Estado, también incide en las opciones disponibles que tienen los civiles para buscar cambios en el comportamiento de los grupos armados, las cuales varían según las relaciones de la población local con cada grupo y las que se dan entre los grupos.

Este capítulo está basado en el trabajo de campo realizado por las autoras en Bogotá (febrero de 2014), Samaniego (junio de 2014), Pasto, capital de Nariño (octubre de 2011, febrero de 2012, junio de 2014 y mayo de 2015), y Cali, capital del Valle del Cauca (octubre de 2014). También se revisó la literatura especializada y se analizaron fuentes documentales. Incluye más de 70 entrevistas semiestructuradas con autoridades locales, líderes de la sociedad civil local, políticos, profesores, clérigos, excombatientes del ELN, miembros de organizaciones externas (nacionales e internacionales) y un periodo de observación de cuatro días en Samaniego. Nuestro argumento se desarrolla de la siguiente manera: primero, examinamos cómo la agencia y la estructura interactuaron para facilitar o dificultar la movilización contra la violencia en Samaniego. Mientras que gran parte de la literatura sobre resistencia civil tiende a enfatizar factores estructurales o de agencia, estamos de acuerdo con autores como Chenoweth y Stephan, así como Schock, quienes argumentan que “la estructura del entorno político necesariamente moldeará y restringirá las percepciones de los líderes de la resistencia, mientras que las acciones de los movimientos de resistencia a menudo tienen efectos diferenciados e independientes en la estructura del sistema” (Chenoweth y Stephan 2011, 21; Schock 2005). Segundo, analizamos los factores clave que tuvieron impacto en el éxito de las iniciativas para reducir la violencia en Samaniego: factores estructurales, un alto nivel de participación y unidad en el movimiento y las estrategias de presión sobre los grupos armados para lograr los objetivos propuestos.

El doble rol de la agencia y la estructura en la movilización contra la violencia en Samaniego

Samaniego fue declarado “territorio de paz” en 1998, bajo el liderazgo del exalcalde Manuel Cuéllar. Este proceso fue el resultado de la combinación de factores ligados a la agencia y a la estructura a nivel local y nacional. A nivel local, las FARC y, sobre todo, el ELN ejercieron una “rebelocracia” en Samaniego durante muchos años, es decir, un sistema en el que la influencia del grupo armado sobre la comunidad rebasaba los ámbitos del orden público y la tributación (Arjona 2014, 5, 15-18; Mitchell y Rojas 2012, 55; González 1998). Después de casi 10 años de control caracterizado por amenazas contra las autoridades municipales que se atrevían a desafiar sus órdenes, las FARC secuestraron a Cuéllar durante la campaña electoral de 1997 y le obligaron a abandonarla después de su liberación. Frente a esta situación, la población local eligió a Cuéllar de forma masiva (Cadena y Quiñónez 2002). Además, se movilizó para solicitar el fin de la injerencia de las guerrillas en los asuntos municipales y a través de una carta abierta a los insurgentes reclamó el derecho a elegir las autoridades del municipio (El Tiempo 1997c, 1997a, 1997b).

El cansancio por la violencia en curso y la memoria colectiva del asesinato del alcalde Alejandro Bastidas unos años antes empujaron a la población local a rechazar la injerencia de la guerrilla (El Tiempo 1997a, 1997b, 1997c; Salcedo 1998). Según Arjona, la resistencia contra la gobernanza rebelde suele combinarse con la que se ejerce contra la violencia después de “una violencia intensa prolongada” (Arjona 2014, 25). No obstante, si bien en circunstancias similares la violencia directa puede obstaculizar la movilización social debido a los riesgos potenciales para los participantes y puede conducir a la normalización de la violencia debido a su “banalidad” (Pécaut 1999, 142), en este caso y otros ocurrió lo contrario (Hernández 2004). El alto grado de violencia generó una conciencia colectiva de que la situación era insostenible y debía hacerse algo al respecto. Según García Durán, el cansancio social de la violencia acumulada a lo largo de los años puede empujar a la gente a “superar el umbral del miedo” para pasar de la aceptación pasiva de la violencia a la resistencia activa frente a ella (García

Durán 2006, 148). Esta observación coincide también con los hallazgos de varios estudiosos de la resistencia civil que sostienen que la represión en sí misma ni disuade necesariamente a la gente de participar en campañas no violentas, ni determina el éxito de tales campañas (Chenoweth y Stephan 2011; Schock 2003, 2013, 283). La opresión excesiva puede incluso rebotar (Chenoweth y Stephan 2011; Schock 2013, 284). En este sentido, las amenazas de las guerrillas contra Cuéllar, en lugar de someter a la población, generaron una percepción de injusticia entre muchas personas en Samaniego, lo que las llevó a actuar. En ese momento, la situación llegó a un punto de inflexión. Aunque previamente la población realizó actos de resistencia parcial, es decir, acciones contrarias a conductas o decisiones específicas de los grupos armados pero que no iban en contra de todas sus reglas (Arjona 2014, 6-7), los pobladores se movilizaron por primera vez en masa para rechazar el comportamiento excesivo de los rebeldes de manera general.

La movilización de más de 2000 personas en Samaniego (de una población de alrededor de 50 mil) en 1997 y la declaración de territorio de paz en un acto público cuando Cuéllar asumió el cargo de alcalde en enero de 1998 también fueron producto de la agencia de actores locales quienes tomaron decisiones estratégicas frente a restricciones estructurales (El Tiempo 1997a, 1997b, 1997c; Cadena y Quiñónez 2002). Cuéllar tenía pocas opciones: cedía frente a las reglas de la guerrilla y gobernaba según sus expectativas, o ideaba una estrategia para desafiar la autoridad de la guerrilla y otros grupos armados en el municipio (profesor; autoridad local, 2014, entrevistas). El alcalde optó por el establecimiento de un territorio de paz, que ofrecía una alternativa a la rebelocracia, sin dar ninguna ventaja a los opositores de la guerrilla. También se esperaba que, al pedir a todos los grupos armados que respetaran a los civiles y a la infraestructura civil, la iniciativa llevara a una reducción de la violencia. Según Catalina Rojas, el establecimiento de zonas de paz ofrece un sentido de agencia a las personas que previamente fueron forzadas a seguir las órdenes de actores violentos (Rojas 2004, 72). Pero la agencia también afecta a la estructura: en este caso, el alcalde recién elegido y varios líderes contribuyeron a un sistema de gobernanza más participativo

y a un entorno local menos violento por medio de la declaración de un territorio de paz, así como el inicio de actividades para promover una cultura de paz.

A nivel nacional, el movimiento por la paz se fortaleció durante los últimos años de la presidencia de Ernesto Samper (1994-1998), quien condujo negociaciones de paz con el ELN, y en los primeros años de la presidencia de Andrés Pastrana (1998-2002), quien realizó negociaciones de paz con las FARC (García 2006; CINEP 2014).⁶ En este contexto, en 1996 y 1997 respectivamente dos eventos importantes tuvieron lugar. Uno fue el Mandato de los Niños por la Paz, en el que alrededor de tres millones de niños votaron por esta causa, incluidos los de Samaniego. El otro fue el Mandato Ciudadano por la Paz, en el cual los adultos votaron masivamente por la paz. La sociedad civil utilizó ambos mandatos para respaldar sus demandas de paz y alentó a los civiles de localidades afectadas por la guerra, como Samaniego, a buscar maneras no violentas de reducir la violencia circundante (García Durán 2006; CNAI 2009, 50). Adicionalmente, en 1998 se estableció un consejo nacional de paz mediante la Ley 434, que también contemplaba el establecimiento de consejos municipales de paz destinados a aumentar la conciencia sobre el conflicto armado y emprender acciones para limitar sus efectos negativos (García Durán 2006, 193).⁷ Además, a finales de los 90, la Red Colombiana de Iniciativas para la Paz y contra la Guerra (REDEPAZ) ejecutó un proyecto financiado por la Unión Europea denominado “100 Municipalidades de Paz”, en el que se apoyó el establecimiento de un territorio de paz en Samaniego. Este permitió a los actores locales compartir experiencias con sus homólogos de otros municipios que ya habían emprendido iniciativas similares y proporcionó elementos útiles sobre cómo implementar un territorio de paz (Rojas 2004, 2007; El Tiempo 2000b; miembros de ONG, 2014, entrevista). REDEPAZ desempeñó un papel decisivo en acompañar y capacitar a líderes locales, en particular a jóvenes y profesores, para fortalecer sus capacidades de construcción de paz en las etapas iniciales.

6 Ambos procesos de negociación con el tiempo fallaron: el primero al final de 1998 y el segundo a principios de 2002.

7 Ley 434/1998, de 3 de febrero de 1998, por la cual se crea el Consejo Nacional de Paz, se le otorgan funciones y se dictan otras disposiciones.

La iniciativa prosperó durante la administración municipal de Cuéllar, hasta el año 2000 cuando un nuevo alcalde fue elegido con la promesa de seguir con el proceso. Sin embargo, al asumir el cargo, le dio la espalda y volvió a los viejos arreglos con los actores armados. La falta de apoyo de las autoridades municipales obstaculizó los logros alcanzados hasta el momento, pero una serie de iniciativas continuaron con el impulso de líderes de base, como las dirigidas por jóvenes y profesores, incluida la prohibición del uso de escuelas por los grupos armados (profesor; miembros de las ONG; excombatiente, 2014, entrevistas; Mitchell y Rojas 2012, 56). La resiliencia de varios jóvenes líderes y maestros frente a circunstancias difíciles ayudó a mantener vivo el proceso, demostrando que la agencia puede superar los obstáculos estructurales (Rojas 2007).

Después de un estancamiento de tres años, el proceso recuperó su ímpetu con la elección de Harold Montúfar, un activista de la sociedad civil que había participado en las elecciones anteriores a la alcaldía, había sido secuestrado por el ELN durante la campaña electoral y liberado ocho días antes de que empezaran las votaciones (El Tiempo 2000a, 2000c; autoridades locales, 2014, entrevistas). Durante la campaña de 2003, Montúfar presentó una propuesta de paz y, al asumir su cargo en 2004, planteó un pacto local de paz que todos los grupos armados (estatales y no estatales) debían respetar para garantizar la coexistencia pacífica en el municipio.⁸ Durante el periodo de gobierno de Montúfar de 2004 a 2007, el contexto nacional parecía menos favorable para el establecimiento de la paz que durante el periodo de Cuéllar. La Política de Seguridad Democrática del entonces presidente Álvaro Uribe golpeó duramente a los grupos insurgentes, empujándolos con una mayor acción militar hacia la periferia del país y llevándolos a usar nuevas tácticas que no siempre estuvieron acordes con el derecho internacional humanitario (Dewar e Idler, de próxima aparición; International Crisis Group 2011). El gobierno central rechazó cualquier negociación paralela a nivel local y, en 2005, Uribe anunció que las comunidades de paz no podían ni permanecer neutrales en el conflicto ni “rechazar a las tropas del gobierno” (Mitchell y Hancock 2007, 211).

8 Montúfar (2007) y Lázaro (2010) reproducen el texto completo del pacto.

También advirtió a Montúfar, a través del Alto Comisionado para la Paz, que el pacto local de paz era ilegal (Ball 2011, 14; exautoridad local, 2014, entrevista).

Sin embargo, no todos los factores estructurales estaban contra las dinámicas locales de construcción de paz. En ese momento, el gobierno nacional se involucró en un proceso de paz con el ELN en La Habana, lo que creó un ambiente propicio para que esta guerrilla cumpliera las reglas del pacto local de paz. Los negociadores de paz contemplaron ampliar la participación a una gama más amplia de actores de la sociedad. Por ese motivo, Montúfar fue invitado a presentar su propuesta de desminado humanitario a las partes que negociaban en Cuba.⁹ Además, el pacto local de paz de Montúfar contó con el apoyo de las autoridades departamentales de la época, quienes colaboraron en esfuerzos tales como la liberación de rehenes. Las AUC también aceptaron el pacto, las FARC generalmente lo respetaron y el gobierno nacional finalmente lo avaló durante una visita a Samaniego por parte del Alto Comisionado para la Paz a finales de 2006 (Lázaro 2010, 249).¹⁰ Como Miall, Ramsbotham y Woodhouse argumentan, los cambios en cinco niveles (contexto, estructura, actor, tema e individuo-grupo) pueden facilitar o dificultar la transformación pacífica de conflictos (Miall, Ramsbotham y Woodhouse 2011, 175-176). En este caso, una combinación de cambios de contexto, estructura, actores y comportamiento individual favoreció el surgimiento del pacto local de paz.

El proceso retrocedió después de que la alcaldesa Yamile Montenegro asumiera el cargo en 2008, lo que demostró el importante papel que desempeñaba el alcalde. Tanto el fin de la administración de Montúfar, como

9 "Harold Montúfar en La Habana", video de YouTube, 6:14, a partir de una declaración en la IV ronda de conversaciones entre gobierno y ELN en la Habana, Cuba, publicado por "Instituto Sur ISAIS", 29 de enero de 2013, <https://www.youtube.com>

10 El Estado, el ELN y las AUC se pronunciaron públicamente al respecto en los medios de comunicación: "Pronunciamiento del ELN sobre el pacto local de paz", video de YouTube, 3:06, a partir de declaraciones a CNC en Samaniego, publicado por "Instituto Sur ISAIS", 29 de enero de 2013, <https://www.youtube.com> (visitado en febrero 20, 2015). "Pronunciamiento de las AUC sobre el pacto local de paz", video de YouTube, 1:27, a partir de declaraciones a CNC en Samaniego, publicado por "Instituto Sur ISAIS" <https://www.youtube.com>. "Alto Comisionado avala el pacto local de paz", video de YouTube, 0:40, a partir de declaraciones a los medios en Samaniego en diciembre de 2006, publicado por "Instituto Sur ISAIS", 16 de enero de 2013, <https://www.youtube.com>

el inicio del mandato de Montenegro fueron marcados por un recrudecimiento de la violencia debido a los combates entre las FARC y el ELN que buscaban controlar territorios. El aumento de la presión de las fuerzas de seguridad del Estado contra la guerrilla contribuyó a esta escalada violenta (Vásquez, Vargas y Restrepo 2011, 289-292; Mejía 2010). En este contexto, el ELN utilizó como escudo a la población del sector de la montaña y sembró minas antipersona en las vías de acceso para repeler a las Fuerzas Armadas colombianas (Orden 284/2008 de la Corte Constitucional; Orden 93/2008 de la Corte Constitucional; Mitchell y Rojas 2012). Esto resultó en el confinamiento de más de 3000 personas durante tres meses. En consecuencia, mucha gente se quedó sin alimento y dejó de recibir dinero por la venta de hojas de coca (El Tiempo 2008b; Cambio 2008; Orden 284/2008 de la Corte Constitucional; pobladores locales, 2014, entrevistas).

Frente a estas circunstancias y en la ausencia de apoyo de parte del gobierno municipal, la población del sector de la montaña decidió resistir y negociar con el ELN para aliviar su sufrimiento (Mejía 2010). Este proceso de resistencia civil fue consecuencia de factores relacionados con la estructura local, tales como una situación insostenible de confinamiento y una creciente exposición a la violencia, y la agencia de los pobladores unidos por un propósito común. Como mencionamos, la creciente violencia no siempre propicia la resistencia civil y a menudo fomenta la adopción de estrategias para sobrellevar y evitar dicha violencia (Moser y McIlwaine 2004, 179-182; Idler 2015, 132-143, 156-163). Sin embargo, una comunidad unida puede superar tales desafíos, como lo demuestran numerosos casos de iniciativas de resistencia civil que surgieron en contextos similares en Colombia (Hernández 2008, 140). Asimismo, como argumenta Arjona, los civiles toman en consideración una variedad de factores antes de decidir desafiar el orden impuesto por los grupos armados, entre estos las consecuencias de mantener el statu quo y cómo perciben su seguridad (Arjona 2014). Con respecto al primer punto, en este caso la situación de las comunidades confinadas era tal que las consecuencias de mantener el statu quo eran peores que las de alterarlo. Efectivamente, ante la escasez de alimentos y otros bienes básicos, la población del sector de la montaña

sentía que nada podría ser peor (Mejía 2010). En cuanto a la seguridad, tanto Arjona como Kaplan creen que la acción colectiva reduce la posibilidad de represalias por parte de grupos armados contra civiles que resisten, como se discutirá con mayor detalle en la segunda parte de este capítulo (Arjona 2014; Kaplan 2013a). La acción colectiva, a su vez, depende de la estructura de oportunidades, de los recursos organizativos y de las normas comunes compartidas, como lo plantean los teóricos de la política contenciosa (McAdam, Tarrow y Tilly 2001; Tarrow 1998).

En cuanto a los recursos organizativos, es importante destacar que el proceso de empoderamiento y organización del sector de la montaña había comenzado con anterioridad, en gran medida gracias a los esfuerzos del ELN por fortalecer la capacidad organizativa de las comunidades en ese lugar (exguerrilleros del ELN; religioso; miembro de organismo internacional, 2014-2015, entrevistas; Defensoría del Pueblo de Colombia 2007b). En 2002, la población local se había reunido en asamblea general para proponer un candidato al concejo municipal en las elecciones de 2003, el cual fue elegido (exautoridad local; excomandante del ELN, 2014, entrevistas). La movilización derivó así de un proceso de organización preexistente en la región, con el acompañamiento posterior de organizaciones nacionales e internacionales que habían tomado conciencia de la situación de Samaniego y se comprometieron a prestar apoyo.¹¹ En consecuencia, se establecieron diversas estructuras, entre ellas: un comité encargado de construir un puente para permitir que la gente saliera libremente de la zona afectada por minas antipersona, una organización de jóvenes, una asociación de mujeres y un comité de derechos humanos (líderes locales; miembros actuales y antiguos de organismos internacionales, 2014, entrevistas).

Después de analizar diferentes opciones para mantenerse fuera del conflicto, la población local decidió en 2012 conformar un resguardo indígena de 33 000 hectáreas en el que los pobladores se gobernarían a sí mismos y adoptarían una postura neutral ante el conflicto armado (líder local; ex miembro de organismo internacional; asesor externo, 2014, entrevistas).

11 En el informe de la misión humanitaria de verificación de la situación de las comunidades que habitan el sector de la montaña (2-5 de marzo 2010), se puede leer la lista de organizaciones que acompañaron el proceso: <http://ipitimes.com/samaniego031710.pdf>

Esta iniciativa surgió como resultado de la agencia de actores locales, aconsejados por actores externos, frente a la violencia predominante para evitar el desplazamiento forzado y reclamar su derecho legítimo a la tierra, un método de resistencia civil empleado en otros lugares de Colombia (Restrepo Castañeda 2006). El establecimiento de territorios de paz es, en efecto, una forma de resistencia colectiva que tiene tres objetivos principales: proteger la vida de los civiles, evitar el desplazamiento y evitar la estigmatización y los riesgos de ser colaborador de cualquiera de los actores violentos (Gray 2012; Mouly, Idler y Garrido 2015).

La decisión de establecer un resguardo indígena también coincidió con una estructura de oportunidades. La existencia de normas propicias a nivel nacional facilitó el establecimiento de tales resguardos y su administración por medio de estructuras autónomas de gobierno llamadas cabildos. Los cabildos tenían amplias competencias, entre ellas precautelar la seguridad pública a través de una guardia indígena tradicional, lo que facilitaba que las comunidades locales mantuvieran su imparcialidad en el conflicto armado, al proporcionar una justificación para solicitar, por igual, que las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos insurgentes no interfiriesen con el orden público (Constitución de Colombia 1991). Esta normativa y la experiencia acumulada de Samaniego como territorio de paz influyeron en la idea que tuvieron los líderes de base de establecer un resguardo indígena. Además, el asesoramiento y el apoyo de organizaciones externas como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) fueron cruciales en la decisión de los pobladores. Aunque muchos no eran indígenas, reconocieron que el establecimiento de un resguardo indígena administrado por un cabildo era la mejor manera de mantener la imparcialidad frente a las partes en conflicto, una estrategia analizada con más detalle a continuación (líder local; asesor externo, 2014, entrevistas).

Durante los casi 20 años estudiados, los contextos locales y nacionales incidieron en las dinámicas de construcción de paz en Samaniego. Sin embargo, si no hubiera sido por la agencia, el proceso podría no haber echado raíces o podría haber colapsado. Las dinámicas locales de construcción de paz fueron, por lo tanto, el producto de la interacción entre estructura y agencia o, en otras palabras, entre oportunidades políticas y elección

estratégica (Chenoweth y Stephan 2011). Si bien el papel de algunos actores, como los antiguos alcaldes Cuéllar y Montúfar, fue más visible en este proceso, las dinámicas locales de construcción de paz resultaron de la agencia combinada y el propósito común de múltiples actores, incluyendo algunos alcaldes, grupos juveniles, maestros y líderes campesinos, quienes se sentían cansados de la guerra y se volvieron cada vez más conscientes de la necesidad de buscar alternativas a la violencia.

Reduciendo la violencia en Samaniego: factores de éxito

¿Qué explica el éxito general de los esfuerzos de la población civil para reducir la violencia en Samaniego y persuadir a los grupos armados de cambiar su comportamiento? En este acápite buscamos responder a esta pregunta y contribuir a una mejor comprensión de los factores que llevan al éxito de las campañas de resistencia civil en contextos de conflicto armado. Se analizan tres conjuntos de factores clave a lo largo del tiempo. En primer lugar, analizamos factores estructurales, incluyendo el contexto sociopolítico y económico en el que se realizaron estos esfuerzos. En segundo lugar, consideramos las características de la movilización, incluyendo la participación, la unidad y el tipo de liderazgo. En tercer lugar, examinamos las decisiones estratégicas tomadas por los civiles en términos de los objetivos a alcanzar, el respeto de ciertos principios y las tácticas para obtener apalancamiento y ganar la aceptación de los grupos armados con el fin de lograr los objetivos propuestos.

Factores estructurales

Si bien los factores estructurales son insuficientes para explicar el éxito o el fracaso de las iniciativas emprendidas por los pobladores de Samaniego contra la violencia, identificamos tres categorías de factores estructurales que en nuestro caso fueron relevantes. La primera se refiere a las dinámicas de establecimiento y construcción de paz en las que Samaniego estaba inmerso.

Sostenemos que las negociaciones de paz a nivel nacional y la promoción de iniciativas de paz a nivel departamental crearon un ambiente propicio para las dinámicas locales de construcción de paz, mientras que el recrudecimiento del conflicto violento tuvo un impacto negativo. El segundo factor corresponde al contexto local del conflicto armado. Afirmamos que las situaciones en las que un grupo armado no compite con otros son más favorables al establecimiento de un territorio de paz que las situaciones en las que varios grupos armados se disputan el control. El tercer factor se refiere al acceso a los recursos externos, en particular la información sobre experiencias similares, el contacto con estas y el apoyo de actores externos, como ONG, la Iglesia u organizaciones internacionales.

Mitchell y Hancock identifican seis contextos en los que un territorio de paz puede evolucionar y argumentan que estos contextos presentan diferentes oportunidades y desafíos para los territorios de paz (Mitchell y Hancock 2007, 198). Las negociaciones de paz, en particular, ofrecen mejores perspectivas. Tienden a tener un efecto motivador en aquellos que luchan por la paz, como lo ilustran las altas correlaciones entre los periodos de negociaciones y la fortaleza del movimiento por la paz en Colombia (García 2006, 163-200; CINEP 2014, 24-25). Además, las partes negociadoras a menudo se preocupan más por su imagen, lo que puede contribuir a una reducción de los abusos. Sobre este punto volveremos al final de este acápite. Mientras tanto, un recrudecimiento del conflicto violento, especialmente después del fracaso de negociaciones de paz, puede obstaculizar los esfuerzos de paz locales. A nivel departamental, durante la mayor parte del periodo de estudio, las autoridades promovieron y apoyaron las iniciativas en lo local (Idler y Paladini 2015; experto en derechos humanos, 2014, entrevista). Por ejemplo, durante el periodo del confinamiento en 2008, el gobernador apoyó los esfuerzos para negociar con el ELN el retiro de minas antipersona en el sector de la montaña (El Tiempo 2008b).

El conflicto armado en Samaniego se intensificó en dos momentos particulares durante el periodo estudiado: alrededor de 2002, cuando los paramilitares desafiaron la hegemonía de las guerrillas en el municipio y de 2007 al 2009, cuando las FARC y ELN lucharon entre sí, mientras que las Fuerzas Armadas ejercían presión sobre los insurgentes y los nuevos grupos

paramilitares combatían contra las guerrillas (Vásquez, Vargas y Restrepo 2011). Aunque las iniciativas de resistencia civil continuaron durante estos dos periodos, el contexto fue menos propicio. En particular, las tendencias positivas en términos de reducción de víctimas disminuyeron, socavando algunos de los logros alcanzados por el pacto local de paz (Lázaro 2010, 254; Vásquez, Vargas y Restrepo 2011, 290-292). Además, como sostienen Mitchell y Hancock (2007, 201-202), cuando los grupos armados luchan por el territorio, es más difícil que respeten una zona de paz, ya que pueden considerar que cualquier intento que hagan los civiles de abstenerse de participar en el conflicto armado representará ventajas para sus enemigos.

Otro factor importante en el caso de Samaniego fue el acceso a información sobre otras experiencias similares de construcción de paz a nivel local –en su mayoría territorios de paz en Colombia– que proporcionaron referencias útiles. Samaniego pasó a formar parte del proyecto “100 Municipalidades de Paz” implementado por REDEPAZ y se benefició de la capacitación que brindó esta organización y del intercambio con comunidades que tuvieron experiencias similares. Por ejemplo, un líder del sector de la montaña que vivió en otras áreas donde tuvieron éxito iniciativas locales de paz reconoció que su conocimiento de experiencias similares le permitió liderar el proceso de resistencia civil (líder local, 2014, entrevista).

Características del movimiento de resistencia civil

Una vez analizados los factores estructurales, consideramos tres relacionados con las características del movimiento de resistencia civil en Samaniego que contribuyeron a su éxito: primero, la amplia participación; segundo, la unidad; y, tercero, el liderazgo representativo. Varios autores han destacado la importancia fundamental de la participación en la resistencia civil y la construcción de paz. Al respecto, a partir de un estudio de 80 campañas de resistencia civil, Chenoweth y Stephan afirman que cuanto mayor es el nivel de participación en una campaña de resistencia civil, más persistente es el movimiento y más eficazmente puede desafiar a sus oponentes, mirando una de sus principales fuentes de poder: el apoyo de las personas.

En este sentido, “los niveles más altos de participación contribuyen a una serie de mecanismos necesarios para el éxito, incluyendo una mayor resiliencia, mayores probabilidades de innovación táctica, mayor disrupción” (Chenoweth y Stephan 2011, 10). Idler, Mouly y Miranda (2015) sostienen que la participación en sí misma es una forma crucial de poder en las iniciativas locales de paz. Permite la organización paulatina de los civiles y contribuye a su empoderamiento (Pearce 2007). Si bien la participación de los pobladores de Samaniego en iniciativas para reducir la violencia varió con el tiempo, desde la movilización para solicitar la liberación de Manuel Cuéllar en 1997 hasta el final del mandato de Montúfar en 2007 la población en general apoyó estas iniciativas y se realizaron varias movilizaciones importantes (tabla 5.1).

Tabla 5.1. Movilización contra la violencia de parte de la población de Samaniego desde 1997 hasta 2014

Fecha	Tipo de movilización
21 de noviembre de 1997	Asamblea de más de 2000 personas para rechazar la injerencia de la guerrilla en las elecciones / Carta abierta a las guerrillas
23 de enero de 1998	Declaración de Samaniego como territorio de paz. Marcha de la sociedad civil con banderas y pañuelos blancos para pedir el fin de la violencia armada
15 de febrero de 2004	Lanzamiento del pacto local de paz, mediante una declaración pública
Marzo de 2004	Comunidades pertenecientes a 24 corregimientos del municipio expresan públicamente su apoyo a una solución negociada del conflicto armado
16 de mayo de 2005	Marcha de Samaniego a Pasto en apoyo al pacto local de paz y al desminado humanitario
24 de enero de 2006	Asamblea para celebrar la liberación del político local Héctor Bastidas
19-22 de diciembre de 2009	De acuerdo con diversos reportes, más de 600 personas del sector de la montaña marcharon hasta el parque central de Samaniego para pedir una salida negociada al conflicto armado

Tabla 5.1. (continuación)

Fecha	Tipo de movilización
24-31 de mayo de 2011	De acuerdo a diversos reportes, más de 2000 personas marcharon del sector de la montaña al parque central de Samaniego y organizaron un campamento exigiendo que las autoridades locales asuman sus responsabilidades (en audiencia pública). El comité de derechos humanos emitió un comunicado el 25 de mayo para solicitar la implementación de los autos 93 y 284 de la Corte Constitucional relativos al desminado humanitario
5 de abril de 2012	De acuerdo a diversos reportes, cerca de 300 mototaxistas lideraron una caravana por la paz de Samaniego a Las Lajas para solicitar la liberación de rehenes
5-12 de octubre de 2012	Semana de indignación a nivel departamental. Marcha de Samaniego a Pasto organizada por representantes de diversos sectores de la sociedad para protestar contra el conflicto armado, las minas antipersona, la militarización del territorio y la persecución de dirigentes que luchan por la defensa del territorio, entre otros temas
9 de abril de 2013	Marcha en solidaridad con las víctimas del conflicto armado en Samaniego
14 de junio de 2013	Marcha de protesta contra las amenazas recibidas por el sacerdote Serafín Bastidas y a favor de la paz
28 de octubre de 2013	Campamento en la plaza central con ocasión de la semana de la paz. Participaron más de 2000 personas, de acuerdo a diversos reportes
18 de diciembre de 2013	Marcha por la paz y en contra de los más recientes actos de violencia armada en Samaniego
19-29 de agosto de 2014	Caravana por la defensa del territorio, en contra del confinamiento y de las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario

Fuentes: varias entrevistas (2014, 2015), artículos de prensa, Lázaro (2010), Mitchell y Rojas (2012). Videos disponibles en Youtube: "Mototaxistas caravana a santuario de Las Lajas" (2012), "Marcha de solidaridad a las víctimas - 9 de abril" (2013), "Nariño se prepara para la movilización del 11 y 12 de Octubre" (2012), "Samaniego marcha por la paz" (2013).

Por ejemplo, en noviembre de 1997, cuando Manuel Cuéllar anunció su decisión de abandonar la carrera por la alcaldía, más de 2000 personas se reunieron en una asamblea popular para reclamar su derecho a elegir las autoridades municipales sin interferencia (El Tiempo 1997a, 1997b, 1997c). En consecuencia, Cuéllar impulsó la declaración de Samaniego como territorio de paz en un acto público después de asumir el cargo y

Tabla 5.2. Instituciones representadas en la Mesa de Trabajo por la Paz establecida para apoyar al territorio de paz en Samaniego

Tipo de institución	Institución específica
Salud	Hospital Lorencita Villegas de Santos
Autoridades locales del Estado	Concejo municipal, alcaldía municipal
Medios	Radio FM Samaniego Estéreo
Iglesia	Congregación de Hermanas Franciscanas, Programa Pastoral Social de la Iglesia católica
Sector privado	Banco agrario
Educación	Asociaciones de profesores y estudiantes, y otros grupos relacionados con la educación primaria y secundaria
Jóvenes y niños	Red juvenil de paz, Movimiento niños y niñas por la paz, ludoteca
Otros	Grupos del adulto mayor, voluntarios

Fuente: Cadena y Quiñónez (2002, 113) y entrevistas.

prometió una administración honesta (Cadena y Quiñónez 2002; Parra 1998; Rojas 2007). Las autoridades municipales buscaron la participación de la población local al difundir el contenido de la declaración en zonas urbanas y rurales del municipio, y al recolectar firmas a favor de la declaración con el apoyo de REDEPAZ (exautoridad local, 2014, entrevista; El Tiempo 1998). De igual manera, se creó una mesa de trabajo para apoyar el territorio de paz (tabla 5.2), compuesta por 47 adultos, 35 jóvenes y 27 niños de diferentes sectores de la sociedad (Cadena y Quiñónez 2002; Rojas 2007).

Durante la administración de Montúfar las autoridades municipales buscaron el apoyo de la población para el pacto local de paz. De acuerdo con las iniciativas mencionadas, establecieron un consejo municipal de paz, compuesto por 17 representantes de la sociedad civil de distintos sectores con el fin de asesorar a las autoridades municipales en cuanto a estrategias de construcción de paz (Mitchell y Rojas 2012, 57). También crearon un comité ciudadano de apoyo al pacto local de paz, integrado por los desplazados internos, el sector del transporte, el sector privado, las asociaciones campesinas, las ONG y la Iglesia (Montúfar 2007; Ball 2011). Un logro significativo del pacto fue la liberación de un político local que había sido

secuestrado por el ELN en 2005 (Lázaro 2010, 252).¹² La población local se movilizó masivamente organizando marchas y usando camisetas con su fotografía, mientras que se emprendían negociaciones con la guerrilla para asegurar la libertad del rehén. El movimiento de los niños por la paz también envió cartas al ELN expresando su deseo de paz y leyó estas cartas en la radio para que los guerrilleros las escucharan. Según un profesor, la presión de la comunidad fue crucial en la decisión del ELN de liberar al político, ya que los insurgentes comenzaron a darse cuenta del daño que esta situación había causado a su reputación, un punto sobre el que volveremos (profesor, 2014, entrevista). La importancia de la acción colectiva para hacer que los grupos armados cambien su comportamiento ha sido destacada por Kaplan, quien mediante entrevistas con excombatientes de grupos armados no estatales en Colombia encontró que “el respaldo y apoyo de toda la comunidad [era clave] para tener un impacto en el pensamiento [de los combatientes]” (Kaplan 2013a, 10). De igual manera, Arjona (2014) sostiene que los riesgos de emprender una resistencia contra los grupos armados de forma colectiva son menores que cuando se hace de forma individual.

Sin embargo, como enfatizan Chenoweth y Stephan (2011), la cantidad no es suficiente; la calidad importa también, algo con lo cual Lederach (2005) coincide, como lo ejemplifica la metáfora de la levadura crítica respecto de las iniciativas locales de construcción de paz. Según Lederach (2005), un grupo de líderes con conexiones estratégicas puede actuar como un catalizador para construir la paz. El alcalde Montúfar fue un líder de este tipo. Aprovechó los contactos que tenía con líderes locales del ELN para implementar su pacto de paz y negociar el desminado del municipio con fines humanitarios. En la década de los 80, había participado en un grupo juvenil cuyos miembros incluían a algunos jóvenes que más tarde se convirtieron en comandantes del ELN en Nariño (varias fuentes, 2014-2015, entrevista). Además, en aquel momento, muchos soldados rasos del ELN que operaban en la región eran originarios de Samaniego, tenían parientes y conocidos en el municipio y, según la información recabada, a menudo se rehusaban a infligir daño a las personas de las localidades donde

12 “Liberación de Héctor Bastidas”, video de YouTube, 0:46, publicado por Instituto Sur ISAIS, 16 de enero de 2009, www.youtube.com

habían vivido antes y a quienes podían conocer (excomandante del ELN; profesor; joven poblador local, 2014, entrevistas). Según Chenoweth y Stephan, las redes que conectan a los participantes de los movimientos de resistencia con aquellos contra quienes luchan son cruciales para el éxito de tales movimientos (Chenoweth y Stephan 2011).

El segundo factor relacionado que incide en el éxito de los movimientos de resistencia civil es la unidad. En el caso del sector de la montaña, la experiencia de organización comunitaria y los lazos familiares fomentaron la confianza para crear vínculos interpersonales. Compartir una identidad —o al menos una visión común— también facilita la cohesión de un movimiento de resistencia civil (Ackerman y Merriman 2015). La población local compartía condiciones de vida difíciles y se esforzaba por mejorar sus oportunidades socioeconómicas y por protegerse contra la violencia armada de tal manera que unieron esfuerzos para alcanzar estos dos objetivos. Frente a su situación de confinamiento en 2008, se organizaron y comenzaron a negociar con grupos armados para convencerlos de cumplir ciertas reglas, sobre todo con el ELN, a quien pidieron dejar de sembrar minas antipersona en las vías de acceso al sector de la montaña. Como explicó un dirigente local entrevistado en 2014, la gente se dio cuenta de que la unidad era la fuerza y permitía influir sobre las guerrillas. En su estudio cuantitativo sobre las campañas de resistencia civil, Chenoweth y Stephan también encontraron que un movimiento de resistencia civil unificado era “mucho más difícil de derrotar” por sus oponentes (Chenoweth y Stephan 2011, 44).

La unidad no solo proporciona a los civiles el poder de negociar con los grupos armados. Junto con una amplia participación, es una fuente de protección (miembro de ONG; experto en derechos humanos, 2014, entrevistas). De hecho, deshacerse de una o dos personas que resisten puede ser factible. Sin embargo, cuando una comunidad entera se involucra en actos de nocooperación, las consecuencias de mantener el mismo comportamiento se vuelven significativas (Kaplan 2013a; Arjona 2014). En el año 2011, por ejemplo, la población del sector de la montaña instó colectivamente a las autoridades municipales a atender sus necesidades básicas. Unos 1000 campesinos, apoyados por indígenas awás y pastos, caminaron hasta la plaza frente a la alcaldía. En el camino más gente se fue adhiriendo,

de modo que cuando las familias llegaron al parque central, el tamaño de la marcha se había duplicado hasta un estimado de 2000 personas (Notiagen 2011; Comité de derechos humanos del sector de la montaña de Samaniego Santa Cruz de Guachavez y La Llanada 2011; líder local; profesor, 2014, entrevistas). Los manifestantes permanecieron en la plaza central durante nueve días. Como explicó un poblador entrevistado en 2014, la unidad de los manifestantes disuadió a las fuerzas de seguridad del Estado de expulsarlos por la fuerza.

Un tercer factor relacionado que contribuye al éxito de los movimientos de resistencia civil es la representatividad de su liderazgo y la aceptación por parte de los pobladores locales (Mitchell y Hancock 2007, 212). García Durán distingue dos tipos de liderazgo: uno centralizado y jerárquico, como en el caso de los alcaldes Cuéllar y Montúfar, y otro más descentralizado e igualitario, como en el caso del sector de la montaña (García Durán 2006, 204). Tanto Cuéllar como Montúfar fueron elegidos por la mayoría de la población de Samaniego, con la esperanza de reducir la violencia directa y administrar los asuntos públicos de forma transparente. Aunque esto contribuyó al éxito de las iniciativas que las autoridades municipales implementaron para reducir la violencia durante ambos mandatos, la duración limitada de las administraciones de Cuéllar y Montúfar derivó en su falta de continuidad y en el debilitamiento del movimiento de resistencia civil durante las siguientes administraciones.

Por el contrario, el proceso de movilización en el sector de la montaña se basó en un liderazgo colectivo con amplio apoyo de la comunidad. Desde su inicio hasta 2014, involucró estrechamente a la población local en sus actividades. Por lo tanto, la evidencia de estos seis años sugiere una mayor sostenibilidad de las dinámicas locales de construcción de paz cuando son impulsadas por una agencia descentralizada e igualitaria, lo que es consistente con los argumentos de Ackerman y Kruegler (1994, 27). Además, aunque la población local no contaba con el apoyo de las autoridades municipales de la época, tuvo alcances significativos con respecto al desminado y logró evitar el reclutamiento forzoso de menores, así como asegurar la liberación de varios rehenes (líder local; ex miembro de organismo internacional, 2014, entrevistas).

Estrategias en contra de la violencia

Después de revisar las características del movimiento de resistencia civil contra la violencia armada, examinamos las decisiones estratégicas tomadas por los agentes para reducir la violencia en Samaniego, considerando: primero, el alcance, la especificidad y la factibilidad de los objetivos establecidos por el movimiento; segundo, los principios de noviolencia e imparcialidad; tercero, el apalancamiento y, cuarto, las maneras de generar incentivos para la aceptación de los actores armados por intereses propios (tabla 5.3).¹³

Tabla 5.3 Comparación de enfoques de resistencia civil entre tres periodos en Samaniego

Administración del alcalde Manuel Cuéllar (1998-2000)	Administración del alcalde Harold Montúfar (2004-2007)	Movilización de la población del sector de la montaña (2008-2014)
Declaración de territorio de paz	Pacto local de paz y desminado humanitario	Formación del cabildo de la montaña y proceso de legalización del territorio como resguardo indígena
1. Declaración de territorio de paz por las autoridades locales apoyada por la población	1. Imparcialidad hacia las partes en conflicto	1. Imparcialidad hacia las partes en conflicto
2. Imparcialidad hacia las partes en conflicto	2. Uso de símbolos para la protección de civiles y de infraestructura civil	2. Reconocimiento del derecho a la autodeterminación y gobierno propio
3. Capacitaciones en temas de paz para profesores, jóvenes, mujeres, etc.	3. Apoyo para una solución negociada al conflicto armado	3. Uso de fuerzas de seguridad propias (guardia indígena) cuando se formó el cabildo
4. Uso de símbolos para la protección de civiles y de infraestructura civil	4. Diálogo con las partes en conflicto	4. Desmilitarización del territorio
5. Presupuesto participativo	5. Negociaciones para la liberación de rehenes	5. Prohibición de hostilidades armadas en el territorio
6. Apoyo de REDEPAZ	6. Desminado humanitario	6. Prohibición de restringir la movilidad humana
	7. Presupuesto participativo	7. Prohibición de confiscar bienes básicos (alimentos, medicinas y gasolina)
		8. Apoyo de organizaciones nacionales e internacionales

13 El término original en inglés es *buy-in*. Aquí lo traducimos por “aceptación por intereses propios”.

Alcance, especificidad y factibilidad de los objetivos

Mientras que los académicos de la resistencia civil han estudiado sobre todo movimientos cuyo objetivo es la caída de una dictadura, los movimientos no violentos en situaciones de conflicto armado tienen como objetivo reducir la violencia directa –que en muchos casos la causan múltiples actores–, aunque a menudo también están preocupados por la violencia estructural. La falta de atención a ambos tipos de luchas en la academia es problemática (Schock 2013, 286). El estudio exploratorio de las zonas de paz por Hancock y Mitchell reveló que un factor importante que aumenta las posibilidades de éxito de estas experiencias es la adopción de una estrategia integral para proteger a la población de la violencia directa y abordar las causas estructurales de tal violencia (Hancock y Mitchell 2007, 46-47, 212). En Samaniego, las iniciativas emprendidas bajo los liderazgos de los alcaldes Cuéllar y Montúfar pretendían afrontar tanto la violencia directa como la estructural e, inclusive, la cultural.

Cuéllar desarrolló estrategias para encarar la violencia a la que estaban expuestos los civiles y, al mismo tiempo, la falta de oportunidades económicas en las zonas rurales, la cual había ocasionado que muchos pobladores participaran directa o indirectamente en el conflicto armado. Por un lado, decidió que Samaniego fuera declarado territorio de paz y apoyó diversas actividades como programas de radio y manifestaciones callejeras. Todas ellas expresaron el deseo de la gente de vivir en paz y su objeción a la guerra. Con el apoyo de REDEPAZ se formó un movimiento de niños y jóvenes por la paz, y se implementó un bachillerato para la convivencia pacífica (Cadena y Quiñónez 2002; Rojas 2007; profesores; autoridad municipal, 2014, entrevistas). Estas iniciativas fueron acompañadas con el uso de símbolos que se colocaron en la infraestructura civil para impedir los ataques de grupos armados. Durante la administración de Cuéllar, los pobladores utilizaron la mano blanca que era el símbolo de REDEPAZ. Por otro lado, el gobierno municipal permitió a los ciudadanos involucrarse, por primera vez, en la toma de decisiones sobre proyectos de desarrollo local mediante la implementación del “presupuesto participativo” (profesores; miembros de ONG; autoridad

municipal, 2014, entrevistas). Esta combinación de iniciativas le dio a la municipalidad cierta libertad para administrar los asuntos públicos y generó mayor conciencia de la necesidad de alternativas noviolentas al conflicto armado (González 1998). Sin embargo, el alcalde tuvo que ser escoltado por guardaespaldas armados debido a amenazas y actos violentos perpetrados en el municipio (El Tiempo 1998; González 1998). De manera similar, durante el gobierno de Montúfar, las autoridades municipales combinaron las estrategias para reducir la violencia directa –como el uso de símbolos naranjas para distinguir la infraestructura civil y protegerla de los ataques de grupos armados– con iniciativas para promover la transparencia y la democracia participativa (Lázaro 2010). Reanudaron la práctica del “presupuesto participativo”, establecieron un consejo municipal de paz y proyectaron la imagen de una nueva administración abierta al diálogo (Restrepo 2006).

La mayoría de las iniciativas emprendidas en Samaniego para reducir la violencia, tales como establecer un territorio de paz, el pacto local de paz y el proceso de desminado liderado por la población del sector de la montaña, comparten una característica similar: la formulación de objetivos claros, específicos y realizables. De acuerdo con Ackerman y Kruegler (1994), los objetivos concretos y alcanzables son fundamentales para el éxito de las campañas noviolentas. Como expusimos, compartir objetivos claros también contribuye a la unidad de un movimiento de resistencia civil. Además, por un efecto de bola de nieve, el éxito en el cumplimiento de los objetivos propuestos fortalece la cohesión de un movimiento y aumenta la participación al motivar a los integrantes a continuar sus esfuerzos y a que otros se unan a ellos (Ackerman y Merriman 2015). En el caso de Samaniego, la experiencia acumulada de las iniciativas que, de alguna manera, lograron frenar la violencia motivó a la gente a continuar con sus esfuerzos y contribuyó a la resiliencia del movimiento de resistencia civil.

Noviolencia e imparcialidad

El movimiento de resistencia civil en general mantuvo la disciplina no-violenta. La población local optó por medios noviolentos para lograr sus objetivos por dos razones. En primer lugar, eran conscientes de los efectos negativos de la violencia en la comunidad, al haber vivido las consecuencias de la guerra. En segundo lugar, así como actuaron otros civiles en circunstancias similares alrededor del mundo, los líderes locales se dieron cuenta de que, para alcanzar sus objetivos, la noviolencia ofrecía mejores perspectivas de éxito que la violencia (Ackerman y Kruegler 1994, 5; Chenoweth y Stephan 2011). La disciplina noviolenta hace que la represión se vuelva contraproducente en lugar de servir para controlar a la población local, como pretenden los grupos armados. En tal situación, los activistas comprometidos con la noviolencia pueden parecer moralmente superiores a sus oponentes ante el mundo exterior (Schock 2013).

En paralelo, la población local optó por la imparcialidad con respecto a las partes en conflicto, una socorrida estrategia en contextos similares, como lo demuestran los numerosos casos de territorios de paz en Colombia y otros lugares del mundo afectados por conflictos armados internos (Mitchell y Hancock 2007).¹⁴ El establecimiento de Samaniego como territorio de paz, el pacto local de paz y el proceso de creación de un resguardo indígena se basaron en el principio de imparcialidad. En este sentido, los pobladores se comprometieron a no colaborar con ninguna de las partes en conflicto y pidieron, a cambio, que los grupos armados no atentaran contra civiles o infraestructura civil. También la población del sector de la montaña decidió formar un cabildo en el que una guardia indígena mantendría la seguridad pública. Esta estrategia permitió a la población preservar su imparcialidad y solicitar tanto a las fuerzas de seguridad del Estado como a las guerrillas que no interfirieran con el orden público. El respeto a la imparcialidad permitió a los pobladores escapar con éxito a las lógicas de la guerra y al peligro de colaborar con alguna de las partes en conflicto. Efectivamente, en los contextos de conflicto armado, la manera

¹⁴ San José de Apartadó, San Francisco de Asís, Mogotes, Tarso y Micoahumado son los casos más conocidos de territorios de paz en Colombia.

más efectiva de mantener un territorio como un santuario que escapa a la lógica del conflicto armado “parece ser la completa abstención de cualquier participación en la lucha” (Mitchell y Hancock 2007, 205).

Apalancamiento

Otro factor importante para evaluar la efectividad de una estrategia de resistencia civil es el apalancamiento (Schock 2013). Según Kaplan, dos razones principales pueden llevar a los actores violentos a acatar las normas transmitidas por los civiles (Kaplan 2013a). El conocimiento de estas razones y la selección de tácticas que las toman en consideración pueden permitir a los civiles influir sobre los grupos armados. Una primera razón es la preocupación por su reputación, que suele ser particularmente relevante durante conversaciones de paz, cuando las partes negociadoras desean ser vistas en su mejor faceta. Es una razón más probable aun cuando los actores armados se comprometen en público a respetar normas de protección civil, como el derecho internacional humanitario, ya que irrespetarlas puede dañar su credibilidad e imagen ante el país y la comunidad. En tal caso, exponer inconsistencias –o amenazar exponerlas– entre las normas establecidas de conducta y la conducta real puede apalancar a un movimiento de resistencia civil (Kaplan 2013a). Una segunda razón corresponde a la dependencia que tienen los actores violentos con respecto al apoyo de la población local y las consecuencias negativas de perderlo. Tal como los teóricos de la resistencia civil argumentan, retirar el apoyo a un régimen en forma colectiva y no violenta puede conducir a su colapso (Sharp 2010; Ackerman y Kruegler 1994, 30; Helvey 2004). Cuando los grupos armados dependen del apoyo de la población civil y temen que ese apoyo desaparezca, son propensos a cambiar su comportamiento y respetar las normas definidas por los civiles (Kaplan 2013a). Por lo tanto, un factor crítico en el resultado de las estrategias de resistencia civil es la capacidad que tienen los civiles de usar, para su beneficio, las relaciones de dependencia que sus oponentes mantienen con respecto a ellos (Summy citado en Schock 2013, 283).

Por lo general, los grupos armados dependen de los civiles para su respaldo, protección e incluso el financiamiento de la lucha armada y están interesados en salvaguardar la lealtad de los lugareños (Arjona 2014). Los pobladores de Samaniego usaron ambas consideraciones como ventaja estratégica, con el fin de presionar a los grupos armados y/o negociar un acuerdo de beneficio mutuo según el cual los grupos aceptaran corregir su comportamiento para no dañar su reputación y mantener cierto grado de apoyo entre la población.

Dos acontecimientos importantes muestran cómo los samanieguenses utilizaron la preocupación de los grupos armados por su reputación para empujarlos a cambiar de comportamiento y “extendieron el campo de batalla” al obtener apoyo externo para su causa (Chenoweth y Stephan 2011, 27). Primero, el alcalde Montúfar utilizó la presión pública para convencer al ELN de que aceptara su propuesta de desminado. Al ir a Cuba a negociar con el ELN, como parte del proceso de paz a nivel nacional, puso su propuesta de desminado en el centro de atención. Esto, junto con la presión local de la mayoría de los pobladores que apoyaban la iniciativa de Montúfar, llevó al ELN a hacer concesiones y comprometerse a desminar ciertas áreas (Montúfar 2007, 63; El Tiempo 2006; Diario del Sur 2006). En segundo lugar, en 2008, cuando los pobladores del sector de la montaña estaban confinados, difundieron su situación tanto como les fue posible para obtener apoyo y presionar al ELN, que no quería ser considerado responsable de las consecuencias humanitarias del confinamiento prolongado de la población local (Mejía 2010). Algunos dirigentes fueron a Bogotá para exponer su situación en el Tribunal Permanente de los Pueblos, un tribunal de opinión de la sociedad civil que se ocupa de casos de violaciones a los derechos humanos.¹⁵ Esta gestión también les permitió hablar con los medios de comunicación y organismos internacionales (líder comunitario, 2014, entrevista). Como resultado de estos esfuerzos, por ejemplo, tres miembros extranjeros de la ONG nacional Sembrar organizaron una visita de campo al sector de la montaña y reportaron la situación ante organizaciones

15 El Tribunal Permanente de los Pueblos es un organismo internacional creado bajo el auspicio de la Fundación Lelio Basso, que tiene representaciones en diferentes países, incluyendo Colombia. Maneja casos cuando la justicia nacional falla en hacerlo. <http://www.internazionaleleliobasso.it>

internacionales.¹⁶ Bajo presión nacional e internacional, el sistema judicial intervino finalmente, con la Corte Constitucional emitiendo un auto en 2008 para prestar asistencia humanitaria a las comunidades confinadas (Orden 284/2008 de la Corte Constitucional).

De igual forma, los civiles aprovecharon que los grupos armados dependían de la población local para obtener concesiones, como lo ilustran diversas iniciativas durante el tiempo de confinamiento. Por ejemplo, la población de San Diego, un corregimiento del sector de la montaña que había sufrido confinamiento durante varias semanas, decidió en asamblea negociar con el ELN el respeto de ciertas reglas. La comunidad pidió a los rebeldes que les permitieran libertad de movimiento o todos se irían. Como la guerrilla dependía del apoyo de la población de este corregimiento estratégico por su ubicación, no tenían otra opción que aceptar la petición (líder local, 2014, entrevista). La amenaza de la emigración voluntaria masiva, por lo tanto, permitió a la población de San Diego negociar con la guerrilla desde una posición de fuerza. Hicieron comprender al ELN que, si la población abandonaba el territorio, ya no habría nadie que protegiera a los insurgentes de los ataques de las Fuerzas Armadas (Mejía 2010). Esta advertencia hizo eco en la guerrilla, porque varios campesinos del sector de la montaña anteriormente habían abandonado sus tierras para reasentarse en campos de desplazados en el área urbana del municipio (pobladores, 2014, entrevistas; El Tiempo 2008a).

La dependencia de los guerrilleros de la coca cultivada por los campesinos, así como la comida y los aportes financieros de los lugareños, proporcionó a los líderes del sector de la montaña otro medio de apalancamiento en las negociaciones con la guerrilla. Según Jeremy Weinstein (2007), los grupos insurgentes son más propensos a acoger las demandas de la población si dependen de esta para financiar su lucha. Las negociaciones de los pobladores con el ELN sobre la remoción de minas comenzaron en 2008 y resultaron en la aceptación de la guerrilla de solo sembrarlas en ciertos lugares, permitir el paso libre de civiles durante ciertas horas del día y colaborar

16 En la página web de la ONG Sembrar se encuentra información sobre una visita más reciente al área que incluye un reporte sobre amenazas a líderes del sector de la montaña de Samaniego: <http://corporacionsembrar.org/index.php/territorios/27-narino/43-caravana-por-la-defensa-del-territorio>

con la desactivación de algunos de estos explosivos (Mejía 2010; miembro de organismo internacional, 2014, entrevista). Este enfoque colaborativo tuvo más éxito que las anteriores acciones de desminado llevadas a cabo por el Ejército colombiano junto a la Organización de Estados Americanos (OEA), las cuales no cumplieron las expectativas, ya que solo un limitado número de minas antipersona fue removido por expertos, a pesar del alto costo del programa (El Tiempo 2010; Mejía 2010; exautoridad local; profesor; miembro de organismo internacional, 2014, entrevistas). La población local, en un corto tiempo, logró que los guerrilleros eliminaran 35 minas de la vía de acceso principal que lleva al sector de la montaña y proporcionaran información sobre cuáles caminos fueron minados (Mejía 2010; miembro de organismo internacional, 2014, entrevista). Durante el proceso de negociación se acordó además que los líderes locales podrían comunicarse con el ELN por celular si fuera necesario (pobladores locales; experto en derechos humanos, 2014, entrevistas).

Maneras de generar incentivos para la aceptación de los actores armados por intereses propios

En situaciones de conflicto armado es importante suscitar el interés de los grupos beligerantes para que acepten las propuestas de los civiles (Hancock y Iyer 2007, 45-46). Aquí podemos distinguir dos tipos de estrategias. Por un lado, se encuentran las propuestas presentadas por civiles sin tener un diálogo previo con los grupos armados como, por ejemplo, la declaración de Samaniego como territorio de paz. Por otro, están las que se derivaron de un diálogo con los grupos beligerantes, como el pacto local de paz y el proceso de desminado impulsado por los líderes del sector de la montaña (Mitchell y Hancock 2007, 207). Durante la administración de Cuéllar, las autoridades municipales anunciaron su propuesta de un territorio de paz sin consultar al ELN ni a otros grupos armados. Sin embargo, Cuéllar tuvo la oportunidad de explicar el programa durante su breve detención por el ELN antes de asumir el cargo de alcalde. Si bien es difícil medir el efecto que esta breve interacción tuvo

en la postura del ELN frente al establecimiento de un territorio de paz, pudo haber incentivado a la guerrilla para apoyar la propuesta (exautoridad local, 2014, entrevista).

Mientras tanto, el pacto local de paz fue presentado a grupos armados con los cuales las autoridades municipales estaban dispuestas a negociar (exautoridad local, 2014, entrevista). Las autoridades buscaron vías para entablar un diálogo con todos los grupos armados, principalmente con el ELN, pero también con los militares, las FARC y las AUC. El ex portavoz del ELN, alias Francisco Galán, reconoció que las autoridades municipales habían consultado a la guerrilla sobre el pacto local de paz y el desminado humanitario.¹⁷ Asimismo, un excombatiente del ELN entrevistado en 2014 aseguró que las autoridades municipales habían consultado a la guerrilla antes de hacer público el pacto. Si bien es imposible aislar los efectos de otros factores sobre la efectividad del pacto local de paz, la significativa reducción en la violencia lograda durante su implementación apunta a una mayor probabilidad de que los actores armados cumplan las normas establecidas en un territorio de paz si se les consulta sobre tales reglas (Mitchell y Hancock 2007, 212). Más de 63 homicidios habían sido registrados en Samaniego en 2003, antes de la administración de Montúfar. Un año más tarde, cuando comenzó la ejecución del pacto, el número de homicidios descendió a 58. Dos años más tarde, bajó a 47 asesinatos. Tres años más tarde, cayó a 28. Cuatro años después, durante el último año en que gobernó Montúfar, llegó a su punto más bajo: 24 (Lázaro 2010, 251; profesor; autoridades, 2014, entrevistas).

Cuando el gobierno de Uribe negoció un segundo acuerdo de desmovilización con las AUC en 2004, Montúfar asistió a una reunión nacional con los paramilitares que fue difundida en la televisión nacional, donde hizo público el pacto y preguntó a las AUC sobre un supuesto plan para asesinarlo (exautoridad local, 2014, entrevista). La estrategia de negociar directamente con los actores armados y presionarlos en público para que respeten las normas de protección civil dio frutos: tanto el ELN como las

17 “Francisco Galán ex ELN visita Samaniego”, video de YouTube, 9:33, a partir de una declaración pública en Samaniego, publicado por “Instituto Sur ISAIS”, 19 de julio de 2013, <https://www.youtube.com>

AUC aceptaron de manera formal el pacto local de paz en junio y noviembre de 2004, respectivamente.¹⁸

Poco después, Montúfar fue secuestrado por las FARC, que lo acusaron de llegar a un acuerdo con los paramilitares. Durante su detención, les explicó el pacto local de paz a sus captores y compartió evidencias de que no colaboraba con los paramilitares. Al mismo tiempo, una marcha organizada por la sociedad civil exigió a las FARC que lo liberaran. Como resultado de la presión social, Montúfar fue puesto en libertad y las FARC aceptaron el pacto, aunque de manera informal. En 2005, guerrilleros de esta organización entraron a la zona urbana de Samaniego, pero se abstuvieron de atacar a la policía, al banco o a la población civil; solo dispararon al aire, lo que podría interpretarse como un respeto tácito al pacto (exautoridad local, 2014, entrevista). Después de su liberación, Montúfar fue retenido otra vez por el ELN, que exigió información sobre sus tratos con las AUC y las FARC. Según una exautoridad local entrevistada en 2014, el alcalde les explicó que su administración mantenía una postura imparcial hacia todos los grupos armados, tal como se estipulaba en el pacto local de paz.

El cuarto actor importante con el que las autoridades municipales negociaron fue el Estado. Montúfar se reunió tres veces con el presidente Uribe, en las cuales explicó su pacto local de paz. Aunque el presidente advirtió que el pacto era ilegal, el alcalde mantuvo su postura y sus esfuerzos acabaron dando frutos. Sin embargo, el gobierno central no renunció a su estrategia militar y reforzó el pie de fuerza en Samaniego, lo que provocó que varias comunidades del sector de la montaña estuvieran atrapadas entre las Fuerzas Armadas y el ELN durante la administración municipal que sucedió a Montúfar (Mitchell y Rojas 2012; Montilla 2013, 22; exautoridad local, 2014, entrevista).

Conclusiones

Como ilustra el ejemplo de Samaniego en Colombia, la resistencia civil en una situación de conflicto armado surge de una compleja combinación de factores relacionados con la estructura y la agencia. La resistencia civil, por

18 Se hizo referencia a ambos videos en la nota al pie 10.

lo tanto, no ocurre en cualquier comunidad afectada por la guerra, ni sucede en cualquier momento. Es más probable que tenga lugar en condiciones propicias como los periodos de negociaciones de paz a nivel nacional que, en el caso de Colombia, tendieron a coincidir con el fortalecimiento del movimiento nacional por la paz. Además, la existencia de iniciativas similares en otras partes de Colombia demostró que este tipo de experiencias eran posibles y podían lograr cierto éxito. Por lo tanto, si la población afectada por la guerra tuviera más oportunidades de oír y aprender de estas experiencias, pudieran surgir más procesos similares. A nivel departamental, las condiciones también fueron favorables, ya que las autoridades apoyaron las iniciativas locales de paz durante la mayor parte del periodo estudiado. A nivel local, la dinámica del conflicto armado afectó al movimiento de resistencia civil, que tuvo su mayor reto en los periodos de intensos enfrentamientos entre grupos armados. En medio de estos factores estructurales, la agencia de los alcaldes y la población local hizo la diferencia, sobre todo en las circunstancias más difíciles, al asegurar la resiliencia del movimiento. La capacidad organizativa previa, bajo un liderazgo que inspira confianza, puede ser aprovechada, como reveló el ejemplo de la movilización de la población del sector de la montaña.

El caso de Samaniego también arroja luz sobre importantes factores intrínsecos al movimiento de resistencia civil y las decisiones estratégicas que toma, los cuales pueden contribuir al éxito de este tipo de movimientos en contra de la violencia en contextos de conflicto armado interno. Tres características principales del movimiento de resistencia civil explicaron el éxito en Samaniego: participación, unidad y liderazgo colectivo. La participación fue significativa de 1997 al 2014, con personas involucradas en asambleas públicas, marchas por la paz y otras actividades relacionadas. Es importante destacar que, en general, la gente permaneció unida con el propósito de reducir la violencia circundante y se comprometió a dos principios estratégicos cruciales adoptados para este fin: la noviolencia y la imparcialidad. Además, el éxito parcial que se dio al principio de estas acciones tuvo un efecto motivador en las personas. En cuanto al liderazgo, comparando el de los alcaldes Cuéllar y Montúfar con el liderazgo más colectivo y de base del sector de la montaña, encontramos que ambos lograron movilizar a la población para resistir la violencia, pero el segundo

tipo ofreció mejores perspectivas en términos de continuidad y resiliencia. En el éxito del movimiento también fueron clave las decisiones estratégicas para: establecer objetivos específicos y alcanzables que abordaran tanto la violencia directa como sus raíces, mantener los principios de noviolencia e imparcialidad, obtener apalancamiento sobre los grupos armados y asegurar cierto grado de interés y aceptación de las partes en conflicto.

Estudiar todos estos factores y sus interacciones nos permite comprender mejor la dinámica de las campañas de resistencia civil en situaciones de conflicto armado interno y sus resultados. De esta forma, aporta a los debates académicos sobre la resistencia civil y las dinámicas locales de construcción de paz. Además, proporciona una orientación útil a los profesionales interesados en promover y apoyar esas iniciativas. Este trabajo también sugiere que el intercambio fructífero entre la literatura sobre resistencia civil, los Estudios de Paz y Conflicto y la literatura sobre gobernanza rebelde puede aportar muchos insumos. Por último, muestra que iniciativas locales como la de Samaniego pueden ser cruciales para lograr la paz a nivel nacional.

Referencias

- Ackerman, Peter, y Jack DuVall. 2001. *A Force More Powerful: A Century of Non-Violent Conflict*. Londres: Palgrave MacMillan.
- Ackerman, Peter, y Christopher Kruegler. 1994. *Strategic Nonviolent Conflict: The Dynamics of People Power in the Twentieth Century*. Westport: Praeger.
- Ackerman, Peter, y Hardy Merriman. 2015. "The Checklist to End Tyranny". En *Is Authoritarianism Staging a Comeback?*, editado por Mathew Burrows y Maria Stephan, 63-80. Washington D.C.: The Atlantic Council.
- Arjona, Ana. 2014. "Civilian Resistance to Rebel Governance". *HiCN Working Paper Households in Conflict Network*, 170: 1-40. <http://www.hicn.org>
- Ball, Sharon. 2011. "La Implementación de un Programa de Acción Contra Minas en Samaniego como estudio de caso hacia una propuesta desde el enfoque de acción sin daño para aplicar a la Acción Contra Minas en medio de conflicto armado". Trabajo de grado, Universidad Nacional de Colombia. <http://www.bivipas.unal.edu.co>

- Cadena, Ingrid, y María Ginnes Quiñónez. 2002. "Municipio de Samaniego: Territorio de Paz". En *Informe de consultorías territoriales de construcción en democracia: Experiencias Territoriales de Construcción en Democracia de Paz y Desarrollo*, editado por Escuela Superior de Administración Pública, 95-119. Bogotá: Escuela Superior de Administración Pública.
- Cambio. 2008. "Más de 800 familias viven confinadas en Samaniego porque es un campo minado". *Cambio*, 9 de abril.
<https://www.eltiempo.com>
- CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular). 2014. "Estrategias y retos políticos para la paz: Recomendaciones para el sector político y la sociedad civil". En *Informe especial de CINEP, Programa por la Paz, Fundación Konrad Adenauer Stiftung - Colombia*.
<https://www.academia.edu>
- Comité de Derechos Humanos del sector de la montaña de Samaniego Santa Cruz de Guachavez y La Llanada. 2011. "Marcha de campesinos e indígenas de sector de la montaña de Samaniego por la exigibilidad de sus derechos". Comunicado, 25 de mayo de 2011.
<https://prensarural.org>
- CNAI (Corporación Nuevo Arco Iris). 2009. *Departamento de Nariño: Evolución del Conflicto Armado, Experiencias de Paz y Agendas Regionales*. Bogotá: Corporación Nuevo Arco Iris.
- Chenoweth, Erica, y Kathleen Gallagher. 2013. "Understanding nonviolent resistance: An introduction". *Journal of Peace Research* 50 (3): 271-276.
doi: 10.1177/0022343313480381
- Chenoweth, Erica, y Maria Stephan. 2011. *Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict*. Nueva York: Columbia University Press. <https://www.mitpressjournals.org>
- DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística). 2005. Censo general. <http://www.dane.gov.co>
- Defensoría del Pueblo de Colombia. 2007a. *Informe de Riesgo N°016-07 A.I.* Bogotá: Sistema de Alertas Tempranas.
- 2007b. *Informe estructural de riesgo: Zona cordillerana occidental del departamento de Nariño*. Bogotá: Sistema de Alertas Tempranas.

- Dewar, Diego, y Annette Idler. De próxima aparición. "Colombia: A Free-Rider with a Vested Interest in the (Non)-Development of R2P?" En *The Responsibility to Protect in Latin America: The New Map*, editado por Mónica Serrano y Claudio Fuentes. Abingdon: Routledge.
- Diario del Sur. 2006. "Guerrilla anuncia desminado y liberación de dos policías". *Diario del Sur*, 12 de diciembre.
- El Tiempo. 1994. "Matan alcalde que estuvo secuestrado". *El Tiempo*, 26 de julio.
- 1997a. "Samaniego le exige respeto a la guerrilla". *El Tiempo*, 22 de noviembre.
- 1997b. "Samaniego quiere decidir su suerte". *El Tiempo*, 24 de noviembre.
- 1997c. "Todo un pueblo refrenda hoy elección de sus autoridades". *El Tiempo*, 21 de noviembre.
- 1998. "A consulta, alcalde de Samaniego". *El Tiempo*, 24 de diciembre.
- 2000a. "Piden liberar a candidatos secuestrados". *El Tiempo*, 25 de septiembre.
- 2000b. "REDEPAZ lanzó proyecto". *El Tiempo*, 18 de noviembre.
- 2000c. "Secuestrados ocho candidatos". *El Tiempo*, 26 de septiembre.
- 2006. "ELN propone desminado de cuatro veredas en Samaniego (Nariño)". *El Tiempo*, 12 de diciembre.
- 2008a. "Desplazamiento masivo en Nariño por minas". *El Tiempo*, 6 de febrero.
- 2008b. "Gobernador de Nariño insiste en urgencia de desminado en zona rural de Samaniego (Nariño)". *El Tiempo*, 15 de febrero.
- 2010. "No hay en el país condiciones de seguridad para desminar": Andrés Dávila". *El Tiempo*, 28 de febrero.
- ELN y FARC-EP. 2009. "Comunicado conjunto noviembre".
<https://www.dinero.com>
- García, Mauricio. 2006. *Movimiento por la paz en Colombia 1978-2003*. Bogotá: CINEP.
- Garzón, Juan. 2008. "Desmovilización del Bloque Libertadores del Sur del Bloque Central Bolívar". *Fundación Seguridad y Democracia*.
- González, Edgar. 1998. "Se ensombrece la paz en Samaniego". *El Espectador*, 26 de diciembre.

- Gray, Vanessa. 2012. "Nonviolence and Sustainable Resource Use with External Support: A Survival Strategy in Rural Colombia". *Latin American Perspectives* 39 (1): 43-60.
- Hancock, Landon, y Pushpa Iyer. 2007. "The Nature, Structure, and Variety of Peace Zones". En *Zones of Peace*, editado por Landon Hancock y Christopher Mitchell, 29-50. Bloomfield: Kumarian Press.
- Hancock, Landon y Christopher Mitchell. 2007. *Zones of Peace*. Bloomfield: Kumarian Press.
- Helvey, Robert. 2004. *On Strategic Nonviolent Conflict: Thinking about the Fundamentals*. Boston: The Albert Einstein Institute.
- Hernández, Esperanza. 2004. "Compelled to act: Grassroots peace initiatives". En *Alternatives to War: Colombia's Peace Processes*, editado por Mauricio García, 24-27. Londres: Conciliation Resources.
- 2008. "La paz imperfecta que construyen las iniciativas civiles de paz de base social en Colombia". En *Las prácticas de la resolución de conflictos en América Latina*, editado por Manuel Salamanca. Bilbao: Deusto.
- Idler, Annette. 2015. "Arrangements of Convenience: Violent Non-State Actors Relationships and Citizen Security in the Shared Borderlands of Colombia, Ecuador and Venezuela". Tesis de doctorado, Universidad de Oxford. <https://ora.ox.ac.uk>
- Idler, Annette, y Borja Paladini. 2015. "When Peace Implies Engaging the 'Terrorist': Peacebuilding in Colombia through Transforming Political Violence and Terrorism". En *Researching Terrorism, Peace and Conflict Studies. Interaction, Synthesis and Opposition*, editado por Yannis Telliidis y Harmonie Toros, 124-145. Abingdon: Routledge.
- Idler, Annette, María Belén Garrido, y Cécile Mouly. 2015. "Peace Territories in Colombia: Comparing Civil Resistance in Two War-Torn Communities". *Journal of Peacebuilding & Development* 10 (3): 1-15. doi: 10.1080/15423166.2015.1082437
- Idler, Annette, Cécile Mouly, y Lenin Miranda. 2015. "Power Unpacked: Domination, Empowerment and Participation in Local Guatemalan Peace Forums". *Journal of Peace, Conflict and Development*, 21: 1-40. <https://www.bradford.ac.uk>

- International Crisis Group. 2011. *Moving Beyond Easy Wins: Colombia's Borders*. Bruselas: International Crisis Group.
- Kaplan, Oliver. 2013a. "Nudging Armed Groups: How Civilians Transmit Norms of Protection". *Stability: International Journal of Security & Development* 2 (3):1-18. doi.org/10.5334/sta.cw
- 2013b. "Protecting civilians in civil war: The institution of the ATCC in Colombia". *Journal of Peace Research* 50 (3): 351-367. doi: 10.1177/0022343313477884
- Larrota, Miguel. 2007. "Desminado humanitario de Samaniego: Plan de inversiones y recomendaciones. Una visión externa. Elaborado para la campaña colombiana contra minas". En *Árbol de la waycosidad*, editado por Harold Montúfar, 101-140. Pasto: Districomputo.
- Lázaro, Jorge Luis. 2010. "Iniciativas locales de paz: el caso del gobierno municipal de Samaniego 2004-2007". En *El tránsito hacia la paz: de las herramientas nacionales a las locales*, editado por Camila de Gamboa Tapias, 241-261. Bogotá: Universidad del Rosario.
- Lederach, John Paul. 2005. *The Moral Imagination: The Art and Soul of Peacebuilding*. Oxford: Oxford University Press.
- Mampilly, Zachariah. 2011. *Rebel Rulers: Insurgent Governance and Civilian Life during War*. Ithaca: Cornell University Press.
- Masullo, Juan. 2015. *The Power of Staying Put: Nonviolent Resistance against Armed Groups in Colombia*. Washington D.C.: International Center on Nonviolent Conflict.
- McAdam, Doug, Sydney Tarrow, y Charles Tilly. 2001. *Dynamics of Contention*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mejía, Juan. 2010. "Con valor, campesinos de Samaniego le hacen frente a la guerra". *Revista Semana*, 15 de febrero.
- Miall, Hugh, Oliver Ramsbotham, y Tom Woodhouse. 2011. *Contemporary Conflict Resolution*, 3ra. ed. Cambridge: Polity Press.
- Mitchell, Christopher, y Susan Allen. 1996. "Local peace zones as institutionalized conflict". *Peace Review: A Journal of Social Justice* 9 (2):159-162. doi.org/10.1080/10402659708426044

- Mitchell, Christopher y Landon Hancock. 2007. "Local Zones of Peace and a Theory of Sanctuary". En *Zones of Peace*, editado por Landon Hancock y Christopher Mitchell, 189-221. Bloomfield: Kumarian Press.
- 2012. *Local Peacebuilding and National Peace: Interaction between Grassroots and Elite Processes*. Nueva York: Continuum.
- Mitchell, Christopher, y Catalina Rojas. 2012. "Against the Stream: Colombian Zones of Peace under Democratic Security". En *Local Peacebuilding and National Peace: Interaction between Grassroots and Elite Processes*, editado por Christopher Mitchell y Landon Hancock, 39-67. Londres: Continuum.
- Montilla, Néstor. 2013. *Experiencias de Desminado y Limpieza de Territorio en Colombia: Reflexiones*. Ginebra: Geneva Call. <https://genevacall.org>
- Montúfar, Harold. 2007. *Árbol de la waycosidad*. Pasto: Districomputo.
- Moser, Caroline, y Cathy McIlwaine. 2004. *Encounters with Violence in Latin America: Urban Poor Perceptions from Colombia and Guatemala*. Nueva York: Routledge.
- Mouly, Cécile, Annette Idler, y María Belén Garrido. 2015. "Zones of Peace in Colombia's Borderlands". *International Journal of Peace Studies* 20 (1): 51-63. <http://www.flacsoandes.edu.ec>
- Notiagen. 2011. "El campesinado de Samaniego exige cuentas a la alcaldesa". *Notiagen*, 25 de mayo.
- Parra, Dison. 1998. "Samaniego pide callar los cañones". *El Tiempo*, 24 de enero.
- Pearce, Jenny. 2007. "Violence, Power and Participation: Building Citizenship in Contexts of Chronic Violence". En *IDS Working Paper 274*. Brighton: Institute of Development Studies.
- Pécaut, Daniel. 1999. "From the Banality of Violence to Real Terror: The Case of Colombia". En *Societies of Fear: The Legacy of Civil War, Violence and Terror in Latin America*, editado por Kees Koonings y Dirk Kruijt, 141-167. Londres: Zed Books.
- Restrepo Castañeda, Gloria. 2006. "Dinámicas e interacciones en los procesos de resistencia civil". *Revista Colombiana de Sociología*, 27:169-202.

- Restrepo, Juan. 2006. "Samaniego le apuesta a Pacto Local de Paz". *Revista Semana*, 2 de mayo.
- Richmond, Oliver. 2012. "Missing Links: Peace Infrastructures and Peace Formation". En *Peace Infrastructures - Assessing Concept and Practice*, editado por Barbara Unger, Stina Lundström, Katrin Planta y Beatrix Austin, 21-30 Berlín: Berghof Foundation.
- 2013a. "Failed Statebuilding Versus Peace Formation". En *The Routledge handbook of international statebuilding*, 130-140. Londres: Routledge
- 2013b. "Peace Formation and Local Infrastructures for Peace". *Alternatives: Global, Local, Political* 38 (4): 271-287.
doi.org/10.1177/0304375413512100
- Rojas, Catalina. 2004. "The People's Peace Processes: Local Resistance Processes and the Development of a 'Zone of Peace' in Colombia". *Reflexión Política* 6 (11): 70-87.
- 2007. "Islands in the Stream: A Comparative Analysis of Zones of Peace within Colombia's Civil War". En *Zones of Peace*, editado por Landon Hancock y Christopher Mitchell, 71-89. Bloomfield: Kumarian Press.
- Salcedo, Mauro. 1998. "Samaniego cambiará su historia". *El Espectador*, 23 de enero.
- Schock, Kurt. 2003. "Nonviolent Action and Its Misconceptions: Insights for Social Scientists". *PS: Political Science and Politics* 36 (4): 705-712.
- 2005. *Unarmed Insurrections: People Power Movements in Nondemocracies*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- 2013. "The practice and study of civil resistance". *Journal of Peace Research* 50 (3): 277-290. doi: 10.1177/0022343313476530
- Sharp, Gene. 2010. *From Dictatorship to Democracy: A Conceptual Framework for Liberation*, 4a ed. Boston: The Albert Einstein Institution.
- Tarrow, Sydney. 1998. *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*, 3era ed. Cambridge: Cambridge University Press.
- Vásquez, Teófilo, Andrés Vargas, y Jorge Restrepo. 2011. *Una vieja guerra en un nuevo contexto*. Bogotá: CINEP / Odecofi-Colciencias / CERAC / Universidad Javeriana.
- Weinstein, Jeremy. 2007. *Inside Rebellion: The Politics of Insurgent Violence*. Cambridge: Cambridge University Press.

Capítulo 6

Las Mercedes: esfuerzos de una comunidad por construir un territorio de paz en medio del conflicto armado

Cécile Mouly y María Belén Garrido

En este capítulo analizamos los esfuerzos no violentos realizados por la población de Las Mercedes –un corregimiento ubicado en el este de Colombia– para contrarrestar la violencia perpetrada por los grupos armados en este territorio.¹ El análisis se realizó desde el 2005, año en el que surgió la iniciativa de territorio de paz, hasta mediados de 2016. Este periodo fue escogido porque durante el mismo se registró la mayor cantidad de acciones no violentas contra la violencia de los actores armados. En 2005, la comunidad decidió establecer un “territorio de paz”, con el que buscaba que tanto los actores armados estatales como los no estatales asumieran ciertas reglas de conducta para reducir el nivel de violencia y para evitar que la población civil fuera involucrada en la lucha entre las partes en conflicto. Lamentablemente, dos años después, esta iniciativa se desmoronó. En 2013, se buscó reactivarla con la elaboración de un plan de desarrollo comunitario y por medio de otras acciones que procuraban dar mayor autonomía y poder de decisión a los pobladores de Las Mercedes.

* Este capítulo se basa en una ponencia presentada en la conferencia del Congreso Interinstitucional de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, organizado por FLACSO Ecuador junto a la red de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales (CIPRI) y la Red Latinoamericana de Análisis de Seguridad y Delincuencia Organizada (RELASEDOR) el 11 y 12 de mayo de 2017.

1 Para dar una idea del nivel de afectación de la comunidad, según una encuesta realizada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el marco de la elaboración del plan de desarrollo de Las Mercedes, 51 % de los pobladores afirmaron que, por causa del conflicto armado, al menos un miembro de su núcleo familiar había sido asesinado y un 66 % de los encuestados aseguró que tuvo que abandonar su casa para ir a vivir a otro lado (Las Mercedes 2015, 31).

El estudio de este corregimiento tiene relevancia porque tanto las propuestas de paz a nivel nacional como las que se efectúan a nivel local aportan a lograr una paz integral. Las propuestas que se dan a nivel local permiten que la población se apropie y se involucre en los procesos de construcción de paz (Hancock 2016). Esto es fundamental para la búsqueda de una paz duradera en Colombia porque, como lo señala John Paul Lederach (1997), no se puede esperar que las decisiones tomadas al más alto nivel necesariamente sean ejecutadas en el nivel local. Por otro lado, con este capítulo reafirmamos que las acciones no violentas no solo se producen en contra de regímenes autoritarios, sino que también funcionan para oponerse a grupos armados estatales y no estatales (véase Hallward, Masullo y Mouly 2017). Hasta la fecha, los pocos trabajos académicos que existen en torno a este tema se centran en iniciativas no violentas consideradas exitosas, como los de Kaplan (2013b, 2013a), Hernández (2014, 2009) y varias investigaciones realizadas por las autoras de este capítulo (Garrido, Mouly e Idler 2016; Masullo, Mouly y Garrido 2019). En este estudio sobre Las Mercedes nos enfocamos en una iniciativa que ha tenido altibajos, para entender mejor las características que deben tener los movimientos no violentos en su labor de sobrellevar diversas dificultades presentes en los contextos en que se desarrollan. Además, dicho enfoque permite identificar factores que podrían afectar los resultados de este tipo de iniciativas.

El corregimiento de Las Mercedes está ubicado en el municipio de Sardinata, en el departamento del Norte de Santander, fronterizo con Venezuela (figura 6.1).² Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ingresaron al territorio a mediados de la década del 80 y casi alcanzaron el total control del territorio en la década del 90, aunque en los alrededores hacía presencia el Ejército Popular de Liberación (EPL) (Las Mercedes 2015). En 1998, las FARC, el ELN y el EPL lanzaron un ataque conjunto que destruyó la estación de policía. En esta acción también secuestraron a más de 20 policías (El Tiempo 1998). Como resultado del ataque, la estación de policía del corregimiento dejó de funcionar por casi 10 años (actores externos, 2016-2017, entrevistas). Las Autodefensas

2 El corregimiento tenía una población estimada de 6000 habitantes en 2015, ocupa el 36 % del municipio y cuenta con 46 veredas (Las Mercedes 2015).

Unidas de Colombia (AUC) ingresaron a este territorio en 2001, lucharon contra las guerrillas y desafiaron el control ejercido por las FARC hasta la desmovilización paramilitar que se dio entre el 2004 y el 2005. Las FARC recuperaron el control del territorio luego de la dejación de armas de las AUC, mientras que el ELN y el EPL controlaban algunas veredas y zonas aledañas del corregimiento (Mouly y Garrido 2018; Idler, Mouly y Garrido 2018).

Mapa 6.1. Ubicación geográfica de Las Mercedes



En 2005, los pobladores del corregimiento de Las Mercedes tomaron una posición imparcial en el conflicto a través de métodos no violentos y pidieron a los actores armados que respetaran el territorio, no atacaran a la población ni a la infraestructura de la comunidad y no involucraran a los civiles en su lucha. Eso fue plasmado en una declaración de convivencia pacífica que la comunidad dio a conocer tanto a los actores armados estatales como a los no estatales (Peñaloza 2006; Las Mercedes 2005; MAPP-OEA 2008).

La declaración de convivencia pacífica fue una importante acción de resistencia civil en contra de los actores armados. Por “resistencia civil” o “resistencia no violenta” entendemos “la aplicación del poder no armado civil usando métodos no violentos como protestas, huelgas, boicots y demostraciones, sin usar o amenazar con hacer daño físico contra el oponente” (Chenoweth y Gallagher 2013, 271). Hallward y Norman especifican que las acciones de resistencia civil

se distinguen de las realizadas por participantes de movimientos políticos convencionales porque usan tácticas fuera del proceso político normal, incluyendo huelgas, boicots, demostraciones en masa, contestaciones en espacios públicos, rechazo del pago de impuestos [...] y la creación de instituciones alternativas para obtener legitimidad política y promover la organización social (Hallward y Norman 2015, 73).³

Kurt Schock explica que, además de encontrarse por fuera de los canales institucionales, estas acciones no violentas son activas y dependen del contexto:

La acción no violenta es no violenta –no implica violencia física o la amenaza de violencia física contra seres humanos– y es activa [...], porque implica una actividad en la búsqueda colectiva de objetivos políticos y sociales. Más específicamente, la acción no violenta implica un proceso activo en el que se ejerce presión política, económica, social, emocional o moral para soportar en el ejercicio del poder en interacciones contenciosas

3 Todas las traducciones del inglés al español son nuestras.

entre actores colectivos [...]. La acción noviolenta no es institucional, es decir, opera fuera de los canales políticos institucionales, y es indeterminada, lo que significa que los procedimientos para determinar el resultado del conflicto no son especificados de antemano (Schock 2005, 6).

La resistencia civil ha sido utilizada por diferentes pueblos y culturas. Sin embargo, en cada situación se encuentran particularidades histórico-culturales que influyen en su aplicación. En Colombia una expresión del fenómeno ha sido los territorios de paz o “zonas de paz” como se conocen frecuentemente en la academia anglosajona. En estos la población civil establece ciertas reglas noviolentas con el fin de reducir los efectos negativos de la violencia armada (Mitchell y Allen Nan 1996; Hancock y Mitchell 2007; Idler, Garrido y Mouly 2015, 182; Mouly, Idler y Garrido 2015). En 2005, los mercedeos establecieron el territorio de paz mediante un comunicado. Para reafirmarlo colocaron letreros en los colegios e iglesias declarándolos como territorios de paz y organizaron marchas. A su vez, realizaron acciones de nocooperación con bajo perfil (actor externo, 2014, entrevista), lo que algunos autores califican como acciones de “resistencia cotidiana” (Scott 1985; McGee 2017).

La escritura de este capítulo se basa en el análisis de fuentes documentales y sobre todo en la información obtenida a través del trabajo de campo realizado en Bogotá, Cúcuta y Las Mercedes entre los años 2014 y 2016. Dicho trabajo de campo consta de más de 50 entrevistas semiestructuradas realizadas a representantes del Estado, pobladores de la comunidad, representantes de organismos internacionales, miembros de organizaciones de la sociedad civil colombiana y excombatientes de los grupos armados que operaron en esta región.

El capítulo está dividido en tres partes. En la primera analizamos los factores estructurales y de agencia que contribuyeron al surgimiento de la iniciativa de territorio de paz.⁴ En la segunda discutimos los factores que

⁴ Definimos agencia como la capacidad que tienen los individuos o los grupos de tomar sus propias decisiones y actuar. La estructura es el conjunto de elementos del entorno que constriñen las decisiones y acciones que pueden tomar los individuos o grupos (Giddens 1984). En este capítulo argumentamos que el surgimiento, desarrollo y resultado de los esfuerzos de la comunidad por establecer un territorio de paz en Las Mercedes dependieron tanto de las decisiones y acciones de los miembros de la comunidad como del contexto.

explican los resultados de la iniciativa, incluyendo factores estructurales, las características del movimiento de resistencia civil, las estrategias empleadas y el apoyo de actores externos. En la tercera parte examinamos los factores que permitieron el resurgimiento de las acciones de resistencia civil después de varios años.

Rol de la estructura y la agencia en el surgimiento del territorio de paz

La iniciativa de territorio de paz surgió en 2005 después de que Las Mercedes fuera atacada durante años por grupos armados y su población estuviera en el fuego cruzado de los distintos bandos que operaban en el corregimiento. Factores tanto estructurales como de agencia explican esta iniciativa. Primero, explicaremos cómo los factores estructurales influyeron en el origen de la iniciativa, en especial el contexto del conflicto armado y la estructura organizativa de la comunidad. Segundo, examinaremos el rol que tuvo la agencia en el surgimiento de la iniciativa.

Factores estructurales

La situación de conflicto armado en el corregimiento a finales de 2005 permitió que la iniciativa se estableciese ahí. Después de la desmovilización de las AUC entre el 2004 y el 2005, el ELN y luego las FARC de nuevo quisieron controlar el territorio. Sin embargo, los pobladores que habían vivido las consecuencias violentas de esta lucha no querían más presencia de actores armados y consideraron que la propuesta de territorio de paz era factible (Las Mercedes 2005; Peñaloza 2006; miembros de organismos nacionales e internacionales, 2014 y 2016, entrevistas). Un poblador explica la situación en la que se encontraban en ese momento y el sentir de la comunidad al respecto:

Quando se fueron los paramilitares llegó la guerrilla y nos montó una buena jodienda. Entonces llegaron los paramilitares de nuevo y nos jodieron.

Entonces nosotros tratamos de adueñarnos. Nos quedó el vacío. Aduenímonos de él porque nos quedó el vacío y de ahí es que surgió la iniciativa (poblador, 2016, entrevista).

Otro poblador de Las Mercedes señaló la encrucijada en la que se hallaba la población civil:

El pueblo ya no encontraba para dónde salir. El pueblo se vio abocado en estas circunstancias a decir: “Bueno, vamos a sentar una voz de protesta, vamos a unirnos en torno a un comunicado [...]. Queremos tranquilidad, queremos paz, no queremos más violencia. Estamos ya cansados de tanta destrucción de nuestro pueblo” (poblador, 2016, entrevista).

Los mercedenses también se organizaron para visibilizar su situación y poner fin a la vulneración de derechos. Muchos habitantes querían quitarse el estigma de colaboradores de la guerrilla y obtener más recursos del Estado para el desarrollo de la comunidad (pobladores; funcionario estatal; actores externos, 2016, entrevistas). Un actor externo repitió la siguiente frase que se oía en Las Mercedes en ese tiempo: “Mire, nosotros queremos ser una comunidad de paz, no queremos que nos sigan diciendo que Las Mercedes es un lugar de guerrilla” (actor externo, 2016, entrevista).

Varios entrevistados destacaron la organización comunitaria en Las Mercedes como un factor clave que permitió el surgimiento de la iniciativa de territorio de paz. Según uno de ellos, los pobladores

tienen una organización comunitaria bastante fuerte y líderes decididos a alcanzar el progreso [...], han creado sus organizaciones y han tenido la valentía de confrontar tanto a los grupos armados como a la propia institucionalidad, al propio Estado, llegando a plantearles que no quieren tener a ninguno de ellos en su territorio. Quieren el territorio libre, quieren un territorio en paz (funcionario de Estado, 2016, entrevista).

En 2005, las juntas de acción comunal eran de las pocas organizaciones que funcionaban, por lo que fueron clave para organizar a la comunidad e impulsar la iniciativa (actores externos, 2014 y 2016, entrevistas). También

existía la organización de la sociedad civil “Amigos por la paz” creada a finales de la década del 90 y apoyada por la Iglesia católica. Varios de sus miembros lideraron la iniciativa de territorio de paz (Peñaloza 2006). Según un actor externo, el proceso de desmovilización de las AUC catalizó el resurgimiento del proceso organizativo en Las Mercedes y motivó a la población a actuar (actor externo, 2016, entrevista). Este fortalecimiento organizativo también resultó del acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA), la cual, junto con la Iglesia católica, capacitó a líderes de la comunidad y ayudó a que la organización Amigos por la paz adquiriera personería jurídica (actor externo, 2017, entrevista).

Rol de la agencia

En 2005, algunos líderes de Las Mercedes –incluyendo miembros de Amigos por la paz– organizaron reuniones informales para socializar la idea de territorio de paz. El profesor del colegio, el presidente de las juntas de acción comunal, el párroco del corregimiento y otros representantes de la sociedad civil buscaron el apoyo de la comunidad para emitir una declaración de convivencia pacífica con el fin de reducir los efectos negativos del conflicto armado (Las Mercedes 2005; Peñaloza 2006; miembros de organismos nacionales e internacionales, 2014 y 2017, entrevistas). La comunidad se unió para lograr este propósito. En palabras de un líder comunitario entrevistado en 2016, “Fuimos todos a una sola para poder trabajar en la unidad [...] y que no entrara aquí guerrilla, que no entraran paramilitares, o sea que fuéramos autónomos en el pueblo, [que fuéramos] gobierno autónomo”.

La iniciativa de territorio de paz se puso en práctica con la adopción de la declaración de convivencia pacífica (tabla 6.1). Esta declaración buscaba que la violencia contra la población no continuara, que no se dieran más desplazamientos, ni que ninguno de los actores armados pidiera la colaboración de los civiles. Aunque para la comunidad no era posible impedir la presencia de los actores armados en el territorio, con la declaración se esperó poner

fin al uso de la violencia y la coerción por parte de estos actores, a través de la nocooperación con ninguno de ellos. Un paso previo fue hablar con los actores armados para explicarles las reglas de conducta que debían regir en el territorio, con el objetivo de que la población pudiera vivir en paz (pobladores; excomandante de las FARC, 2016, entrevistas).

Así se dieron negociaciones con la guerrilla para establecer ciertas reglas que permitieron un mayor respeto hacia la población civil. Estas fueron principalmente con las FARC, que en gran parte habían recuperado el control del corregimiento a finales de 2005. Sin embargo, también se tuvieron conversaciones con los otros actores armados. Aunque las guerrillas recelaban de la comunidad por considerar que en años anteriores había permitido a las AUC entrar en la zona, avalaron la propuesta de territorio de paz porque era un clamor de toda la comunidad (actor externo, 2016, entrevista).

Tabla 6.1. Seis puntos de la declaración de convivencia pacífica de Las Mercedes

1. Exigimos el respeto a la vida de todos y cada uno de los habitantes del corregimiento de Las Mercedes y de las personas que hagan tránsito en este territorio. Rotundamente decimos NO al asesinato y dejamos en claro que siempre saldremos en defensa de la VIDA sea de la persona que fuere.
2. En ningún momento y bajo ninguna circunstancia toleramos la desaparición forzosa, torturas, tratos inhumanos, crueles o degradantes, sobre ningún miembro de nuestra comunidad a manos de actores del conflicto armado.
3. No aceptamos que ninguna familia de nuestra región sufra el flagelo del desplazamiento causado por organizaciones de derecha o de izquierda.
4. No estamos dispuestos, como personas ni como comunidad, a dejarnos involucrar como auxiliares de uno u otro bando, tampoco prestaremos voluntariamente los vehículos a las fuerzas del Estado ni a los grupos irregulares que operan en nuestra región, con el objeto de evitar problemas que generalmente desencadenan en señalamientos, estigmatizaciones y muerte a la población civil.
5. Los comerciantes, empleados, peseros, dueños de vehículos, ganaderos, profesores, agricultores, ni miembro alguno de nuestra comunidad está en condición ni tiene la capacidad de aportar cuotas económicas que financien en lo más mínimo la guerra a ningún actor del conflicto existente en esta región. Tampoco consideramos una obligación los aportes en especies.
Aclaremos que con lo anterior nuestra intención no es la de estar a favor o en contra de organismo u organización alguna, respetamos las diferencias aunque no compartamos ideales y, como sociedad civil que busca y se compromete con la PAZ, a nadie le podemos prohibir la presencia civil en nuestro terruño agradeciendo no instalarse permanente [sic] en el centro poblado.
6. La comunidad de Las Mercedes se compromete públicamente a elaborar un plan de desarrollo social y económico del corregimiento, para trabajar ordenada y además muy responsablemente par[a] satisfacer nuestras necesidades con primacía del bien común.

Fuente: Las Mercedes (2005).

Resultados del territorio de paz

El éxito de la iniciativa fue corto. Durante los dos primeros años la guerrilla casi “no entraba” al casco urbano y la comunidad logró frenar ciertos abusos por parte de los actores armados. Por ejemplo, cuando unos guerrilleros intentaron usar las motos de unos habitantes, algunos líderes del territorio de paz lograron impedir que esto sucediera (pobladores, 2016, entrevista). Un poblador recuerda que en muchas ocasiones tuvieron que “confrontar [a los grupos armados] ante algunas situaciones [con las] que no estábamos nosotros de acuerdo” (poblador, 2016, entrevista). Lamentablemente, la iniciativa colapsó a finales de 2007 después de la muerte de dos miembros de la comunidad.

Varios factores explican estos resultados. Analizaremos, primero, los factores estructurales, incluyendo la dinámica del conflicto armado en Las Mercedes y la ruptura de canales de comunicación entre la comunidad y las FARC. Segundo, examinaremos cómo las características mismas del movimiento de resistencia civil impidieron que se sostuviera por largo tiempo. Tercero, estudiaremos cómo las estrategias del movimiento y el apoyo externo que recibió incidieron en los resultados alcanzados.

Factores estructurales

La dinámica local del conflicto armado influyó en los resultados de la iniciativa. Al momento de la declaración de convivencia pacífica, las AUC se habían desmovilizado y las guerrillas habían recuperado el control del territorio. Este periodo se tradujo en una reducción del nivel de violencia (Fundación Ideas para la Paz 2013, 24). Sin embargo, el regreso de la policía en 2007 –con el establecimiento de un puesto temporal en una esquina del parque central del pueblo– recrudeció la situación de conflicto (actor externo, 2016, entrevista). El retorno de la estación de policía implicó cierta pérdida de control territorial para las FARC, que en ese momento dominaban sobre Las Mercedes. Estas nuevas tensiones posiblemente incidieron en el asesinato de dos miembros de la comunidad y el desplazamiento de

otro a finales de 2007, sucesos que ocasionaron el cese del territorio de paz. Según la comunidad, los hechos de violencia perpetrados por grupos armados no estatales fueron la principal causa del debilitamiento de la iniciativa (Las Mercedes 2015, 15).

No obstante, la ruptura de los canales de comunicación con el grupo dominante fue el principal factor que explica este punto de quiebre. De acuerdo con lo expresado por una fuente confidencial, un cambio de mando en las FARC a nivel local causó una ruptura de comunicación entre la población y este grupo. Anteriormente, la población civil mantenía un diálogo con el comandante de escuadra para tratar temas que le afectaban y gracias a ello acordó ciertas reglas para mejorar su situación dentro del conflicto. Con el cambio de mando se perdió este diálogo o, al menos, dejó de funcionar de manera efectiva. Esto dio paso a que la guerrilla violara las reglas establecidas en la declaración de convivencia pacífica, hasta que asesinó a dos supuestos informantes en el casco urbano (fuente confidencial, 2016, entrevista). Estos hechos afectaron significativamente la iniciativa de territorio de paz. Muchas personas por miedo decidieron retirar su apoyo mientras que un líder solicitó asilo en otro país (poblador; excombatiente, 2014 y 2016, entrevistas). En efecto, el mantenimiento de buenos canales de comunicación entre población civil y actores armados es crucial para el éxito de un territorio de paz (Anderson y Wallace 2013; Mouly y Garrido 2018).

Aparte de buscar reducir los niveles de violencia, la iniciativa trataba de fomentar el desarrollo socioeconómico de la comunidad por medio de la llegada de instituciones estatales. Al no lograr los resultados esperados en relación a este último objetivo, los líderes de la iniciativa se desgastaron y muchas personas perdieron la esperanza. Estas dejaron de apoyar la iniciativa y retomaron una actitud de desconfianza hacia la institucionalidad estatal (actor externo, 2016, entrevista).

Características del movimiento noviolento

Según tres fuentes, un factor clave que explica la aceptación inicial de la propuesta de territorio de paz por los actores armados fue el respaldo de la

mayoría de la población. La primera es un líder comunitario, quien relató que llegaron a ser más de 1500 personas detrás de la iniciativa (Chaparro citado en MAPP-OEA 2008; actor externo, 2017, entrevista). La segunda es un excomandante de las FARC entrevistado en 2016, quien afirmó que la guerrilla aceptó la declaración de convivencia pacífica porque tenía el respaldo de toda la comunidad. La tercera es un poblador, quien contó que después de que algunos insurgentes intentaron llevarse unas motos los guerrilleros ofrecieron disculpas porque sintieron que: “La habían embarrado con nosotros [...], nosotros teníamos ahí la unidad” (poblador, 2016, entrevista).

Sin embargo, esta unidad no duró mucho tiempo y la falta de cohesión en Las Mercedes ocasionó el debilitamiento de la iniciativa. A finales de 2007, dos pobladores fueron asesinados y otro emigró por amenazas, lo que causó el fin del territorio de paz debido a que muchos miembros de la comunidad decidieron dejar de apoyar la iniciativa por temor. La desunión se profundizó e impidió la acción colectiva, abriendo paso a que, de nuevo, el corregimiento quedara bajo el dominio de la guerrilla. Cuando la población no logra actuar colectivamente, se vuelve más vulnerable frente a los actores armados y es más probable que estos últimos cometan abusos (Mouly y Garrido 2018; Arjona 2014; Kaplan 2013a). Un actor externo entrevistado en 2016 explicó que, si bien la población había logrado ponerse de acuerdo en torno a ciertos objetivos entre 2005 y 2006 y emprender una acción colectiva, las divisiones generadas por las percepciones de que algunas personas estaban alineadas con un bando u otro –propias de este tipo de contexto de guerra en el que varios grupos pugnan por el control de la población y el territorio– siempre se mantuvieron latentes y dificultaron la toma de decisiones consensuadas.

Otra debilidad del movimiento no violento fue la falta de participación masiva sostenida por un largo periodo de tiempo. Esta deficiencia del movimiento se produjo a pesar de los esfuerzos de la Iglesia católica y la MAPP-OEA, instancias que buscaron empoderar a la comunidad a través de varias actividades. Esto se debió, en parte, a factores estructurales. Las dificultades de comunicación entre los miembros del corregimiento no permitieron que la participación de la comunidad se mantuviera. Para el

2015, diez años después de que se propuso la iniciativa de paz, solo ocho de las 47 veredas de Las Mercedes tenían acceso a telefonía celular y dos a Internet (Las Mercedes 2015; pobladores, miembros de organizaciones externas, 2014 y 2016, entrevistas). Por lo tanto, las convocatorias a reuniones y acciones no violentas se realizaban, sobre todo, de forma oral y por medio de mensajes escritos en hojas de papel que amigos o familiares llevaban a otras personas (miembro de una organización de la sociedad civil, 2014, entrevista). Esto limitó la participación de la población en acciones de resistencia civil y la toma de decisiones colectivas. Otro obstáculo fue la distancia entre el centro del corregimiento y algunas veredas, así como las malas condiciones de las vías terrestres que limitaron la participación de la comunidad a lo largo del proceso (Las Mercedes 2015). Según Chenoweth y Stephan (2011), la participación masiva de la gente es una de las principales razones de que las campañas de resistencia civil tengan éxito. Por lo tanto, esta falta de participación numerosa y constante puede ser considerada como razón del colapso de la iniciativa.

Estrategias empleadas por la comunidad y apoyo externo

En un contexto como el de Las Mercedes, obtener cierto *buy-in* o compromiso de parte de los principales actores armados que operan en el área es esencial para asegurar el éxito de un territorio de paz (Iyer y Hancock 2004, 45-46; Mouly, Garrido y Idler 2016, 154-155). Según un miembro de una organización de la sociedad civil entrevistado en 2014, “no se puede trabajar sin la autorización de los grupos armados”. Varios entrevistados reconocieron que se había socializado la iniciativa con distintos actores, incluyendo el Estado, el Ejército y los grupos armados no estatales (pobladores; excomandante de las FARC; actores externos, 2014 y 2017, entrevistas). Por ejemplo, un líder comunitario relató que los líderes habían mandado una carta al comandante de la guerrilla para explicar su posición (MAPP-OEA 2008). Un poblador explicó en 2016 que, al inicio, “las bandas criminales, los grupos armados al margen de la ley y el Estado [...], todos aprobaron, todos acordaron apoyar, respetar”. Sin embargo,

este apoyo fue relativo. Un observador externo opinó en 2016 que la guerrilla nunca aceptó abiertamente las reglas planteadas por la comunidad en su declaración de convivencia pacífica, pero que a raíz de este proceso modificó “su forma de hacer presencia en el corregimiento”.

La comunidad de Las Mercedes aplicó otra estrategia importante: la de visibilizar su situación a nivel nacional e internacional. Cuando se estaba organizando, solicitó el acompañamiento de la MAPP-OEA, que acababa de abrir una oficina en Cúcuta para apoyar el proceso de desmovilización de las AUC (MAPP-OEA 2008; Peñaloza 2006; actores externos, 2016 y 2017, entrevistas). Esta oficina apoyó a diversos representantes de Las Mercedes en el proceso de organización comunitaria y a establecer canales de comunicación con las instituciones estatales con el fin de promover el desarrollo socioeconómico. Esta nueva visión de institucionalidad amplió la opinión de la comunidad en cuanto a lo que significaba la presencia del Estado en esos territorios. Los líderes conversaron con la gente de las veredas para identificar los problemas de cada área y a partir de estos elaboraron demandas específicas para las instituciones estatales (actores externos, 2016 y 2017, entrevistas). Como resultado de esta labor, en septiembre de 2007 se firmó un acta de intenciones entre las instituciones estatales y la comunidad para promover el desarrollo pacífico en Las Mercedes (MAPP-OEA 2008). El apoyo de la MAPP-OEA fue fundamental en este proceso de vinculación con las instituciones estatales y de visibilización de los esfuerzos de la comunidad (pobladores; actores externos, 2016, entrevistas). Tal como lo relata un observador externo, “Han logrado llamar la atención de la zona [...], hay regiones del Catatumbo que están todavía, digamos, con la bota en el cuello y están calladas [...]. Pero Las Mercedes de alguna manera ha llamado la atención” (actor externo, 2016, entrevista). Este aumento de visibilidad dio al corregimiento un mayor poder de incidencia, aunque fue insuficiente para alcanzar sus objetivos a largo plazo.

Otro importante actor que acompañó este proceso fue la Iglesia católica a través de las diócesis de Cúcuta y del Tibú y del párroco de Las Mercedes (actores externos, 2016 y 2017, entrevistas). El apoyo de los actores externos empoderó a los miembros de la comunidad, fortaleció su capacidad de agencia y les permitió conocer otras experiencias similares como

la de Mogotes que, según un entrevistado en 2014, sirvió de modelo a la comunidad. El apoyo de la MAPP-OEA y la Iglesia católica fue decisivo porque la población se sintió respaldada por dos organizaciones respetadas por los distintos grupos armados que operaban en la zona y que podían intermediar con las instituciones estatales de desarrollo para que atendieran las necesidades básicas de la población (actores externos, 2016, entrevistas; Idler, Mouly y Garrido 2018).

Resurgimiento de la iniciativa

Luego del colapso del territorio de paz, durante varios años la población quedó bajo el dominio del grupo armado dominante, las FARC. A pesar de que la comunidad hizo algunos esfuerzos para pedir a los insurgentes que dejaran de hostigar el puesto temporal de policía y con ello evitar que la población civil fuera afectada, los ataques continuaron (Revista Semana 2011; La Opinión 2013a, 2013b). Varios entrevistados indicaron que las FARC avisaban a la población civil antes de las embestidas para que buscara refugio en otro lugar. Los pobladores que vivían cerca del puesto de policía lograban salvar sus vidas al abandonar sus casas e ir a dormir donde familiares o conocidos al momento de los ataques. Sin embargo, perdieron muchos bienes (pobladores; funcionarios del Estado; actores externos; excombatiente, 2014 y 2016, entrevistas). En algunos casos hubo hechos que lamentar, como en el ataque de octubre de 2013 cuando una profesora resultó herida (Jácome Ramírez 2013; Colprensa 2013).

Con el inicio de las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC a finales de 2012, el contexto se tornó favorable para que la comunidad reanudara esfuerzos y buscara mayor poder de decisión sobre los asuntos que le afectaban. Entre 2013 y 2015, la comunidad volvió a unirse para elaborar un plan de desarrollo comunitario y emprender algunas acciones noviolentas. En el próximo acápite examinaremos los factores que incidieron en el resurgimiento de la iniciativa de territorio de paz mediante un plan de desarrollo comunitario y analizaremos los factores que explican su fragilidad.

Factores estructurales

En el contexto de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, esta organización necesitaba mejorar su imagen y preparar su regreso a la vida civil, por lo que hizo concesiones frente a las demandas de la población (Mouly, Hernández y Garrido 2016). Varios entrevistados notaron un repliegue de las FARC en el corregimiento (pobladores; funcionario de Estado; actores externos, 2014 y 2016, entrevistas). Según uno de ellos, en el marco de los diálogos de La Habana que iniciaron a fines de 2012, “Los mandos que están en esa zona han ido bajando su perfil de incidencia negativa” (actor externo, 2016, entrevista). Las negociaciones de paz a nivel nacional permitieron que los canales de diálogo entre la población civil y las FARC a nivel local mejoraran, como lo demuestran los acuerdos alcanzados entre la población y el grupo insurgente para volver a alumbrar el parque central en las noches y celebrar allí la fiesta patronal cada septiembre (pobladores, 2014 y 2016, entrevistas). Según un actor externo entrevistado en 2016, la guerrilla dejó de llamar a los miembros de la comunidad para darles órdenes y obligarles a pagar impuestos. “Hay un poco más de diálogo”, aseguró. De forma similar, un poblador explicó este nuevo contexto:

Se ha retomado este tema [la idea de un territorio de paz] con el ACNUR [Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados], con la MAPP-OEA y con otras entidades a ver si se puede retomar en estas circunstancias, ya que van avanzando los diálogos de paz, [...], ya que hay voluntad por algún grupo guerrillero y los otros tienen la iniciativa de participar (poblador, 2016, entrevista).

En este contexto la población organizó una marcha numerosa a favor de la paz y en contra de la violencia armada en noviembre de 2013 (foto 1). Esta recibió la atención de los medios de comunicación y constituyó la primera acción de protesta visible de parte de la comunidad en contra de la violencia armada desde hacía muchos años (La Opinión 2013c).



Marcha pacífica en Las Mercedes en noviembre de 2013, fotografía del diario La Opinión.

Aunque esta marcha no frenó las acciones bélicas de las FARC –lanzaron ataques en 2014 (El Tiempo 2014) y 2015 (La Opinión 2015b, 2015a; Colprensa 2015; Herrera 2015)–, marcó el inicio de un nuevo periodo de resistencia civil. Este buscó una confrontación menor, a diferencia de lo que fue la declaración de convivencia pacífica. Entre 2013 y noviembre de 2015, la comunidad se enfocó en la elaboración de su plan de desarrollo, contando con la participación de personas oriundas de todas las veredas del corregimiento (Sánchez 2015; Las Mercedes 2015).

Características del movimiento noviolento

El cambio de contexto entre finales de 2012 e inicios de 2013 permitió que muchos pobladores de Las Mercedes convergieran nuevamente en torno a objetivos esenciales, como establecer un plan de desarrollo comunitario y acciones para reducir tanto la estigmatización como los efectos negativos causados por los enfrentamientos armados. En este periodo crecieron la solidaridad y la cohesión en la comunidad. Por ejemplo, cuando las fuerzas de seguridad estatales detuvieron a varios de sus líderes, los pobladores organizaron una movilización masiva para exigir que fueran liberados. En 2016, un observador externo explicó el sentir de muchos en Las Mercedes: “Estas capturas pellizcaron a la comunidad e hicieron que se organizara. La

guerrilla nos tiene prácticamente arrinconados con el ‘Vamos a tomarnos el pueblo si no se marcha la policía’. Por eso, tenemos que alzar la voz y sentar posición”. De la misma manera, un funcionario del Estado entrevistado ese mismo año destacó la unidad de la gente en torno al reclamo de reubicación de la estación de policía. Esta situación llevó a los pobladores del corregimiento a interponer un recurso judicial que resultó en una sentencia favorable de parte de la Corte Suprema de Justicia en 2013 (La Opinión 2013a).

Estos hechos ayudaron a que cierto liderazgo resurgiera en Las Mercedes. Según un observador externo entrevistado en 2016, varios pobladores de la comunidad dijeron: “Nosotros queremos volver a reactivar el liderazgo y el proceso de lucha de esa resistencia”. Antiguos líderes que habían sido activos en la declaración de convivencia pacífica junto con nuevos líderes empezaron a ganar protagonismo, en particular, por medio de un comité de acción creado para dar impulso al plan de desarrollo comunitario. La participación de nuevos líderes permitió a la iniciativa empezar con empuje sobre nuevas bases, mientras que estas personas que se sumaban pudieron aprender de la experiencia de los antiguos líderes y así evitar errores cometidos en el pasado.

Esta nueva convergencia y el liderazgo renovado fomentaron una participación más significativa por parte de la comunidad en varias acciones de resistencia civil, como la marcha por la paz de noviembre de 2013 a la que asistieron muchas personas y también algunas declaraciones públicas en contra de las afectaciones generadas por la ubicación del puesto temporal de policía. La mayor participación y cohesión de la población, reflejadas en su involucramiento en el plan de desarrollo comunitario y las acciones de resistencia civil, dieron resultados. Así, a finales de 2015, la comunidad finalizó la elaboración del plan de desarrollo y, con el acompañamiento de organizaciones externas, consiguió la liberación de casi todas las personas detenidas por las fuerzas de seguridad, acusadas de colaborar con los insurgentes (actor externo, 2016, entrevista).

Dicho esto, el plan de desarrollo hizo explícito que la desunión entre líderes era uno de los mayores obstáculos para avanzar en este tipo de procesos, porque dificultaba la interlocución con otros actores. Un entrevistado señaló

que algunos pobladores todavía actuaban de forma individual. Por ejemplo, no consultaban al resto de la comunidad e iban directamente a hablar con el comandante de la guerrilla. Otro factor que provocó poca continuidad en el liderazgo y una disminución del “ánimo de resistir y buscar espacios de normalidad en medio del conflicto” fue la pérdida de varios líderes de la comunidad por distintas razones, incluyendo el desplazamiento forzado (Las Mercedes 2015, 36). De manera general, en una encuesta realizada entre 2013 y 2014, en el marco de la elaboración del plan de desarrollo de Las Mercedes (2015, 32), un 21 % de los pobladores lamentó no tener capacidad de agencia dentro de la comunidad.

Estrategias empleadas por la comunidad y apoyo externo

Con base en su experiencia anterior, representada por la declaración de convivencia pacífica, la comunidad usó otra estrategia para tener “un territorio en paz fruto del desarrollo sostenible y la garantía de derechos” (Las Mercedes 2015, 5). En lugar de esta postura más desafiante de nocooperación con los actores armados, en el corregimiento se escogió una vía más conciliadora a partir de la elaboración de un plan de desarrollo comunitario que “facilita el diálogo y coordinación entre comunidad, gobierno, organismos de cooperación y otros actores del territorio para avanzar hacia el desarrollo sostenible y la construcción de paz en el territorio” (6).

En el plan de desarrollo se rechazaron prácticas como el cultivo de coca y los abusos a los derechos humanos cometidos por los actores armados. A su vez se destacó que la economía de la coca “no genera desarrollo, ni sostenibilidad”, sino que, más bien, “favorece la emergencia de relaciones y prácticas violentas” (Las Mercedes 2015, 12). En el documento se planteó que: “La sociedad de Las Mercedes rechaza el camino a las armas y pretende disminuir las actividades ilícitas, la violencia y la desigualdad en la región” (14). A través del plan, los mercedeños también reclamaron la reubicación del puesto de policía fuera del centro del poblado para evitar conflictos y rechazaron ser estigmatizados como colaboradores de la guerrilla por parte de las fuerzas de seguridad estatales. De forma similar,

denunciaron las detenciones arbitrarias que se dieron a finales de 2013. Por otro lado, mencionaron el control social ejercido por el grupo insurgente dominante, la colocación de minas antipersona y el cobro de impuestos por la guerrilla, y se opusieron al reclutamiento forzado (28-30, 44). Asimismo, en el plan se expresó el deseo de la población por recuperar “los espacios recreativos libres de actores armados” (28).

Estos extractos muestran que los mercedenses, por medio del plan de desarrollo comunitario, plantearon sus aspiraciones como territorio de paz en una forma menos desafiante que la declaración de convivencia pacífica, aunque similar en las críticas al accionar de los actores armados y las reivindicaciones del respeto a la población civil. Se debe resaltar que, al ser fruto de un proceso participativo que duró más de un año, el documento gozó de mayor legitimidad que la declaración, por lo que fue más difícil para los actores armados negar su validez. La elaboración del plan se realizó en cinco zonas del corregimiento para facilitar la participación de todos los pobladores, quienes tuvieron un papel activo en el proceso al identificar sus propias necesidades y proponer acciones (Las Mercedes 2015; pobladores; actores externos, 2016, entrevistas).

Al igual que durante el periodo de la declaración de convivencia pacífica, el apoyo de los actores externos fue importante para el éxito de la nueva iniciativa. Al encontrarse nuevamente en una encrucijada, la población volvió a pedir ayuda para tomar acciones parecidas a las de 2005 y el 2006, pero adaptadas al nuevo contexto y tomando en cuenta las lecciones aprendidas de la experiencia pasada (actores externos, 2016, entrevistas). La MAPP-OEA y la Iglesia católica, por medio del sacerdote y de Pastoral Social, de nuevo apoyaron a la comunidad. En esta ocasión se les unió la oficina del ACNUR. Las tres organizaciones fortalecieron la capacidad organizativa de la comunidad, empoderaron a la población a través del proceso de elaboración del plan de desarrollo comunitario y, de esta manera, incrementaron su capacidad de agencia (Las Mercedes 2015; pobladores; actores externos, 2016, entrevistas). De igual forma, apoyaron en la implementación del plan, por ejemplo, mediante proyectos como el de jóvenes y mujeres cultivadores y promotores de desarrollo y paz, llamado “Huellas de paz” (actor externo, 2016, entrevista).

En esta nueva etapa los pobladores de Las Mercedes siguieron usando el diálogo con los actores armados como una estrategia esencial para alcanzar sus objetivos (funcionario de Estado; actores externos, 2016, entrevistas). La Iglesia católica ayudó a mejorar su capacidad de interlocución con la guerrilla y la policía, jugando varias veces un rol de intermediación, por ejemplo, en el caso de la iluminación del parque central por las noches y la celebración de la fiesta patronal en septiembre (pobladores; representantes de la sociedad civil, 2014 y 2016, entrevistas; La Opinión 2013b). De la misma forma, la MAPP-OEA colaboró para aumentar la presencia de instituciones del Estado en ese territorio, ayudando a canalizar, por medios institucionales, el problema de ubicación de la estación de policía y trabajando en reducir la estigmatización de los mercedeos. Así la población recibió el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo para denunciar las afectaciones causadas por la ubicación de la estación de policía. A inicios de 2016, como todavía no se había ejecutado la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que exigía la reubicación de la estación, los actores externos que acompañaban a la comunidad le ayudaron a emprender un diálogo con las autoridades policiales para intentar alcanzar un acuerdo sobre el tema (funcionario de Estado, 2016, entrevista). Aparte, la MAPP-OEA, el ACNUR, la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo tomaron una posición en defensa de la comunidad, cuando las fuerzas de seguridad estatales detuvieron a varios miembros por supuesta colaboración con grupos insurgentes (actores externos, 2016, entrevista).

Conclusiones

En este capítulo analizamos los esfuerzos de la comunidad de Las Mercedes por establecer un territorio de paz. Identificamos factores estructurales y de agencia que incidieron en estos esfuerzos. Los principales factores estructurales estuvieron vinculados a la dinámica local y nacional del conflicto armado. Destacamos la desmovilización de las AUC y el predominio de las FARC a nivel local, que propiciaron el surgimiento de la propuesta de declaración de convivencia pacífica a finales de 2005, así como el recrudecimiento del

conflicto armado con el regreso de la policía y la ruptura de los canales de comunicación con la guerrilla debido a un cambio del comandante, que influyeron en el colapso de la iniciativa dos años después. Con el fin de la iniciativa, la población civil de nuevo se encontró bajo el dominio de la guerrilla. Después de varios años sin poder cumplir los objetivos que se había planteado en 2005, la comunidad volvió a organizarse en el contexto de las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC, las cuales facilitaron el resurgimiento de la iniciativa de territorio de paz a partir de 2013.

En este capítulo identificamos ciertas características del movimiento noviolento que tuvieron un impacto en los esfuerzos de la comunidad. En particular, el liderazgo de un grupo de personas que, con el apoyo de la MAPP-OEA y la Iglesia católica, crearon un plan de trabajo y promovieron la declaración de convivencia pacífica fue decisivo para el surgimiento de la propuesta de territorio de paz. Sin embargo, la participación masiva inconsistente y las afectaciones a la cohesión del movimiento influyeron en el cese de la iniciativa. Entre 2013 y 2015, un liderazgo renovado que gozó del apoyo de actores externos permitió que resurgiera la iniciativa de territorio de paz bajo una modalidad menos desafiante: la construcción de un plan de desarrollo comunitario. La convergencia en torno a los objetivos del plan y una participación masiva en su elaboración coadyuvaron en el proceso.

En este capítulo también explicamos la incidencia de diferentes estrategias noviolentas emprendidas por la población para reducir el nivel de violencia. Argumentamos que la negociación con los actores armados para que se comprometían a respetar las iniciativas desarrolladas por la población local contribuye a su éxito, tal como se observó en el periodo de la declaración de convivencia pacífica y durante el resurgimiento de la iniciativa de territorio de paz con la elaboración del plan de desarrollo comunitario en 2013-2015.

En resumen, resaltamos los siguientes factores que contribuyeron al éxito de los esfuerzos de la comunidad para lograr la paz: la participación sostenida de la comunidad y su cohesión; la capacidad de liderazgo de varios pobladores y el apoyo de actores externos como la MAPP-OEA, la Iglesia católica y el ACNUR que ayudaron tanto a fortalecer la capacidad organizativa de la población, como a mejorar la imagen de los mercedeos, y que facilitaron la elaboración e implementación del plan de desarrollo comunitario.

Es importante destacar que muchas iniciativas como esta surgen, decaen y resurgen gracias a la decidida acción de parte de la comunidad por buscar la paz a nivel local y, de alguna forma, ser a su vez partícipe de las decisiones de paz a nivel nacional. Aunque tengan nuevos nombres, estas iniciativas se basan en las experiencias anteriores y aprenden de los errores del pasado para fortalecer su capacidad de incidencia y adaptarse a nuevos contextos. Por lo tanto, a pesar de las dificultades inherentes a la realidad de Las Mercedes y las graves afectaciones que ha sufrido la población, los esfuerzos de esta comunidad por establecer un territorio de paz dejan un legado importante para la construcción de paz en los tiempos del posacuerdo en Colombia.

Referencias

- Anderson, Mary, y Marshall Wallace. 2013. *Opting Out of War: Strategies to Prevent Violent Conflict*. Boulder: Lynne Rienner.
- Arjona, Ana. 2014. “Civilian Resistance to Rebel Governance”. *HiCN Working Paper Households in Conflict Network*, 170: 1-40.
<http://www.hicn.org>
- Colprensa. 2013. “Defensoría del Pueblo rechaza ataques de las FARC en el país”. *Vanguardia liberal*, 12 de octubre.
- 2015. “Procuraduría, preocupada por los policías de Norte de Santander”. *La Opinión*, 15 de junio.
- Chenoweth, Erica, y Kathleen Gallagher. 2013. “Understanding Nonviolent Resistance: An Introduction”. *Journal of Peace Research* 50 (3): 271-276. doi: 10.1177/0022343313480381
- Chenoweth, Erica, y Maria Stephan. 2011. *Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict*. Nueva York: Columbia University Press. <https://www.mitpressjournals.org>
- El Tiempo. 1998. “Secuestrados 20 agentes en N. de Santander”. *El Tiempo*, 13 de septiembre.
- 2014. “Las FARC hostigan estación de Policía en Norte de Santander”. *El Tiempo*, 2 de julio.

- Fundación Ideas para la Paz. 2013. *Dinámicas del conflicto armado en el Catatumbo y su impacto humanitario*. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz / USAID / Organización Internacional para las Migraciones. <http://cdn.ideaspaz.org>
- Garrido, María Belén, Cécile Mouly, y Annette Idler. 2016. “Jiu-jitsu en contexto de conflicto armado: el poder de la resistencia no violenta”. *Ciudad paz-ando* 9 (2): 155-167.
- Giddens, Anthony. 1984. *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Berkeley: University of California Press.
- Hallward, Maia, Juan Masullo, y Cécile Mouly. 2017. “Civil Resistance in Armed Conflict: Leveraging Nonviolent Action to Navigate War, Oppose Violence and Confront Oppression”. *Journal of Peacebuilding & Development* 12 (3):1-9.
doi: 10.1080/15423166.2017.1376431
- Hallward, Maia, y Julie Norman. 2015. *Understanding Nonviolence*. Cambridge: Polity.
- Hancock, Landon. 2016. “Agency and Peacebuilding: The Promise of Local Zones of Peace”. *Peacebuilding* 4 (3): 255-269.
doi: 10.1080/21647259.2016.1253604
- Hancock, Landon, y Christopher Mitchell. 2007. *Zones of Peace*. Bloomfield: Kumarian Press.
- Hernández, Esperanza. 2009. “Resistencias para la paz en Colombia. Experiencias indígenas, afrodescendientes y campesinas”. *Revista paz y conflictos*, 2: 117-135. <https://www.redalyc.org>
- 2014. “Memoria, resistencia y poder pacífico transformador de pueblos indígenas de las Amazonas colombiana y peruana”. *Papel Político* 19 (2): 497-525. doi.org/10.11144/Javeriana.PAPO19-2.mrpp
- Herrera, Cristián. 2015. “El ‘viacrucis’ de Las Mercedes”. *La Opinión*, 21 de junio.
- Idler, Annette, Cécile Mouly, y María Garrido. 2018. “Between Shadow Citizenship and Civil Resistance: Shifting Local Orders in a Colombian War-Torn Community”. En *Local Peace-Building and Legitimacy*, editado por Landon Hancock y Christopher Mitchell. Londres: Routledge.

- Idler, Annette, María Belén Garrido, y Cécile Mouly. 2015. "Peace Territories in Colombia: Comparing Civil Resistance in Two War-Torn Communities". *Journal of Peacebuilding & Development* 10 (3):1-15. doi: 10.1080/15423166.2015.1082437
- Iyer, Pushpa, y Landon Hancock. 2004. "From Fear to Sanctuary: A Typology of Zones of Peace", (ponencia, 45ª convención anual de la Asociación de Estudios Internacionales [ISA], Quebec, Canadá, 15-17 de noviembre).
- Jácome, Jhon. 2013. "Un año de diálogos: más conflicto que negociación en Norte de Santander". *La Opinión*, 20 de octubre.
- Kaplan, Oliver. 2013a. "Nudging Armed Groups: How Civilians Transmit Norms of Protection". *Stability: International Journal of Security & Development* 2 (3):1-18. doi.org/10.5334/sta.cw
- 2013b. "Protecting civilians in civil war: The institution of the ATCC in Colombia". *Journal of Peace Research* 50 (3): 351-367. doi: 10.1177/0022343313477884
- La Opinión. 2013a. *Corte ordena traslado de la estación de policía de Las Mercedes*. *La Opinión*, 12 de julio.
- 2013b. *En Las Mercedes se vive con el Credo en la boca*. *La Opinión*, 12 de noviembre.
- 2013c. *Los mercedeseños se volcaron a las calles*. *La Opinión*, 6 de noviembre.
- 2015a. *Amenazan a los 28 policías de Las Mercedes*. *La Opinión*, 4 de junio.
- 2015b. *Un policía muerto y otro herido dejó ataque en Las Mercedes*. *La Opinión*, 3 de junio.
- Las Mercedes. 2005. "Declaración de convivencia pacífica: Las Mercedes, Sardinata, Norte de Santander, adoptada por la comunidad de Las Mercedes el 19 de diciembre". Documento inédito.
- 2015. "Plan comunitario: corregimiento Las Mercedes". Cúcuta:
- Lederach, John Paul. 1997. *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. Washington D.C.: United States Institute of Peace Press.
- MAPP-OEA (Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos). 2008. "Iniciativas comunitarias: Cúcuta". Video de la Misión de apoyo al proceso de paz.

- McGee, Rosie. 2017. "Invisible power and visible everyday resistance in the violent Colombian Pacific". *Peacebuilding* 5 (2): 170-185. doi.org/10.1080/21647259.2016.1277013
- Mitchell, Christopher, y Susan Allen. 1996. "Local peace zones as institutionalized conflict". *Peace Review: A Journal of Social Justice* 9 (2): 159-162. doi.org/10.1080/10402659708426044
- Masullo, Juan, Cécile Mouly y María Belén Garrido. 2019. "Alternative Forms of Civilian Noncooperation with Armed Groups: The Case of Samaniego in Colombia". En *Civil Resistance and Violent Conflict in Latin America: Mobilizing for Rights*, editado por Cécile Mouly y Esperanza Hernández Delgado, 111-136. Cham: Palgrave Macmillan.
- Mouly, Cécile, Annette Idler, y María Garrido. 2015. "Zones of Peace in Colombia's Borderlands". *International Journal of Peace Studies* 20 (1): 51-63. <http://www.flascoandes.edu.ec>
- Mouly, Cécile, Esperanza Hernández, y María Garrido. 2016. "Armed Actors Responses to Civil Resistance in Three War-Affected Communities in Colombia" (ponencia, 57ª convención anual de la Asociación de Estudios Internacionales [ISA], Atlanta, EEUU, 16-19 de marzo).
- Mouly, Cécile, María Garrido, y Annette Idler. 2016. "How Peace Takes Shape Locally: The Experience of Civil Resistance of Samaniego in Colombia". *Peace & Change* 41 (2): 129-166. doi: 10.1111/pech.12184
- Mouly, Cécile, y María Garrido. 2018. "No a la guerra: resistencia civil en dos comunidades periféricas de Colombia". *Desafíos* 30 (1): 245-277. doi: 10.12804/revistas.urosario.edu.co/desafios/a.5282
- Peñaloza, Arturo. 2006. "Sardinata se armó de valor". *El Tiempo*, 30 de enero.
- Sánchez, Helena. 2015. "Habitantes de Las Mercedes construyeron su 'plan de vida' hacia el desarrollo". *La Opinión*, 22 de noviembre.
- Scott, James. 1985. *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven: Yale University Press.
- Schock, Kurt. 2005. *Unarmed Insurrections: People Power Movements in Nondemocracies*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Revista Semana. 2011. "Seis muertos dejan ataques de las FARC en Norte de Santander". *Revista Semana*, 18 de marzo.

Principales hallazgos

Esperanza Hernández Delgado y Cécile Mouly

El estudio de las experiencias de resistencia civil que se presentaron en este libro arrojó hallazgos importantes. Algunos de ellos resultaron de aspectos comunes y sintonías entre los diferentes casos y otros de diferencias entre estos. Permiten confirmar descubrimientos previos y aportan a una mayor comprensión sobre la praxis de la resistencia civil. Estos hallazgos representan un análisis de conjunto, cuestión que los hace diferentes a las conclusiones de los casos específicos que componen los capítulos del libro.

El primer hallazgo es que no existen experiencias de resistencia civil perfectas, sino que son perfectibles e inacabadas. Respecto de algunos casos abordados en este libro, en algunos momentos, los procesos alcanzaron logros significativos, pero en otros este resultado no fue posible, por el cambio de condiciones y los desafíos que les impusieron las violencias a quienes se opusieron. En el caso de experiencias indígenas como la warijía, mientras que en la década del 80 su ejercicio de resistencia logró el reconocimiento del territorio ancestral por parte del Estado, la lucha de resistencia que se inició en 2010 contra la Represa Los Pilares no ha alcanzado hasta el momento los resultados esperados, por no contar con las condiciones favorables que en el pasado permitieron a estos indígenas superar la asimetría de poder entre los resistentes y sus adversarios. De igual forma, en un contexto de conflicto armado interno, la experiencia de Las Mercedes muestra que al momento de originarse esta resistencia se presentaron condiciones propicias para el ejercicio de la misma, como la unidad de su base social y la posibilidad de

interlocución con los actores armados. No obstante, dos años después de que la comunidad se declarara como territorio de paz, sobrevinieron circunstancias que socavaron esta campaña de resistencia. En el caso de los yaquis, su oposición a la megaobra Acueducto Independencia ha alcanzado logros importantes, como los fallos proferidos por la Corte Suprema de Justicia, aunque hasta el presente estos no han tenido ningún efecto dado que no se han cumplido. El carácter inacabado de la resistencia civil destaca su carácter procesual y la importancia de la persistencia en su ejercicio, la búsqueda de nuevas alternativas y métodos, y la combinación de estos, con el fin de alcanzar metas suspendidas de anteriores campañas o aquellas renovadas, producto de las resistencias no violentas que se dinamizan.

El segundo de nuestros hallazgos es que todas las experiencias abordadas evidencian una resistencia no violenta que puede caracterizarse como estratégica o pragmática. Con distintos matices, las causas que generaron estas experiencias de resistencia civil están asociadas de manera directa con necesidades, oportunidades y conveniencias, más que con preceptos religiosos, morales o filosóficos, como en los casos de “resistencia no violenta por principios” o pacifismo. Algunos procesos, como el de la tribu yaqui en México y las experiencias populares en Brasil, aunque han optado por la resistencia no violenta y la encuentran conveniente para sus luchas en el presente, dejan claro que, ante una necesidad extrema de defensa, siempre existe la posibilidad de recurrir a la violencia. En el caso de la ATCC, sin desconocer su resistencia estratégica de más de 30 años, han desarrollado también una cultura de diálogo y reconciliación que aplica principios religiosos en su comprensión del adversario, los cuales han fortalecido su ejercicio de resistencia como un mecanismo de cohesión y opción por la no violencia, siendo este un rasgo interesante de esta experiencia. Esta realidad se observa, por ejemplo, en la manera en que perciben a los actores armados. Para quienes integran la ATCC, no eran enemigos a los que debían derrotar, sino seres humanos que optaron por formas de vida y de lucha diferentes a las de la asociación, y que podían cambiar o eran susceptibles al cambio. Si bien estos actores les habían causado daños, era posible dialogar con ellos y llegar a acuerdos, reconociendo así la condición de seres humanos de todos los combatientes. De esta manera, la ATCC

ha humanizado el conflicto armado desarrollando prácticas de diálogo y negociación eficaces con los actores armados.

Un tercer hallazgo —que confirma otros ya mencionados en este sentido— es registrar procesos que optaron por la resistencia noviolenta después de una experiencia previa de resistencia con recurso a la violencia, asociada a la necesidad extrema de defensa y que tuvo costos elevados para quienes se defendieron. Este fue el caso de los yaquis y otros pueblos indígenas que luego del arribo del español colonizador en los siglos XV y XVI empezaron a resistir usando la violencia para proteger aspectos vitales de su condición étnica: territorio, cultura, autonomía y formas de pervivencia. Como ocurrió en el caso de los indígenas del Cauca en Colombia, los yaquis resistieron con esta modalidad hasta que aseguraron el territorio. A partir de ese momento, hicieron tránsito a una resistencia noviolenta al considerar que era la más conveniente y que estaban dadas las condiciones para optar por la misma. Además, como se explica en el capítulo 1, los yaquis se dieron cuenta de los costos que conllevan las luchas violentas contra un actor más poderoso, y aprovecharon que para entonces contaban con factores como líderes y comunidades más preparadas y con capacidades para luchar con métodos pacíficos y reparar así las asimetrías de poder.

El cuarto hallazgo es que las experiencias de resistencia noviolenta documentadas en este libro no solo recurrieron a métodos propios de la resistencia civil, sino que los combinaron con métodos del ámbito de la resolución y transformación de conflictos. Esta estrategia dio mayores alcances a sus campañas de resistencia. En este sentido, las experiencias confirmaron que esta modalidad de resistencia muchas veces se convierte en la antesala del diálogo y la negociación. Evidenciaron también que los métodos de transformación pacífica de los conflictos pueden alcanzar o consolidar logros gracias a la presión generada por una campaña de resistencia civil. Se observó que la combinación de métodos otorga mayores alcances a la resistencia civil como mecanismo de construcción de paz. Tres casos ilustrativos son los de Samaniego y la ATCC en Colombia y los yaquis en México. En el primero, por ejemplo, el pacto local de paz fue una iniciativa de resistencia civil negociada por parte de las autoridades locales con los actores armados para reducir la violencia en el municipio. Esta negociación generó una mayor

aceptación de parte de los actores armados por intereses propios (*buy-in*), que resultó en una reducción notable del número de homicidios durante los cuatro años de su implementación. De la misma forma, la ATCC alcanzó notables logros gracias a los diálogos, la mediación y la negociación realizada con los diferentes actores armados presentes en su territorio. Estos alcances, traducidos en una reducción significativa del nivel de violencia armada, fueron distinguidos con el premio Nobel Alternativo de Paz en 1990. En el caso de los yaquis, esta tribu combinó métodos propios de resistencia con las vías legales, logrando fallos favorables en altas cortes mexicanas.

Un quinto hallazgo de este estudio, que confirma otros en este mismo sentido, es que no es suficiente optar por la resistencia civil como método de lucha o tener la voluntad de impulsarla, para que esta resistencia logre mayores alcances. Es necesario contar con un conjunto de condiciones propicias, así como estrategias y métodos que permitan socavar las fuentes de poder de los oponentes. Así se reflejó en el caso de experiencias que en un determinado momento histórico contaron con condiciones propicias para alcanzar logros mediante una campaña de resistencia noviolenta y que luego, ante un nuevo desafío con otras características, ya no contaron con dichas condiciones y se enfrentaron a grandes obstáculos. Lo vemos en el caso de la lucha warijía, el de Las Mercedes y algunos estudiados en Brasil. También observamos que ciertas estrategias generan más réditos en ciertas circunstancias, como en el caso de los yaquis cuando realizaron un bloqueo de carreteras que llevó a las partes a una mesa de negociación. Como lo señala Gene Sharp, el éxito de los procesos de resistencia civil depende de un conjunto de condiciones: la clase de conflicto, los intereses que están en juego entre las partes, la estructura organizativa, las características de los oponentes, los métodos que seleccionen, la planificación, y la disciplina y persistencia de quienes resisten. Las estructuras organizativas, por ejemplo, son muy importantes. A través de ellas se socializa la campaña, se genera y mantiene la cohesión, se planea y se toman decisiones colectivas e inclusivas en cuanto a los métodos o la combinación de métodos que se va a usar. En particular, mientras mayor cohesión exista entre los participantes, más fácil será mantener la disciplina noviolenta, como lo demuestran los casos de los yaquis y de Las Mercedes.

El sexto hallazgo es que la resistencia civil es un mecanismo al que recurren minorías excluidas y mayorías reprimidas o violentadas, aunque buena parte de los participantes de estas experiencias generalmente no cuentan con una formación previa sobre los significados y métodos de la resistencia civil. En este sentido, los casos que recoge este libro fueron generados y dinamizados por personas, pueblos, comunidades o colectivos que desconocían esta modalidad de resistencia, sus significados, métodos y las experiencias registradas sobre la misma. Por este motivo, es posteriormente, ya en su desarrollo y consolidación, cuando los procesos documentados han otorgado significados a esta resistencia y adoptaron métodos propios al alcance de sus experiencias de vida y sabidurías particulares. Por ejemplo, en el caso de la campaña yaqui contra el Acueducto Independencia, la resistencia civil es entendida como capacidad para organizar la lucha y para los campesinos de la ATCC es ejercicio de autonomía.

El séptimo hallazgo es que la resistencia civil puede contribuir a reducir las asimetrías de poder entre los resistentes y sus adversarios. No importa que solo sean 2000 warijíos contra el poder tradicional de los *yoris* y de un Estado que ha mantenido las condiciones que causan la violencia estructural, expresada en el racismo hacia los indígenas. Con condiciones propicias y una estrategia adecuada es posible reducir y superar el desbalance de poder, presionar a los oponentes y lograr metas como el reconocimiento del derecho a los territorios ancestrales por parte del Estado y de sectores dominantes que los explotaron por largo tiempo, como sucedió en el caso de los warijíos. En esa misma perspectiva, la experiencia de la ATCC demuestra que una comunidad campesina de solo 7000 personas puede organizarse para resistir a frentes de la insurgencia, a los paramilitares y a las Fuerzas Armadas, presentes en su territorio durante más de una década, y así disminuir el impacto de un conflicto armado degradado, hacer ruptura en las lógicas del mismo y rescatar su autonomía, haciendo la diferencia. Si se cuenta con las condiciones adecuadas, como capacidad de resistencia, organización, planificación y combinación de métodos eficaces, entre otras, la resistencia civil puede lograr, como lo hizo la ATCC, un mejor balance del poder, incidiendo en el desescalamiento del conflicto violento y la apertura del diálogo y la negociación con todos los actores beligerantes.

De esta manera, la ATCC cambió una realidad de violencia generalizada e indiscriminada por diálogos y acuerdos que protegen la vida, el territorio y el derecho a la paz.

El octavo hallazgo recogido en este libro es la incidencia de cinco modalidades de violencia, generadoras de alta conflictividad y de experiencias de resistencia civil en países latinoamericanos. Dentro de las mismas encontramos, primero, a *la violencia estructural* que se expresa en exclusión, explotación, pauperización y marginalidad de pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas, así como en regímenes dictatoriales o autoritarios, como lo muestra el caso de Brasil en el capítulo 3. En las experiencias de resistencia civil estudiadas también incidió *la violencia cultural*, soportada en la falsa creencia de superioridad por raza, género o condiciones sociales o económicas como el racismo, especialmente hacia los pueblos indígenas. Además, encontramos *la violencia directa* que caracteriza los conflictos armados internos, como es el caso de las experiencias estudiadas en Colombia. A su vez, se destaca la violencia que implica la ejecución de *los megaproyectos*. Estos impactan la naturaleza, el ambiente, las culturas y la pervivencia de los pueblos y las comunidades. Todas estas formas de violencia generan múltiples impactos en quienes las padecen y representan desafíos recurrentes para los mismos y para la construcción de la paz, el desarrollo y las democracias.

El noveno hallazgo está relacionado con las experiencias indígenas de resistencia noviolenta. Analizarlas implica incorporar aspectos propios de su condición étnica, por ejemplo, sus cosmovisiones, culturas, historias y trayectorias de resistencia indígenas. No es adecuado abordarlas sin establecer este criterio diferenciador.

Concluimos que, en el marco de una educación para la paz, es importante generar propuestas académicas, formales o informales, que permitan conocer estas experiencias y formar colectivos para la resistencia noviolenta, y más aún en contextos de alta conflictividad. De esta manera, se fortalecerán las experiencias, se facilitará su articulación y se incidirá en la labor de construcción de paz. Con *Resistencias noviolentas en América Latina. Experiencias en Brasil, Colombia y México*, damos un paso en ese sentido y esperamos que en el futuro surjan otras iniciativas similares.

Autoras y autores

María Belén Garrido tiene una maestría en Estudios de Paz de la Fern Universitaet en Hagen y es estudiante de doctorado de la Universidad Católica de Eichstaett-Ingolstadt, Alemania. Ella ha trabajado como docente e investigadora en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y como investigadora en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Su experticia está en los Estudios de Paz y Conflicto y la resistencia civil y sus publicaciones se han enfocado en estos temas. Ha facilitado diversos cursos y capacitaciones sobre resistencia civil, comunicación noviolenta y mediación.
mbgarrido@flacso.edu.ec

Esperanza Hernández Delgado es PhD. en Paz, Conflictos y Democracia de la Universidad de Granada, España; y magíster en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana. Docente-investigadora del Doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle, Bogotá Colombia. Investigadora para la paz, docente y consultora en temáticas de paz y construcción de paz, específicamente: iniciativas civiles de paz, resistencia civil, mediaciones en el conflicto armado colombiano, procesos de paz y enfoque de paz imperfecta. Autora de diversas publicaciones nacionales e internacionales sobre estas temáticas.
e Hernandez@unisalle.edu.co

Annette Idler es la directora de estudios del Centro de Investigación sobre el Carácter Cambiante de la Guerra y Senior Research Fellow en el Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Universidad de Oxford, Reino Unido. Tiene un doctorado en Estudios de Desarrollo de la Universidad de Oxford. Su investigación se concentra en la intersección de conflicto, seguridad, crimen organizado y la construcción de paz. Ha trabajado con la ONU y la cooperación alemana.
annette.idler@pmb.ox.ac.uk

Cécile Mouly tiene un doctorado en Estudios Internacionales de la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Es experta en Estudios de Paz y Conflicto y funge actualmente como docente investigadora en FLACSO Ecuador. Su investigación se ha enfocado en el papel de la sociedad civil en la construcción de la paz, la resistencia civil en contextos de alta conflictividad y la reintegración social de excombatientes. Ha trabajado para diversas organizaciones, como la ONU, la OEA y el Centro Carter, en temas relacionados con paz y conflicto.
camouly@flacso.edu.ec

Mario Ramírez-Orozco es profesor asociado III en el Doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle, sede Bogotá. Coordinador de la línea de investigación: Educación, Lenguaje y Comunicación del doctorado. Director del grupo de investigación en Educación y Sociedad, clasificado en A por Colciencias. Doctor en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México; Maestría y licenciatura en Español y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Bergen, Noruega. Autor de varios libros y artículos especializados en temas de paz y ciencia política.
marioramirez@unisalle.edu.co

Claudia Patricia Roa Mendoza es docente-investigadora del programa de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de La Salle, Bogotá Colombia. Integrante del grupo de investigación Trabajo social, equidad y justicia social, Centro de Estudios en

Desarrollo y Territorio (CEDT). Licenciada en Educación Preescolar de la Universidad Pedagógica Nacional, psicóloga de la Universidad Católica de Colombia, especialista en Psicología Clínica de esta misma universidad, magister en desarrollo educativo y social de la Universidad Pedagógica Nacional, doctoranda en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle. claraa@unisalle.edu.co

En este libro se utiliza la fuente tipográfica
Adobe Garamond

Se terminó de
imprimir en noviembre de 2019
en Editorial Ecuador
Quito-Ecuador